Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1079/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2278/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 3341/2022-CR, 3436/2022-CR, 3717/2022-CR, 4055/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4379/2022-CR, 4452/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4907/2022-CR, 4921/2022-CR, 5139/2022-CR, 5149/2022-CR, 5150/2022-CR, 5242/2022-CR, 5246/2022-CR, 5377/2022-CR, 5386/2022-CR, 5499/2022-CR, 5531/2022-CR, 5623/2023-CR, 5795/2023-CR, 5929/2023-CR, 5965/2023-CR, 6120/2023-PE, 6227/2023-CR, 6338/2023-CR, 6359/2023-CR, 6369/2023-CR, 6380/2023-CR, 6535/2023-CR, 6634/2023-CR, 7006/2023-CR, 7068/2023-CR, 7092/2023-CR, 7229/2023-CR, 7674/2023-CR y 7821/2023-CR que propone la "Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano"

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite Documentario
23 MAYO 2024
RECIBIDO
Firma: Hora: 16:06

COMISIÓN DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2023-2024

Señor presidente:

Han sido remitidos para dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera los proyectos de ley siguientes:

1. Proyecto de Ley 344/2021-CR actualizado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, que propone la "Ley que declara de interés nacional la creación del sistema previsional complementario por consumo".
2. Proyecto de Ley 551/2021-CR actualizado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, que propone la "Ley marco de creación del sistema integrado universal de pensiones".
3. Proyecto de Ley 866/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del Congresista María Elizabeth Taipe Coronado, que propone la "Ley que crea un sistema de beneficios para personal que realizan servicios de reparto, mensajería y movilidad por medio de las plataformas digitales".
4. Proyecto de Ley 912/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del Congresista Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, que propone la "Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones para optimizar la protección del derecho de propiedad".
5. Proyecto de Ley 1079/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso, a iniciativa de la Congresista Rosio Torres Salinas, que propone la "Ley que declara de necesidad pública e interés nacional otorgar un capital inicial CAPITAL SEMILLA, para una pensión de jubilación universal y capitalizable".
6. Proyecto de Ley 1306/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa de la Congresista Silvia María Monteza Facho, que propone la

"Ley que propone crear el fondo previsional para recién nacidos financiado con aportes alternativos."

7. Proyecto de Ley 1356/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Avanza País, a iniciativa de la Congresista Rosselli Amuruz Dulanto, que propone la "Ley que crea una fuente complementaria para financiar las pensiones individuales: ahorro para mi vejez".
8. Proyecto de Ley 1513/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del Congresista Juan Carlos Mori Celis, que propone la "Ley que autoriza a entidades del sistema financiero la apertura de cuentas previsionales".
9. Proyecto de Ley 1595/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Cambio Democrático – Juntos por el Perú, a iniciativa de la Congresista Isabel Cortez Aguirre, que propone la "Ley que crea el fondo previsional de los trabajadores mototaxistas para incorporarlos al sistema nacional de pensiones".
10. Proyecto de Ley 1922/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 3 de mayo de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 5 de mayo 2022.
11. Proyecto de Ley 2047/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Democrático, a iniciativa del Congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga, que propone la "Ley para que las pérdidas de los fondos se compartan entre empresas y afiliados, regula las comisiones de las AFP y permite que los afiliados participen en sus directorios y en los de las empresas en que inviertan".
12. Proyecto de Ley 2110/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, a iniciativa del Congresista José León Luna Gálvez, que propone la "Ley que regula el cobro de la retribución en el sistema privado de administración de fondos de pensiones, sujetas al desempeño y rentabilidad a favor del afiliado".
13. Proyecto de Ley 2278/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Cambio Democrático – Juntos por el Perú, a iniciativa de la Congresista Sigrid Tesoro Bazán Narro, que propone la "Ley que promueve la competencia en el sistema de pensiones y regula el cobro de comisiones".

14. Proyecto de Ley 2659/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Democrático, a iniciativa de la Congresista Nieves Esmeralda Limachi Quispe, que propone la "Ley de reforma del sistema previsional que fortalece, transparenta y crea el sistema único de pensiones – SUP".
15. Proyecto de Ley 2718/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso, a iniciativa de la María Grimaneza Congresista Acuña Peralta, que propone la "Ley que establece la modificación del Decreto Ley 25897, Ley que crea el sistema privado de administración de fondo de pensiones, conformado por las administradoras privadas de fondo de pensiones AFP".
16. Proyecto de Ley 2728/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del Congresista Jorge Luis Flores Ancachi, que propone la "Ley que modifica la Ley 25897, a fin de promover que los fondos de los afiliados sin herederos de las AFPs, sean transferidos al estado".
17. Proyecto de Ley 2880/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del Congresista Wilson Soto Palacios, que propone la "Ley que modifica el artículo 24 del Decreto Ley N° 25897, que crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, para establecer las pérdidas entre afiliados y AFP".
18. Proyecto de Ley 3133/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Alianza por el Progreso, a iniciativa de la Congresista María Grimaneza Acuña Peralta que presenta la "Ley propone incorporar precisiones al artículo 2 de la Ley N° 30478, Ley que modifica el artículo 40 y la Vigésima Cuarta Disposición Final y Transitoria del TUO de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones".
19. Proyecto de Ley 3227/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de la Congresista María Elizabeth Taipe Coronado, que propone la "Ley de reforma integral del sistema de pensiones".
20. Proyecto de Ley 3341/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, a iniciativa de los Congresista Digna Calle Lobaton, que propone la "Ley que crea la comisión técnica multisectorial encargada de proponer la reforma integral de los sistemas público y privado de pensiones".

21. Proyecto de Ley 3436/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa de la Congresista Lady Mercedes Camones Soriano, que propone la "Ley que crea el aporte social permanente para la jubilación del pescador industrial".
22. Proyecto de Ley 3717/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Democrático, a iniciativa de los Congresista Nieves Esmeralda Limachi Quispe, Guillermo Bermejo Rojas, Betssy Betzabet Chavez Chino, Hamlet Echeverria Rodriguez, Luis Roberto Kamiche Morante, que propone la "Ley que modifica el artículo 42° del Decreto Supremo N°054-97-EF, y artículo 10 de la ley N° 30939, ley que establece el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones".
23. Proyecto de Ley 4055/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Bicentenario, a iniciativa del Congresista Victor Raul Cutipa Ccama, que propone la "Ley que instituye el aporte social permanente al fondo de jubilación del trabajador pesquero".
24. Proyecto de Ley 4087/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la Congresista Rosangella Andrea Barbarán Reyes, que propone la "Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley del sistema privado de administración de fondos de pensiones y establece la retribución por productividad".
25. Proyecto de Ley 4200/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, a iniciativa del Congresista José Luis Elías Ávalos, que propone la "Ley que modifica el artículo 40 del TUO de la Ley del Sistema Privado de pensiones, autorizando la disponibilidad de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los Fondos de AFP".
26. Proyecto de Ley 4366/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa del Congresista Alejandro Soto Reyes, que propone la "Ley que promueve la equidad en la gestión de los fondos del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones- AFP".

27. Proyecto de Ley 4379/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del Congresista Américo Gonza Castillo, que propone la "Ley que faculta la libre desafiliación de los aportantes a las AFPs".
28. Proyecto de Ley 4452/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Somos Perú, a iniciativa del Congresista Esdras Ricardo Medina Minaya, que propone la "Ley que otorga el derecho a la jubilación anticipada a los trabajadores pesqueros, dentro del sistema privado de pensiones".
29. Proyecto de Ley 4528/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la Congresista Carmen Patricia Juárez Gallegos, que propone la "Ley que faculta a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones a disponer de hasta el 50% del fondo acumulado en su cuenta individual para la compara o el pago del crédito hipotecario de una única vivienda o inmueble".
30. Proyecto de Ley 4743/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la Congresista Rosangella Andrea Barbarán Reyes, que propone la "Ley de reforma y universalización del sistema previsional peruano".
31. Proyecto de Ley 4864/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, a iniciativa del Congresista José Luna Gálvez, que propone la "Ley que precisa la Ley 31670, "Ley que crea las pensiones mínimas y promueve los aportes voluntarios alternativos con fines previsionales".
32. Proyecto de Ley 4907/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa de la Congresista Silvia María Monteza Facho, que propone la "Ley que crea el fideicomiso individual de jubilación obligatoria-fijo con Capital Semilla para todos los peruanos recién nacidos".
33. Proyecto de Ley 4921/2022-CR presentado por la Congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, que propone la "Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 30003, a fin de garantizar la justiciabilidad del derecho de acceso a la pensión de los trabajadores y pensionistas pesqueros".
34. Proyecto de Ley 5139/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del Congresista Illich Fredy López Ureña, que propone la "Ley que permite acceder a una vivienda digna y adecuada, liberando hasta el 100% de

la AFP, para el pago de la cuota inicial, amortización del crédito hipotecario o como garantía para el pago de la cuota inicial o amortización del crédito hipotecario".

35. Proyecto de Ley 5149/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Avanza Pais-Partido de Integración Social, a iniciativa del Congresista María Jessica Córdova Lobaton, que propone la "Ley que modifica el artículo 40 del texto único ordenado de la ley del sistema privado de administración de fondos de pensiones, aprobado por el decreto supremo 054-97-EF, modificado con la Ley 30822".
36. Proyecto de Ley 5150/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del Congresista Victor Seferino Flores Ruiz, que propone la "Ley de reforma del sistema previsional peruano".
37. Proyecto de Ley 5242/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concentración Nacional, a iniciativa del Congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona, que propone la "Ley determina el importe mínimo de la pensión de jubilación en el sistema de pensiones nacional - Decreto Ley 19990".
38. Proyecto de Ley 5246/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Bicentenario, a iniciativa del Congresista Victor Raul Cutipa Ccama, que propone la "Ley que viabiliza y facilita el acceso a la pensión de jubilación para la sociedad conyugal y uniones de hecho en el sistema nacional de pensiones de la seguridad social".
39. Proyecto de Ley 5377/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concentración Nacional, a iniciativa del Congresista Alex Antonio Paredes Gonzales, que propone la "Ley marco de creación del sistema universal de pensiones".
40. Proyecto de Ley 5386/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Renovación Popular, a iniciativa del Congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, que propone la "Ley que crea el sistema previsional para trabajadores de la economía no formal".
41. Proyecto de Ley 5499/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concentración Nacional, a iniciativa del Congresista Segundo Teodomiro Quiroz Barboza, que propone la "Ley que modifica el decreto ley 19990 respecto a pensiones devengadas".

42. Proyecto de Ley 5531/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Bicentenario, a iniciativa del Congresista Jorge Samuel Coayla Juárez, que propone la "Ley que establece la creación del fondo complementario de jubilación pesquera industrial".
43. Proyecto de Ley 5623/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Bicentenario, a iniciativa del Congresista Víctor Raúl Cutipa Ccama, que propone la "Ley que mejora la pensión de jubilación por invalidez en el régimen especial de seguridad social de los trabajadores pesqueros otorgando pensiones justas y razonables".
44. Proyecto de Ley 5795/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del Congresista Américo Gonza Castillo, que propone la "Ley que deroga el decreto Ley 25897 que crea el sistema privado de administración de fondos de pensiones (SPP), conformado por las administradoras privadas de fondos de pensiones AFP".
45. Proyecto de Ley 5929/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del Congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas, que propone la "Ley que crea el nuevo sistema previsional para trabajadores dependientes e independientes".
46. Proyecto de Ley 5965/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del Congresista Guido Bellido Ugarte, que propone la "Ley que reconoce pensión proporcional a los afiliados del sistema nacional de pensiones, con menos de diez años de aportes".
47. Proyecto de Ley 6120/2023-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, que propone la "Ley de creación del nuevo sistema previsional peruano".
48. Proyecto de Ley 6227/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del Congresista Flavio Cruz Mamani, que propone la "Ley del sistema de pensiones".
49. Proyecto de Ley 6338/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Somos Perú, a iniciativa del Congresista Héctor Valer Pinto, que propone la "Ley que modifica la Ley 31301 que establece medidas de acceso a una pensión proporcional a los asegurados del sistema nacional de pensiones".

50. Proyecto de Ley 6359/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, a iniciativa de la Congresista Digna Calle Lobaton, que propone la "Ley que reconoce el derecho del afiliado al sistema privado de pensiones sin hijos, cónyuge o padres a designar a los beneficiarios que recibirán el 100% de los fondos en caso de su muerte".
51. Proyecto de Ley 6369/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Somos Perú, a iniciativa del Congresista Valer Pinto Héctor, que propone la "Ley de desafiliación al sistema privado de pensiones y retorno al sistema nacional de pensiones, que modifica los artículos 1, 4 y deroga el artículo 2 de la Ley 28991".
52. Proyecto de Ley 6380/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Cambio Democrático - Juntos por el Perú, a iniciativa de la Congresista Sigrid Tesoro Bazán Narro, que propone la "Ley que modifica la Ley 30003 y regula el régimen especial de seguridad social de trabajadores y pensionistas pescadores".
53. Proyecto de Ley 6535/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Bancada Magisterial de Concertación Nacional, que propone la "Ley que establece el retiro del fondo de pensiones en casos de enfermedad terminal o cáncer y de falta de cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia".
54. Proyecto de Ley 6634/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso, a iniciativa de la Congresista Elva Edhit Julón Irigoín, que propone la "Ley que crea los aportes previsionales individuales con cargo al impuesto a las transacciones financieras por el uso de billeteras electrónicas".
55. Proyecto de Ley 7006/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso, a iniciativa del Congresista Alejandro Soto Reyes, que propone la "Ley que regula el pago de los aportes de los asegurados facultativos al sistema nacional de pensiones a través de billeteras digitales".
56. Proyecto de Ley 7068/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Bicentenario, a iniciativa del Congresista Elías Marcial Varas Meléndez, que propone la "Ley que establece el nuevo tope máximo de las pensiones para el régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros".
57. Proyecto de Ley 7092/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, a iniciativa del Congresista Segundo

Teodomiro Quiroz Barboza, que propone la "Ley que incorporan el artículo 38-A en el Decreto Ley 19990, Ley de creación del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), con el propósito de salvaguardar el principio de presunción de veracidad en relación a la documentación y/o información que respaldan los derechos pensionarios".

58. Proyecto de Ley 7229/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, a iniciativa del Congresista Pasión Neomías Dávila Atanacio, que propone la "Ley que establece la pensión mínima de jubilación a fin de garantizar las condiciones básicas de la población adulta mayor al final de la vida laboral".
59. Proyecto de Ley 7674/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, a iniciativa del Congresista José León Luna Gálvez, que propone la "Ley de reforma del sistema previsional a fin de garantizar su acceso a todos los peruanos y el otorgamiento de pensiones dignas".
60. Proyecto de Ley 7821/2023-CR, presentado por la Congresista María del Carmen Alva Prieto, que propone la "Ley que incentiva el ahorro para fines pensionarios".

Luego de la exposición y debate, en la Décimo Sétima Sesión Extraordinaria de fecha 13 de mayo de 2024, se acordó por MAYORÍA aprobar el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1079/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2278/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 3341/2022-CR, 3436/2022-CR, 3717/2022-CR, 4055/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4379/2022-CR, 4452/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4907/2022-CR, 4921/2022-CR, 5139/2022-CR, 5149/2022-CR, 5150/2022-CR, 5242/2022-CR, 5246/2022-CR, 5377/2022-CR, 5386/2022-CR, 5499/2022-CR, 5531/2022-CR, 5623/2023-CR, 5795/2023-CR, 5929/2023-CR, 5965/2023-CR, 6120/2023-PE, 6227/2023-CR, 6338/2023-CR, 6359/2023-CR, 6369/2023-CR, 6380/2023-CR, 6535/2023-CR, 6634/2023-CR, 7006/2023-CR, 7068/2023-CR, 7092/2023-CR, 7229/2023-CR y 7674/2023-CR que propone la "Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano"; con catorce (14) votos a favor, de los señores congresistas

César Manuel Revilla Villanueva, Alejandro Enrique Cavero Alva, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Víctor Seferino Flores Ruiz, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Tania Estefany Ramírez García, Elva Edith Julón Irigoín, María Grimaneza Acuña Peralta, Nieves Esmeralda Limachi Quispe, Noelia Rossvith Herrera Medina, Silvia María Monteza Facho, Jorge Luis Flores Ancachi, Adriana Josefina Tudela Gutiérrez e Ilich Fredy López Ureña; seis (06) votos en contra, de los señores congresistas Isabel Cortez Aguirre, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Carlos Antonio Anderson Ramírez, Elías Marcial Varas Meléndez, José León Luna Gálvez e Isaac Mita Alanoca; y un (01) voto en abstención, del Señor Congresista Álex Antonio Paredes Gonzales.

I. SITUACIÓN PROCESAL DE LAS PROPUESTAS

Mediante Oficio 1074-2023-2024-ADP-D/CR el Oficial Mayor hace llegar el informe mediante el cual informa que, ante el retiro de cinco firmas a favor del dictamen en mayoría recaído en los proyectos 118/2021-CR, 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4921/2022-CR y 5150/2022-CR, existe una igualdad entre el número de firmantes a favor y en contra, eventualidad que debe ser considerada por la Comisión hasta establecer con claridad las posiciones. Respecto de la posición de la Comisión, cabe señalar que con fecha 15 de noviembre de 2023 en la Sétima Sesión Ordinaria, la Comisión acordó solicitar al Consejo Directivo que dicho dictamen retorne a la Comisión para estudio por considerar que, con fecha 11 de octubre del presente año, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 6120/2023-PE, que propone la "Ley de creación del nuevo sistema previsional peruano" y que, debido a la necesidad y premura de una Reforma de Pensiones para el país, este tema debiera revisarse nuevamente. En tal sentido, se elabora el presente dictamen que acumula los proyectos 118/2021-CR, 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR,

912/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4921/2022-CR y 5150/2022-CR y los proyectos ingresados durante la presente legislatura. Al respecto se presenta la situación procesal de todos los proyectos acumulados.

1. El Proyecto de Ley 344/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 01 de octubre de 2021, fue decretado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 05 de octubre de 2021 y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora el 05 de octubre de 2021.
2. El Proyecto de Ley 551/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 26 de octubre de 2021, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 03 de noviembre de 2021 y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora el 03 de noviembre de 2021.
3. El Proyecto de Ley 866/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 30 de noviembre de 2021, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 01 de diciembre de 2021.
4. Proyecto de Ley 912/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 7 de diciembre de 2021, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 9 de diciembre 2021.
5. Proyecto de Ley 1079/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 28 de diciembre de 2021, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 6 de enero de 2022.
6. El Proyecto de Ley 1306/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 14 de febrero de 2021, fue decretado a la Comisión de Economía,

Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 16 de febrero de 2022.

7. El Proyecto de Ley 1356/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 22 de febrero de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 24 de febrero de 2022.
8. El Proyecto de Ley 1513/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 23 de marzo de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 28 de marzo de 2022.
9. El Proyecto de Ley 1595/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 01 de abril de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 06 de abril de 2022 y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora el 06 de abril de 2022.
10. Proyecto de Ley 1922/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 3 de mayo de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 5 de mayo 2022.
11. El Proyecto de Ley 2047/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 17 de mayo de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 23 de mayo de 2022.
12. El Proyecto de Ley 2110/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 25 de mayo de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 26 de mayo de 2022.
13. El Proyecto de Ley 2278/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 03 de junio de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 07 de junio de 2022.

14. El Proyecto de Ley 2659/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 19 de julio de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 20 de julio de 2022 y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora el 20 de julio de 2022.
15. El Proyecto de Ley 2718/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 27 de abril de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 23 de agosto de 2022.
16. El Proyecto de Ley 2728/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 26 de julio de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 23 de agosto de 2022.
17. Proyecto de Ley 2880/2021-CR CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 23 de agosto de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 24 de agosto 2022.
18. Proyecto de Ley 3133/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 21 de setiembre de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 23 de setiembre 2022.
19. El Proyecto de Ley 3227/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 06 de octubre de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 10 de octubre de 2022 y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora el 10 de octubre de 2022.
20. El Proyecto de Ley 3341/2022-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 18 de octubre de 2022. Fue decretado el 21 de octubre de 2022 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.

21. El Proyecto de Ley 3436/2022-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 2 de noviembre de 2022. Fue decretado el 7 de noviembre de 2022 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
22. El Proyecto de Ley 3717/2022-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 30 de noviembre de 2022. Fue decretado el 5 de diciembre de 2022 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
23. El Proyecto de Ley 4055/2022-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 25 de enero de 2023. Fue decretado el 27 de enero de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
24. El Proyecto de Ley 4087/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 27 de enero de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 01 de febrero de 2023.
25. Proyecto de Ley 4200/2022-CR CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 8 de febrero de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 10 de febrero 2023.
26. Proyecto de Ley 4366/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 2 de marzo de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 3 de marzo 2023.
27. El Proyecto de Ley 4379/2022-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 3 de marzo de 2023. Fue decretado el 6 de marzo de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora.
28. El Proyecto de Ley 4452/2022-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 10 de marzo de 2023. Fue decretado el 13 de marzo de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora.

29. El Proyecto de Ley 4528/2022-CR CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 22 de marzo de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 23 de marzo de 2023.
30. El Proyecto de Ley 4743/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 17 de abril de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 19 de abril de 2023 y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora el 19 de abril de 2023.
31. Proyecto de Ley 4864/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 3 de mayo de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 4 de mayo de 2023.
32. Proyecto de Ley 4907/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 4 de mayo de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 9 de mayo de 2023.
33. Proyecto de Ley 4921/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 8 de mayo de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 9 de mayo de 2023 y la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora el 9 de mayo de 2023.
34. El Proyecto de Ley 5139/2022-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 23 de mayo de 2023. Fue decretado el 24 de mayo de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora.
35. El Proyecto de Ley 5149/2022-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 23 de mayo de 2023. Fue decretado el 25 de mayo de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora.

36. El Proyecto de Ley 5150/2022-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 23 de mayo de 2023. Fue decretado el 25 de mayo de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
37. El Proyecto de Ley 5242/2022-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 6 de junio de 2023. Fue decretado el 8 de junio de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
38. El Proyecto de Ley 5246/2022-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 6 de junio de 2023. Fue decretado el 8 de junio de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
39. El Proyecto de Ley 5377/2022-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 16 de junio de 2023. Fue decretado el 20 de junio de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
40. El Proyecto de Ley 5386/2022-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 19 de junio de 2023. Fue decretado el 20 de junio de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
41. El Proyecto de Ley 5499/2022-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 28 de junio de 2023. Fue decretado el 3 de julio de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
42. El Proyecto de Ley 5531/2022-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 6 de julio de 2023. Fue decretado el 7 de julio de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
43. El Proyecto de Ley 5623/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 28 de julio de 2023. Fue decretado el 14 de agosto de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
44. El Proyecto de Ley 5795/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 1 de septiembre de 2023. Fue decretado el 4 de septiembre de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora.

45. El Proyecto de Ley 5929/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 14 de septiembre de 2023. Fue decretado el 15 de septiembre de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
46. El Proyecto de Ley 5965/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 19 de septiembre de 2023. Fue decretado el 21 de septiembre de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
47. El Proyecto de Ley 6120/2023-PE ingresó al Área de Trámite Documentario el 11 de octubre de 2023. Fue decretado el 13 de octubre de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
48. El Proyecto de Ley 6227/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 24 de octubre de 2023. Fue decretado el 25 de octubre de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
49. El Proyecto de Ley 6338/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 7 de noviembre de 2023. Fue decretado el 8 de noviembre de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
50. El Proyecto de Ley 6359/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 9 de noviembre de 2023. Fue decretado el 10 de noviembre de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora.
51. El Proyecto de Ley 6369/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 9 de noviembre de 2023. Fue decretado el 10 de noviembre de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
52. El Proyecto de Ley 6380/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 10 de noviembre de 2023. Fue decretado el 13 de noviembre de 2023 a la Comisión

de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.

53. El Proyecto de Ley 6535/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 28 de noviembre de 2023. Fue decretado el 29 de noviembre de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora.
54. El Proyecto de Ley 6634/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 12 de diciembre de 2023. Fue decretado el 14 de diciembre de 2023 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
55. El Proyecto de Ley 7006/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 7 de febrero de 2024. Fue decretado el 8 de febrero de 2024 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora.
56. El Proyecto de Ley 7068/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 19 de febrero de 2024. Fue decretado el 21 de febrero de 2024 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
57. El Proyecto de Ley 7092/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 21 de febrero de 2024. Fue decretado el 22 de febrero de 2024 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
58. El Proyecto de Ley 7229/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 7 de marzo de 2024. Fue decretado el 12 de marzo de 2024 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
59. El Proyecto de Ley 7674/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 24 de abril de 2024. Fue decretado el 24 de abril de 2024 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.
60. El Proyecto de Ley 7821/2023-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 13 de mayo de 2024. Fue decretado el 13 de mayo de 2024 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora.

II. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

El Proyecto de Ley 344/2021-CR tiene por objeto la creación del Sistema Previsional Complementario por Consumo, el cual es financiado con un porcentaje del Impuesto General a las Ventas que paguen los consumidores finales por la adquisición de bienes y servicios, y tiene el propósito de contribuir al otorgamiento de una pensión para todas aquellas personas naturales que cumplan los requisitos que establece la presente Ley, y que otorgue protección ante los riesgos de vejez, invalidez y fallecimiento.

El Proyecto de Ley 551/2021-CR tiene como objetivo lograr que todas las personas accedan progresivamente a una pensión de jubilación, invalidez y sobrevivencia digna y justa y gastos de sepelio, que permita atender las contingencias y estados de necesidad básicos, evitando situaciones de pobreza, en tanto cumplan con los requisitos normativos correspondientes.

El Proyecto de Ley 866/2021-CR tiene por objeto la creación de un sistema previsional alternativo para las personas que se dedican a brindar servicios de reparto, mensajería y movilidad por medio de plataformas digitales en el territorio nacional, así como a todas aquellas personas que desarrollan actividades económicas fuera de planillas; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10° de la Constitución Política del Perú.

El Proyecto de Ley 912/2021-CR tiene por objeto enfatizar que los fondos de pensiones son inembargables, es decir, que no puedan ser gravados ni ejecutados por cualquier tipo de deuda; asimismo, que sean intangibles, entendiéndose que no puedan ser destinados a ninguna finalidad distinta a la de cubrir pensiones de jubilación de sus propietarios; y, que gocen de una protección frente a la expropiación.

El Proyecto de Ley 1079/2021-CR tiene por objeto otorgar un capital inicial (Capital Semilla) a nombre de cada peruano nacido vivo, para ser depositado en una Cuenta Individual

Capitalizable - CIC y administrado por el Estado, de manera que al llegar a la edad de jubilación (65 años) e independientemente de la condición laboral, el ciudadano en edad de jubilación esté garantizado a tener una pensión básica.

El Proyecto de Ley 1306/2021-CR tiene por objeto declarar a la placenta como activo de propiedad del recién nacido y con la venta de ello, capitalice de forma obligatoria en una cuenta individual supervisado por el Estado, que sólo podrá ser utilizado con fin previsional para garantizar su pensión de jubilación.

El Proyecto de Ley 1356/2021-CR tiene por objeto de contribuir y fortalecer al sistema de seguridad social, por cuyo motivo se crea una nueva fuente complementaria para financiar las pensiones individuales, la cual constituirá en un porcentaje del Impuesto General a las Ventas que paguen los consumidores finales por la adquisición de bienes y servicios y asimismo, contribuir sosteniblemente al otorgamiento de una pensión para todas aquellas personas naturales que siendo contribuyentes de cuarta y quinta categoría obtienen un porcentaje del Impuesto a la Renta, en ambos casos deben cumplir los requisitos que establece la presente Ley, el Reglamento y disposiciones que para este efecto apruebe la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones (SBS).

El Proyecto de Ley 1513/2021-CR tiene por objeto establecer el marco legal para la apertura de cuentas de ahorros previsionales en entidades del sistema financiero a solicitud expresa y voluntaria de los afiliados activos y pasivos del Sistema Privado de Pensiones (SPP), administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para el traslado del saldo total acumulado de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) a una entidad del sistema financiero supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS).

El Proyecto de Ley 1595/2021-CR tiene por objeto crear el fondo previsional de los Trabajadores Mototaxitas para incorporarlos al Sistema Nacional de Pensiones.

El Proyecto de Ley 1922/2021-CR tiene por objeto crear un fondo de pensiones individuales para los transportistas públicos independientes, acorde a su consumo de combustible.

El Proyecto de Ley 2047/2021-CR tiene por objeto establecer que las pérdidas de los fondos se compartan entre las empresas y afiliados, regula las comisiones de las AFP y permite que los afiliados participen en sus directorios y en los de las empresas en que inviertan.

El Proyecto de Ley 2110/2021-CR tiene por objeto establecer el cobro de la retribución por parte de las doras Privadas de Fondos de Pensiones, por la administración del fondo de los afiliados, la cual está sujeta a su desempeño y siempre y cuando exista rentabilidad real a favor del afiliado, conforme a los márgenes que determina la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Proyecto de Ley 2278/2021-CR tiene por objeto fomentar la competencia en la oferta de servicios relacionados a la administración de fondos de pensiones que operan en el país, así como regular el cobro de comisiones justas en favor de los afiliados.

El Proyecto de Ley 2659/2021-CR tiene por objeto crear el Sistema Único de Pensiones – SUP, que garantice una pensión de jubilación, invalidez, y sobrevivencia digna y universal; y un gasto de sepelio acorde con la realidad, construida por aportes contributivos y no contributivos. Asimismo, fortalecer y transparentar el Sistema Nacional de Pensiones, y el Sistema Privado de Pensiones, regulados por los Decretos Ley 19990 y Ley 25897, respectivamente; con participación activa de los afiliados y jubilados, para construir confianza que promueva una mayor contribución y rentabilidad de las Cuentas Individuales de Capitalización con fines pensionables.

El Proyecto de Ley 2718/2021-CR tiene por objeto establecer el equilibrio entre los intereses de los afiliados y los intereses de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

El Proyecto de Ley 2728/2021-CR tiene por objeto modificar la Ley 25897 con la finalidad de promover que los fondos de los afiliados sin herederos de las AFPs sean transferidos al Estado.

El Proyecto de Ley 2880/2021-CR tiene por objeto modificar el artículo 24 de Decreto Ley 25897, que crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), conformado por las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP, con la finalidad de establecer la participación compartida en las pérdidas de los fondos, entre los administradores de fondos y los afiliados.

El Proyecto de Ley 3133/2022-CR. Tiene por objeto la incorporación de precisiones al artículo 2 de la Ley 30478, Ley que modifica el artículo 40 y la Vigésima Cuarta Disposición Final y Transitoria del TUO de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054-97-EF.

El Proyecto de Ley 3227/2021-CR tiene por objeto establecer la reforma integral del sistema de pensiones que integra el sistema nacional de pensiones y el sistema privado de pensiones.

El Proyecto de Ley 3341/2022-CR tiene por objeto crear la Comisión Técnica Multisectorial, encargada de evaluar, analizar y proponer la reforma integral de los sistemas público y privado de pensiones.

El Proyecto de Ley 3436/2022-CR tiene por objeto crea el Aporte Social Permanente para la Jubilación del Pescador Industrial (ASPJPI) con carácter de aporte complementario social, no tributario, de naturaleza permanente, intangible, inembargable e independiente, el mismo que formará parte del Fondo Extraordinario del Pescador (FEP) regulado en el Artículo 32 de la Ley N° 30003; Ley que regula el régimen especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros.

El Proyecto de Ley 3717/2022-CR tiene por objeto brindar facilidades a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, que cumplieron (50) cincuenta años de edad, y que no califiquen para acceder a la jubilación anticipada por carecer de fondos suficientes; y al retiro del 95.5% de sus fondos acumulados en sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).

El Proyecto de Ley 4055/2022-CR tiene por objeto instituir el aporte social permanente al fondo de jubilación de los trabajadores pesqueros industriales con carácter de aporte complementario social de naturaleza permanente, intangible, inembargable e independiente, el cual constituirá recursos del Fondo Extraordinario del Pescador (FEP) de la Ley N° 30003.

El Proyecto de Ley 4087/2021-CR tiene por objeto modificar el texto único ordenado de la ley del sistema privado de administración de fondos de pensiones y establece retribución por productividad.

El Proyecto de Ley 4200/2021-CR tiene por objeto modificar el artículo 40 del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones — D.S. N° 054-97-EF; y con ello, autorizar a todo afiliado al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones a retirar hasta el cincuenta por ciento (50%) de los Fondos para la compra o amortización de un primer inmueble.

El Proyecto de Ley 4366/2022-CR. Tiene por objeto promover la equidad en la gestión de los fondos del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones - AFP.

El Proyecto de Ley 4379/2022-CR tiene por objeto facultar la libre desafinación de los aportantes al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones —AFP´s.

El Proyecto de Ley 4452/2022-CR tiene por objeto otorgar a los trabajadores pesqueros afiliados al Sistema Privado de Pensiones, que por la naturaleza y condiciones de sus labores que implican un riesgo para la vida o la salud, el acceso a los beneficios de una jubilación anticipada dentro del ámbito del Sistema Privado de Pensiones, siempre y

cuando cumplan con determinada edad y requisitos mínimos que señale el Reglamento de la presente Ley.

El Proyecto de Ley 4528/2022-CR tiene por objeto La presente Ley tiene por objeto ampliar los alcances del artículo 40 de la Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054- 97-EF, para facultar a los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP el uso de hasta el 50% del fondo acumulado en la cuenta individual para la compra o el pago del crédito hipotecario de una única vivienda o inmueble.

El Proyecto de Ley 4743/2021-CR tiene por objeto la reforma y la universalización el Sistema Previsional Peruano para optimizar los aportes y las pensiones de los afiliados a fin de garantizar una pensión digna y justa a todas las personas naturales que cumplan con los requisitos en la presente Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política que obliga al Estado Peruano a reconocer como un derecho universal y progresivo de toda persona, el acceso a la seguridad social.

El Proyecto de Ley 4864/2022-CR tiene por objeto precisar el momento en el cual el afiliado al Sistema Privado de Pensiones que opte por acogerse a los beneficios de la Ley 31670, Ley que crea las pensiones mínimas y promueve los aportes voluntarios alternativos con fines previsionales, pueda acceder al excedente del Saldo Mínimo de Jubilación (SMJ).

El Proyecto de Ley 4907/2022-CR tiene por objeto crear el Fideicomiso Individual de Jubilación Obligatoria — FIJO, para todos los peruanos recién nacidos, promoviendo la administración fiduciaria del ahorro desde la niñez, con fines previsionales.

El Proyecto de Ley 4921/2022-CR tiene por objeto modificar el artículo 6 de la Ley 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros.

El Proyecto de Ley 5139/2022-CR tiene por objeto modificar la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054-97-EF,

con la finalidad de realizar las precisiones correspondientes, para hacer uso de hasta el 100% del fondo de pensiones, con el propósito de acceder a una vivienda digna y adecuada.

El Proyecto de Ley 5149/2022-CR tiene por objeto modificar el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054-97-EF, modificado por la Ley N° 30822, autorizando el uso de hasta el 25% del fondo para el pago de créditos con garantía hipotecaria.

El Proyecto de Ley 5150/2022-CR tiene por objeto establecer un marco normativo para la reforma integral del sistema previsional peruano, con la finalidad de asegurar el acceso digno de las personas a pensiones suficientes, sostenibles y justas para todos los aportantes; promoviendo la eficiencia y transparencia en la gestión de los fondos previsionales, y fomentando la equidad.

El Proyecto de Ley 5242/2022-CR tiene por objeto establecer el monto mínimo a otorgar la pensión de jubilación a los pensionistas comprendidos en el Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el Decreto Ley 19990, con más de 20 años de aportación y 65 años de edad a fin de garantizar el derecho previsional de cada ciudadano aportante.

El Proyecto de Ley 5246/2022-CR tiene por objeto modificar el Decreto Ley N° 19990, Ley que crea el Sistema Nacional de Pensiones de Seguridad Social, para posibilitar y garantizar el acceso a la pensión de jubilación para la Sociedad Conyugal y Uniones de Hecho en el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social.

El Proyecto de Ley 5377/2022-CR tiene por objeto establecer el marco óptimo y adecuado para la creación del sistema universal de pensiones, que integre los actuales sistemas previsionales públicos y privados.

El Proyecto de Ley 5386/2022-CR tiene por objeto proporcionar a los trabajadores de la economía no formal, una alternativa de ahorro con fines previsionales, en la cual el Estado aporta cantidades similares a las ahorradas por el afiliado.

El Proyecto de Ley 5499/2022-CR tiene por objeto corregir las condiciones para calcular el pago de las pensiones devengadas, para ello modificando el Decreto Ley 19990," El Gobierno Revolucionario crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social', en su artículo 81.

El Proyecto de Ley 5531/2022-CR tiene por objeto crear el Fondo Complementario de Jubilación Pesquera Industrial (FCJPI) con carácter de aporte complementario social de naturaleza permanente, intangible, inembargable e independiente, con el fin único y exclusivo de complementar las pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia de los tripulantes pesqueros industriales sin distinción de su régimen pensionario al momento de su jubilación, de los que se encuentren bajo los alcances de la ex Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) y de la Ley 30003 Régimen Especial Pesquero (REP), así como de los pensionistas del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

El Proyecto de Ley 5623/2023-CR tiene por objeto modificar normas jurídicas de la Ley N° 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, para establecer una adecuada regulación normativa en la pensión de jubilación por invalidez y otorgar pensiones justas y razonables.

El Proyecto de Ley 5795/2023-CR tiene por objeto derogar el Decreto Ley N°25897, que crea el sistema privado de administración de fondo de pensiones (SPP), conformado por las administradoras privadas de fondos de pensiones AFP.

El Proyecto de Ley 5929/2023-CR tiene por objeto desarrollar un marco óptimo y adecuado para la construcción de un nuevo sistema de pensiones previsional, que integre los sistemas de pensiones públicos y privados existentes.

El Proyecto de Ley 5965/2023-CR tiene por objeto modificar el artículo 3 de la Ley N° 31301, Ley que establece medidas de acceso a una pensión proporcional a los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones.

El Proyecto de Ley 6120/2023-CR tiene por objeto crear un nuevo Sistema Previsional Peruano, único, universal, igualitario, inclusivo e integrado con estructura multipilar y bajo administración pública y privada.

El Proyecto de Ley 6227/2023-CR tiene por objeto establecer un sistema de pensiones de gestión pública y privada de los fondos de pensiones de los trabajadores, con el fin de garantizar la sostenibilidad, la equidad y la eficiencia del sistema de seguridad social.

El Proyecto de Ley 6338/2023-CR tiene por objeto modificar la Ley N° 31301 adecuando una Pensión proporcional a los asegurados del sistema Nacional de Pensiones.

El Proyecto de Ley 6359/2023-CR tiene por objeto incorporar el artículo 12-A en el texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.

El Proyecto de Ley 6369/2023-CR tiene por objeto modificar los artículos 1, 4 y deroga el artículo 2 de la Ley N°28991 sobre la Desafiliación al Sistema Privado de Pensiones (AFP) y Retorno al Sistema Nacional de Pensiones (ONP).

El Proyecto de Ley 6380/2023-CR tiene por objeto modificar la Ley 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros.

El Proyecto de Ley 6535/2023-CR tiene por objeto establecer disposiciones para regular el retiro del fondo pensionario en casos de enfermedad terminal o cáncer, y en las situaciones en las que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) o sus sobrevivientes con derecho a la pensión de invalidez o sobrevivencia, no cuenten con cobertura del seguro.

El Proyecto de Ley 6634/2023-CR tiene por objeto crear las cuentas individuales de capitalización para ciudadanos que no perciben rentas de cuarta o quinta categoría. Estas cuentas reciben aportes individuales con fines previsionales, con cargo al Impuesto a las Transacciones Financieras — ITF generados por el uso de las billeteras electrónicas y adaptar la legislación vigente a su correcta implementación.

El Proyecto de Ley 7006/2023-CR tiene por objeto modificar el artículo 17 del Decreto Ley 19990, Ley que regula el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social.

El Proyecto de Ley 7068/2023-CR tiene por objeto establecer el nuevo tope máximo de las pensiones para el régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros.

El Proyecto de Ley 7092/2023-CR tiene por objeto incorporar el artículo 38-A en el Decreto Ley N° 19990, Ley de Creación del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), con el propósito de salvaguardar el principio de presunción de veracidad en relación a la documentación y/o información que respaldan los derechos pensionarios.

El Proyecto de Ley 7229/2023-CR tiene por objeto establecer la pensión mínima de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP). fin de garantizar las condiciones básicas de la población adulta mayor al final de la vida laboral.

El Proyecto de Ley 7674/2023-CR tiene por objeto reformar el Sistema Previsional Peruano, a fin de hacerlo inclusivo y universal, estableciendo mecanismos alternativos que garanticen el derecho constitucional de toda persona a tener una pensión.

El Proyecto de Ley 7821/2023-CR tiene por objeto incentivar el ahorro para fines pensionarios, en base al consumo de cada ciudadano, contribuyendo con la recaudación tributaria.

III. MARCO NORMATIVO

3.1 Constitución Política del Perú, artículos 10 y 11.

3.2 Decreto Ley 19990, que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social.

3.3 Decreto Ley 25897, que crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones - SPP, conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - AFP.

3.4 Decreto Ley 20530, que crea el Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley 19990.

3.5 Decreto Legislativo N° 894, Ley del Servicio Diplomático de la República

3.6 Decreto Legislativo 1086-2013, que aprueba la Ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente.

3.7 Ley 28389, Ley de Reforma de los artículos 11, 103 y Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú.

3.8 Ley 28449, Ley que establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley 20530.

3.9 Ley 27617, Ley que dispone la restructuración del Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley 19990 y modifica el Decreto Ley 20530 y la ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.

3.10 Ley 30082, Ley que modifica la Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, y el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.

3.11 Ley N° 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros.

3.12 Decreto Supremo 054-97-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), y sus modificaciones.

3.13 Decreto Supremo 004-98-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, y sus modificaciones.

IV. OPINIONES SOLICITADAS

4.1 Presidencia del Consejo de Ministros – PCM

Mediante Oficio N° 233-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 13 de octubre de 2021, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 344/2021-CR.

Mediante Oficio N° 407-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 18 de noviembre de 2021, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

Mediante Oficio N° 692-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 16 de noviembre de 2021, se solicitó opinión la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 866/2021-CR.

Mediante Oficio Nº 728 -2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de diciembre de 2021, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 912/2022-CR.

Mediante Oficio N° 1303-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 04 de marzo de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 1306/2021-CR.

Mediante Oficio N° 1340-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 08 de marzo de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 1356/2021-CR.

Mediante Oficio N° 1633-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 11 de abril de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

Mediante Oficio N° 1691-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 18 de abril de 2022 se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 1595/2021-CR.

Mediante Oficio Nº 2000-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de mayo de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 1922/2021-CR.

Mediante Oficio N° 2180-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 7 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 2047/2021-CR.

Mediante Oficio N° 2251-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 10 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 2110/2021-CR.

Mediante Oficio N° 2324-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 15 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 2278/2021-CR.

Mediante Oficio N° 136-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 23 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 2659/2021-CR.

Mediante Oficio N° 194-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 2728/2021-CR.

Mediante Oficio N° 206-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 2880/2021-CR.

Mediante Oficio N° 1373 -2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 24 de febrero de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 4200/2022-CR.

Mediante Oficio N° 1505-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 17 de marzo de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 4366/2022-CR.

Mediante Oficio N° 1537-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 22 de marzo de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 04379/2022- CR.

Mediante Oficio N° 1592-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 28 de marzo de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 04452/2022- CR.

Mediante Oficio N° 1661-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 11 de abril de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 4528/2022-CR.

Mediante Oficio N° 1850-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR.

Mediante Oficio1985 -2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 22 de mayo de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 4864/2022-CR.

Mediante Oficio Nº 2022-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 5 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 04907/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 2033-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 5 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 04921/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 2185-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 15 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 05139/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 2197-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 15 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 05149/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 2201-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 15 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 05150/2023- CR.

Mediante Oficio N° 2133-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 20 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 05242/2023- CR.

Mediante Oficio N° 2253-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 20 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 05246/2023- CR.

Mediante Oficio N° 2319-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 28 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 05377/2023- CR.

Mediante Oficio N° 2373-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 6 de julio de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 05499/2022-CR.

Mediante Oficio N° 2407-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 12 de julio de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 05531/2022- CR

Mediante Oficio N° 0052-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 24 de agosto de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 05623/2023- CR.

Mediante Oficio N° 0140-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 12 de setiembre de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 05795/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0272-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 27 de setiembre de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 05929/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0287-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 27 de setiembre de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 05965/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0715-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 06338/2023- CR.
Mediante Oficio Nº 0725-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 06359/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0730-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 06369/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0825-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 1 de diciembre de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 06227/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0995-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de enero de 2024, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 06380/2023- CR.

4.2 Ministerio de Economía y Finanzas – MEF

Mediante Oficio N° 232-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 13 de octubre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 344/2021-CR.

Mediante Oficio 689-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 16 de noviembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 866/2021-CR.

Mediante Oficio N° 406-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 18 de noviembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas- MEF sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

Mediante Oficio 727-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de diciembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 912/2021-CR.

Mediante Oficio 1070-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 9 de febrero de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 866/2021-CR.

Mediante Oficio N° 1098-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 09 de febrero de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

Mediante Oficio 1062-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 9 de febrero de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 912/2021-CR.

Mediante Oficio 1301-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 4 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 01306/2021-CR.

Mediante Oficio 1337-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 08 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 1356/2021-CR.

Mediante Oficio 1401-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 9 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 866/2021-CR.

Mediante Oficio 1409-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 9 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 912/2021-CR.

Mediante Oficio N° 1375-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 09 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

Mediante Oficio N° 1632-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 11 de abril de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

Mediante Oficio N° 1694-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 21 de abril de 2022 y reiterado con Oficio 2153-2021-2022-SMMF.CEBFIF-CR de fecha 07 de junio de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 1595/2021-CR.

Mediante Oficio 1996-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de mayo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 1922/2021-CR.

Mediante Oficio N° 2179-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 7 de junio de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 2047/2021-CR.

Mediante Oficio N° 2250-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 10 de junio de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 2110/2021-CR.

Mediante Oficio N° 2322-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 15 de junio de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 2278/2021-CR.

Mediante Oficio N° 2344-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 23 de junio de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 1356/2021-CR.

Mediante Oficio N° 2358-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 23 de junio de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

Mediante Oficio N° 133-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 23 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 2659/2021-CR.

Mediante Oficio N° 169-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 2718/2021-CR.

Mediante Oficio N° 170-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 2728/2021-CR.

Mediante Oficio 182-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 2880/2022-CR.

Mediante Oficio N° 193-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 2718/2021-CR.

Mediante Oficio 322-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 29 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 3133/2022-CR.

Mediante Oficio 478-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 26 de octubre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 3227/2022-CR.

Mediante Oficio Nº 0523-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 28 de octubre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 03341/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 0998-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 20 de diciembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 03717/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 1206-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 2 de febrero de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 04055/2022- CR.

Mediante Oficio 1284-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 09 de febrero de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 4087/2022-CR.

Mediante Oficio 1356-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 24 de febrero de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 4200/2022-CR.

Mediante Oficio 1504-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 17 de marzo de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 4366/2022-CR.

Mediante Oficio Nº 1565-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 21 de marzo de 2023, se solicitó opinión a la Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 04055/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 1536-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 22 de marzo de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 04379/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 1591-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 28 de marzo de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 04452/2022- CR.

Mediante Oficio 1660-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 11 de abril de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 4528/2022-CR.

Mediante Oficio 1849-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR.

Mediante Oficio 1856-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre los Proyecto de Ley 4743/2022-CR, 551/2021-CR, 886/2021-CR, 1595/2021-CR, 2278/2021-CR, 2718/2021-CR, 3227/2022-CR, 3230/2022-CR y 4087/2022-CR.

Mediante Oficio 1984-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 22 de mayo de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 4864/2022-CR.

Mediante Oficio Nº 2021-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 5 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 04907/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 2032-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 5 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 04921/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 2184-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 15 de junio de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF sobre el Proyecto de Ley 05139/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 2196-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 15 de junio de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF sobre el Proyecto de Ley 05149/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 2200-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 15 de junio de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF sobre el Proyecto de Ley 05150/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 2138-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 20 de junio de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF sobre el Proyecto de Ley 05242/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 2252-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 20 de junio de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 05246/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 2318-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 28 de junio de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 05377/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 2372-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 6 de julio de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 05499/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 2406-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 12 de julio de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 05531/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0051-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 24 de agosto de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 05623/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0139-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 12 de setiembre de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 05795/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0271-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 27 de setiembre de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 05929/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0286-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 27 de setiembre de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 05965/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0824-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 01 de diciembre de 2023, se solicitó opinión a la Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 06227/2023- CR.

Mediante Oficio N° 0714-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF sobre el Proyecto de Ley 06338/2023- CR.

Mediante Oficio N° 0724-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF sobre el Proyecto de Ley 06359/2023- CR.

Mediante Oficio N° 0729-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 06369/2023- CR.

Mediante Oficio N° 0994-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de enero de 2024, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF sobre el Proyecto de Ley 06380/2023- CR.

4.3 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE

Mediante Oficio 691-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 16 de noviembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 866/2021-CR.

Mediante Oficio 1338-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 08 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de sobre el Proyecto de Ley 01356/2021-CR.

Mediante Oficio 1705-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 21 de abril de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de sobre el Proyecto de Ley 1595/2021-CR.

Mediante Oficio 134-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 23 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de sobre el Proyecto de Ley 2659/2021-CR.

Mediante Oficio 191-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 2728/2021-CR.

Mediante Oficio 339-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 29 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 3133/2022-CR.

Mediante Oficio Nº 0535-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 28 de octubre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 03341/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 0999-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 20 de diciembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 03717/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 1207-2022-2023-RABR-CEBFif-cr, de fecha 2 de febrero de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 04055/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 1566-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 21 de marzo de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 04055/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 1851-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 4 de mayo de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 04743/2022- CR.

Mediante Oficio N° 2034-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 5 de junio de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 04921/2022- CR.

Mediante Oficio N° 2202-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 15 de junio de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 05150/2022- CR.

Mediante Oficio N° 2250-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 20 de junio de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 05242/2022- CR.

Mediante Oficio N° 2254-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 20 de junio de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 05246/2022- CR.

Mediante Oficio N° 2320-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 28 de junio de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 05377/2022- CR.

Mediante Oficio N° 2374-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 6 de julio de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 05499/2022- CR.

Mediante Oficio N° 0053-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 24 de agosto de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 05623/2023- CR.

Mediante Oficio N° 0273-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 27 de setiembre de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 05929/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0716-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 06338/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0731-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 06369/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0826-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 1 de diciembre de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 06227/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0996-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de enero de 2024, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 06380/2023- CR.

4.4 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS

Mediante Oficio 521-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 06 de diciembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

Mediante Oficio 1935-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 18 de mayo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de sobre el Proyecto de Ley 1595/2021-CR.

Mediante Oficio Nº 1209-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 2 de febrero de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sobre el Proyecto de Ley 04055/2022- CR.

4.5 Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC

Mediante Oficio 690-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 16 de noviembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo de Transportes y Comunicaciones sobre el Proyecto de Ley 866/2021-CR.

Mediante Oficio 1999-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de mayo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo de Transportes y Comunicaciones sobre el Proyecto de Ley 1922/2021-CR.

4.6 Ministerio de Energía y Minas – MINEM

Mediante Oficio 1998-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de mayo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo de Transportes y Comunicaciones sobre el Proyecto de Ley 1922/2021-CR.

4.7 Ministerio del Ambiente – MINAM

Mediante Oficio 1997-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de mayo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo de Transportes y Comunicaciones sobre el Proyecto de Ley 1922/2021-CR.

4.8 Ministerio de Producción – PRODUCE

Mediante Oficio N° 1208-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 2 de febrero de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Producción sobre el Proyecto de Ley 04055/2022- CR.

Mediante Oficio N° 2408-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 12 de julio de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Producción sobre el Proyecto de Ley 5531/2022- CR.

4.9 Ministerio de Relaciones Exteriores – RREE

Mediante Oficio 1227-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR de fecha 16 de febrero de 2024, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 6120/2023-PE.

4.10 Oficina de Normalización Previsional – ONP

Mediante Oficio 408-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 18 de noviembre de 2021, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

Mediante Oficio 1302-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 04 de marzo de 2022, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 1306/2021-CR.

Mediante Oficio 1339-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 08 de marzo de 2022, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 1356/2021-CR.

Mediante Oficio 1732-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 21 de abril de 2022, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 1595/2021-CR.

Mediante Oficio 2323-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 14 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 2278/2021-CR.

Mediante Oficio 135-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 23 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 2659/2021-CR

Mediante Oficio 487-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 26 de octubre de 2022, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 3227/2022-CR.

Mediante Oficio N° 536-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 28 de octubre de 2022, se solicitó opinión de la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 03341/2022- CR.

Mediante Oficio 1383-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 24 de febrero de 2023, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 4200/2022-CR.

Mediante Oficio N° 1567-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 21 de marzo de 2023, se solicitó opinión de la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 04055/2022- CR.

Mediante Oficio 1852-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR.

Mediante Oficio N° 02035-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 5 de junio de 2023, se solicitó opinión de la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 04921/2022- CR.

Mediante Oficio N° 02203-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 15 de junio de 2023, se solicitó opinión de la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 05150/2022- CR.

Mediante Oficio N° 02251-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 20 de junio de 2023, se solicitó opinión de la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 05242/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 02255-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 20 de junio de 2023, se solicitó opinión de la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 05246/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 02321-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 28 de junio de 2023, se solicitó opinión de la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 05377/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 02375-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 06 de julio de 2023, se solicitó opinión de la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 05499/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 02409-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 12 de julio de 2023, se solicitó opinión de la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 05531/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 0055-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 24 de agosto de 2023, se solicitó opinión de la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 05623/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0274-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 27 de setiembre de 2023, se solicitó opinión de la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 05929/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0288-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 27 de setiembre de 2023, se solicitó opinión de la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 05965/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0718-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión de la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 06338/2023- CR.

Mediante Oficio N° 0734-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión de la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 06369/2023- CR.

Mediante Oficio N° 0997-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de enero de 2024, se solicitó opinión de la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 6380/2023- CR.

4.11 Banco Central de Reserva del Perú – BCRP

Mediante Oficio 520-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 6 de diciembre de 2021, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

Mediante Oficio 1300-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 4 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 01306/2021-CR.

Mediante Oficio 1336-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 08 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 1356/2021-CR.

Mediante Oficio 1629-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 11 de abril de 2022, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

Mediante Oficio 2178-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 7 de junio de 2022, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 2047/2021-CR.

Mediante Oficio 2249-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 10 de junio de 2022, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 2110/2021-CR.

Mediante Oficio 2321-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 15 de junio de 2022, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 2278/2021-CR.

Mediante Oficio 166-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 2880/2021-CR.

Mediante Oficio 1272-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 09 de febrero de 2023, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 4087/2022-CR.

Mediante Oficio 1855-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR.

Mediante Oficio N° 0213-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 25 de setiembre de 2023, se solicitó opinión al Banco de Reserva del Perú – BCRP sobre el Proyecto de Ley 05795/2023- CR.
Mediante Oficio N° 0728-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión al Banco de Reserva del Perú – BCRP sobre el Proyecto de Ley 06359/2023- CR.

4.12 Seguro Social de Salud – EsSalud.

Mediante Oficio 235-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 13 de octubre de 2021, se solicitó opinión al Seguro Social de Salud sobre el Proyecto de Ley 344/2021-CR.

Mediante Oficio Nº 0054-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 24 de agosto de 2023, se solicitó opinión al Seguro Social de Salud – EsSalud sobre el Proyecto de Ley 05623/2023-CR.

Mediante Oficio Nº 0717-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión al Seguro Social de Salud – EsSalud sobre el Proyecto de Ley 06338/2023-CR.

Mediante Oficio Nº 0827-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 1 de diciembre de 2023, se solicitó opinión al Seguro Social de Salud – EsSalud sobre el Proyecto de Ley 06227/2023-CR.

Mediante Oficio Nº 0998-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de enero de 2024, se solicitó opinión al Seguro Social de Salud – EsSalud sobre el Proyecto de Ley 6380/2023-CR.

4.13 Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones – SBS

Mediante Oficio 519-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 6 de diciembre de 2021, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

Mediante Oficio 729-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de diciembre de 2021, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 912/2021-CR.

Mediante Oficio 1304-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 04 de marzo de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 1306/2021-CR.

Mediante Oficio 1341-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 08 de marzo de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 1356/2021-CR.

Mediante Oficio 1634-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 11 abril de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

Mediante Oficio 1936-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 18 de mayo de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 1595/2021-CR.

Mediante Oficio 1986-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 22 de mayo de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4864/2022-CR.

Mediante Oficio 2181-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 7 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2047/2021-CR.

Mediante Oficio 2252-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 10 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2110/2021-CR.

Mediante Oficio 2325-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 15 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2278/2021-CR.

Mediante Oficio 213-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2718/2021-CR.

Mediante Oficio 214-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS sobre el Proyecto de Ley 2728/2021-CR.

Mediante Oficio 216-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2880/2022-CR.

Mediante Oficio 346-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 29 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 3133/2022-CR.

Mediante Oficio 494-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 26 de octubre de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 3227/2022-CR.

Mediante Oficio N° 0539-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 28 de octubre de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 03341/2022- CR.

Mediante Oficio N° 01000-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 20 de diciembre de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 03717/2022- CR.

Mediante Oficio 1303-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 09 de febrero de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4087/2022-CR.
Mediante Oficio 1382-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 24 de febrero de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4200/2022-CR.
Mediante Oficio 1506-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 17 de marzo de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4366/2022-CR.

Mediante Oficio N° 1539-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 22 de marzo de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones - SBS sobre el Proyecto de Ley 04379/2022- CR.

Mediante Oficio N° 01593-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 28 de marzo de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 04452/2022- CR.

Mediante Oficio 1663-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 11 de abril de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4528/2022-CR.

Mediante Oficio 1854-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR.

Mediante Oficio N° 2023-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 5 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones - SBS sobre el Proyecto de Ley 04907/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 02186-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 15 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 05139/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 02204-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 15 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 05150/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 02199-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 15 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 05149/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 0211-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 25 de setiembre de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 05795/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0276-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 27 de setiembre de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 05929/2023-CR.

Mediante Oficio Nº 0290-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 27 de setiembre de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 05965/2023-CR.

Mediante Oficio Nº 0727-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 06359/2023-CR.

Mediante Oficio Nº 0732-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 06369/2023-CR.

4.14 Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP

Mediante Oficio 518-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 6 de diciembre de 2021, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

Mediante Oficio 726-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de diciembre de 2021, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 912/2021-CR.

Mediante Oficio 2177-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 7 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2047/2021-CR.

Mediante Oficio 2248-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 10 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2110/2021-CR.

Mediante Oficio 2320-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 15 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2278/2021-CR.

Mediante Oficio 153-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2718/2021-CR.

Mediante Oficio 154-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2728/2021-CR.

Mediante Oficio 155-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2880/2022-CR.

Mediante Oficio 296-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 29 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 3133/2022-CR.

Mediante Oficio 460-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 26 de octubre de 2022, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 3227/2022-CR.

Mediante Oficio Nº 0507-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 28 de octubre de 2022, se solicitó opinión a la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 03341/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 1001-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 20 de diciembre de 2022, se solicitó opinión a la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 03717/2022- CR.

Mediante Oficio 1259-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 09 de febrero de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4087/2022-CR.

Mediante Oficio 1381-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 24 de febrero de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4200/2022-CR.

Mediante Oficio 1507-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 17 de marzo de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 4366/2022-CR.

Mediante Oficio Nº 1538-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 22 de marzo de 2023, se solicitó opinión a la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 04379/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 1594-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 28 de marzo de 2023, se solicitó opinión a la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 04452/2022- CR.

Mediante Oficio 1662-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 11 de abril de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4528/2022-CR.

Mediante Oficio 1853-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR.

Mediante Oficio 1987-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 22 de mayo de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 4864/2022-CR.

Mediante Oficio Nº 02187-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 15 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 05139/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 02198-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 15 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 05149/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 02205-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 15 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 05150/2022- CR.

Mediante Oficio Nº 0212-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 25 de setiembre de 2023, se solicitó opinión a la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 05795/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0275-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 27 de setiembre de 2023, se solicitó opinión a la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 05929/2023--CR.

Mediante Oficio Nº 0289-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 27 de setiembre de 2023, se solicitó opinión a la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 05965/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0705-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión a la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 6120/2023- PE

Mediante Oficio Nº 0726-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión a la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 6359/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 0733-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión a la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 6369/2023- CR.

Mediante Oficio Nº 1217-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 13 de febrero de 2024, se solicitó opinión a la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones-AAFP sobre el Proyecto de Ley 1217/2023- CR.

4.15 Macro Consult SA – MACROCONSULT.

Mediante Oficio Nº 00708-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión a Macro consult SA – MACROCONSULT sobre el Proyecto de Ley 06120/2023 - PE.

4.16 Instituto Peruano de Economía – IPE.

Mediante Oficio Nº 00707-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión al Instituto Peruano de Economía – IPE sobre el Proyecto de Ley 06120/2023 - PE.

4.17 Consejo Fiscal – CF.

Mediante Oficio Nº 00703-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión al Consejo Fiscal - CF sobre el Proyecto de Ley 06120/2023 - PE.

4.18 Apoyo Consultoría.

Mediante Oficio Nº 00740-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión a Apoyo Consultoría sobre el Proyecto de Ley 06120/2023 - PE.

4.19 Cámara de Comercio de Lima – CCL.

Mediante Oficio Nº 00706-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión a Cámara de Comercio de Lima sobre el Proyecto de Ley 06120/2023 - PE.

4.20 Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP

Mediante Oficio N° 00704-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó opinión a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP de Lima sobre el Proyecto de Ley 06120/2023 - PE.

4.21 Sociedad Nacional de Industrias – SIN.

Mediante Oficio N° 0798-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 29 de noviembre de 2022, se solicitó opinión a la Sociedad Nacional de Industrias - SIN sobre el Proyecto de Ley 03436/2022- CR.

4.22 Asociación de Bancos del Perú – ASBANC

Mediante Oficio 1620-2022-2023 -RABR -CEBFIF-CR de fecha 10 de abril de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Bancos del Perú sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

Mediante Oficio 2024-2022-2023 -RABR -CEBFIF-CR de fecha 5 de junio de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Bancos del Perú sobre el Proyecto de Ley 4907/2022-CR.

4.23 La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC)

Mediante Oficio 234-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 13 de octubre de 2021, se solicitó opinión a la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios sobre el Proyecto de Ley 344/2021-CR.

Mediante Oficio 1621-2022-2023 -RABR-CEBFIF-CR de fecha 10 de abril de 2023, se solicitó opinión a la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

4.24 Defensoría del Pueblo – DP

Mediante Oficio 1619-2022-2023 -RABR -CEBFIF-CR de fecha 10 de abril de 2023, se solicitó opinión a la Defensoría del Pueblo sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

4.25 Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT

Mediante Oficio 2001-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de mayo de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria sobre el Proyecto de Ley 1922/2021-CR.

V. OPINIONES RECIBIDAS

5.1 Presidencia del Consejo de Ministros – PCM

Mediante Oficio N° D002317-2022-PCM-SG, de fecha 15 de septiembre del 2022, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000413-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, la propuesta legislativa 344/2021-CR, resulta jurídicamente no viable pues para su implementación requiere recursos adicionales del Tesoro Público, es decir, se trata de una propuesta con iniciativa de gasto, por ende, inconstitucional al inobservar lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución.

Mediante Oficio N° D000116-2022-PCM-SG, de fecha 24 de enero del 2022, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D001761-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, la propuesta legislativa 344/2021-CR, en la cual considera que la Presidencia del Consejo de Ministros no es competente para emitir opinión acerca del

Proyecto de Ley N° 344/2021-CR, Ley que declara de interés nacional la creación del Sistema Previsional Complementario por Consumo.

Mediante Oficio N° D000263-2022-PCM-SG, de fecha 11 de febrero del 2022, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000058-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que sobre la propuesta legislativa 912/2021-CR, no corresponde emitir opinión precisando que el Proyecto de Ley contiene materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Mediante Oficio N° D000294-2022-PCM-SG, de fecha 15 de febrero del 2022, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000100-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, la propuesta legislativa 551/2021-CR, resulta no viable pues los representantes del Congreso de la República no tienen la potestad de presentar iniciativas legislativas que creen ni aumenten gasto público el cual colisiona con lo preceptuado por el artículo 79 de la Constitución Política.

Mediante Oficio N° D000616-2022-PCM-SG, de fecha 17 de marzo del 2022 la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000357-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, la propuesta legislativa 1306/2021-CR, en la cual considera que la Presidencia del Consejo de Ministros no es competente para emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 1306/2021-CR, Ley que autoriza a entidades del sistema financiero la apertura de cuentas previsionales.

Mediante Oficio N° D000966-2022-PCM-SG, de fecha 28 de abril del 2022 la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000570-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, la propuesta legislativa 1513/2021-CR, en la cual considera que la

Presidencia del Consejo de Ministros no es competente para emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 1513/2021-CR, Ley que autoriza a entidades del sistema financiero la apertura de cuentas previsionales.

Mediante Oficio Nº D001475-2022-PCM-SG, de fecha 16 de junio de 2022, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe Nº D00881-2022-PCM-OGAJ, de fecha 15 de junio de 2022, mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que sobre el Proyecto N° 2047/2021-CR, no le corresponde emitir opinión, pero recomienda remitir el presente informe a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

Mediante Oficio Nº D001582-2022-PCM-SG, de fecha 28 de junio de 2022, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe Nº D00945-2022-PCM-OGAJ, de fecha 28 de junio de 2022, mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros sostiene que sobre el Proyecto N° 2278/2021-CR no le corresponde emitir opinión, pero recomienda remitir el presente informe a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

Mediante Oficio Nº D001584-2022-PCM-SG, de fecha 28 de junio de 2022, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe Nº D00922-2022-PCM-OGAJ, de fecha 22 de junio de 2022, mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros sostiene que sobre el Proyecto N° 2110/2021-CR no le corresponde emitir opinión, pero recomienda remitir el presente informe a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

Mediante el Oficio N° 2633-2022-PCM-SG, de fecha 06 de octubre de 2022, mediante la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D001467-2022-PCM-OGAJ, elaborado por la oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, la propuesta legislativa 1356/2021-CR, es No Viable, porque contiene materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo y del Ministerio de Economía y Finanzas, precisando que las opiniones que se emitan sean remitidas directamente a la referida Comisión Congresal.

Mediante Oficio N° D002634-2022-PCM-SG, de fecha 06 de octubre del 2022 la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D001472-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que sobre el Proyecto de Ley N° 1922/2021-CR, resulta no viable al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del Ministerio de Economía y Finanzas, precisando que las opiniones que se emitan sean remitidas directamente a la referida Comisión Congresal, pues los representantes del Congreso de la República no tienen la potestad de presentar iniciativas legislativas que creen ni aumenten gasto público el cual colisiona con lo preceptuado por el artículo 79 de la Constitución Política.

Mediante Oficio N° D003194-2022-PCM-SG, de fecha 1 de diciembre del 2022 la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D001731-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que sobre el Proyecto de Ley N° 1595/2021-CR, no le corresponde emitir opinión, pero recomienda remitir el presente informe a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

Mediante Oficio N° D003202-2022-PCM-SG, de fecha 01 de diciembre de 2022, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D001734-2022-PCM-OGAJ, de fecha 23 de noviembre de 2022, mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros sostiene que sobre el Proyecto N° 2659/2021-CR no le corresponde emitir opinión debido a que resulta no viable al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del Ministerio de Economía y Finanzas, no tienen la potestad de presentar iniciativas legislativas que creen ni aumenten gasto público el cual colisiona con lo preceptuado por el artículo 79 de la Constitución Política.

Mediante Oficio N° D000652-2023-PCM-SG, de fecha 14 de marzo de 2023 la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000318-2023-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, la propuesta legislativa 4200/2022-CR, que propone la Ley que modifica el art. 40 del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, autorizando la disponibilidad de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los fondos de AFP, por competencia, no les corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión.

Mediante Oficio N° D000675-2023-PCM-SG, de fecha 15 de marzo de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000359-2023-PCM-OGAJ, de fecha 15 de marzo de 2023, mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros sostiene que sobre el Proyecto N° 2718/2021-CR no le corresponde emitir opinión, pero recomienda remitir el presente informe a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

Mediante Oficio N° D000766-2023-PCM-SG de fecha 20 de marzo de 2023 la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000371-2023-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que la Presidencia del Consejo de Ministros por competencia, no corresponde emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 2880/2022-CR, "Ley que modifica la Ley N° 25897, a fin de promover que los fondos de los afiliados sin herederos de las AFPS, sean transferidos al estado".

Mediante Oficio N° D00854-2023-PCM-SG de fecha 29 de marzo de 2023 la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000404-2023-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que la Presidencia del Consejo de Ministros por competencia, no corresponde emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N°4366/2021-CR, Ley que promueve equidad en la gestión de los fondos del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones - AFP.

Mediante el Oficio N° D000917-2023-PCM-SG, de fecha 5 de abril de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4379/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1. Por competencia no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 4379/2022-CR, Ley que faculta la libre desafiliación de los aportantes a las AFPS.
2. Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio N° D002029-2023-PCM-SC, se trasladó a dicho Ministerio el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, precisando que la opinión que emita sea remitida directamente a la referida Comisión Congresal.

Mediante el Oficio N° D001069-2023-PCM-SG, de fecha 20 de abril de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4452/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1) Por competencia no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 4452/2022-CR, "Ley que otorga el derecho a la jubilación anticipada a los trabajadores pesqueros, dentro del sistema privado de pensiones".
2) Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, y del Ministerio de la Producción; mediante el Oficio Múltiple N° D000451-2023-PCM-SC, se trasladó a dichos Ministerios el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República; precisando que las opiniones que se emitan sean remitidas directamente a la referida Comisión Congresal.

Mediante el Oficio N° D001676-2023-PCM-SG, de fecha 12 de junio de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4864/2022-CR, manifiesta:

1. Por competencia, no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 4864/2022-CR, "Ley que precisa la Ley 31670, ley que crea las pensiones mínimas y promueve los aportes voluntarios alternativos con fines previsionales".
2. Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio N° D003248-2023-PCM-SC, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros traslada al referido Ministerio el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, precisando que la opinión que para tal efecto emita, sea remitida directamente a la referida Comisión Congresal.

Mediante el Oficio N° D001697-2023-PCM-SG, de fecha 12 de junio de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4921/2022-CR, manifiesta:

1. Por competencia, no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 4921/2022-CR, Ley que modifica el artículo 6 de la Ley N° 30003, a fin de garantizar la justiciabilidad del derecho de acceso a la pensión de los trabajadores y pensionistas pequeros.
2. Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencias del Ministerio de la Producción, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio Múltiple N° D000793-2023-PCM-SC, se trasladó a dichos Ministerios el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, precisando que las

opiniones que se emitan, sean remitidas directamente a la referida Comisión Congresal.

Mediante el Oficio N° D001917-2023-PCM-SG, de fecha 5 de julio de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4907/2022-CR, manifiesta:

1. Por competencia, no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 04907/2022-CR, Ley que crea el Fideicomiso Individual de Jubilación Obligatoria - fijo con capital semilla para todos los peruanos recién nacidos.
2. Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio Múltiple N° D000848-2023-PCM-SC se trasladó a dichos Ministerios el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, precisando que la opinión que para tal efecto emita, sea remitida directamente a la referida Comisión Congresal.

Mediante el Oficio N° D001918-2023-PCM-SG, de fecha 5 de julio de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR, manifiesta:

1. En atención a lo expuesto, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera no viable el Proyecto de Ley N° 4743/2022-CR, Proyecto de Ley de reforma y universalización del Sistema Previsional Peruano.
2. Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Educación, mediante el Oficio Múltiple N° D000637-2023-PCM-SC, se trasladó a dichos Ministerios el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e

Inteligencia Financiera del Congreso de la República; precisando que las opiniones que emitan sean remitidas directamente a la referida Comisión Congresal.

Mediante el Oficio N° D001934-2023-PCM-SG, de fecha 19 de julio de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5242/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1) Por competencia no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 5242/2022-CR, "Ley que determina el importe mínimo de la pensión de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones, Decreto Ley 19990".
2) Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio N° D003847-2023-PCM-SC, se trasladó a dichos Ministerios el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, precisando que la opinión que se emita sea remitida directamente a la referida Comisión Congresal.

Mediante el Oficio N° D001931-2023-PCM-SG, de fecha 5 de julio de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5246/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1) Por competencia no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 5246/2022-CR, "Ley que viabiliza y facilita el acceso a la pensión de jubilación para la sociedad conyugal y uniones de hecho en el Sistema Nacional de pensiones de la Seguridad Social".
2) Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos , mediante el Oficio Múltiple N° D000890-2023-PCM-SC, se trasladó a dichos Ministerios el pedido de opinión formulado por la Comisión de

Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, precisando que las opiniones que se emitan sean remitidas directamente a la referida Comisión Congresal.

Mediante el Oficio N° D002160-2023-PCM-SG, de fecha 19 de julio de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5499/2023-CR, manifestando lo siguiente:

1) Por competencia no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 5499-2022-CR, "Ley que modifica el Decreto Ley 19990 respecto a las pensiones devengadas".
2) Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio N° D004155-2023-PCM-SC, se trasladó a dichos Ministerios el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, precisando que la opinión que se emita sea remitida directamente a la referida Comisión Congresal.

Mediante el Oficio N° D002525-2023-PCM-SG, de fecha 8 de setiembre de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5623/2023-CR, manifestando lo siguiente:

1) Por competencia, no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 5623/2023-CR, "Ley que mejora la pensión de jubilación por invalidez en el Régimen Especial de Seguridad Social de los trabajadores pesqueros otorgando pensiones justas y razonables".
2) Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante el Oficio Múltiple N° D001104-2023-PCM-SC se trasladó a dichos Ministerios el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República,

precisando que las opiniones que se emitan sean remitidas directamente a la referida Comisión Congresal.

Mediante el Oficio N° D002675-2023-PCM-SG, de fecha 21 de setiembre de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5795/2023-CR, manifestando lo siguiente:

1) Por competencia no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 5795/2023-CR "Ley que deroga el Decreto Ley N° 25897 que crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de pensiones (SPP) conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones AFP".
2) Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio N° D005539-2023-PCM-SC, se trasladó a dichos Ministerios el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, precisando que la opinión que se emita sea remitida directamente a la referida Comisión Congresal.

Mediante el Oficio N° D002996-2023-PCM-SG, de fecha 31 de octubre de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5929/2023-CR, manifestando lo siguiente:

1. Del análisis realizado en el presente informe, el "Proyecto de Ley N° 5929/2023-CR, Ley que crea el nuevo Sistema Previsional para trabajadores dependientes e independientes", es no viable, en lo concerniente a la materia objeto de análisis, por las siguientes consideraciones:
   a) La iniciativa para la creación de un organismo público dentro del ámbito de un Ministerio constituye una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, conforme a lo establecido en la propia LOPE, no pudiendo delegar ni

transferir dicha atribución a otro (Poder del Estado) conforme al "Principio de competencia" y "Principio de Separación de Poderes".

b) Si bien en el PL no se menciona la naturaleza organizacional de la entidad que se propone crear correspondería que se ubique en el ámbito del Poder Ejecutivo y al tener por objeto el cumplimiento de una política vinculada a la materia de pensiones cuya competencia lo tiene a cargo el Ministerio de Economía y Finanzas, debería encontrarse bajo su ámbito siendo su naturaleza la de un Organismo Público adscrito a dicho ministerio.

c) El Congreso de la República, en el proceso de identificación del problema público y elaboración de distintas alternativas de solución al mismo, donde se incluya la elaboración de propuestas legislativas, debería hacer participar a las entidades públicas del Poder Ejecutivo vinculadas a la materia que se analiza, desde el inicio del proceso, a fin de poder encontrar la solución más idónea al problema identificado o, de ser el caso, encauzar su atención por la vía competencial correcta.

2. Sin perjuicio de lo señalado, teniendo en consideración las materias que aborda el proyecto de ley, se recomienda que la Oficina General de Asesoría Jurídica de la PCM solicite la opinión técnica al Ministerio de Economía y Finanzas.
3. De mediar conformidad con lo expresado en el análisis desarrollado, se recomienda, de corresponder, registrar el presente informe en el módulo de Gestión de Pedidos de Opinión de Proyecto de Ley del Sistema Integrado de Coordinación Multisectorial, así como remitirlo a la Oficina General de Asesoría Jurídica de la PCM, para los fines correspondientes.

Mediante el Oficio N° D002843-2023-PCM-SG, de fecha 13 de octubre de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5965/2023-CR, manifestando lo siguiente:

1) Por competencia, no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 05965/2023-CR, Ley que reconoce la

pensión proporcional a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones, con menos de diez años de aportes.

2) Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio Múltiple N° D001289-2023-PCM-SC se trasladó a dichos Ministerios el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, precisando que la opinión que para tal efecto emita, sea remitida directamente a la referida Comisión Congresal.

Mediante el Oficio N° D003078-2023-PCM-SG, de fecha 13 de noviembre de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5377/2023-CR, manifestando lo siguiente:

1. En atención a lo expuesto, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera que no es viable el Proyecto de Ley N° 5377/2022-CR, Ley Marco de creación del Sistema Universal de Pensiones.
2. Al contener el Proyecto de Ley materias de competencia del Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; mediante Oficio Múltiple N° D000920-2023-PCM-SC y Oficio N° D004684-2023-PCM-SC, se trasladó a dichos ministerios el pedido de opinión formulado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, precisando que las opiniones que para tal efecto se emitan, sean remitidas directamente a las referidas comisiones congresales.

Mediante el Oficio N° D003276-2023-PCM-SG, de fecha 12 de noviembre de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 6369/2023-CR, manifiesta:

1. Por competencia, no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 6369/2023-CR, Ley de desafiliación al Sistema Privado de Pensiones y retorno al Sistema Nacional de Pensiones, que modifica los artículos 1, 4 y deroga el artículo 2 de la Ley N° 28991.
2. Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio N° D007467-2023-PCM-SC se trasladó a dicho Ministerio el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, precisando que la opinión que para tal efecto emitan, sea remitida directamente a la referida Comisión Congresal.

Mediante el Oficio N° D003255-2023-PCM-SG, de fecha 11 de diciembre de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 6359/2023-CR, manifiesta:

1. Por competencia, no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 6359/2023-CR, Ley que faculta la devolución del 100% de los Fondos Privados de Pensiones en caso de muerte del afiliado.
2. Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio N° D007497-2023-PCM-SC, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros trasladó al referido ministerio el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, precisando que la opinión que para tal efecto emita, sea remitida directamente a la referida Comisión Congresal.

Mediante el Oficio N° D003315-2023-PCM-SG, de fecha 15 de diciembre de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 6227/2023-CR, manifiesta:

1. Por competencia, no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 6227/2023-CR, "Ley del Sistema de Pensiones".
2. Al contener el Proyecto de Ley materias de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas; mediante Oficio N° D007660-2023-PCM-SC se trasladó a dicho sector el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, precisando que la opinión que para tal efecto se emita, sea remitida directamente a la referida comisión congresal.

Mediante el Oficio N° D003316-2023-PCM-SG, de fecha 15 de diciembre de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 6338/2023-CR, manifiesta:

1. Por competencia, no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 6338/2023-CR, "Ley que modifica la Ley N° 31301 que establece medidas de acceso a una pensión proporcional a los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones".
2. Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio N° D007442-2023-PCM-SC se trasladó a dicho Ministerio el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera con Discapacidad del Congreso de la República, precisando que la opinión que se emita sea remitida directamente a la referida Comisión Congresal.

5.2 Ministerio de Economía y Finanzas – MEF

Mediante Oficio N° 1409-2021-EF/10.01, de fecha 15 de diciembre de 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el informe N° 223-2022-EF/65.03 de la Dirección General de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional

Privado el cual consolida la opinión Dirección General del Tesoro Público - DGTP, Dirección General de Presupuesto Público - DGPP, Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos - DGGFRH, Dirección General de Política de Ingresos Públicos – DGPIP, emiten opinión desfavorable al Proyecto de Ley 344/2021-CR al considerar la creación de un Fondo constituye un mecanismo contrario al Principio fundamental de la tesorería del Estado (Principio de Unidad de Caja), que están orientados para garantizar que los recursos públicos sean adecuadamente canalizados y ejecutados en el marco de las Leyes Anuales del Presupuesto del Sector Público, contraviniendo en particular el principio de oportunidad, en tanto afecte la disponibilidad de recursos del Tesoro Público, para la atención de las obligaciones contenidas en el presupuesto del Sector Público.

Mediante Oficio Nº 459-2022-EF/10.01, de fecha 25 de abril de 2022 el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el Informe N° 0043-2022-EF/61.01 de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos, el mismo que consolida la opinión institucional de su sector, emite opinión desfavorable respecto del Proyecto de Ley N° 866/2021-CR, que propone crear un sistema de beneficios para personal que realizan servicios de reparto, mensajería y movilidad por medio de la plataforma digital. Señala que la fórmula legal atenta contra el mandato constitucional de que las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios deberán regirse por criterios de sostenibilidad financiera, y la disposición de que los miembros del Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gasto público. Por otro lado, señala que, no es claro en el Proyecto de Ley qué porcentaje del IGV sería destinado a las cuentas individuales, si se trata del 5% de la recaudación del IGV o de cinco puntos porcentuales del IGV; en el primer caso el costo fiscal anual sería de S/ 2 095 millones y en el segundo de S/ 13 097 millones. La propuesta es altamente regresiva ya que se desviarían ingresos del Tesoro que hoy benefician a toda la población para financiar cuentas individuales que se concentrarían en las personas de mayores ingresos. Se crearían fondos de pensiones muy desiguales, donde las personas de ingresos más altos podrían gozar de pensiones promedio 50 veces más altas que las personas de menores ingresos. Por otro lado, señala que, a legislación vigente ya establece un tratamiento de inafectación

del IR a las rentas provenientes de pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, como la jubilación, en tanto, estas ya tributaron como rentas de quinta categoría previamente como parte de la remuneración de los contribuyentes. Finalmente, entre otros puntos, concluye que el Proyecto estaría modificando el tratamiento para determinar la deducción adicional a las rentas del trabajo, sin tener en cuenta que dicha regulación responde a una finalidad de política que es combatir la evasión y promover la formalización centrándose en aquellos sectores donde existe altos niveles de evasión.

Mediante Oficio N° 718-2022-EF/10.01, de fecha 16 de junio de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el Informe N° 0464-2022-EF/42.02 elaborado por la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado emite opinión desfavorable sobre el Proyecto de Ley N° 912/2021-CR de acuerdo con los siguientes argumentos: 1) El artículo 12 de la CPP establece que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles, por lo que esta garantía impide a cualquier tercero e incluso al Estado, afectar por decisión unilateral dichos fondos. 2) Los aportes voluntarios sin fin previsional es la de un ahorro facultativo de los afiliados del SPP, debe de darse un tratamiento diferenciado debido que son productos con similares características y no deben ser regulados de manera distinta.

Mediante Oficio N° 873-2022-EF/10.01, de fecha 11 de julio de 2022 el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado, opina desfavorablemente sobre el Proyecto de Ley N° 2047/2021-CR, por no haber sustento técnico que lo fundamente para la selección, participación, deberes y obligaciones de los representantes de los afiliados en los directorios de las AFP, considerando que la actual normativa contempla la participación de directores independientes así como la transparencia de la información.

Mediante Oficio N° 882-2022-EF/10.01, de fecha 13 de julio de 2022 el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el informe N° 088-2022-EF/65.03 de la Dirección General de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado, emite opinión

desfavorable al Proyecto de Ley 1513/2021-CR; la propuesta no toma en cuenta que el portafolio de inversiones de la Administración Privadas de Fondo de Pensiones (AFP), es diversificado entre inversiones de corto, mediano y largo plazo entre diferentes tipos de activos, sectores y mercados, tanto en moneda nacional como extranjera; mientras que las empresas del sistema financiero tienen como función principal la intermediación financiera, lo que implica captar depósitos del público, pagando por ellos una tasa pasiva, y empleando dicho recursos para la colocación de créditos a personas naturales y empresas, a una tasa de interés activa. Asimismo, la propuesta de la cuenta de ahorro previsional en el sistema financiero, no define explícitamente ninguna medida que se alinee a los principios básicos que rigen la seguridad social, pues esta cuenta debe tener un carácter especial y de naturaleza distinta a cualquier otro producto que ofrezca el sistema financiero a fin de asegurar la intangibilidad e inembargabilidad de los fondos de pensiones administrados.

Mediante el Oficio N° 1114-2022-EF/10.01, de fecha 2 de setiembre de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas manifiesta su opinión desfavorable sobre el Proyecto de Ley 1306/2022-CR, por los siguientes fundamentos:

1. No cuenta con el respaldo de un análisis - costo beneficio que aporte criterios cualitativos y cuantitativos que permitan anticipar con un adecuado nivel de certidumbre que la propuesta sería apropiada, es decir, que no implicará el uso de mayores recursos fiscales en el tiempo.
2. La propuesta no cumple con el mandato constitucional que dispone que las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios deberán regirse por criterios de sostenibilidad financiera.
3. En el caso del SNP, existe la posibilidad de que el beneficiario no requiera de un complemento para garantizar su pensión y podría no disponer de los fondos de la cuenta individual capitalizable ya que esta solo tiene fines previsionales, no cumpliéndose con el fin de la iniciativa legislativa, que es generar ingresos a favor de una pensión de jubilación.

4. La propuesta desincentiva el aporte en los sistemas previsionales existentes. Debe considerarse que el Estado interviene estableciendo sistemas de pensiones que funcionen sobre la base de un ahorro forzoso llevado a cabo por los trabajadores, con el fin de brindarles acceso a una pensión de jubilación.
5. La propuesta no ha tomado en consideración las características y la normatividad vigente de los sistemas de pensiones en la actualidad, asimismo, no contiene una estructura prestacional necesaria para su funcionamiento.
6. Contraviene los artículos 78 y 79 de la Constitución Política del Perú, que disponen que las modificaciones normativas relacionadas con materia presupuestal deben estar debidamente equilibradas y que los representantes ante el Congreso de la República no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que refiere a su propio presupuesto.

Mediante Oficio N° 1822-2022-EF/10.01, de fecha 17 de noviembre de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el Informe N° 0126-2022-EF/65.03 elaborado por la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado emite su opinión desfavorable al Proyecto de Ley 3133/2021-CR, la propuesta no precisa si es para la compra de un primer inmueble de acuerdo a lo establecido en la Ley 30478, en ese sentido, señala que el PL 3133 incentiva el uso de fondos previsionales, en perjuicio de las actividades que deben atender en la etapa laboral pasiva y reduce la posibilidad de acceder a mejores pensiones dado que afecta directamente al nivel de la CIC y consecuentemente al nivel de pensión. Por otro lado, señala que, utilizar el sistema de pensiones para otros fines diferentes a una pensión de jubilación, desvirtúa el fin del sistema de pensiones que es la protección del afiliado durante la vejez. Finalmente, señala que el retiro de los fondos planteados tendría un impacto sobre la liquidez del sistema financiero, pudiendo generar pérdidas adicionales para la economía.

Mediante Oficio N° 2069-2022-EF/10.01, de fecha 30 de diciembre de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el Informe N° 0135-2022-EF/65.03 elaborado por la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado emite su opinión

desfavorable al Proyecto de Ley 2880/2022-CR, señala que la propuesta afecta la libertad de organización, ya que establece limitaciones a las políticas de precios, lo cual afecta la competencia en el mercado y desincentiva la participación de las empresas en el mercado. Por otro lado, precisa que, no se encuentra sustento técnico que fundamente el no pago de la comisión y que las AFP asuman la pérdida por rentabilidad negativa. Finalmente, concluye que la propuesta resulta imprecisa e inviable, más aun si se considera que los fondos de pensiones, que son inversiones de largo plazo, no deben ser medidos solamente en el corto plazo, principalmente cuando se maneja distintos tipos de riesgos, siendo la rentabilidad un factor que responde a condiciones del mercado que no siempre pueden ser anticipadas por los administradores de fondos.

Mediante Oficio N° 053-2023-EF/10.01, de fecha 12 de enero de 2023, la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado opina sobre el Proyecto de Ley N° 2110/2021-CR que la medida propuesta resulta imprecisa e inviable debido a la libertad de organización y de empresa, carece de sustento técnico dado que no se ha establecido algún criterio para la fijación de la retribución de las AFP, como tampoco hace referencia al período de tiempo para evaluar la rentabilidad, o evaluación de la estructura de costos base o gastos administrativos a considerarse para el cobro de la retribución por los servicios que brinda las AFP a lo largo de la vida laboral del trabajador.

Mediante Oficio N° 201-2023-EF/10.01, de fecha 02 de febrero de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el Informe N° 0010-2023-EF/65.03 elaborado por la oficina del Viceministro de Economía emite su opinión desfavorable al Proyecto de Ley 2728/2021-CR, la propuesta no toma en consideración que el retiro programado es la modalidad de pensión administrada por una AFP, mediante la cual el afiliado mantiene la propiedad de sus fondos. Es por ello que, en caso de su fallecimiento, el SPP debe salvaguardar los recursos de la CIC a fin de no vulnerar ningún derecho sucesorio, pues se trata de derechos imprescriptibles. Asimismo, no contiene el análisis técnico ni jurídico que viabilice la modificación normativa contenida en la propuesta, ya que no se

establece la necesidad de trasladar los recursos de la CIC al Estado, así como la finalidad de la utilización de los mismos.

Mediante Oficio Nº 316-2023-EF/10.01, de fecha 3 de marzo de 2023, reiterado por el Oficio N° 452-2023-EF el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el Informe N° 0017-2022-01 de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado, emite opinión desfavorable respecto del Proyecto de Ley N° 4200/2022-CR, Ley que modifica el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado Administración de Fondos de Pensiones, autorizando la disponibilidad de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los fondos de AFP. En las conclusiones expuestas, señala que la propuesta contraviene lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú e implicaría el incumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú. Asimismo, opina que la medida incentiva el uso de los fondos previsionales, en perjuicio de las necesidades que deben atenderse en el futuro durante la etapa laboral pasiva, reduciendo la posibilidad de acceder a mejores pensiones. Finalmente, considera que el retiro de los fondos que se plantea implica que la composición de los portafolios de inversión administrados por las AFP sea más líquida con el propósito de prever el posible retiro del saldo disponible en las CIC de los afiliados en el SPP. Con ello habría mayores pérdidas para los afiliados y también podría generar perjuicios para el Estado.

Mediante el Oficio N° 1489-2023-EF/10.1, de fecha 19 de julio de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 3341/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1. La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF, observa el Proyecto de Ley por cuanto, actualmente la Comisión Multisectorial creada por el Decreto Supremo N° 081-2022-PCM tiene el mismo objetivo, por lo que existiría duplicidad de objeto. Asimismo, sostiene que tratándose de la introducción de modificaciones a los regímenes pensionarios, resulta necesario que se rijan por el criterio de sostenibilidad financiera.

2. La Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado del MEF, observa el Proyecto de Ley puesto que, el objetivo de la comisión propuesta es el mismo que el de la Comisión Multisectorial creada por el Decreto Supremo N° 081-2022-PCM, indicando que no es conveniente la creación de una comisión adicional que abarque la misma problemática. En ese sentido, las propuestas que busquen reformar el actual sistema de pensiones deberán ser evaluadas en el marco de las funciones de la Comisión Multisectorial vigente.
3. La Dirección General de Presupuesto Público formula observación desde el ámbito estrictamente presupuestario al Proyecto de Ley N° 3341/2022-CR, por lo siguiente:
    - No cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas por los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
    - Contraviene el Principio de Equilibrio Presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
    - Contraviene la prohibición de iniciativa de gasto congresal contemplada en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.
    - Se opone a la facultad de priorización que tiene el Titular de la entidad, en el marco de lo establecido en el numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, al disponer la ejecución de acciones a cargo de las entidades públicas.

Mediante el Oficio N° 331-2023-EF/10.1, de fecha 8 de marzo de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 3717/2022-CR, manifestando lo siguiente:

En atención a los argumentos anteriormente expuestos, esta Dirección General emite opinión desfavorable al Proyecto de Ley N° 3717/2022-CR por los siguientes fundamentos:

- El PL 3717 ofrece incentivos perversos a los afiliados al SPP al acceder a una jubilación anticipada que representa un beneficio monetario inmediato y al mismo tiempo significa dejar de aportar al sistema de pensiones (más aún en el caso de la Jubilación Anticipada donde en la práctica se habilitaría a que todos los afiliados mayores de 50 años puedan disponer del 95.5% de su CIC); afectando negativamente la capacidad que tienen los afiliados a construir una pensión que brinde protección para ellos y sus derechohabientes, poniendo en riesgo de caer en pobreza durante la vejez.
- La propuesta actúa en detrimento del afiliado, conllevando a largo plazo riesgos que afectarían su nivel de vida en la tercera edad, tales como el riesgo de longevidad y riesgo de retorno, debido a que deja de obtener la rentabilidad esperada por la gestión individual del fondo.
- En relación al seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, este tiene naturaleza colectiva y su fin es brindar protección en la etapa laboral activa del afiliado. Asimismo, durante la etapa laboral activa del afiliado protege económicamente a sus dependientes, y por tanto dicho seguro no fue diseñado originalmente para ofrecer una cobertura más allá de la edad de jubilación del afiliado, de manera que una eventual devolución de las primas pagadas por un grupo de afiliados, desvirtuaría este instrumento, poniendo en riesgo su sostenibilidad.

Mediante el Oficio N° 1220-2023-EF/10.01, de fecha 14 de junio de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas manifiesta su opinión desfavorable sobre el Proyecto de Ley 2278/2022-CR, por los siguientes fundamentos:

1. En atención a lo antes señalado la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado opina desfavorablemente con respecto al Proyecto de Ley N° 2278/2021–CR, sobre la base de los siguientes fundamentos:
    - La propuesta de la cuenta de ahorro previsional en el sistema financiero no define explícitamente ninguna medida que se alinee a los principios básicos que rigen la seguridad social, pues esta cuenta debe tener un carácter

especial y de naturaleza distinta a cualquier otro producto que ofrezca el sistema financiero a fin de asegurar la intangibilidad e inembargabilidad de los fondos de pensiones administrados, así como un manejo adecuado de las inversiones que promueva la diversificación del riesgo financiero, y la independencia tanto del patrimonio como de la contabilidad.

- Asimismo, la propuesta no toma en cuenta que el portafolio de inversiones de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), es diversificado entre inversiones de corto, mediano y largo plazo entre diferentes tipos de activos, sectores y mercados, tanto en moneda nacional como extranjera; mientras que las empresas del sistema financiero tienen como función principal la intermediación financiera, lo que implica captar depósitos del público, pagando por ellos una tasa pasiva, y empleando dichos recursos para la colocación de créditos a personas naturales y empresas, a una tasa de interés activa. • No hay sustento técnico alguno en la propuesta normativa que fundamente el no pago de la comisión y asumir la pérdida por rentabilidad negativa, al no haberse señalado algún parámetro o criterio para su fijación, puesto que la rentabilidad puede variar dependiendo del periodo de observación. Además, no se considera la naturaleza de largo plazo de las inversiones en un fondo de pensiones, así como tampoco el periodo de maduración de las mismas.
- La propuesta afecta la libertad de empresa y en específico la libertad de organización, ya que establece limitaciones a las políticas de precios, lo cual afecta la competencia en el mercado y desincentiva la participación de las empresas.

2. Asimismo, Dirección General de Políticas de Ingreso Público, formula observación al Proyecto de Ley N° 2278/2021-CR, que propone promover la competencia en el Sistema de Pensiones y regula el cobro de comisiones puesto que la legislación vigente ya contempla un tratamiento especial del impuesto a la renta aplicable a las rentas vinculadas a las pensiones de jubilación.

3. Adicionalmente, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos Formula observación el Proyecto de Ley N° 2278/2021-CR, por las siguientes razones:
    - En el caso del SNP, existe la posibilidad de que el beneficiario no requiera de un fondo complementario para garantizar su pensión, no cumpliéndose con el fin de la iniciativa legislativa, que sería generar ingresos a favor de una pensión de jubilación.
    - No tiene el respaldo de un análisis–costo beneficio que aporte criterios cualitativos y cuantitativos que permitan anticipar con un adecuado nivel de certidumbre que las modificaciones propuestas tales como edad y años de aporte en el SNP, no implicará el uso de mayores recursos fiscales en el tiempo.
    - Constituye una iniciativa de gasto congresal, por lo que se estaría vulnerando el artículo 79 de la Constitución Política del Perú que establece que: "Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.
4. Asimismo, esta Dirección General formula observación sobre el Proyecto de Ley N° 2278/2021-CR, por las siguientes razones:
    - El Proyecto de Ley no resguarda el cumplimiento de lo dispuesto en la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 2838912, que señala expresamente que "Las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regímenes pensionarios que se establezcan en el futuro, deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación.
    - El Proyecto de Ley contraviene la medida de estabilidad presupuestaria establecidas en el inciso y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley N° 31639, Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2023.

Mediante el Oficio N° 1555-2023-EF/10.01, de fecha 26 de julio de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas manifiesta su opinión desfavorable sobre el Proyecto de Ley 2718/2022-CR, por los siguientes fundamentos:

- La licitación de nuevos afiliados ha sido un instrumento exitoso para conseguir la disminución de las comisiones. Así, la comisión por saldo de las AFP ha mostrado una reducción permanente desde el año 2013; y desde la implementación de la cuarta licitación, en junio del año 2019, la AFP ganadora no cobra el componente de comisión sobre remuneración y redujo el componente de comisión sobre saldo. Es así que, desde febrero de 2023, la comisión mixta pasó a ser una comisión únicamente sobre el saldo, lo cual es aplicado por todas las AFP.
- La actual la comisión por saldo tiene un nivel de alineamiento entre los intereses de las AFP y de los afiliados, ya que los ingresos que reciben las gestoras dependen del desempeño del fondo. Si la rentabilidad de los fondos es mayor, el tamaño del fondo se incrementa y con ello, los ingresos por comisiones que reciben las AFP.
- A partir de la propuesta, no queda claro el mecanismo por el cual se establece que contar con tres diferentes esquemas de comisiones puede contribuir a una reducción del gasto que por este concepto hacen los afiliados. Así, no existe en el PL ni en su exposición de motivos, el sustento técnico y/o simulaciones que fundamente la aplicación de estos tres esquemas.
- Como respuesta al PL, las AFP podrían, con el fin de mantener y/o incrementar su nivel de ingresos, adecuar los parámetros correspondientes a los tres esquemas de comisiones para que todos los tipos de comisiones tengan costos similares para los afiliados. En tal sentido, la medida no sería eficiente en términos de generar una reducción efectiva de las comisiones que beneficie a los afiliados.
- Reintroducir el esquema de comisión por flujo (hoy cerrado), como plantea el PL, puede tener un efecto contraproducente en la capacidad adquisitiva de los afiliados15, ya que de su remuneración mensual se descontaría el porcentaje correspondiente a la comisión mensual (determinado por la AFP).
- • El Proyecto de Ley N° 2718 es impreciso en cuanto al proceso actual de licitación de afiliados.

Mediante el Oficio N° 1898-2023-EF/10.1, de fecha 18 de setiembre de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5242/2022-CR, manifestando lo siguiente:

En atención a lo expuesto, esta Dirección no considera técnicamente viable el Proyecto de Ley Nº 5242/2022-CR, por las siguientes razones:

- No tiene el respaldo de un análisis–costo beneficio que aporte criterios cualitativos y cuantitativos que permitan anticipar con un adecuado nivel de certidumbre que la medida propuesta, no implicará el uso de mayores recursos fiscales en el tiempo.
- Todo proyecto de ley que proponga modificar o crear un régimen de pensiones, debe respaldarse en el análisis costo-beneficio que sustente que la medida es sostenible financieramente en el tiempo, dando cumplimiento a la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú.
- Constituye una iniciativa de gasto congresal, por lo que se estaría vulnerando el artículo 79 de la Constitución Política del Perú que establece que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos públicos.

Mediante el Oficio N° 1802-2023-EF/10.1, de fecha 4 de setiembre de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5246/2022-CR, manifestando lo siguiente:

La Dirección de Gestión de Pensiones consolidando la opinión de la ONP formula observación al Proyecto de Ley Nº 5246/2022-CR, Ley que viabiliza y facilita el acceso a la pensión de jubilación para la sociedad conyugal y uniones de hecho en el Sistema Nacional de Pensiones de la seguridad social, por las siguientes razones:

- El SNP es un régimen de reparto que no genera recursos suficientes para financiar el pago de las pensiones, operando con déficit permanente, por lo que el Estado acude en apoyo de su sostenibilidad financiera.
- Aprobar la propuesta legislativa ocasionará incurrir en mayores pasivos actuariales, generando déficit respecto a las reglas para el pago de las pensiones del régimen especial de jubilación para la sociedad conyugal o las uniones de hecho acreditando solamente 18 años de aportaciones entre ambos miembros, lo que implicaría incurrir en el uso de mayores recursos del Tesoro Público, debido a que se carece de una fuente de financiamiento identificada.
- De aprobarse la propuesta legislativa, se incurrirá en un mayor gasto fiscal, dado que la reserva neta, resultante de la diferencia entre la reserva total y el valor presente de aportes, es mayor bajo el escenario determinado por la propuesta normativa. Lo que implica un mayor costo pues se requiere de montos adicionales para cubrir las pensiones generadas, toda vez que la cantidad de los aportes efectuados para acceder a la pensión conyugal o de las uniones de hecho han sido menores.
- En ese sentido, la propuesta legislativa, no se encuentra dentro del marco del principio constitucional establecido en la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política, ya que no se ha demostrado la sostenibilidad financiera de los beneficios que se pretende otorgar con la propuesta legislativa. 3.5 La propuesta legislativa, contraviene la exigencia del equilibrio presupuestario establecido en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, según el cual las propuestas relacionadas con materia presupuestal deben estar debidamente equilibradas.
- Asimismo, la propuesta legislativa contraviene lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política, que establece que los representantes ante el Congreso de la República no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo su propio presupuesto.
- En relación a la modificación del numeral 2 del artículo 84-A del Decreto Ley N° 19990, contenida en la propuesta legislativa, respecto de que es necesario contar con sentencia firme de declaración judicial de unión de hecho inscrita en los

Registros Públicos, se debe precisar que este aspecto ya se encuentra previsto y regulado en la normativa previsional vigente.

- En relación a lo señalado en la propuesta legisltiva para que el Poder Ejecutivo adecúe el Reglamento del Decreto Ley N° 19990, aprobado por Decreto Supremo N° 011-74-TR en el plazo de 60 días calendario, contados a partir de su vigencia, es necesario señalar que mediante, la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Reglamento Unificado de las Normas Legales que Regulan el Sistema Nacional de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 354-2020-EF, el Decreto Supremo N° 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley N° 19990, quedó derogado, en consecuencia no resulta jurídicamente posible lo planteado en la propuesta legislativa.
- Del mismo modo, se aprecian imprecisiones en la redacción de la propuesta legislativa, puesto que se señala incorrectamente en el enunciado de su artículo 3, que se modifican los artículos 54° y 57°, numeral 1) del artículo 84-A del Decreto Ley N° 19990, norma que regula Sistema Nacional de Pensiones de Seguridad Social, siendo que la propuesta de modificación únicamente está referida a los numerales 1) y 2) del artículo 84-A del Decreto Ley N° 19990, que crea el Sistema Nacional de Pensiones de Seguridad Social.

Mediante el Oficio N° 1829-2023-EF/10.1, de fecha 6 de setiembre de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4087/2022-CR, manifestando lo siguiente:

- La propuesta normativa carece de sustento técnico dado que no se ha establecido algún criterio para la fijación de la retribución de las AFP, como tampoco hace referencia al período de tiempo para evaluar la rentabilidad, o evaluación de la estructura de costos base o gastos administrativos a considerarse para el cobro de la retribución por los servicios que brindan las AFP a lo largo de la vida laboral del trabajador.
- La medida propuesta resulta imprecisa e inviable, más aún si se considera que los fondos de pensiones, que son inversiones de largo plazo, no deben ser medidos

solamente en el corto plazo, principalmente cuando se maneja distintos tipos de riesgos, siendo la rentabilidad un factor que responde a condiciones del mercado que no siempre pueden ser anticipadas por los administradores de fondos.

- La estructura de comisiones propuesta en el PL 4087 de un componente fijo sobre el saldo de la CIC y un componente de productividad generaría un doble cobro de comisión sobre el fondo de pensiones, dado que la comisión sobre el saldo de la CIC actualmente vigente, se relaciona con el desempeño de la rentabilidad.

Mediante el Oficio N° 2488-2023-EF/10.01, de fecha 21 de noviembre de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas manifiesta su opinión desfavorable sobre el Proyecto de Ley 4921/2023-CR, por los siguientes fundamentos:

En atención a los argumentos anteriormente expuestos, esta Dirección General emite opinión desfavorable sobre el Proyecto de Ley N° 4921/2022-CR, y concluye lo siguiente:

1. La propuesta de modificación del artículo 6 de la Ley N° 30003, se sustenta en su inconstitucionalidad, sin considerar que el Tribunal Constitucional ha validado el citado artículo conforme se desprende de la Sentencia Expediente N° 22-2015-AI que declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 30003, interpretando que la irrevisabilidad no supone la declaratoria de improcedencia de aquellas demandas basadas en la afectación al derecho a la pensión razón por la que no resulta justificada.

Mediante el Oficio N° 2549-2023-EF/10.01, de fecha 30 de noviembre de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas manifiesta su opinión desfavorable sobre el Proyecto de Ley 5499/2022-CR, por los siguientes fundamentos:

En atención a lo expuesto, esta Dirección consolidando la opinión de la oficina de Normalización Previsional (ONP), no considera técnicamente viable el Proyecto de Ley N° 5499-2022/CR, Ley que modifica el Decreto Ley 19990 respecto a pensiones devengadas, por las siguientes razones:

- El Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto ley N° 19990 es un régimen de reparto que no genera recursos suficientes para financiar el pago de las pensiones, operando con déficit permanente, por lo que el Estado acude en apoyo de su sostenibilidad financiera.
- El costo financiero del pago de 24 meses de pensiones devengadas, en lugar de los 12 meses de pensiones devengadas establecidas en el actual artículo 81 del Decreto Ley N° 19990, para el periodo del 2020 al 2023, ascendería a S/ 125.7 millones, lo que significa un aumento de 55.3 millones (crecimiento del 79%) respecto al escenario actual, lo que implicará el uso de mayores recursos del Tesoro Público, debido a que se carece de una fuente de financiamiento identificada.
- La propuesta del Proyecto de Ley N° 5499/2022-CR, no se encuentran dentro del marco de la exigencia constitucional establecida en la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política, ya que no se ha demostrado la sostenibilidad financiera de los beneficios que se pretende otorgar con la propuesta legislativa.
- El Proyecto de Ley N° 5499/2022-CR, contraviene lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política, que establece que los representantes ante el Congreso de la República no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo su propio presupuesto.
- Asumismo, el Proyecto de Ley N° 5499/2022-CR no ha tomado en consideración que mediante la Ley N° 30927 y el Decreto Supremo N° 354-2020-EF (RU-SNP), la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha regulado el pago de la totalidad las pensiones devengadas, considerando la fecha de la solicitud primigenia, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la ley, para el acceso a la respectiva pensión.

Mediante el Oficio N° 154-2024-EF/10.01, de fecha 29 de enero de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas manifiesta su opinión desfavorable sobre el Proyecto de Ley 4528/2023-CR, por los siguientes fundamentos:

- La propuesta contraviene lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú e implicaría el incumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú.
- Asimismo, la medida incentiva el uso de los fondos previsionales con finalidades distintas a la de una pensión, en perjuicio de las necesidades que deben atenderse en el futuro durante la etapa laboral pasiva, reduciendo la posibilidad de acceder a mejores pensiones, afectando directamente a la CIC y consecuentemente, al nivel de la pensión, implicando a largo plazo, riesgos tales como: el riesgo de longevidad y riesgo de retorno.
- El retiro de los fondos que se plantea implicaría que la composición de los portafolios de inversión administrados por las AFP sea más líquida, con el propósito de prever el posible retiro del saldo disponible en las CIC de los afiliados en el SPP. Con ello se generarían mayores pérdidas para los afiliados y también podría generar perjuicios para el Estado Peruano, ya que la caída en el precio de los Bonos del Tesoro no solo elevaría los costos de financiamiento de la deuda pública sino también el costo de financiamiento de mediano y largo plazo de las empresas locales.

Mediante el Oficio N° 239-2024-EF/10.01, de fecha 2 de febrero de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas manifiesta su opinión desfavorable sobre el Proyecto de Ley 6338/2023-CR, por los siguientes fundamentos:

- No tiene el respaldo de un análisis–costo beneficio que aporte criterios cualitativos y cuantitativos que permitan anticipar con un adecuado nivel de certidumbre que la medida propuesta no implicará el uso de mayores recursos fiscales en el tiempo, con lo que vulnera la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, ya que no garantizar que sea sostenible financieramente en el tiempo.
- Constituye una iniciativa de gasto congresal, por lo que se estaría vulnerando el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.

Mediante el Oficio N° 429-2024-EF/10.01, de fecha 22 de febrero de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas manifiesta su opinión sobre el Proyecto de Ley 5965/2023-CR, por los siguientes fundamentos:

En atención a lo expuesto, esta Dirección, consolidando la opinión de la ONP, no considera técnicamente viable el Proyecto de Ley N° 5965/2023-CR, Ley que reconoce pensión proporcional a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones, con menos de diez años de aportes, por lo siguiente:

1. El SNP regulado por el Decreto Ley N° 19990 es un régimen de reparto que no genera recursos suficientes para financiar el pago de las pensiones, operando con déficit permanente, por lo que el Estado acude en apoyo de su sostenibilidad financiera.
2. Generará un mayor costo fiscal para el financiamiento del pago de las pensiones de jubilación proporcionales especiales con menos de 10 años de aportación al SNP, que asciende a S/ 11 mil millones, y adicionalmente el impacto de la propuesta normativa generará, cada año, un incremento del 5.1% en el gasto de planilla con respecto al escenario actual; lo que implicará el uso de mayores recursos del Tesoro Público, debido a que se carece de una fuente de financiamiento identificada.
3. La propuesta normativa, no se encuentran dentro del marco de la exigencia constitucional establecida en la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política, ya que no se ha demostrado la sostenibilidad financiera de los beneficios que se pretende otorgar con la propuesta legislativa.
4. El Proyecto de Ley N° 5965/2023-CR contraviene el artículo 79 de la Constitución Política, que establece que los representantes ante el Congreso de la República no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo su propio presupuesto.
5. La propuesta no tiene en cuenta que la normatividad vigente del SNP ofrece a los asegurados los beneficios del préstamo previsional de hasta 12 Unidades de Aporte Pensionario (que equivale a 1 año de aporte) o el reconocimiento excepcional de hasta 24 Unidades de Aporte Pensionario (que equivalen a 2 años de aportaciones)

para acceder a la pensión de jubilación proporcional especial con 10 años de aportaciones.

5.3 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE

Mediante el Oficio N° 0220-2023-MTPE/4, de fecha de ingreso 30 de enero de 2023, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 3341/2022-CR, manifestando lo siguiente:

> Teniendo en cuenta la opinión de la Dirección de Seguridad Social y Migratoria Laboral de la Dirección General de Trabajo, esta Oficina General considera no viable el Proyecto de Ley N° 3341/2022-CR, Proyecto de ley que crea la Comisión Técnica Multisectorial encargada de proponer la reforma integral de los sistemas públicos y privados de pensiones, debido a que el contenido del objeto, de los integrantes y de las funciones de la comisión propuesta son similares al de la Comisión Multisectorial creada por el Decreto Supremo N° 081-2022-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 012-2023-PCM, que actualmente se encuentra vigente (hasta el 31 de mayo de 2023).

Mediante el Oficio N° 0880-2023-MTPE/4, de fecha de ingreso 11 de abril de 2023, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 3717/2022-CR, manifestando lo siguiente:

Teniendo en cuenta las opiniones de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral y el Despacho Viceministerial de Trabajo, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Proyecto de Ley N° 3717/2022- CR resulta NO VIABLE, por lo siguiente:

1. Lo propuesto vulnera el artículo 10 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho a la seguridad social, toda vez que se desnaturalizaría el objetivo a largo plazo de los fondos de pensión, priorizando contar con el efectivo

al momento, en detrimento de la rentabilidad futura que se podría obtener para cubrir el riesgo de vejez y otras en el futuro.

2. Se vulnera el numeral 3 del artículo 71 del Convenio 102 de la OIT, en tanto que el análisis costo beneficio de la exposición de motivos no cuenta con un estudio actuarial o económico que sustente lo propuesto.

Mediante el Oficio N° 0850-2023-MTPE/4, de fecha de ingreso 11 de abril de 2023, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4055/2022-CR, manifestando lo siguiente:

La Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Proyecto de Ley N° 4055/2022-CR, "Ley que instituye el aporte social permanente al Fondo de Jubilación del Trabajador Pesquero", es NO VIABLE, por lo siguiente:

1. El proyecto de ley propone crear un "aporte social" de carácter permanente al fondo de jubilación de los trabajadores pesqueros industriales, de aspecto intangible, inembargable e independiente, y que constituirá un recurso del "Fondo Extraordinario del Pescador"; asimismo, se precisa que el aporte sea de US$ 1.95 por toneladas métricas de pescado descargado en los establecimientos industriales pesqueros, y que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria permanece como ente recaudador y administrador del aporte social.
2. Así, a través de una norma con rango de ley desvinculada del Decreto Legislativo N° 1084, Ley sobre límites máximos de captura por embarcación, se plantea instituir un "aporte social" con nuevas reglas sustantivas (modificadas): i) pasa a ser permanente, ii) pasa a ser un aporte complementario al fondo regular de jubilación de trabajadores pesqueros industriales; y, iii) y deja de guardar relación con el monto y la forma de cálculo de los derechos de pesca por concepto de extracción de los recursos hidrobiológicos destinados al consumo humano indirecto, aprobados por el Decreto Supremo N° 024-2006-PRODUCE.

3. Como se detalla en los numerales 4.23 al 4.32 y 4.36 al 4.38 del presente informe, la propuesta de instituir un "aporte social" con nuevas reglas sustantivas (modificadas), aunque manteniendo que es un recurso del "Fondo Extraordinario del Pescador", tiene implicancia en la Ley N° 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, en tanto el "aporte social" constituye uno de los recursos del referido fondo, creado por dicha ley, con los que se financia la "Pensión de Rescate Complementaria", la "Transferencia Directa al Ex Pescador" y el "Régimen Especial de Pensiones para Trabajadores Pesqueros", todos regulados en la ley antes referida.
4. Ante dicha implicancia, como se detalla en los numerales 4.38 al 4.40 del presente informe, se advierte lo siguiente:
    a) La vulneración de la tercera disposición complementaria final de la Ley N° 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, en tanto el proyecto de ley no garantiza la sostenibilidad financiera, así como no identifica la fuente de financiamiento correspondiente; además que no acredita que la Oficina de Normalización Previsional haya efectuado los cálculos actuariales del "Régimen Especial de Pensiones para Trabajadores Pesqueros" que es financiado por el "Fondo Extraordinario del Pescador", siendo uno de sus recursos para dicho financiamiento, el "aporte social".
    b) La vulneración de la primera y segunda disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú, en tanto el proyecto de ley, al proponer modificaciones que inciden en el régimen pensionario regulado por la Ley N° 30003 antes referida, debe regirse por criterios de sostenibilidad financiera, teniendo en cuenta la capacidad financiera del Estado, las previsiones presupuestales y las posibilidades de la economía nacional, lo cual no cumple con acreditar en la exposición de motivos.
5. En relación con lo anterior, como se detalla en los numerales 4.41 al 4.49 del presente informe, no se justifica la viabilidad de la propuesta al no haberse

realizado el estudio económico o actuarial respectivo, que compone un sustento técnico obligatorio, de acuerdo con las disposiciones antes referidas y el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre la seguridad social, el cual dispone que en el numeral 3 de su artículo 71 que se debe garantizar, cuando fuere oportuno, los estudios y cálculos actuariales necesarios relativos al equilibrio de los sistemas de pensiones, sea realizándolos de manera periódica y, en todo caso, antes de cualquier modificación de prestaciones, de la tasa de cotizaciones del seguro o de impuestos destinados a cubrir las contingencias en cuestión, todo ello a fin de asegurar la sostenibilidad del sistema o régimen pensionario, en este caso, del régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros

6. Todo lo antes indicado evidencia que el fundamento del proyecto de ley presentado en la exposición de motivos no cumple las reglas de sustento que regula la normativa vigente, como son: i) el Reglamento de la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2022-JUS; ii) el Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República, aprobado por el Acuerdo de Mesa Directiva 106-2020-2021/MESA-CR; y, iii) el Reglamento del Congreso de la República; como se detalla en los numerales 4.50 al 4.64 del presente informe; lo cual se evidencia, entre otros, por los siguientes:
    a) No se adjunta estudios económicos y financieros, publicaciones, informes técnicos, cuadros y tablas estadísticas, en los cuales se justifique la necesidad y pertinencia de establecer la creación de un "aporte social" de forma permanente, de tal manera que se acredite que tal aporte permitirá garantizar la sostenibilidad y mejoramiento del pago de las pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia de los tripulantes pesquero industriales comprendidos en la Ley N° 30003 Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros.

b) En ningún extremo se justifica porqué el monto del "aporte social" permanente que se propone crear equivaldría a US$ 1.95 por tonelada métrica de pescado descargado que los titulares de los establecimientos industriales pesqueros para consumo humano directo e indirecto; además, no se incorpora estudios económicos y financieros que determinen cuánto es lo que se espera recaudar con dicho monto en el tiempo y que el mismo es el adecuado para constituir un fondo de esta naturaleza que garantice el cumplimiento del pago sostenible a sus beneficiarios.

c) No se adjunta informe técnico y estudio financiero que evalué el impacto económico que asumirían los titulares de los establecimientos industriales pesqueros para consumo humano directo e indirecto, frente a todos los pagos de cargas tributarias y obligaciones legales que deben de realizar los referidos titulares.

d) No se incluye la opinión técnica de las organizaciones gremiales representativas de los titulares de los establecimientos industriales pesqueros para consumo humano directo e indirecto, principalmente de la Sociedad Nacional de Pesquería, lo cual es necesario, pues, a ellos se les impondrá la obligación de efectuar el "aporte social" más si se tiene en cuenta que dicho aporte sería de naturaleza permanente.

7. El último párrafo del artículo 3 del proyecto de ley no se adecúa al resto del contenido de dicho artículo. Así, en dicho párrafo se indica que PRODUCE y la SUNAT establecerán los mecanismos y condiciones para el envío de la información señalada "en los numerales 3.2 y 3.5" de dicho artículo (haciendo referencia a los demás párrafos), siendo que este no contiene apartados que sean numerales, sino los literales a) al e).

Mediante el Oficio N° 0985-2023-MTPE/4, de fecha de ingreso 21 de abril de 2023, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 2278/2021-CR, manifestando lo siguiente:

Esta Dirección opina que el Proyecto de Ley N° 2278/2021-CR resulta inviable por las siguientes razones:

1. La medida propuesta contiene disposiciones muy generales que prácticamente remiten su regulación a las normas del SPP. No es posible apreciar en la propuesta una medida que implique una mejora del actual sistema previsional peruano y que atienda los aspectos relacionados con ampliar la cobertura previsional, otorgar pensiones suficientes y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema previsional.
2. La propuesta requiere incorporar disposiciones sobre los aportes obligatorios y la tasa del aporte pues solo se remite a la regulación supletoria del SPP.
3. Las disposiciones del Proyecto de Ley requieren regular aspectos de fondo sobre cómo administrarán el fondo de pensiones del afiliado, qué tipo de mecanismos utilizarán para generar rentabilidad así como tampoco se explica ni sustenta cómo es que las Empresas de Operaciones Múltiples podrían brindar mayor rentabilidad a diferencia de lo que ocurre en las AFP.
4. La propuesta modificatoria de los artículos 24 y 30 del TUO de la Ley del SPP aprobada mediante Decreto Supremo N° 054-97-EF no ha sido desarrollada ni sustentada en la Exposición de Motivos. Corresponde que los proponentes expliquen cuales serían los beneficios del cambio propuesto para el afiliado y el impacto que la medida tendría en las AFP. Se debe sustentar porqué la comisión porcentual sobre la rentabilidad es mejor o más beneficiosa que las comisiones por flujo y mixta actualmente vigentes en el SPP. Así mismo, se debe explicar que pasaría con el cobro de la comisión propuesta en aquellos casos en que la rentabilidad sea negativa.
5. Dejar abierta la posibilidad de retiro extraordinario de los fondos de los afiliados conforme se desprende del artículo 10 de la propuesta, contraviene lo señalado en los artículos 10 y 12 de la Constitución Política que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social y señala que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles, y que los recursos se aplican en la forma y bajo responsabilidad que señala la ley.

6. La garantía constitucional de la intangibilidad de los fondos de pensiones supone que estos, no deben ser destinados a fines distintos a los que motiva el ahorro forzoso de parte de los trabajadores que se encuentran afiliados, toda vez el uso de dichos fondos para fines distintos a los previsionales conllevaría a que el bien futuro a proteger -la pensión de jubilación- se vería afectada sustancialmente, en la medida que no se contaría con los recursos necesarios para proveerse una protección llegada la vejez.
7. Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), emitir opinión sobre la viabilidad del Proyecto de Ley.

Mediante el Oficio N° D002350-2023-MTPE/4, de fecha 5 de setiembre de 2023, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5377/2022-CR, manifestando lo siguiente:

- ✓ La Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Proyecto de Ley N° 5377/2022-CR, Ley marco de creación del sistema universal de pensiones, es no viable, por lo siguiente:
  - Lo propuesto vulnera el principio de sostenibilidad financiera de la seguridad social, a que se hace referencia en la Primera y la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, toda vez que lo propuesto no cuenta, en su exposición de motivos, con estudios actuariales, financieros y/o económicos que sustente su viabilidad financiera en el tiempo.
  - Asimismo, se vulneran los artículos 43 y 79 de la Constitución Política del Perú, toda vez que la implementación de lo propuesto requiere del uso de recursos provenientes del tesoro público, lo que vulneraría la disposición constitucional relativa con la prohibición de crear o aumentar gastos públicos por parte del Congreso de la República; y, por en ende, el principio de separación de poderes.

Mediante el Oficio N° D002782-2023-MTPE/4, de fecha 3 de noviembre de 2023, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5623/2023-CR, manifestando lo siguiente:

- La propuesta de modificación al artículo 4 resulta innecesaria, toda vez que no modifica las funciones de la ONP, ni produce efecto alguno en las prestaciones que otorga el REP.
- La propuesta de modificación al artículo 11 de la Ley N° 30003, que implica el aumento de la pensión por invalidez de los trabajadores pesqueros, no cuenta con un estudio actuarial, económico o financiero que sustente su viabilidad; lo que vulnera el principio de sostenibilidad financiera de la seguridad social, a que se hace referencia en la Primera y la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú.
- En esa línea, toda vez que la implementación de lo propuesto requeriría del uso de recursos provenientes del tesoro público, se vulneran los artículos 43 y 79 de la Constitución Política del Perú, disposiciones relativas con el principio de separación de poderes y la prohibición de crear o aumentar gastos públicos por parte del Congreso de la República.
- En consecuencia, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo considera no viable el Proyecto de Ley N° 5623/2023-CR.

Mediante el Oficio N° D002781-2023-MTPE/4, de fecha 3 de noviembre de 2023, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4921/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1. Lo propuesto vulnera el principio de sostenibilidad financiera de la seguridad social, a que se hace referencia en la Primera y la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, toda vez que lo propuesto no cuenta, en su exposición de motivos, con estudios actuariales, financieros y/o económicos que sustente su viabilidad financiera en el tiempo.

2. Asimismo, se vulneran los artículos 43 y 79 de la Constitución Política del Perú, toda vez que la implementación de lo propuesto requiere del uso de recursos provenientes del tesoro público, lo que vulneraría la disposición constitucional relativa con la prohibición de crear o aumentar gastos públicos por parte del Congreso de la República; y, por en ende, el principio de separación de poderes.
3. En consecuencia, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo considera que el texto sustitutorio es no viable.

Mediante el Oficio N° 000086-2024-MTPE/4, de fecha 18 de enero de 2024, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 6338/2022-CR, manifestando lo siguiente:

- El proyecto de Ley tiene por objeto establecer una nueva regla para la percepción de la pensión proporcional regular en la Ley N° 31301, de manera que se pueda acceder a una pensión por el monto de S/ 200.00 soles mensuales cuando se haya aportado durante por lo menos 5 años y no se llegue a 10 años.
- En relación al proyecto de ley, esta Oficina General formula las siguientes observaciones:
  - ✓ Lo propuesto vulnera el principio de sostenibilidad financiera de la seguridad social, a que hace referencia la Primera y la Segunda Disponibilidad Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, toda vez que el contenido de la exposición de motivos no se basa en estudios actuariales, financieros y/o económicos que sustenten su viabilidad financiera en el tiempo.
  - ✓ Asimismo, se vulneran los artículos 43 y 79 de la Constitución Política del Perú, relativos al principio de separación de poderes; y, a la prohibición de crear o aumentar gastos públicos por parte del Congreso de la Republica, toda vez que la implementación de lo propuesto requiere del uso de recursos provenientes del tesoro público.
- En consecuencia, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo considera que el Proyecto de Ley N° 6338/2023-CR es no viable.

Mediante el Oficio N° 000102-2024-MTPE/4, de fecha 18 de enero de 2024, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5623/2022-CR, manifestando lo siguiente:

- El objeto del proyecto de ley es modificar los artículos 4 y 11 de la Ley N° 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, con la finalidad de optimizar la determinación de la pensión de jubilación por invalidez y mejorar la calidad de vida de los jubilados en condiciones de dignidad y bienestar en el Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros.
- La propuesta de modificación al artículo 4 resulta innecesaria, toda vez que no modifica las funciones de la ONP, ni produce efecto alguno en las prestaciones que otorga el REP.
- La propuesta de modificación al artículo 11 de la Ley N° 30003, que implica el aumento de la pensión por invalidez de los trabajadores pesqueros, no cuenta con un estudio actuarial, económico o financiero que sustente su viabilidad; lo que vulnera el principio de sostenibilidad financiera de la seguridad social, a que se hace referencia en la Primera y la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú.
- En esa línea, toda vez que la implementación de lo propuesto requeriría del uso de recursos provenientes del tesoro público, se vulneran los artículos 43 y 79 de la Constitución Política del Perú, disposiciones relativas con el principio de separación de poderes y la prohibición de crear o aumentar gastos públicos por parte del Congreso de la República.
- En consecuencia, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo considera no viable el Proyecto de Ley N° 5623/2023-CR. En consecuencia, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo considera no viable el Proyecto de Ley N° 5623/2023-CR.

Mediante el Oficio N° 000380-2024-MTPE/4, de fecha 19 de febrero de 2024, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 6227/2023-CR, manifestando lo siguiente:

1. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República solicita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 6227/2023-CR, "Ley del Sistema de Pensiones".
2. El Proyecto de Ley N° 6227/2023-CR propone reformar el sistema previsional mediante la creación de un sistema de pensiones conformado por 2 subsistemas de gestión pública y privada, con la finalidad de garantizar el derecho a la seguridad social en materia de pensiones, en sus modalidades de jubilación, discapacidad laboral y sobrevivencia, así como los gastos de sepelio.
3. La Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral, opina que el Proyecto de Ley N° 6227/2023-CR es no viable, dado que no presenta un estudio técnico, económico, financiero y actuarial que sustente su viabilidad; de conformidad con lo dispuesto en la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política, referido a la observancia de los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación, teniendo en cuenta la capacidad financiera del Estado, las previsiones presupuestales y las posibilidades de la economía nacional.
4. Por lo expuesto esta Oficina General considera que el Proyecto de Ley N° 6227/2023-CR es NO VIABLE toda vez que no cuenta con los estudios actuariales correspondientes que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema propuesto, siendo ello necesario y obligatorio de acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú y el Convenio N° 102, Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), así también, se advierte que la medida no implica una mejora en comparación al sistema de pensiones vigente, en tanto, presenta un esquema similar al del Sistema Privado de Pensiones, además de contener fallas en su diseño. Asimismo, la disposición contenida en el artículo 15 vulnera el carácter intangible de los fondos previsionales

al posibilitar la disposición de los recursos de dicho fondo para fines distintos a los previstos.

5.4 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS

Mediante Oficio N° D000341-2022-MIDIS-SG, de fecha 24 de mayo de 2022, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, adjuntan el Informe N° D000256-2022-MIDIS-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social adjunta el Informe de Trabajo N° D000033-2022-MIDIS-OGAJ-CMR, consideran que sobre el Proyecto de Ley N° 1595/2021-CR, no tienen competencia para emitir opinión, respecto a su viabilidad legal, contenido y efectos jurídicos.1621-2022

Mediante Oficio N° D001002-2021-MIDIS-SG, de fecha 30 de diciembre del 2021, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, adjuntan el Informe N° D000603-2021-MIDIS-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social adjunta el Informe de Trabajo N° D000081-2021-MIDIS-OGAJ-JJC, consideran que sobre el Proyecto de Ley N° 551/2021-CR, no involucra materias de competencia funcional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Mediante el Oficio N° D000098-2023-MIDIS/4, de fecha 15 de febrero de 2023, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4055/2023-CR, manifestando lo siguiente:

1. Tomando en consideración la normativa vigente y los argumentos contenidos en los numerales precedentes, se considera que el Proyecto de Ley N° 4055/2022-CR, "Ley que propone instituir el aporte social permanente al Fondo de Jubilación del Trabajador Pesquero Industrial" no es competencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social puesto que desarrolla una temática previsional que corresponde a otras instancias del Poder Ejecutivo, como el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Normalización Previsional, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Mediante el Oficio N° D000678-2023-MIDIS-DM, de fecha 27 de setiembre de 2023, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5377/2023-CR, manifestando lo siguiente:

- Teniendo en cuenta la normativa y fundamentos descritos en el presente informe y la opinión emitida por el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, esta Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que el Proyecto de Ley contiene disposiciones que se encuentran fuera del ámbito de competencia y atribuciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por lo que no corresponde a este Sector emitir opinión respecto a su viabilidad legal.
- No obstante, si es necesario observar y considerar inviable lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final:

> *TERCERA. Programas Pensión 65 y Contigo. Los sistemas previsionales Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a la persona con discapacidad severa en situación de Pobreza - CONTIGO, son absorbidos en el marco del pilar 1 del Sistema Universal de Pensiones.*

Toda vez que, teniendo en cuenta la normativa y fundamentos descritos en el presente informe y la opinión emitida por el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, el SUP no podría absorber a las personas con discapacidad severa, ya que este solo sería un régimen pensionario, muy distinto en su concepto de la intervención social focalizada que persigue el Programa Nacional Contigo y Pensión 65.

5.5 Ministerio de Producción – PRODUCE

Mediante Oficio N° 00000042-2022, de fecha 07 de febrero del 2022, el Ministerio de la Producción, mediante la Oficina General de Asesoría Jurídica, adjuntan el Informe N° 0000097-2022-PRODUCE/OGAJ, señala que el proyecto de ley 551-2021-CR contiene aspectos que no son parte de las funciones y competencias del sector Producción, de

conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, y modificatoria, por lo que no corresponde emitir opinión sobre el referido Proyecto de Ley.

Mediante el Oficio N° 00000204-2023-PRODUCE/SG, de fecha 14 de febrero de 2023, el Ministerio de Producción formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 3436/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1. El Proyecto de Ley N° 3436/2022-CR, Ley que crea el Aporte Social Permanente para la Jubilación del Pescador Industrial – ASPJPI contiene aspectos que no forman parte de las funciones y competencias del Sector Producción, de conformidad con lo establecido en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1047, y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE.
2. Sin perjuicio de lo señalado, en tanto el Proyecto de Ley contiene aspectos que se encuentran dentro del marco de las funciones y competencias del Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y de la Oficina de Normalización Previsional, se sugiere se recabe sus opiniones, por estar en el marco de sus competencias.

Mediante el Oficio N° 00000362-2023-PRODUCE/SG, de fecha 13 de marzo de 2023, el Ministerio de Producción formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4055/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1. El Ministerio de la Producción no es competente para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 4055/2022-CR, Ley que instituye el aporte social permanente al fondo de jubilación del trabajador pesquero industrial, conforme a los fundamentos expuestos en los numerales precedentes del presente informe.

2. Asimismo, en relación a las materias del Proyecto de Ley referidas a: i) economía; ii) tributación; iii) trabajo; iv) previsional; y. v)banca y seguros, estas comprende aspecto de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia Nacional de Empleo (MTPE) ; de la Oficina de Normalización Previsional (ONP); y;, la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS); por lo que corresponde que dichas entidades emitan su opinión técnica en el marco de sus respectivas competencias.

Mediante el Oficio N° 00000737-2023-PRODUCE/SG, de fecha 25 de mayo de 2023, el Ministerio de Producción formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4452/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1) Conforme a lo indicado por la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura y las competencias del Ministerio de la Producción, considerando que la propuesta normativa regula aspectos relacionados con el Sistema Privado de Pensiones, desde el punto de vista legal no se cuenta con competencias para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 4452/2022-CR que propone la "Ley que otorga el derecho a la jubilación anticipada a los trabajadores pesqueros dentro del sistema privado de pensiones".
2) Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, se debe solicitar a la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – SBS, a la Oficina de Normalización Previsional – ONP y al Ministerio de Economía y Finanzas, que emitan opinión técnica correspondiente sobre el referido Proyecto de Ley N° 4452/2022-CR, en el marco de sus respectivas competencias.

5.6 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE

Mediante Oficio N° 0739-2022-MTPE/1, de fecha 4 de julio de 2022, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo adjunta el informe N° 0473-2022-MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión técnica del Proyecto de Ley 1356/2021-CR, considerado como viable con observaciones, porque consideran que no resulta aplicable para aquellos que razones de falta de capacidad adquisitiva no podrían aportar

regularmente. Por otro lado, no se ha encontrado estudios que los porcentajes del IGV e IR, garanticen un fondo suficiente que permita complementar a los sistemas previsionales ya que debería el Ministerio de Economía y Finanzas emitir un informe, conforme a lo establecido al artículo 79 de la Constitución Política del Perú, por su impacto en leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones. Asimismo, indica que el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) deben emitir opinión sobre la propuesta.

Mediante oficio N° 940-2022-MTPE/1, de fecha 7 de septiembre de 2022, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, se adjunta el Informe N° 0687-2022-MTPE/4/8, considera que sobre el Proyecto de Ley N° 866/2021-CR, sugiere que el Congreso de la República considere la opinión que el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.

Mediante oficio N° 0964-2022-MTPE/1, de fecha 12 de septiembre de 2022, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Oficina General de Asesoría Jurídica, se adjunta Hoja de Elevación N° 0251-2022-MTPE/4/8, considera que sobre el proyecto de ley N° 2047/2021-CR no le corresponde emitir opinión, debido a que corresponder poner en conocimiento a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, con copia a la PCM, las consideraciones respectivas.

Mediante oficio N° 0968-2022-MTPE/1, de fecha 13 de septiembre de 2022, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Oficina General de Asesoría Jurídica, se adjunta el Informe N° 0730-2022-MTPE/4/8, considera que sobre el proyecto de ley N° 2110/2021-CR que considera que el proyecto de ley es viable con observaciones, , toda vez que no cuenta con los estudios económicos o actuariales que justifiquen su viabilidad, conforme con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 71 del Convenio N° 102 de la OIT; y, a su vez, tampoco se desarrolla el análisis costo- beneficio de la exposición de motivos conforme con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Marco para la

Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS.

Mediante oficio N° 1185-2022-MTPE/1, de fecha 19 de octubre de 2022, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, adjunta Hoja de Elevación N° 0251-2022-MTPE/4/8, considera que el proyecto de ley N° 1595/2021-CR resulta viable con observaciones. Asimismo, considera que toda iniciativa legislativa debe estar orientada a una reforma integral del actual Sistema Previsional Peruano que beneficie a toda la población y que atienda las problemáticas de la baja cobertura previsional e insuficiencia en los montos de las pensiones, actualmente existentes.

Mediante oficio N° 1157-2022-MTPE/1, de fecha 19 de octubre de 2022, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, se adjunta el Informe N° 0863-2022-MTPE/4/8, considera que el Proyecto de Ley N° 00344/2021-CR, tiene importancia en el sentido que para el incremento de la base tributaria, se necesita adoptar medidas para reducir la informalidad, disminuyendo en este caso la evasión en el pago del IGV y otras obligaciones tributarias, las cuales deberían ser evaluadas para revisar si cumplen su objetivo de ayudar a los sectores de más bajos ingresos y no favorecer a unos pocos.

Mediante oficio N° 1160-2022-MTPE/1, de fecha 19 de octubre de 2022,el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, se adjunta el Informe N° 0854-2022-MTPE/4/8, considera que sobre el Proyecto de Ley N° 1922/2021-CR, por todo lo expuesto, se considera que la propuesta normativa deviene en inconstitucional en tanto vulnera el derecho al libre acceso a un sistema de seguridad social contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política del Perú; el principio de no afectación contemplado en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú; y los criterios de sostenibilidad financiera y no

nivelación requeridos por la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú.

Mediante oficio N° 0954-2022-MTPE/1, de fecha 13 de noviembre de 2022, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, se adjunta el Informe N° 0691-2022-MTPE/4/8 e Informe N° 0271-2022-MTPE/2/14.4, considera que el Proyecto de Ley N° 01513/2021-CR, resulta inviable, debido a que refleja una verdadera reforma sustancial que implique una mejora del actual sistema previsional peruano y que atienda los aspectos relacionados con ampliar la cobertura previsional y el otorgamiento de pensiones suficientes.

Mediante oficio N° 1298-2022-MTPE/1, de fecha 25 de noviembre de 2022,el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, se adjunta el Informe N° 0952-2022-MTPE/4/8, considera que sobre el Proyecto de Ley N° 3133/2022-CR, sugiere que el Congreso de la República considere la opinión que el Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

Mediante oficio N° 0879-2023-MTPE/4, de fecha 11 de abril de 2023, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Por lo expuesto, teniendo en cuenta la opinión de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Proyecto de Ley N° 2659/2021- CR resulta NO VIABLE, por lo siguiente:

1. Se vulnera el numeral 3 del artículo 71 del Convenio 102 de la OIT, así como la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, en tanto que el análisis costo beneficio de la exposición de motivos no cuenta con un estudio técnico, financiero económico y actuarial que sustente lo propuesto.
2. La propuesta de destinar un porcentaje del IGV y del IR a la fuente de financiamiento no contributivo vulnera el artículo 79 de la Constitución Política del

Perú, al no contar con previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. tanto que el análisis costo beneficio de la exposición de motivos no cuenta con un estudio técnico, financiero económico y actuarial que sustente lo propuesto.

3. La propuesta de destinar un porcentaje del IGV y del IR a la fuente de financiamiento no contributivo vulnera el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, al no contar con previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

Mediante Oficio N° 0353-2023-MTPE/4, de fecha 9 de febrero de 2023, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo adjunta el informe N° 0116-2023-MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Memorando N° 0094-2023-MTPE/2 del Viceministro de Trabajo que emite opinión técnica del Proyecto de Ley 2728/2021-CR, en el cual se menciona que, dicha propuesta no es viable, indicando que el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) deben emitir opinión sobre la propuesta. Y mediante el informe N° 0497-2022-MTPE/2/14.4 de la Dirección General de Trabajo opina sobre el Proyecto de Ley N° 2728-2021-CR, no es viable, considerando que la propuesta normativa, según se indica, tiene por finalidad que, en artículo único modificar los artículos 45 y 106 del Decreto Ley N° 25987, Ley que crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. Asimismo, no se aprecia en el sustento información sobre el número de los casos existentes en el SPP en los que los fondos de los afiliados fallecidos sin herederos hayan pasado a las AFP y se distribuyan en montos iguales entre la totalidad de CIC. Asimismo, no explica cuál sería el destino de los fondos una vez transferidos al Tesoro Público. Mediante Memorando N° 1141-2022-MTPE/3 de la Secretaría Técnica a través de la Hoja de Elevación N° 0816-2022-MTPE/3/17 de la Dirección General de Promoción del Empleo, la Hoja de Elevación N° 0358-2022-MTPE/3/18 de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo y la Hoja de Elevación N° 0431-2022-MTPE/3/19 de la Dirección General de Normalización, Formalización para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales; mediante los cuales comunican que no son competentes para emitir opinión respecto al referido proyecto de ley.

Mediante oficio N° 1042-2023-MTPE/4, de fecha 25 de abril de 2023, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, se adjunta el Informe N° 0190-2023-MTPE/4/8, considera que el Proyecto de Ley N° 00551/2021-CR, limita en cuanto no considera de manera suficiente el impacto de las altas tasas de empleo informal e independiente en el mercado laboral peruano. En este sentido, se observa la necesidad de que la propuesta incluya una estrategia detallada para incentivar a los trabajadores independientes a estar afiliados a un sistema de prensiones según las condiciones del proyecto de ley. De acuerdo con lo detallado anteriormente, se considera que el proyecto de Ley es viable con observaciones.

Mediante el Oficio N° D002953-2023-MTPE/4, de fecha 24 de noviembre de 2023, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5242/2023-CR, manifestando lo siguiente:

1. El proyecto de ley tiene por objeto el aumento de la pensión de jubilación mínima del Decreto Ley N° 19990, a una equivalente a una remuneración mínima vital vigente.
2. Actualmente, la pensión mínima del Decreto Ley N° 19990 asciende a S/ 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 SOLES); y, la pensión máxima asciende a S/.893.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 00/100 SOLES). Por lo que lo planteado supondría que la pensión mínima ascienda a S/ 1 025.00 (MIL VEINTICINCO Y 00/100 SOLES).
3. En relación al proyecto de ley, esta Oficina General formula las siguientes observaciones:
    - Lo propuesto vulnera el principio de sostenibilidad financiera de la seguridad social, a que hace referencia la Primera y la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, toda vez que lo propuesto no cuenta, en su exposición de motivos, con estudios actuariales, financieros y/o económicos que sustente su viabilidad financiera en el tiempo.

- Asimismo, se vulneran los artículos 43 y 79 de la Constitución Política del Perú, relativos a la prohibición de crear o aumentar gastos públicos por parte del Congreso de la República; y, al principio de separación de poderes, toda vez que la implementación de lo propuesto requiere del uso de recursos provenientes del tesoro público.

4. En consecuencia, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo considera que el Proyecto de Ley N° 5242-2022-CR es no viable.
5. Finalmente, se sugiere a legislador contar con las opiniones técnicas que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Ministerio de Economía y Finanzas, conforme con sus competencias, pudieran tener sobre el referido proyecto de ley.

5.7 Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC

Mediante oficio N° 2143-2022MTC/04, de fecha 26 de julio de 2022, la Dirección General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones adjunta el informe N° 834-2022-MTC/08 y el informe N° 1040-2022-MTC/08 concluyendo lo siguiente:

1. Desde el punto de vista legal y teniendo en cuenta lo señalado por la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, esta Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no es competente para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1595/2021-CR, "Ley que crea el fondo previsional de los trabajadores mototaxistas para incorporarlos al Sistema Nacional de Pensiones".
2. Asimismo, se considera que el mandato de la creación de un Registro Nacional del Trabajador Mototaxista contenida en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley debe ser adecuada al Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la Republica, en tanto de la Formula Legal del Proyecto de Ley no se atribuye la creación de dicho registro ni la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Mediante oficio N° 3239-2022MTC/04, de fecha 02 de diciembre de 2022, la Secretaría General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones adjunta el informe N° 1566-2022-MTC/18.01 y el informe N° 1839-2022-MTC/08, el Ministerio de Trasportes y

Comunicaciones través de Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, Oficina de Asesoría Jurídica, considera en ambos informes que no es competente para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1922/2021-CR.

Mediante informe N° 1040-2022-MTC/08, de fecha 22 de julio de 2022,el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones través de Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, Oficina de Asesoría Jurídica, considera que no es competente para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1595/021-CR.

5.8 Ministerio de Educación – MINEDU

Mediante Oficio Nº 2264-2021-MINEDU/SG, de fecha 03 de diciembre del 2021, el Ministerio de Educación, adjuntan el Informe Nº 01228-2021-MINEDU/SG-OGAJ mediante el cual concluye que no le corresponde pronunciare sobre la viabilidad del Proyecto de ley N° 344/2021-CR, debido a que no incide en los ámbitos que comprenden a la educación.

Mediante Oficio Nº 4677-2023-MINEDU/SG, de fecha 14 de diciembre del 2023, el Ministerio de Educación, adjuntan el Informe Nº 01513-2023-MINEDU/SG-OGAJ mediante el cual se pronuncia sobre el Proyecto de ley N° 05377/2023-CR lo siguiente:

A partir de lo señalado por la DITEN, DIGEBR, DISERTPA Y DICOPRO en los Informes N°s 01071-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, 00527-2023-MINEDU/VMGPDIGEBR, 00190-2023-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA y 00134-2023- MINEDU/VMGP-DIGESU-DICOPRO, respectivamente, en lo que respecta al artículo 33, se concluye que el Proyecto de Ley N° 5377/2022-CR no resulta viable, toda vez que:

a) Vulnera la autonomía universitaria, así como la autonomía de los IES y EES contemplados en la Constitución Política del Perú, la Ley N° 28044, la Ley N° 30220 y la Ley N° 30512.
b) No sustenta la necesidad de incluir en la currícula escolar de la cultura previsional, dado que, el Currículo Nacional de la Educación Básica, aprobado por Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU ya aborda y desarrolla la gestión responsable de los recursos económicos.

Mediante Oficio N° 04755-2023-MINEDU/SG, de fecha 27 de diciembre del 2023, el Ministerio de Educación, adjuntan el Informe N° 01714-2023-MINEDU/SG-OGAJ mediante el cual se pronuncia sobre el Proyecto de ley N° 5929/2023-CR lo siguiente:

Atendiendo lo expresado y en virtud de lo señalado por la Digesu, la Digebr, la Digedd, la Digeibira y la Digesutpa, se concluye que el Proyecto de Ley N° 5929/2023-CR, respecto de los artículos 3, 4, 5, 8 y 18, con impacto en el sector educación, NO ES VIABLE, por las siguientes razones:

I. La propuesta contenida en el artículo 18 del Proyecto de Ley, sobre promoción del ahorro previsional, ya se encuentra abordada para la etapa de educación básica en todas sus modalidades, ciclos y niveles, a través de la Competencia "Gestiona responsablemente los recursos económicos" del CNEB y en los respectivos Programas Curriculares aprobados por el Minedu; por lo que este artículo no resulta viable. Asimismo, la implementación de programas de estudio mediante incorporación de planes de estudios en la educación superior resulta contraria a la autonomía de la que gozan estas instituciones educativas; siendo que estas podrían realizar la implementación de promoción de la cultura previsional en dicho marco de autonomía y de acuerdo con la normativa vigente que las regula.
II. El extremo respecto a la regulación de un nuevo sistema de pensiones, contenido en los artículos 3, 4, 5, 8, como solución a la problemática actual es inconsistente, pues no se cuenta con el debido sustento para dicha medida. Siendo que, corresponde al MEF, evaluar el impacto jurídico y económico que implica la creación del nuevo sistema de pensiones propuesto.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJU

Mediante el Oficio N° 2690-2022-JUS/SG, de fecha 6 de octubre de 2022, el Ministerio de Justicia y Derechos Humano – MINJU, formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 1306/2021-CR, manifestando lo siguiente:

1. El Proyecto de Ley N° 1306/2021-CR, Proyecto de Ley que propone crear el fondo previsional para recién nacidos financiado con aportes alternativos, jurídicamente es no viable en el extremo referido a su artículo 1 en cuanto define a la placenta como "activo de propiedad", toda vez que, como se expuso supra, desde un plano bioético, nuestro ordenamiento jurídico se adhiere a la tesis del derecho de la personalidad al momento de regular lo concerniente a los actos de libre disposición del propio cuerpo. Esto quiere decir que, no cabe una concepción patrimonial al momento de hablar sobre actos de libre disposición del propio cuerpo.
2. El Proyecto de Ley N° 1306/2021-CR, Proyecto de Ley que propone crear el fondo previsional para recién nacidos financiado con aportes alternativos es una propuesta que es viable jurídicamente en los demás extremos con las siguientes observaciones:
    - En la Exposición de Motivos se debe apreciar un análisis normativo sistemático, así como acompañar las opiniones favorables del Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, y de la Oficina de Normalización Previsional, debiendo además precisarse lo siguiente:
        a. Los fundamentos que justifiquen la procedencia legal de la venta de la placenta humana, así como el fin previsional que se pretende atribuir al resultado de dicha venta, según los supuestos de validez establecidos en el artículo 6 del Código Civil (estado de necesidad, de orden médico o quirúrgico o por motivos humanitarios)
        b. La aclaración respecto a la creación de un nuevo régimen pensionario y sobre las precisiones correspondientes a la entidad supervisada por el Estado, deslindando las implicancias del gasto público.
    - En la fórmula normativa se debe advertir:
      La corrección de las Disposiciones Complementarias debiendo decir, Disposiciones Complementarias Finales, que incluye una Primera referida a las facultades del Ministerio de Salud, y una Segunda referida a la Reglamentación; y, Disposición Complementaria Derogatoria, la cual incluye una Única Disposición Complementaria Derogatoria, debiéndose

además corregir el contenido de ésta última, conforme a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.

- El Proyecto de Ley no cumple con los siguientes requisitos de calidad normativa y técnica legislativa, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa y su Reglamento, concretamente en lo referido al i) título de la disposición, ii) la Exposición de Motivos, iii) el análisis costo beneficio, y iv) el análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional.

5.9 Ministerio de Salud – MINSA

Mediante el Oficio N° 02143-2022-SG/MINSA, de fecha 9 de mayo de 2023, el Ministerio de Salud – MINSA, formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 1306/2021-CR, manifestando lo siguiente:

Se ha revisado el proyecto del Ley N° 1306 — 2021 CR. Proyecto de Ley que propone crear el fondo previsional para recién nacidos financiado con aportes alternativos. El Objeto de la Ley es, declarar a la placenta como activo de propiedad del recién nacido y con la venta de ello; capitalice de forme obligatoria en una cuenta individual supervisado por el Estado, que solo podrá ser utilizado con fin previsional para garantizar su pensión de jubilación.

Desde las competencias de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva — DSARE, se ha revisado

1. El proyecto de Ley N° 1306 — 2021 CR, pueden hacer se modifique la Decreto Supremo Nº 014-2005-SA. Aprueban Reglamento de la Ley General de Donación y Trasplante de órganos y/o Tejidos Humanos, Ley Nº 28189.
2. La propuesta de proyecto de ley, genera potenciales conflictos culturales—desde la cosmovisión andina y amazónica.

3. Se tiene limitaciones de infraestructura, equipamiento y personal profesional.
4. Se va a generar una serie de gastos no presupuestados ni contemplados en la propuesta.

5.10 Ministerio de Relaciones Exteriores – RREE

Mediante Oficio RE (MIN) Nº 3-0-A/9, de fecha 11 de enero del 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores, adjuntan el Informe (Leg.) Nº 001-2022 mediante el cual no resulta viable apoyar al proyecto de ley 551-2021-CR, debiendo tenerse en cuenta los comentarios de fondo y forma señalados en el presente documento, a fin de proseguir con su trámite y evaluación correspondiente.

5.11 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

Mediante Oficio Nº 000092-2023, de fecha 16 de mayo del 2023, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, mediante la Oficina General de Asesoría Jurídica, adjuntan el Informe Nº 000057-2023-SUNAT/7T0000, señala que el proyecto de ley 1922-2021-CR, sobre el particular, cabe indicar que de acuerdo con la Ley N.º 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT[1], esta es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que nuestra opinión institucional debe ser remitida al citado ministerio para que consolide y emita la opinión autorizada del referido sector. En tal sentido, le informo que mediante Oficio Nº 000090-2023-SUNAT/700000 se ha remitido al MEF la opinión institucional respectiva.

5.12 Banco Central de Reserva del Perú – BCRP

Mediante Oficio Nº 0309-2021-BCRP, de fecha 21 de diciembre de 2021 el Presidente del Banco Central de Reserva considera que, cualquier reforma del sistema de pensiones privado y público del país debería analizarse de manera integral, considerando los efectos colaterales que tal reforma implicaría sobre todos los agentes e instituciones involucradas. La reforma integral de la red de protección social, incluyendo al sistema de pensiones, debe garantizar la protección de la poblaciónтanto durante su vida laboral como

en su vejez, generar competencia en el sistema de pensiones, aprovechar economías de escala y reducir las barreras de entrada, y mejorar la rentabilidad del afiliado. Esto requiere una evaluación detallada y profunda con la participación de todas las partes involucradas. Estas propuestas son (i) aumentar la cobertura de Pensión 65 y reforzar el apoyo a personas de mayor edad (Pensión 70); (ii) reforma del esquema de pensión mínima en el Sistema Nacional de Pensiones en función de los años de aporte y cuentas individuales nocionales; (iii) establecer una pensión mínima en el Sistema Privado de Pensiones en función de los años de aporte; (iv) reformar el Sistema Nacional de Pensiones con cuentas nominales nocionales, donde los afiliados de AFP se puedan trasladar sin recargo alguno; (v) evaluar la centralización de la recaudación de fondos en los sistemas de pensiones; (vi) traslado automático a la AFP de mayor rentabilidad y mejora de las subastas; y (vii) establecer para cada AFP un portafolio y rendimiento de referencia. Las medidas propuestas contribuirán a mejorar el sistema actual, pero, para alcanzar pensiones adecuadas para todos los ciudadanos, requieren complementarse con reformas estructurales que permitan formalizar la economía y elevar la productividad de los trabajadores. Con ello, estas reformas permitirían ampliar la cobertura del sistema y elevar las pensiones. En consecuencia, considera que no sería recomendable la aprobación del Proyecto de Ley 551/2021-CR.

Mediante Oficio N° 0071-2022-BCRP, de fecha 28 de marzo de 2022, el Presidente del Banco Central de Reserva emitió opinión respecto del Proyecto de Ley N° 1306/2021-CR, manifestando lo siguiente:

- El proyecto de ley indica que la cotización y la venta de la placenta estría a cargo de una entidad supervisora por el estado en coordinación con el Ministerio de Salud; sin embargo, la determinación de los precios según las condiciones del mercado permíten que los agentes privados acuerden transacciones mutuamente beneficiosas. En particular, si la entidad designada fuera estatal, la cotización que esta fije correría el riesgo de constituirse como un "precio de refugio" que afectaría los recursos fiscales.

- Sería particularmente importante si es que el valor monetario de la placenta no se mantuviera en el tiempo. Así un aumento masivo de la oferta conduciría a la disminución de del precio, en un contexto en donde la demanda es incierta.
- Finalmente, consideramos que cualquier reforma del sistema de pensiones privado y público del país debería analizarse integralmente, esto requiere una evaluación tomando en cuenta los objetivo en el tema previsional: i) eliminar el riesgo de pobreza en la vejez; ii) ampliar la cobertura previsional; iii) incrementar las tasas de reemplazo; iv) generar competencia en el sistema de pensiones; v) aprovechar economías de escala y reducir las barreras de entrada; y vi) mejorar la rentabilidad del afiliado.

Mediante Oficio N° 0076-2022-BCRP, de fecha 28 de marzo de 2022, el Presidente del Banco Central de Reserva emitieron opinión desfavorable respecto del Proyecto de Ley N° 1356/2021-CR, considerando no recomendable la aprobación de este proyecto de ley debido a que actualmente los sistemas de pensiones, público y privado no cubren a la gran mayoría de la población, las comisiones son altas y las tasas de reemplazo bajas. Además, la reforma de la red de protección social incluyendo el sistema de pensiones, debe garantizar la protección de la población durante toda su vida laboral, mediante una evaluación detallada y profunda, considerando eliminar el riesgo de pobreza en la vejez, ampliar la cobertura previsional, incrementar las tasas de reemplazo, generar competencia en el sistema de pensiones en beneficio de los afiliados, aprovechar economías de escala y reducir las barreras de entrada y mejorar la rentabilidad del afiliado.

Mediante Oficio N° 0079-2022-BCRP, de fecha 28 de marzo de 2022, el Presidente del Banco Central de Reserva considera que la propuesta legislativa 912/2021-CR, no es conveniente su aprobación debido a requiere una evaluación detallada y profunda, tomando en cuenta los objetivo en el tema previsional: i) eliminar el riesgo de pobreza en la vejez; ii) ampliar la cobertura previsional; iii) incrementar las tasas de reemplazo;

iv) generar competencia en el sistema de pensiones; v) aprovechar economías de escala y reducir las barreras de entrada; y vi) mejorar la rentabilidad del afiliado.

Mediante Oficio N° 0086-2022-BCRP, de fecha 8 de abril de 2022, el Presidente del Banco Central de Reserva considera que, cualquier reforma del sistema de pensiones privado y público del país debería analizarse de manera integral, considerando los efectos colaterales que tal reforma implicaría sobre todos los agentes e instituciones involucradas. La reforma integral de la red de protección social, incluyendo al sistema de pensiones, debe garantizar la protección de la poblaciónтanto durante su vida laboral como en su vejez. Esto requiere una evaluación detallada y profunda con la participación de todas las partes involucradas. Estas propuestas deberían tomar en cuenta las condiciones iniciales del sistema de pensiones y buscar seis grandes objetivos en el tema previsional: (i) eliminar el riesgo de pobreza en la vejez; (ii) ampliar la cobertura previsional; (iii) incrementar las tasas de reemplazo; (iv) generar competencia en el sistema de pensiones; (v) aprovechar economías de escala; y (vi) mejorar la rentabilidad del afiliado. En consecuencia, considera que no sería recomendable la aprobación del Proyecto de Ley 344/2021-CR.

Mediante Oficio N° 0116-2022-BCRP, de fecha 9 de mayo de 2022 el Presidente del Banco Central de Reserva considera que, cualquier reforma del sistema de pensiones privado y público del país debería analizarse de manera integral, considerando los efectos colaterales que tal reforma implicaría sobre todos los agentes e instituciones involucradas. La reforma integral de la red de protección social, incluyendo al sistema de pensiones, debe garantizar la protección de la poblaciónтanto durante su vida laboral como en su vejez. Esto requiere una evaluación detallada y profunda con la participación de todas las partes involucradas. Estas propuestas deberían tomar en cuenta las condiciones iniciales del sistema de pensiones y buscar seis grandes objetivos en el tema previsional: (i) eliminar el riesgo de pobreza en la vejez; (ii) ampliar la cobertura previsional; (iii) incrementar las tasas de reemplazo; (iv) generar competencia en el sistema de pensiones; (v) aprovechar economías de escala; y (vi) mejorar la rentabilidad

del afiliado. En consecuencia, considera que no sería recomendable la aprobación del Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

Mediante Oficio N° 197-2022-BCRP, de fecha 24 de junio de 2022, el Presidente del Banco Central de Reserva considera que, cualquier reforma del sistema de pensiones privado y público del país debería analizarse de manera integral. La reforma integral de la red de protección social, incluyendo al sistema de pensiones, debe garantizar la protección de la poblacióntanto durante su vida laboral como en su vejez. Esto requiere una evaluación detallada y profunda con la participación de todas las partes involucradas. Estas propuestas deberían tomar en cuenta las condiciones iniciales del sistema de pensiones y buscar seis grandes objetivos en el tema previsional: (i) eliminar el riesgo de pobreza en la vejez; (ii) ampliar la cobertura previsional; (iii) incrementar las tasas de reemplazo; (iv) generar competencia en el sistema de pensiones; (v) aprovechar economías de escala; y (vi) mejorar la rentabilidad del afiliado. En consecuencia, considera que el Proyecto de Ley 2047/2021-CR en los términos planteados debería ser desestimado.

Mediante Oficio N° 205-2022-BCRP, de fecha 08 de julio de 2022, el Presidente del Banco Central de Reserva considera que, cualquier reforma del sistema de pensiones privado y público del país debería analizarse de manera integral. La reforma integral de la red de protección social, incluyendo al sistema de pensiones, debe garantizar la protección de la poblacióntanto durante su vida laboral como en su vejez. Esto requiere una evaluación detallada y profunda con la participación de todas las partes involucradas. Estas propuestas deberían tomar en cuenta las condiciones iniciales del sistema de pensiones y buscar seis grandes objetivos en el tema previsional: (i) eliminar el riesgo de pobreza en la vejez; (ii) ampliar la cobertura previsional; (iii) incrementar las tasas de reemplazo; (iv) generar competencia en el sistema de pensiones; (v) aprovechar economías de escala; y (vi) mejorar la rentabilidad del afiliado. En consecuencia, considera que el Proyecto de Ley 2110/2021-CR en los términos planteados debería ser desestimado.

Mediante Oficio N° 218-2022-BCRP, de fecha 18 de julio de 2022, el Presidente del Banco Central de Reserva considera que, cualquier reforma del sistema de pensiones privado

y público del país debería analizarse de manera integral. La reforma integral de la red de protección social, incluyendo al sistema de pensiones, debe garantizar la protección de la poblacióntanto durante su vida laboral como en su vejez. Esto requiere una evaluación detallada y profunda con la participación de todas las partes involucradas. Estas propuestas deberían tomar en cuenta las condiciones iniciales del sistema de pensiones y buscar seis grandes objetivos en el tema previsional: (i) eliminar el riesgo de pobreza en la vejez; (ii) ampliar la cobertura previsional; (iii) incrementar las tasas de reemplazo; (iv) generar competencia en el sistema de pensiones; (v) aprovechar economías de escala; y (vi) mejorar la rentabilidad del afiliado. En consecuencia, considera que el Proyecto de Ley 2278/2021-CR en los términos planteados debería ser desestimado.

Mediante Oficio N° 0025-2023-BCRP, de fecha 27 de febrero de 2023, el Presidente del Banco Central de Reserva emite su opinión considerando que se requiere una reforma integral de la red de protección social respecto del Proyecto de Ley N° 4087/2022-CR, incluyendo a los sistemas de pensiones, que permita proteger a la población durante el periodo de su vida laboral como durante la vejez. Esto requiere una evaluación que permitan a las propuestas una reforma integral considerando eliminar el riesgo de pobreza en la vejez, ampliar la cobertura previsional, incrementar las tasas de reemplazo, generar competencia en el sistema de pensiones en beneficio de los afiliados, aprovechar economías de escala y reducir las barreras de entrada y mejorar la rentabilidad del afiliado.

Mediante Oficio N° 0033-2023-BCRP, de fecha 13 de marzo de 2023, el Presidente del Banco Central de Reserva considera que no es conveniente aprobar la propuesta legislativa, por cuanto habría desnaturalización del objetivo los fondos previsionales; señala que las sucesivas leyes que se han aprobado para el retiro de los fondos de pensiones, principalmente, asociados al alivio del impacto económico de la pandemia han significado una reducción del 50.7 por ciento del valor total de los fondos a diciembre de 2019. La publicación de la Ley 31670 que establece una pensión mínima. Los fondos por encima de la cantidad requerida para lograr esa pensión mínima podrían ser retirados facultativamente. Estos retiros adicionales representarían reducciones entre 2,2 y 34,1 por ciento (respectivamente) del valor de fondos de pensiones a diciembre de

2022, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Por otro lado, señala que, el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones ya fue modificado para incluir la posibilidad de disponer de hasta el 25% de los fondos para el pago de cuota inicial o para amortizar un crédito hipotecario de primera vivienda y por impacto que la propuesta tendría sobre el valor de los fondos provisionales y la sobre la economía, no se justifica ampliar este porcentaje. Finalmente considera que es innecesario y altamente perjudicial para los afiliados al sistema privado de pensiones aprobar el Proyecto de Ley N° 4200/2022-CR, Ley que modifica el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado Administración de Fondos de Pensiones, autorizando la disponibilidad de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los fondos de AFP.

Mediante el Oficio N° 0092-2023-BCRP, de fecha 23 de mayo de 2023, EL Banco Central de Reserva del Perú formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4743/2023-CR, manifestando lo siguiente:

- La devolución total de los fondos obligaría a la venta de activos financieros menos líquidos que, dado su impacto en las cotizaciones de mercado, reduciría el valor de los fondos previsionales.
- En el caso de los bonos del Tesoro Público del Perú (BTP´s), la reducción de valor por la venta forzada de las tenencias de los fondos de pensiones tendría, además, el efecto de elevar el costo de financiamiento del presupuesto público (a través de estos bonos). Esta presión al alza sobre las tasas de interés afectaría también a las empresas privadas que se financian en el mercado de capitales.
- Esta medida tendría también severos impactos inflacionarios. El retiro generalizado de los fondos de pensiones impulsaría un alza del gasto de consumo, incluyendo de aquellos afiliados que no han sido afectados por la desaceleración de la actividad económica. Ello se traduciría en presiones al alza sobre los precios, atentando contra la población más vulnerable.
- Consideramos que cualquier reforma del sistema de pensiones privado y público del país debería analizarse de manera integral, considerando los efectos colaterales

que tal reforma implicaría sobre todos los agentes e instituciones involucrados. La reforma integral de la red de protección social, incluyendo al sistema de pensiones, debe garantizar la protección de la población tanto durante su vida laboral con en la vejez. Esto requiere una evaluación detallada y profunda con la participación de todas las partes involucradas. Estas propuestas deberían tomar en cuenta las condiciones iniciales del mismo y buscar seis grandes objetivos en el tema previsional: (i) eliminar el riesgo de pobreza en la vejez; (ii) ampliar la cobertura previsional; (iii) incrementar las tasa de reemplazo;(iv) generar competencias en el sistema de pensiones en beneficios de los afiliados; (v) aprovechar economías de escala y reducir las barreras de entrada; y (vi) mejorara la rentabilidad del afiliado.

- Por lo expuesto, consideramos que sería altamente perjudicial para los afiliados la aprobación de este proyecto de ley, siendo más bien necesario continuar con el análisis y evaluación de las propuestas de reforma del sistema previsional.

Mediante el Oficio N° 208-2023-BCRP, de fecha 23 de octubre de 2023, EL Banco Central de Reserva del Perú formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5795/2023-CR, manifestando lo siguiente:

1. Compartimos la preocupación por la situación previsional de la población y coincidimos con el objetivo del proyecto de establecer medidas que coadyuven en la mejora del sistema de pensiones.
2. Con respecto a permitir que las Empresas de Operaciones Múltiples administren los fondos de pensiones, debería asegurarse que la entrada de cualquier entidad o fondo al sistema se realice, en igualdad de condiciones de competencia y bajo las disposiciones y salvaguardas establecidas en el TUO de la Ley SPP y normas complementarias. Asimismo la regulación debería de prohibir la práctica de ventas atadas que vinculen la decisión de traspaso del afiliado al otorgamiento de beneficios en otros productos financieros, dado que esto podría distorsionar una correcta decisión del afiliado sobre sus ahorros previsionales.

3. Respecto a la creación de una nueva comisión para retribuir el servicio de las administradoras de pensiones. Sugerimos que la propuesta se podría mejorar precisando que el componente fijo se aplicaría sobre el total de fondo administrado, y que el componente variable sería un porcentaje sobre la rentabilidad si esta es superior a la rentabilidad mínima.
4. El proyecto requiere de una mayor evaluación de los costos fiscales que generaría, las medidas propuestas podrían entrar en contradicción con lo previsto en el artículo 79° de la Constitución, que restringe las iniciativas de gasto por parte del Congreso.
5. Respecto a la propuesta de creación de un nuevo Sistema Nacional Previsional con cuentas individuales similares a las del Sistema Privado de Pensiones se propone crear cuentas individualizadas nocionales donde se registren los aportes de los afiliados y los rendimientos nocionales generados por estas aportaciones.
6. Respecto a la pensión mínima consideramos que su financiamiento debe provenir de la Cuenta Individua de Capitalización de cada afiliado y, una vez agotado el saldo de dicha. cuenta, del presupuesto general de la república.
7. La propuesta referida a que el IGV complemente el ahorro previsional implicaría una pérdida de recaudación para el fisco, que significaría dejar de atender otros gastos e inversiones del estado en beneficio de poblaciones vulnerables. Los incentivos tributarios implicarían una mayor carga fiscal.

Mediante el Oficio N° 00243-2023-BCRP, de fecha 19 de diciembre de 2023, El Banco Central de Reserva del Perú formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 06359/2023-CR, manifestando lo siguiente:

- Consideramos adecuada la propuesta de permitir al afiliado decidir quiénes serían las personas que recibirían su fondo previsional en caso fallezca sin dejar herederos forzosos. La propuesta agilizaría la transferencia de los fondos previsionales a los beneficiarios frente a la alternativa de la preparación de un testamento.

- Con respecto a la propuesta de permitir que, en el caso que el afiliado no designe a ningún beneficiario, la AFP, de oficio, inicie el tramite previsto en el artículo 830 del Código Civil para adjudicar el 100 por ciento de los fondos previsionales acumulados no sería viable debido a que la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP no puede implementar la repartición del saldo restante de la CIC del pensionista fallecido entre los demás afiliados a su AFP, porque en cualquier momento podría aparecer un heredero que reclame el fondo.

5.13 Defensoría del Pueblo-DP

Mediante el Oficio N° 0253-2023-DP/PAD, de fecha 23 de mayo de 2023, la Defensoría del Pueblo formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR, manifiesta lo siguiente:

- En este sentido, teniendo en cuenta que los principales problemas que afrontan los sistemas de pensiones son estructurales, la Defensoría del Pueblo opina que debe priorizarse el debate congresal y público referente a las propuestas de reformas estructurales o integrales cuya elaboración se ha venido encomendando a diferentes comisiones estatales, las cuales han tenido por objetivo lograr la ampliación efectiva de la cobertura de protección, así como la mejora de las prestaciones. Es necesario señalar que en el análisis estructural de los sistemas de pensiones en el Perú tendrán cabida diversas iniciativas, como aquella que busca abrir el mercado previsional privado al sistema financiero.

5.14 Superintendencia de Banca, Seguro y AFP – SBS

Mediante Oficio Nº 61924-2021-SBS, de fecha 22 de diciembre de 2021,la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adjunta el Informe Conjunto Nº 00138-2021-SBS del Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, el cual menciona estar en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 551/2021-CR, dado que incorpora disposiciones que podrían contravenir el marco jurídico establecido en la Constitución Política del Perú y sus leyes,

como por ejemplo, la posible apropiación de los recursos ahorrados por cada afiliado en el SPP al amparo de la aplicación del principio de solidaridad. Asimismo, se considera que el objetivo de toda reforma pensionaria debe ser mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzado con bases sólidas y respetando la propiedad y el ahorro de todos los afiliados.

Mediante el Oficio N° 017644-2022-SBS, de fecha 3 de mayo de 2023, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones – SBS formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 1306/2021-CR, manifestando lo siguiente:

- Tomando en consideración lo señalado en la sección IV del presente informe, las Superintendencias Adjuntas que suscriben el presente informe, opinan que sería necesario contar con mayores precisiones y elementos de análisis respecto del Proyecto de Ley N° 1306/2021-CR, tomando en cuenta el sentido de protección social para la vejez que soporta el sistema previsional. Por lo tanto, debería conllevar a una reflexión en términos de los objetivos de política pública que, sobre la materia, debería tener una sociedad moderna en vías de desarrollo y en el marco de las instituciones que mitigan dichos riesgos en la seguridad social en pensiones.
- Sin perjuicio de las observaciones presentadas previamente y tal como se menciona en el informe, se recomienda que esta medida sea puesta a consideración del MEF, a fin de solicitar la evaluación de sus impactos en los compromisos fiscales del Estado peruano y el Tesoro Público. Adicionalmente, también se considera necesario contar con la opinión del Ministerio de Salud, respecto de las implicancias de la evaluación, examen, procesamiento, conservación, y declaratoria de apto de la placenta, en términos de costos; así como de las condiciones que deberán presentar las entidades que se encarguen del servicio de seguridad, conservación, almacenamiento, distribución y comercialización de manera que se asegure el cumplimiento de estándares mínimos que requiera el tratamiento de la placenta

Mediante Oficio N° 18671-2022-SBS, de fecha 9 de mayo de 2022, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adjunta el Informe Conjunto N° 00087-2022-SBS del Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, en la cual considera, las medidas propuestas deben ser evaluadas desde un enfoque integral y no de forma aislada a los sistemas previsionales vigentes en el Perú; con la finalidad de desarrollar un sistema de seguridad social integral, coordinado y sostenible en el tiempo, que proteja a todos los ciudadanos ante los diversos riesgos sociales, incluyendo los riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia. En consecuencia, se recomienda contar con la opinión del MEF para el Proyecto de Ley 344/2021-CR.

Mediante oficio N° 20331-2022-SBS, de fecha 18 de mayo de 2022,la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP mediante el cual adjunta el Informe N° 00105-2022-SBS, elaborado por el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica y el Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, están en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 1356/2021-CR, dado que el modelo planteado deja de lado el objetivo primordial de un sistema de pensiones, que es reducir la pobreza en la vejez, dejando de lado a aquellas personas que no cuentan con capacidad de ahorrar para su vejez ni acceder como trabajadores a un mercado laboral formal. Asimismo, se sugiere revaluar la necesidad de crear un nuevo sistema de pensiones complementario, tomando en cuenta los estudios sobre el impacto de las políticas tributarias para fomentar los ahorros para la jubilación.

Mediante Oficio N° 21941-2022-SBS, de fecha 30 de mayo de 2022, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adjunta el Informe Conjunto N° 00115-2022-SBS del Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, el cual menciona estar en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 1513/2021-CR, Ley que autoriza a entidades del sistema financiero la apertura de cuentas previsionales, toda vez que no cumple con el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Además, el proyecto legislativo conllevaría serios perjuicios a los afiliados en lo que corresponde a la gestión de sus recursos bajo una trayectoria de largo

plazo, al incorporar riesgos propios del sistema financiero. Adicionalmente, se considera que las propuestas que impliquen el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones, deberían formar parte de una reforma integral cuyo objetivo sea mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzado con bases sólidas y respetando la propiedad y el ahorro de todos los afiliados.

Mediante oficio N° 26471-2022-SBS, de fecha 28 de junio de 2022, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, consideran que sobre el Proyecto de Ley N° 1595/2021-CR, no tienen competencia para emitir opinión sobre aspectos vinculados al uso de los recursos provenientes de partidas presupuestarias, ni sobre aspectos vinculados a la incorporación de trabajadores al SNP y el acceso a beneficios pensionarios dentro de dicho sistema de pensiones, al no encontrarse dentro de su ámbito de supervisión.

Mediante oficio N° 28333-2022-SBS, de fecha 08 de julio de 2022, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, adjunta el Informe Conjunto N° 00153-2022-SBS, consideran su desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 2110/2021-CR, dado que no cumple con el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Además, el proyecto legislativo conllevaría serios perjuicios a los afiliados en lo que corresponde a la gestión de sus recursos bajo una trayectoria de largo plazo, al incorporar un esquema de comisión de corto plazo.

Mediante oficio N° 39520-2022-SBS, de fecha 16 de septiembre de 2022, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, adjunta el Informe Conjunto N° 194-2022-SBS, consideran su desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 2278/2021-CR, dado que no cumple con el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Además, el proyecto legislativo conllevaría serios perjuicios a los afiliados en lo que corresponde a la gestión de sus recursos bajo una trayectoria de largo plazo, al incorporar un esquema de comisión de corto plazo.

Mediante oficio N° 48217-2022-SBS, de fecha 7 de noviembre de 2022,la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se adjunta el Informe Nº 00235-2022-SBS, elaborado por el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica y el Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, emitieron opinión no favorable respecto del Proyecto de Ley N° 2728/2021-CR, dado que no cumple con el objetivo de proveer una adecuada protección de los potenciales beneficiarios para el otorgamiento de pensión de sobrevivencia y a falta de éstos, a los herederos del afiliado fallecido en su derecho a la petición de herencia. Asimismo, se considera que las propuestas que impliquen el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones deberían formar parte de una reforma integral cuyo objetivo sea mejorar la protección social al trabajador y de su grupo familiar (beneficiarios o herederos, según corresponda), mediante la consolidación de los avances ya alcanzado con bases sólidas y respetando la propiedad y el ahorro de todos y cada uno de los afiliados al SPP.

Mediante Oficio Nº 50154-2023-SBS, de fecha 21 de noviembre de 2022,la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adjunta el Informe Conjunto Nº 00239-2022-SBS del Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, en el cual emiten opinión no favorable sobre el Proyecto de Ley N° 3133/2022- CR, Ley que propone incorporar precisiones al artículo 2 de la Ley Nº 30478, Ley que modifica el artículo 40 y la Vigésima Cuarta Disposición Final y Transitoria del TUO de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones., dado que en su formulación no se han considerado principios que contribuyen al correcto diseño de un sistema de pensiones que sea sostenible y que brinde una adecuada cobertura y protección en la etapa de la vejez. Finalmente, señalan que las propuestas legislativas que implican el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones deben formar parte de una reforma integrai cuyo objetivo sea mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzados y con bases sólidas que aseguren la protección de los afiliados ante los riegos de longevidad.

Mediante Oficio Nº 51787-2022-SBS, de fecha 29 de noviembre de 2022,la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adjunta el Informe Conjunto Nº 00251-2022-

SBS del Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, en el cual emiten opinión no favorable sobre el Proyecto de Ley N° 2880/2022- CR, Ley que modifica el artículo 24 del Decreto Ley Nº 25897, que crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, para establecer las pérdidas entre afiliados y AFP, debido que este conllevaría efectos perjudiciales, en términos de una menor rentabilidad de los fondos de pensiones, y por tanto una menor pensión esperada para los futuros pensionistas del SPP; y además, estaría erróneamente fundamentado en un escenario de "pérdidas" en los Fondos de Pensiones que, dada la evidencia empírica mostrada, no corresponden a la gestión realizada por las AFP en el largo plazo, Asimismo, señalan que la propuesta de cobro de comisiones estaría contraviniendo los alcances de lo dispuesto en Capítulo I, Principios Generales del Título III del Régimen Económico de la Constitución Política del Perú, en la medida que afecta los principios sobre los que reposa un sistema de economía social de mercado, respecto de la libre iniciativa de los agentes económicos en la determinación de los precios de los bienes y servicios.

Mediante oficio N° 52808-2022-SBS, de fecha 07 de diciembre de 2022, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, adjunta el Informe Conjunto N° 265-2022-SBS, consideran su desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 2718/2021-CR, dado que dificulta la toma de decisiones por parte de los afiliados y presenta alternativas que muestran desventajas en su aplicación. Resulta importante señalar que las propuestas que impliquen el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones deberían formar parte de una reforma integral cuyo objetivo sea mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzados y con bases sólidas que aseguren la protección de los afiliados ante los riegos de longevidad.

Mediante el Oficio N° 52811-2022-SBS, de fecha 7 de diciembre de 2022, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones – SBS formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 3341/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1. Mediante Decreto Supremo N° 081-2022-PCM, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 10.07.2022, se creó la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de elaborar los Informes Técnicos que contengan una evaluación del Sistema Previsional Peruano, así como una propuesta normativa para crear el nuevo Sistema de Pensiones, sin afectar la sostenibilidad fiscal; la cual se encuentra vigente hasta el 22.01.2023. Dicha comisión está integrada por representantes de las siguientes entidades: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).
2. Superintendencia considera que la iniciativa legislativa recogida en el Proyecto de Ley N° 3341/2022-CR ya se encuentra comprendida dentro de las funciones y alcances de la citada Comisión Multisectorial.

Mediante oficio N° 54147-2022-SBS, de fecha 16 de diciembre de 2022, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP mediante el cual adjunta el Informe N° 00267-2022-SBS, elaborado por el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica y el Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, emitieron una opinión no favorable respecto del Proyecto de Ley N° 3227/2022-CR, que propone que la Ley de Reforma Integral del Sistema de Pensiones, sea puesta a consideración del MEF, a fin de solicitar la evaluación de sus impactos en los compromisos fiscales del Estado peruano y el Tesoro Público; así como de su sostenibilidad financiera. Asimismo, se considera que las propuestas que impliquen el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones deberían formar parte de una reforma integral cuyo objetivo sea mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzados y con bases sólidas que aseguren la protección de los afiliados ante los riegos de longevidad.

Mediante el Oficio N° 07851-2023-SBS, de fecha 17 de febrero de 2023, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones – SBS formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 3717/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1. En razón de los argumentos expuestos en el presente Informe, las Superintendencias Adjuntas que lo suscriben opinan de modo no favorable respecto del Proyecto de Ley, debido a que la flexibilización de otros requisitos de acceso al REJA y JAO, además de la reducción de edad a los 50 años, dada por la Ley N° 31332, tendría una serie de efectos adversos en el SPP, como el deterioro de la cobertura de pensiones, y el agravamiento de los efectos en la rentabilidad de los fondos de pensiones, en un contexto a la baja en la rentabilidad de las inversiones de los fondos, en desmedro de los recursos acumulados en la CIC de los afiliados del SPP.
2. Asimismo, se considera que no es viable que los pagos por concepto del seguro previsional que el afiliado hubiera realizado con anterioridad a la presentación de una solicitud para el acceso al régimen JAO o REJA, se devuelvan al afiliado en caso logre acceder a una jubilación por cualquiera de estos regímenes; toda vez que, al ser el seguro tarificado bajo un modelo de riesgo colectivo y dado que las primas pagadas por el afiliado sirvieron para cubrir el riesgo de invalidez y sobrevivencia de contratos, incluso, que no se encuentran vigentes, conllevarían a que las empresas de seguros no cuenten con los recursos suficientes para efectuar dicha devolución y/o se podría comprometer los recursos que estas tienen destinados para el pago de las indemnizaciones de aquellos siniestros de los afiliados por los que hubiera que realizar el pago del Aporte Adicional a causa de un siniestro de invalidez o sobrevivencia. Además, lo propuesto contravendría lo establecido en el artículo 103 de Constitución Política del Perú y el artículo 2 de la Ley del Contrato de Seguro.

Mediante Oficio N° 11234-2023-SBS, de fecha 10 de marzo de 2023, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adjunta el Informe Conjunto N° 00029-2023-SBS del Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, emite opinión sobre el Proyecto de Ley N° 4200/2022- CR, Ley que modifica el artículo 40 del TUO de la Ley del Sistema Privado de pensiones, autorizando la disponibilidad de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los Fondos de AFP señalando que la propuesta legislativa contraviene el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez,

invalidez y fallecimiento. Asimismo, contraviene con los principios del Convenio 102, Marco de Seguridad Social celebrado por Perú con la OIT, menoscabando el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Por otro lado, señala que uno d ellos impactos para los afiliados y el fondo de pensiones sería de aumentar el riesgo de caer en situación de pobreza en la vejez, así como también a un deterioro de la cobertura previsional que tiene el país.

Mediante oficio N° 16247-2022-SBS, de fecha 10 de abril de 2023,la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP mediante el cual adjunta el Informe Nº 00044-2023-SBS, elaborado por el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica y el Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, emitieron una opinión no favorable respecto del Proyecto de Ley N° 4087/2022-CR, por cuanto no cumple con el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Además, el proyecto legislativo conllevaría serios perjuicios a los afiliados en lo que corresponde a la gestión de sus recursos bajo una trayectoria de largo plazo, al incorporar un esquema de comisión de corto plazo. Asimismo, la iniciativa legislativa resulta contraria a los principios que sustentan tal separación patrimonial entre los Fondos y Administradora, establecido a nivel de ley, y plantea una situación que no corresponde con el marco jurídico establecido en la Constitución Política del Perú.

Mediante Oficio Nº 20081-2023-SBS, de fecha 27 de abril de 2023,la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adjunta el Informe Conjunto Nº 00052-2023-SBS del Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, en la cual consideran estar en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 4366/2022-CR, dado que este conllevaría efectos perjudiciales, en términos de una menor rentabilidad de los fondos de pensiones, y por tanto una menor pensión esperada para los futuros pensionistas del SPP; y además, estaría erróneamente fundamentado en un escenario de "pérdidas" en los Fondos de Pensiones que, dada la evidencia empírica mostrada, no corresponden a la gestión realizada por las AFP en el largo plazo. Por otro lado, señalan que las propuestas legislativas que implican el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones deben formar parte de una reforma integral cuyo

objetivo sea mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzados y con bases sólidas que aseguren la protección de los afiliados ante los riegos de longevidad.

Mediante el Oficio N° 26518-2023-SBS, de fecha 26 de mayo de 2023, la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4528/2022-CR manifiesta lo siguiente:

1. Esta Superintendencia emite opinión no favorable sobre el Proyecto de Ley N° 4528/2022-CR dado que generaría efectos perjudiciales, en términos de acumulación y rentabilidad de los fondos de pensiones, a los futuros pensionistas del SPP y, además, porque estaría fundamentado en objetivos que no guardan relación alguna con el objetivo de protección ante los riesgos de la vejez. Todo ello, dentro de un escenario que estaría distorsionando el sentido del ahorro forzoso que sustenta la naturaleza de los aportes que realizan los trabajadores con fin jubilatorio bajo administración de CIC por parte de las AFP.
2. Se considera que la propuesta legislativa contraviene el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Asimismo, contraviene con los principios del Convenio 102, Marco de Seguridad Social celebrado por Perú con la OIT, menoscabando el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento.
3. Resulta importante señalar que las propuestas que impliquen el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones deberían formar parte de una reforma integral cuyo objetivo sea mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzados y con bases sólidas que aseguren la protección de los afiliados ante los riegos de longevidad.

Mediante el Oficio N° 27530-2023-SBS, de fecha 31 de mayo de 2023, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones – SBS formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4379/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1. La Superintendencia de banca, Seguros y AFP está en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 4379-2022/CR, dado que no cumple con el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Además, el proyecto legislativo conllevaría serios perjuicios a los afiliados en lo que corresponde a la gestión de sus recursos bajo una trayectoria de largo plazo, al incorporar riesgos propios del sistema financiero.
2. El Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, dispuso el fin del Estado de Emergencia Nacional declarado en el año 2020 como situación excepcional por las circunstancias que venían afectando la vida y la salud de las personas por efecto de la Covid-19, consideran que se estaría contraviniendo el artículo 12 de la Constitución Política del Perú, referido a la intangibilidad de los fondos de pensiones, dado que ello tiene por propósito asegurar que los fondos y las reservas de la seguridad social no sean destinados a fines distintos del aseguramiento y la garantía del pago de una pensión, para otorgar protección ante los riesgos sociales de la vejez, invalidez y fallecimiento
3. Las propuestas que impliquen el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones deberían formar parte de una reforma integral cuyo objetivo sea mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzados y con bases sólidas que aseguren la protección de los afiliados ante los riegos de longevidad.

Mediante el Oficio N° 29003-2023-SBS, de fecha 7 de junio de 2023, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones – SBS formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4452/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP está en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 4452/2022-CR, dado que no establece las condiciones de acceso y requisitos que justifiquen el adelanto de la edad de jubilación legal, así como no justifica que dicha labor pesquera sea asimilable a los trabajos de riesgo como se menciona en su exposición de motivos. Adicionalmente, el proyecto legislativo implicaría el uso de recursos del Tesoro Público; por lo cual,

dado los potenciales impactos fiscales, se requiere confirmar estos y contar con la opinión del MEF, toda vez que la propuesta legislativa podría contravenir las restricciones en el gasto público que se establecen en el artículo 79° de la Constitución Política del Perú.

2. Sin perjuicio de lo anterior, el acceso a una jubilación anticipada permitiría al afiliado optar entre retirar parte de sus recursos hasta un 95,5% del saldo de su CIC o cotizar una pensión en el SPP. En los casos de retiro, el afiliado pesquero tendrá que distribuir sus recursos entre una mayor cantidad de años, lo que reducirá su calidad de vida durante los años de vejez.

Mediante el Oficio N° 33539-2023-SBS, de fecha 23 de junio de 2023, la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR, manifiesta que, están en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 4743/2022-CR,

1. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP está en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 4743-2022/CR, dado que no cumple con el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Además, el proyecto legislativo conllevaría serios perjuicios a los afiliados en lo que corresponde a la gestión de sus recursos bajo una trayectoria de largo plazo, al incorporar riesgos propios del sistema financiero.
2. Las propuestas que impliquen el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones deberían formar parte de una reforma integral cuyo objetivo sea mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzados y con bases sólidas que aseguren la protección de los afiliados ante los riegos de longevidad.
3. Considerando los potenciales impactos fiscales, se recomienda contar con la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), toda vez que la propuesta legislativa podría contravenir las restricciones en el gasto público que se establecen en el artículo 79° de la Constitución Política del Perú.

Mediante el Oficio N° 34910-2023-SBS, de fecha 3 de julio de 2023, la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4907/2022-CR, manifiesta que, están en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 4907/2022-CR,

1. El Proyecto de Ley debe contemplar mayores precisiones respecto de los requisitos para acceder al beneficio del capital semilla, incluyendo aquellos que deben cumplirse en la edad de retiro, toda vez que deben estar acordes con el objetivo de poder acceder a una pensión de jubilación. Adicionalmente, es necesario que el Proyecto de Ley asegure el establecimiento de un adecuado marco de protección respecto de los beneficios previsionales a otorgar y la población objetivo materia de tuición correspondiente; y, evaluar la factibilidad de implementar una estructura de administración de la empresa a cargo, aspecto que no ha sido desarrollado en el precitado Proyecto de Ley.

Mediante el Oficio N° 38280-2023-SBS, de fecha 17 de julio de 2023, la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4864/2022-CR, manifiesta que, están en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 4864/2022-CR,

1. El proyecto de ley materia de análisis no cumple con el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Asimismo, se considera que se estaría contraviniendo el artículo 12 de la Constitución Política del Perú, referido a la intangibilidad de los fondos de pensiones, dado que ello tiene por propósito asegurar que los fondos y las reservas de la seguridad social, producto del ahorro forzoso realizado por los afiliados a lo largo de su vida laboral activa, sean destinados a garantizar el pago de una pensión, para otorgar protección ante los riesgos sociales de la vejez, invalidez y fallecimiento.

Mediante el Oficio N° 61724-2023-SBS, de fecha 27 de octubre de 2023, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones

– SBS formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5795/2023-CR, manifestando lo siguiente:

1. El proyecto de ley materia de análisis no cumple con el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Asimismo, al haberse dictado mediante Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, el fin del Estado de Emergencia Nacional que se declaró en el año 2020 como situación excepcional por las circunstancias que venían afectando la vida y la salud de las personas por efecto de la Covid19, se considera que se estaría contraviniendo el artículo 12 de la Constitución Política del Perú, referido a la intangibilidad de los fondos de pensiones, dado que ello tiene por propósito asegurar que los fondos y las reservas de la seguridad social no sean destinados a fines distintos del aseguramiento y la garantía del pago de una pensión, para otorgar protección ante los riesgos sociales de la vejez, invalidez y fallecimiento.
2. Debe considerarse los siguientes impactos tanto para los afiliados y el fondo de pensiones:
    - La aprobación de una medida como la propuesta implicaría un devolver la suma de S/ 114.4 mil millones (100% del total del fondo de pensiones). En consecuencia, se desnaturalizaría el objetivo previsional del sistema pensionario del Perú, que es otorgar pensiones para dar protección ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento.
    - Aumenta el riesgo de caer en una situación de pobreza en la vejez, pues la devolución de los fondos de las CIC de los afiliados que se efectúe hoy elimina la futura pensión que recibiría al momento de la jubilación. Ello, conllevará también a un deterioro de la cobertura previsional que tiene el país.
    - El acceso temprano a los fondos de pensiones menoscaba el servicio de las prestaciones de salud, ya que al reducir el ahorro jubilatorio ello impacta en pago del porcentaje establecido en la Ley para Essalud.
    - Para evaluar el impacto en las variables macroeconómicas y en las cuentas fiscales, se sugiere solicitar la opinión del MEF.
    - Asimismo, las propuestas que impliquen la reestructuración o modificación de los sistemas de pensiones deberían ser parte de una reforma integral cuyo

objetivo sea mejorar la protección social del trabajador. Esto se lograría consolidando los avances ya alcanzados con una base sólida y respetando la propiedad y el ahorro de todos los afiliados.

- Por los motivos mencionados anteriormente, esta Superintendencia está en desacuerdo con propuestas legislativas que impliquen una derogación genérica del DL 25897 y la consecuente devolución íntegra de los fondos de las CIC a los afiliados, considerando que atentan contra con el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos sociales de la vejez, invalidez y fallecimiento.

Mediante el Oficio N° 59961-2023-SBS, de fecha 19 de octubre de 2023, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones – SBS formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5965/2023-CR, manifestando lo siguiente:

> El Sistema Nacional de Pensiones es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). En ese sentido, si bien esta Superintendencia comparte el interés por ampliar el alcance de los beneficios pensionarios a la mayor cantidad de ciudadanos peruanos que lo requieran, a fin de salvaguardar el derecho de toda persona a la seguridad social, frente a una contingencia como la vejez; no corresponde emitir un pronunciamiento respecto al alcance del referido Proyecto de Ley, toda vez que no se encuentra en el ámbito de nuestra competencia.

Mediante el Oficio N° 69630-2023-SBS, de fecha 13 de diciembre de 2023, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones – SBS formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 5929/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP está en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 5929-2023/CR, dado que no cumple con el objetivo de proveer una adecuada protección de la población ante los riesgos de la vejez, invalidez y

fallecimiento. En particular, el diseño del financiamiento de las pensiones de jubilación (tasa de aporte no mayor a 10% de la remuneración y edad de jubilación a los 60 años) e invalidez planteado en la propuesta legislativa terminaría perjudicando al afiliado.

2. La propuesta de establecer como gestores de fondos de pensiones a entidades del sistema financiero como bancos y compañías de seguros, y AFP Pública, puede generar distorsiones en la estructura organizacional, gestión de riesgos, rentabilidad y solvencia de dichas empresas, repercutiendo de este modo en el binomio riesgo-rentabilidad del afiliado. Asimismo, podría generar perjuicios sobre el SPP.
3. Las propuestas que impliquen el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones deberían formar parte de una reforma integral cuyo objetivo sea mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzados y con bases sólidas que aseguren la protección de los afiliados ante los riegos de longevidad.
4. Considerando los potenciales impactos fiscales, se recomienda contar con la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, toda vez que la propuesta legislativa podría contravenir las restricciones en el gasto público que se establecen en el artículo 79° de la Constitución Política del Perú. Asimismo, para el desarrollo de programas sobre cultura previsional, se sugiere solicitar la opinión al MINEDU.

Mediante el Oficio N° 00797-2024-SBS, de fecha 8 de enero de 2024, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones – SBS formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 6359/2021-CR, manifestando lo siguiente: Opinión no no favorable respecto Proyecto de Ley N° 6359/2023-CR, toda vez que contravendría los principios de seguridad social previstos a nivel constitucional y, a su vez, pondría en riesgo el objetivo de proveer una adecuada protección de los potenciales beneficiarios para el otorgamiento de pensión de sobrevivencia y a falta de éstos, a los herederos del afiliado fallecido en su derecho a la herencia.

Mediante el Oficio N° 09946-2024-SBS, de fecha 16 de febrero de 2024, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones – SBS formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 6369/2023-CR, manifestando lo siguiente:

1. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP está en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 6369/2023-CR, por cuanto en su formulación no consideran aspectos fundamentales para el correcto desarrollo de un sistema de pensiones que tiene por objetivo brindar mecanismos de protección a los afiliados en la vejez.
2. La eliminación de los requisitos mínimos de aporte para desafiliarse del SPP, , no regula nuevos requisitos de acceso al SNP una vez realizada la desafiliación del SPP, por lo que no se garantiza una pensión en el sistema público, lo que vulneraría directamente el derecho a pensión de los afiliados.
3. La propuesta legislativa materia de análisis podría afectar los compromisos fiscales del Estado y ocasionar un costo financiero adicional al Tesoro Público, por lo que resultaría conveniente contar con la evaluación y opinión del Ministerio de Economía y Finanzas.

5.15 Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones – AAFP

Mediante Carta Pres-0599-2022, de fecha 23 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 344/2021-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-0600-2022, de fecha 23 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 551/2021-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-0605-2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 912/2021-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-0611-2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 1513/2021-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas

parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-0613-2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 2047/2021-CR, plantea mejorar la calidad de vida de los peruanos y garantizar la protección de la población durante su vida laboral y en su vejez, considerando valiosas todas las propuestas legislativas destinadas a mejorar el Sistema Privado de Pensiones (SPP) a través de distintas fórmulas, considerando los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-0615-2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 2110/2021-CR, plantea mejorar la calidad de vida de los peruanos y garantizar la protección de la población durante su vida laboral y en su vejez, considerando valiosas todas las propuestas legislativas destinadas a mejorar el Sistema Privado de Pensiones (SPP) a través de distintas fórmulas, considerando los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible

e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-0616-2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 2278/2021-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-0617-2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 2659/2021-CR, plantea mejorar la calidad de vida de los peruanos y garantizar la protección de la población durante su vida laboral y en su vejez, considerando valiosas todas las propuestas legislativas destinadas a mejorar el Sistema Privado de Pensiones (SPP) a través de distintas fórmulas, considerando los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-0619-2022, de fecha 29 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 2718/2021-CR, plantea mejorar la calidad de vida de los peruanos y garantizar la protección de la población durante su vida laboral y en su vejez, considerando valiosas

todas las propuestas legislativas destinadas a mejorar el Sistema Privado de Pensiones (SPP) a través de distintas fórmulas, considerando los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-0620-2022, de fecha 29 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 2728/2021-CR, plantea mejorar la calidad de vida de los peruanos y garantizar la protección de la población durante su vida laboral y en su vejez, considerando valiosas todas las propuestas legislativas destinadas a mejorar el Sistema Privado de Pensiones (SPP) a través de distintas fórmulas, considerando los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-0623-2022, de fecha 29 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 3227/2022-CR, plantea reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante el Oficio Pres-0625-2022, de fecha 29 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones - AAFP formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 3341/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1. Los Proyectos de Ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos.
2. Los Proyectos de Ley que plantean la reforma de pensiones deben de tener los siguientes lineamientos: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-0111-2023, de fecha 10 de mayo de 2023, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 4087/2022-CR, considera que toda propuesta que modifique la estructura de comisiones del SPP debe formar parte de una discusión técnica más amplia, al ser un tema complejo, cuyo diseño debe preservar la competencia en beneficio de los afiliados, por lo cual recomendamos que la misma deba formar parte de un proceso ordenado de reforma integral del sistema de pensiones peruano, que en su construcción debe considerar aspectos relacionados al mercado laboral y la economía nacional.

Mediante Carta Pres-0608-2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 1306/2021-CR, consideramos que esta iniciativa legislativa, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda

propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-0609-2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 1356/2021-CR, planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-622-2022, de fecha 29 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 3133/2022-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-621-2022, de fecha 29 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 2880/2022-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-0114-2023, de fecha 10 de mayo de 2023, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 4528/2022-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

Mediante Carta Pres-0078-2023, de fecha 21 de marzo de 2023, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera que el presente Proyecto de Ley 4200/2022-CR significa una posibilidad de retiro permanente del fondo de pensiones, propiciado por el sobreendeudamiento de los afiliados, en desmedro de su ahorro para la

jubilación. Sobre esa base, considera que el presente proyecto de ley no soluciona el problema de sobreendeudamiento de los afiliados al SPP.

Mediante Pres-0222-2023, de fecha 27 de junio de 2023, la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 04864/2022-CR.

Mediante Pres-0078/2023, de fecha 21 de marzo de 2023, la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones – AAFP formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4200/2022-CR.

Manifestando lo siguiente:

1. Contravención a Sentencia del Tribunal Constitucional: El proyecto de ley contradice la última sentencia del Tribunal Constitucional, que establece que los retiros de fondos deben tener un contexto de excepcionalidad, como lo fue la pandemia del COVID-19.
2. Protección de Ahorros y rol fiduciario de las AFP: El proyecto afecta la protección de ahorros al desvirtuar el rol fiduciario de las AFP, que deben maximizar los retornos de los fondos con menor riesgo, garantizando pensiones dignas ante eventos de invalidez, sobrevivencia o vejez.
3. Derecho a la Seguridad Social: La propuesta desnaturaliza el objetivo de la seguridad social, vulnerando el derecho a una pensión digna y comprometiendo el acceso a una pensión mínima, contraviniendo la Constitución y acuerdos internacionales.
4. Intangibilidad de los Fondos: El carácter intangible de los fondos de seguridad social es una garantía constitucional, y cualquier desarrollo legislativo que permita el retiro contravendría la prohibición constitucional.
5. Incompatibilidad con Convenio 102 de la OIT: El proyecto atenta contra los principios del Convenio 102 de la OIT, comprometiendo la cobertura de supervivencia más allá de una edad prescrita y afectando la base material de las pensiones.

6. Vulneración del Derecho a la Salud: La posibilidad de retiro pone en riesgo el acceso a la salud de los afiliados, contraviniendo el derecho constitucional a la protección de la salud y generando un riesgo para el afiliado y su grupo familiar.
7. Impacto en el Déficit Fiscal: El acceso a nuevos retiros generaría un pasivo contingente al Estado, aumentando las obligaciones estatales y contribuyendo al déficit fiscal.
8. Reducción de Rentabilidad: La propuesta obligaría a las AFP a recomponer inversiones, reduciendo la rentabilidad del sistema al cambiar instrumentos de largo plazo por otros de corto plazo.
9. Desprotección del Grupo Familiar: Un séptimo retiro comprometería la protección del grupo familiar, afectando las pensiones de sobrevivencia y la protección ante la invalidez.
10. Contravención a la Reforma del Sistema de Pensiones: La aprobación de más retiros contradice la necesidad de una reforma integral del sistema de pensiones, como exhorta la sentencia del Tribunal Constitucional, poniendo en riesgo la financiación de la vejez y la intangibilidad de las CIC.
11. Materializa las perdidas, es importante mencionar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)6 y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)7 recomiendan que el acceso a los fondos de pensiones debería ser una herramienta de última instancia, y en el contexto de una recesión, debería evitarse cristalizar las pérdidas asociadas a la volatilidad del mercado financiero.

Mediante Pres-0113/2023, de fecha 10 de mayo de 2023, la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones – AAFP formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4379/2022-CR.

Mediante Pres-0416/2023, de fecha 1 de diciembre de 2023, la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones – AAFP formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 6369/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1. El presente proyecto de ley, a través de las medidas que busca aplicar, estaría afectando un beneficio consolidado por el tiempo entre los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) en relación con su derecho a una pensión. Este derecho es inherente a la persona y está reconocido por nuestra Carta Magna, en sus artículos 10 °, 11° y 12°.
2. Nuestro ordenamiento constitucional reconoce el derecho a la salud, estableciendo que toda persona tiene derecho a la protección de su salud, y que el Estado es responsable de tutelar e implementar la política nacional de salud pública para su acceso universal por parte de los ciudadanos. Con la posibilidad de traslado a la ONP, sin requisitos, salvo la ausencia de retiros extraordinarios, se pone en riesgo el derecho a la salud de los afiliados que no cumplan con los años mínimos para obtener pensión en la ONP porque tampoco podrán acceder a las prestaciones de salud del Seguro Social de Salud (EsSalud). Siendo así, el afiliado no solo se ve despojado de la propiedad de sus ahorros y derecho a acceder a una pensión, sino también se pone en riesgo su salud, y la de su grupo familiar, al no permitir que pueda acceder a las atenciones inherentes a todo asegurado regular del régimen contributivo de EsSalud, contraviniendo los artículos 7° y 9° de la Constitución Política del Perú.

Mediante Pres-0059/2024, de fecha 22 de febrero de 2024, la Asociación Administradoras de Fondo de Pensiones – AAFP formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 6120/2023-PE, manifestando lo siguiente:

Creemos que la propuesta aborda tópicos relevantes para la reforma del sistema, como una pensión mínima en todo el sistema contributivo y la ampliación de mercado para nuevos competidos en igualdad de condiciones, pero consideramos que en ella hay cuatro puntos que son esenciales considerar para el desarrollo saludable y sostenible del sistema previsional. Estos son:

1. Mantener la libertad de elección de los afiliados en un sistema universal; respecto del Artículo 16: Acceso al Pilar Contributivo, que impone la afiliación automática a

los 18 años al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), en caso de no manifestar su voluntad de pertenecer a alguno de los dos sistemas existentes, consideramos que el derecho a elegir la afiliación debe darse cuando el ciudadano inicie su vida laboral formal, momento en que tiene acceso al boletín informativo de los sistemas previsionales.

2. Equiparar las condiciones de traspaso entre sistemas; Artículo 25: Traslado entre el SNP y SPP. Si bien dicho articulado dispone el libre traslado entre sistemas, las condiciones establecidas son desiguales. Para equiparar las condiciones y dar una real libertad de traslado entre sistemas, es necesario:
    I. Reconocer los aportes realizados a la ONP a través de un Bono de Reconocimiento (BdR).
    II. Informar debidamente a los adolescentes las condiciones que requiere el sistema de reparto para obtener una pensión, en vista de que solo se puede acceder a parte de la pensión mínima establecida por ley desde los 10 años de aporte.
3. Evitar el impacto negativo en la competencia, producto de la Sétima Disposición Complementaria Final. Comisión sobre la remuneración en el SPP, que crea la licitación de los afiliados existentes a la comisión por flujo, genera una subasta de fondos al mejor postor.

    Si bien una de las finalidades de la propuesta es fomentar la competencia en favor de los afiliados, la licitación del stock de afiliados con comisión por flujo contraviene su mismo propósito debido a que al concentrar a los afiliados en una sola administradora, genera un alto riesgo de salida de las demás administradoras no ganadoras de la licitación, limitando y desincentivando el ingreso de nuevas gestoras de fondos.
4. Evitar el impacto negativo en la rentabilidad de los afiliados, producto de la Sétima Disposición Complementaria Final. Comisión sobre la remuneración en el SPP, que crea la licitación de los afiliados existentes a la comisión por flujo, genera una subasta de fondos al mejor postor. La licitación afecta negativamente la rentabilidad en los fondos de pensiones por el punto mencionado en el numeral 3) y porque hacerla efectiva supondría la liquidación de los activos invertidos en el fondo de

manera anticipada, con el correspondiente impacto negativo en sus precios, debido a que este proceso resultaría necesario para trasladar los fondos de los afiliados a la administradora ganadora de la licitación.

5.16 Sociedad Nacional de Industrias – SNI

Mediante la Carta N° CPA/SNI-008-2023, de fecha 8 de febrero de 2023, la Sociedad Nacional de Industrias - SNP formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 3436/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1) De la exposición de motivos del citado Proyecto de Ley, se advierte que el aporte mencionado en los antecedentes se haría extensivo tanto a las plantas procesadoras de consumo humano directo como a las plantas procesadoras de consumo humano indirecto, lo cual contraviene el objeto para el cual se dieron estas normas desde su origen, orientado exclusivamente a la actividad de procesamiento para consumo humano indirecto.
2) En tal sentido, somos conscientes de la realidad que atraviesa el actual sistema previsional peruano, tanto público como privado, el cual no ha logrado los objetivos para los cuales fue creado, y al estar desintegrados resultan inaccesibles para gran parte de la población que realiza sus actividades económicas de manera informal; por lo que, resulta pertinente tomar acciones sobre este problema que viene siendo postergado por décadas.

5.17 Sociedad Nacional de Pesquería – SNP

Mediante Carta N° PD.033.2023, de fecha 11 de abril de 2023, la Sociedad Nacional de Pesquería - SNP formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 3436/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1) El proyecto propone sin ningún sustento y análisis la instauración de un Aporte Social permanente para la Jubilación del Pescador Industrial, consistente en la obligación de que los titulares de los establecimientos industriales pesqueros realicen un aporte de $1.95 por TM de pescado descargado, y lo destinen al Fondo Extraordinario del Pescador (FEP) regulado por la Ley N° 30003. Así, de la revisión de la exposición de motivos de la propuesta normativa se evidencia una ausencia integral de información real y actual, así como de una debida motivación, análisis y sustento técnico.
2) La propuesta vulnera el principio de no confiscatoriedad previsto en el artículo 74° de la Constitución, ya que los titulares de los establecimientos industriales pesqueros -quienes son también titulares de las embarcaciones pesqueras- ya realizan aportes de similar naturaleza: (i) aporte obligatorio de los armadores a favor del FEP de S/ 3.92 por cada tonelada métrica de los recursos hidrobiológicos capturados y destinados al consumo humano indirecto o directo; y, (ii) aporte de 5% del monto de la remuneración asegurable del trabajador pesquero, destinado al Régimen Especial Pesquero.
3) Por lo expuesto podemos concluir que la propuesta vulnera el marco constitucional vigente, carece de un sustento técnico y motivación adecuada y en este sentido su aprobación resulta inviable.

Mediante el Oficio PD.034.2023, de fecha 12 de abril de 2023, la Sociedad Nacional de Pesquería - SNP formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4055/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1. El Proyecto de Ley propone la restitución indefinida del Aporte Social para la Jubilación Pesquera Industrial, consistente en la obligación de que los titulares de los establecimientos industriales pesqueros para consumo humano indirecto realicen un aporte de $1.95 por Tonelada Métrica (TM) de pescado descargado, y lo destinen al Fondo Extraordinario del Pescador.
2. Teniendo en consideración lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente N° 1473-2009-PA/TC, consideramos que el

Proyecto de Ley en realidad está creando un nuevo impuesto para los titulares de los establecimientos industriales, toda vez que genera una obligación de aporte sin que exista una contraprestación directa en favor del contribuyente. Al formular la creación de este impuesto, el Proyecto de Ley no respeta el principio de competencia en materia tributaria previsto en el artículo 79° de la Constitución, y contraviene también el principio de no confiscatoriedad previsto en el artículo 74° de la Constitución

3. A la fecha, los titulares de los establecimientos industriales pesqueros ya realizan aportes de similar naturaleza: (i) aporte obligatorio de los armadores a favor del FEP de S/ 3.92 por cada tonelada métrica de los recursos hidrobiológicos capturados y destinados al consumo humano indirecto o directo; y, (ii) aporte de 5% del monto de la remuneración asegurable del trabajador pesquero, destinado al REP. Por ello, obligar a realizar un tercer aporte no se justifica, más aún si, en el pasado, cuando este aporte fue creado de manera temporal, ello se justificó por la finalidad de garantizar la sostenibilidad de la jubilación de los pescadores comprendidos en la declaración de disolución y liquidación de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (en adelante, "CBSSP"); cuestión que hoy no se presenta.
4. Establecer tratamientos especiales para trabajadores de un sector económico sin un sustento adecuado de por medio contraviene el principio de igualdad. No se justifica un mayor tratamiento especial para este grupo de trabajadores si se tiene en cuenta que los trabajadores pesqueros pueden jubilarse desde los 55 años y tras haber acumulado 375 semanas contributivas de aportes (más de 7 años de trabajo efectivo), lo que los posiciona mejor frente al régimen de jubilación general.
5. La propuesta carece de una debida motivación y sustento técnico, ya que su exposición de motivos no responde a un cálculo actuarial y análisis económico en función a un contexto determinado que justifique la necesidad de restituir el aporte y, más aún, otorgarle carácter permanente. Asimismo, no se rige por los criterios de sostenibilidad financiera exigidos por la Constitución Política del Perú ni cuenta con un análisis costo-beneficio adecuado para introducir

modificaciones legales a regímenes pensionarios, especialmente si se trata de incrementar significativamente la carga tributaria de un sector económico.

Mediante el Carta PD.096.2023, de fecha 22 de setiembre de 2023, la Sociedad Nacional de Pesquería - SNP formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 3436/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1) Ninguna de las iniciativas legislativas que buscan mejorar la sostenibilidad del FEP o incrementar el nivel de las pensiones, han centrado la discusión en este punto que, a diferencia de los aportes, tiene el potencial de aumentar los fondos de manera exponencial y no distorsionan los mercados vinculados al mercado de trabajo de pescadores.
2) Por lo expuesto, podemos concluir que la propuesta carece de un sustento técnico y motivación adecuada, por lo que su aprobación resulta inviable recomendando su archivo.

5.18 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA - CCL

Mediante Carta N° P/ 036-03-2022/GL, vía electrónica, de fecha 03 de marzo de 2022, la Cámara de Comercio les parece loable la propuesta a través del Proyecto de Ley N° 1356/2021-CR, que propone que la Ley crea una fuente complementaria para financiar las pensiones individuales "Ahorro para mi Vejez", toda vez que pretende dotar o mejorar las pensiones de jubilación de la población, asegurando una vejez digna y sin cargar al Estado - o a la familia - las contingencias que produce la carencia de aportes previsionales.

Mediante Carta N° P/ 039-03-2023/GL de fecha 6 de marzo de 2023, La Cámara de Comercio de Lima, manifiesta encontrarse en descuerdo con el Proyecto de Ley 4200/2022-CR, que propone modificar el artículo 40 del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones — D.S. N° 054-97-EF; autorizando a todo afiliado al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones a retirar hasta el cincuenta por ciento (50%) de los Fondos para la compra o amortización de un primer inmueble. debido a que ésta desnaturaliza el fin previsional del fondo, el cual debe ser destinado exclusivamente para

cubrir la contingencia del cese en el empleo por alcanzar la edad y tiempo de servicio de la jubilación, o sobrevenir una incapacidad para el trabajo.

Mediante el P/ 050.03.2023/GL, de fecha 15 de marzo de 2023, la Cámara de Comercio Lima formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 4379/2022-CR, manifestando lo siguiente:

1. Manifestamos nuestra oposición al PL 4379/2022-CR, consideramos necesario insistir en que esta clase de propuestas, vinculadas a la desafiliación y/o retiro de los fondos de pensiones, desnaturaliza el fin previsional de los mismos, poniendo en peligro el futuro de los aportantes, toda vez que dicho fondo debe destinarse exclusivamente para cubrir la contingencia del cese en el empleo por alcanzar la edad y tiempo de servicio de la jubilación, o por sobrevenir una incapacidad para el trabajo.

Mediante el Oficio N° 089.06.2023/GL, de fecha 12 de junio de 2023, la Cámara de Comercio de Lima – CCL, formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 04743/2022-CR, manifiesta:

1. Respecto a la creación de las Cuentas Individuales de Capitalización Acumulada (CICA), el establecimiento de reglas que incentiven la competencia en cualquier mercado es favorable a los consumidores de productos y servicios que ofrecen los productores o prestadores de servicio y en este sentido, si bien las EOM estarían habilitadas para ofrecer CICA, debe tenerse en cuenta que participarán con las AFP en un mercado con distintas reglas, lo cual podría afectar la rentabilidad de los fondos que se mantienen en las AFP.
2. Sobre la pensión mínima y creación del Fondo Solidario de Pensiones, Recientemente se ha publicado el Reglamento de la Ley N°316705 que crea las pensiones mínimas y establece aportes voluntarios alternativos con fines previsionales; y por tanto la Pensión Mínima Objetivo (PMO) que se ha creado está en pleno proceso de implementación. Debemos indicar que una reforma integral del

sistema de pensiones debe comprender también la obligatoriedad de aportar a los trabajadores independientes, así como a trabajadores del sector informal, por lo que el Proyecto de Ley debe considerar mecanismos que promuevan la respectiva cotización a su fondo. Incentivos para los trabajadores independientes pueden ser las transferencias complementarias con recursos del Tesoro Público que les permitan llegar a una Pensión Mínima o mediante deducción de sus impuestos de parte de lo aportado.

3. Sobre la modificación al esquema de redistribución, debemos indicar que, si bien se estarían alineando los objetivos del administrador del fondo al del beneficiario de lograr una rentabilidad, se debe tener en cuenta que la naturaleza del sistema previsional es diversificar inversiones con objetivos a largo plazo y por tanto sus rendimientos fluctúan y son afectados beneficiándose o perjudicándose según los cambios en los mercados y los escenarios macroeconómicos y políticos, por lo que contar con un componente de productividad enfocado solo en el desempeño mensual de la inversión, podría no ser el verdadero reflejo en relación a si la decisión de inversión que se ha adoptado fue adecuada, por lo que sugerimos profundizar en el estudio técnico y el impacto económico del cambio propuesto en el Proyecto de Ley analizando alternativas con resultados y desempeño de inversiones a corto o mediano plazo.
4. Respecto al incremento del límite de máximo de disposición del 25% al 60% del fondo acumulado para la adquisición del primer inmueble; debemos indicar que, la propuesta desnaturaliza el fin previsional del fondo a ser usado cuando el beneficiario alcance edad y tiempo de cotización o le sobrevenga una incapacidad para trabajar; por lo que la propuesta requiere profundizar en el estudio técnico.

Mediante el Oficio N° 090-06-2023-GL, de fecha 12 de junio de 2023, la Cámara de Comercio de Lima – CCL, formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 05139/2022-CR, manifiesta:

1. Proyecto de Ley desnaturaliza totalmente el fin previsional del fondo, el cual debe ser destinado en caso de jubilación o por sobrevenir una incapacidad para el

trabajo, pues está ampliando el retiro a la totalidad del fondo en claro perjuicio de la jubilación digna del aportante.
2. Riesgo alto de pobreza en la vejez.
3. El Proyecto de Ley 5139 carece de viabilidad.

5.19 Apoyo Consultoría

Mediante la Carta S/N, de fecha 24 de noviembre de 2023, Apoyo Consultoría, formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 6120/2023-PE, manifestando lo siguiente:

1. Proponemos reevaluar la afiliación automática de jóvenes a la ONP planteada en la propuesta, consideramos que no es óptimo que la afiliación automática sea a la ONP, pues, al funcionar como un sistema de reparto, limitaría la capacidad de las personas de acumular ahorros en un fondo de capitalización individual.
2. Sugerimos que el fondo de los afiliados al sistema privado que opten por una pensión mínima se mantenga en las AFP hasta que se agote, en lugar de ser transferido a la ONP al momento de su jubilación.
3. Proponemos eliminar gradualmente el límite anual de aportes planteado para los trabajadores independientes. La propuesta del MEF plantea que los trabajadores independientes contribuyan al sistema previsional con el 10% de su ingreso bruto mensual. Sin embargo, se establece un límite al aporte, puesto que este se calcula sobre un ingreso máximo equivalente al 50% de una UIT, que actualmente asciende a S/4 950. Es decir, todos los trabajadores independientes con ingreso superior a S/2 475 aportarían lo mismo. Si bien es positivo que se incluya a los trabajadores independientes al sistema, consideramos que el límite establecido para sus aportes restringe el ahorro previsional y podría aumentar la carga estatal de pagarles una pensión mínima en el futuro. De hecho, en el 2022, el 18% de los trabajadores independientes a nivel nacional reportó tener ingresos mayores a S/2 475, según la Encuesta Nacional de Hogares.
4. Sugerimos financiar los aportes de trabajadores informales a través de la devolución del IGV sin restringir la categoría del gasto.

5. Finalmente es fundamental priorizar la actualización de la edad de jubilación, El proyecto de reforma plantea revisarla cada cinco años, a partir del 2026. El sistema actual fue diseñado considerando una esperanza de vida de 19 años a partir de la jubilación. Hoy, este horizonte se ha ampliado en cinco años. Además, según la Encuesta Nacional de Hogares, en la práctica, las personas en el Perú continúan trabajando hasta los 67 años. En ese sentido, sugerimos que se aumente la edad de jubilación en dos años.

5.20 Central Autónoma de Trabajadores del Perú-CAPT

Mediante la Carta N° 0288-2023/CATP-SG, de fecha 7 de diciembre de 2023, Central Autónoma de Trabajadores del Perú - CATP, formula su opinión sobre el Proyecto de Ley 6120/2023-PE, manifestando lo siguiente:

- Manifiestan su oposición al Proyecto de Ley N° 06120/2023- PE denominado "Nuevo Sistema Previsional Peruano" presentado el Poder Ejecutivo el 11 de octubre del año en curso al Congreso de la República, nuestra oposición se fundamente en que el referido Proyecto de Ley, no toma en cuenta los convenios internacionales en materia de Seguridad Social suscrito por nuestro Estado. En efecto nuestro país ha ratificado el Convenio 102 de la OIT (norma mínima de seguridad social) y por tratarse de una norma que regula el derecho humano a la seguridad social forma parte del bloque de constitucionalidad.
- De igual manera debemos señalar nuestra oposición, al dictamen emitido por la Comisión de Economía del Proyecto de Ley 4743 - LEY DE REFORMA Y UNIVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL PERUANO, debido a que insiste en el modelo de cuentas privadas individuales, es decir cierra el Sistema Nacional de Pensiones; sustituyendo el régimen de reparto por uno que denominan de cuentas individuales de capitalización acumulativa (CICA). De esta forma se está afectando a más de 600 mil pensionistas del sistema público. El texto primigenio del Proyecto de Ley N° 4743, resultaba claramente inconstitucional porque establecía que todo ciudadano al alcanzar la mayoría de edad se incorporaba al

Sistema Previsional mediante la afiliación a la AFP que ganó la licitación por cobro de menor comisión, y luego de dos años podría cambiar de AFP. Ello contradecía abiertamente lo establecido por el artículo 11º de la Constitución Política que dispone que: "El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas (...)". Así mismo, habría dispuesto que podrá participar la ONP como Gestora de Fondos, pero en una posición muy debilitada, privilegiando la afiliación a los privados. Con menos recursos acumulados y sin aporte intergeneracional; la ONP participará en la licitación en condiciones desventajosas. Además, dispone que los trabajadores independientes aportarán obligatoriamente cuando sus ingresos sean superiores a una RMV, este aporte se incrementará entre el 1% y el 10% entre el año 2024 y el 2029. No se dispone un cofinanciamiento estatal o de las empresas. El dictamen de la CEIF resulta regresivo a nivel tributario por que dispone que tres puntos del IGV serán destinados a las cuentas individuales de los afiliados. Ello ha sido observado reiteradamente por el Ministerio de Economía y Finanzas.

5.21 Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG)

Mediante Carta N° 151-2021-PRESIDENCIA/APESEG, de fecha 6 de diciembre de 2021,el Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros señalo que el Proyecto de Ley N° 866-2021-CR, emite su opinión gremial sobre los elementos y premisas básicas que la reforma del Sistema Previsional en nuestro país debería considerar los siguientes aspectos: 1) Un único sistema integral basado en pilares con alcance universal, 2) Es indispensable que las personas tengan la certeza de una futura pensión de jubilación, 3) La constancia en el aporte a un fondo de pensiones para la jubilación es crítica, 4) Es fundamental incentivar el ahorro previsional voluntario, 5) Sobre el retiro de los fondos para pensión, 6) El valor de postergar la decisión de jubilación es muy relevante para el monto de la pensión, 7) La alternativa del Seguro de Longevidad, 8) Compañías de Seguros de Vida, 9) Cobertura de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, 10) Sobre los impuestos como fuente de los fondos para pensiones, 11) Sobre los esquemas de pensiones solidarias, 12) Un back office totalmente centralizado y 13) Uniformidad tributaria para fortalecer el ahorro voluntario con fin previsional y 14)

Actualización periódica de parámetros del sistema; considerando que el proyecto debe tener como objetivo mejorar el sistema previsional, contemplando el análisis de los elementos y aspectos desarrollados.

Mediante Carta Nº 024-2022-PRESIDENCIA/APESEG, de fecha 17 de febrero de 2022, el Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros señalo que el Proyecto de Ley N° 1306-2021-CR : (i) no se cuenta con un estudio o análisis que estime la demanda de placentas que habría en nuestro país en caso se implementara la propuesta del Proyecto, y su crecimiento muy probablemente podría tomar varios años; (ii) por el lado de la oferta, no todas las placentas de los recién nacidos serán aptas para la venta (deberán cumplir ciertos requisitos) por lo que no todos tendrán la opción de acceder al beneficio, y además el proceso de venta estará sujeto a la decisión de los padres (será facultad de los mismos), pudiendo estos últimos no estar de acuerdo por razones personales; y (iii) la estimación del beneficio expuesta en el Proyecto resulta en un monto de pensión mínimo a pesar de que el supuesto de tasa de rentabilidad anual (6%) aplicada para la capitalización de los fondos es muy poco conservador.

Mediante Carta Nº 032-2022-PRESIDENCIA/APESEG, de fecha 1 de marzo de 2022, el Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros señalo que el Proyecto de Ley N° 1356-2022-CR, emite su opinión gremial sobre los elementos y premisas básicas que la reforma del Sistema Previsional en nuestro país debería considerar para crear un Sistema Previsional Complementario a partir de un porcentaje del IGV que pagan los consumidores finales por la adquisición de bienes y servicios, y de un porcentaje de la renta afecta al Impuesto a la Renta (IR) para los trabajadores de cuarta y quinta categoría. Consideran que el proyecto debe enfocar el mejoramiento del Sistema Previsional peruano, contemplando el análisis de los elementos sugeridos.

Mediante Carta Nº 053-2022-PRESIDENCIA/APESEG, de fecha 30 de marzo de 2022, el Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros señalo que el Proyecto de Ley N° 1513-2021-CR, propone establecer el marco legal para la apertura de cuentas de ahorros previsionales en entidades del sistema financiero a solicitud expresa y

voluntaria de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), a fin de que se puedan trasladar los fondos previsionales acumulados en las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) a dichas entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). También considero que se debía de encontrar tasas pasivas que garanticen la competitividad en el sistema financiero, en este sentido consideran que no hay un adecuado sustento para obtener tasas de rendimiento alto con más rentabilidad.

Mediante Carta N° 100-2022-PRESIDENCIA/APESEG, de fecha 14 de junio de 2022, el Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros expreso su opinión favorable contra el Proyecto de Ley N° 2278-2022-CR, que tiene por objetivo regular un sistema de ahorro previsional alternativo al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y al Sistema Privado de Pensiones (SPP), mediante el cual los aportes obligatorios y/o voluntarios de pensiones sean depositados en cuentas previsionales autorizadas en las Empresas de Operaciones Múltiples a las que se refiere el inciso A del artículo 16 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, de tal manera que los afiliados puedan acceder a una pensión de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

Mediante Carta N° 164-2022-PRESIDENCIA/APESEG, de fecha 13 de octubre de 2022, el Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros expreso su total desacuerdo contra el Proyecto de Ley N° 3227-2022-CR, que tiene por objetivo establecer la reforma del Sistema de Pensiones en nuestro país, integrado por el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP), considerando la edad de jubilación, la pensión de jubilación mínima, y el retiro de los fondos para pensión. Manifiesta que es indispensable que un Proyecto de esta naturaleza aborde una solución al tema de los retiros de fondos previsionales, y por ello sugerimos que se evalúe la alternativa antes descrita.

Mediante Carta N° 078-2023-PRESIDENCIA/APESEG, de fecha 24 de abril de 2023,el Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros emite su opinión gremial que el Proyecto de Ley N° 4743-2021-CR, que tiene como objetivo la reforma y la

universalización del Sistema Previsional peruano para optimizar los aportes y las pensiones de los afiliados a fin de garantizar una pensión digna y justa a todas las personas naturales que cumplan con ciertos requisitos. Si bien el Proyecto tiene elementos muy interesantes en la búsqueda de una reforma para construir un sistema de pensiones basado en un esquema multipilar que sea universal, solidario, progresivo y sostenible Consideran que el proyecto debe enfocar el mejoramiento del Sistema Previsional peruano, contemplando el análisis de los elementos sugeridos.

VI. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS

1. Seguridad social y Sistema de pensiones

La Constitución Política del Perú en su artículo 10° reconoce y garantiza el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, que en materia de pensiones tiene una doble finalidad, por un lado, proteger a la persona frente a las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez o la muerte; y, por otro, elevar su calidad de vida, lo cual se concreta a través de las prestaciones que brindan los distintos regímenes de pensiones establecidos por el legislador.

De otra parte, el artículo 11° de la Constitución establece que el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. De este modo, en materia de pensiones, el constituyente ha reconocido que las prestaciones pueden ser otorgadas mediante entidades públicas, privadas y/o mixtas, poniendo en relieve que el Estado asume un rol supervisor y/o fiscalizador cuando las prestaciones sean brindadas por entidades privadas y/o mixtas[1].

Tal como ha establecido el Tribunal Constitucional en el Fundamento 54 de la STC 0050-2004-AI/0051-2004-AI/0004-2005-AI/0007-2005-AI/0009-2005-AI acumulados)

"La seguridad social es la garantía institucional que expresa por excelencia la función social del Estado. Se concreta en un complejo normativo estructurado -por imperio del artículo 10 de la Constitución- al amparo de la 'doctrina de la contingencia' y la calidad de vida; por

[1] Fundamento 2. § Expediente N° 00007-2008-PI/TC de fecha 30 de junio de 2010

ello, requiere de la presencia de un supuesto fáctico al que acompaña una presunción de estado de necesidad (cese en el empleo, viudez, orfandad, invalidez, entre otras) que condiciona el otorgamiento de una prestación pecuniaria y/o asistencial, regida por los principios de progresividad, universalidad y solidaridad, y fundada en la exigencia no sólo del mantenimiento, sino en 'la elevación de la calidad de vida'".

La seguridad social

"es un sistema institucionalizado de prestaciones individualizadas, basado en la prevención del riesgo y en la redistribución de recursos, con el único propósito de coadyuvar en la calidad y el proyecto de vida de la comunidad. Es de reconocerse el fuerte contenido axiológico de la seguridad social, cuyo principio de solidaridad genera que los aportes de los trabajadores activos sirvan de sustento a los retirados mediante los cobros mensuales de las pensiones" (STC 0011-2002-AI, Fundamento 14).

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia dictada en el Expediente Nº 00007-2008-PI/TC de fecha 30 de junio de 2010, ha señalado en su Fundamento 2 que la seguridad social y el libre acceso a las prestaciones pensionarias tienen que ser considerados como derechos de configuración legal porque a través de la ley se precisan los requisitos y condiciones que se deben cumplir a efectos de acceder y gozar de las prestaciones que cada uno de los regímenes pensionarios establece en cada caso en particular.

Por ello, teniendo presente el contenido normativo de los artículos 10º y 11º y la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución, el Tribunal consideró que en materia de pensiones el constituyente de 1993 ha adoptado un modelo paralelo de sistemas de pensiones, en donde conviven el antiguo sistema de pensiones administrado por entidades públicas y el nuevo sistema de pensiones administrado por entidades privadas.

En efecto, nuestro modelo pensionario cuenta con dos sistemas de pensiones que coexisten. Por un lado, el Sistema Público de Pensiones, que agrupa más de un régimen de reparto, como son los establecidos por los Decretos Leyes 19846, 19990 y 20530, entre otros; y por el otro, el Sistema Privado de Pensiones, que es un único régimen de capitalización individual creado por el Decreto Ley 25987.

De otra parte, en materia de seguridad social el principio de solidaridad implica que todos los asegurados de los sistemas público y privado de pensiones contribuyan a su

sostenibilidad, lo cual conlleva que todos sus afiliados deban en general aportar, no solo para poder recibir las distintas prestaciones, sino además para poder preservar los sistemas de pensiones en su conjunto[2].

2. Sistema Previsional Peruano

Diagnóstico y factores estructurales

En el Perú coexisten dos sistemas de pensiones, el privado y el público, orientados a captar afiliados que realizan actividad laboral en condición de dependientes o independientes. De acuerdo con esta última condición, son incorporados como asegurados obligatorios o facultativos.

El Sistema Público o Sistema Nacional de Pensiones es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Sistema Privado de Pensiones por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (actualmente compiten en el mercado cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones) bajo la rectoría de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Cada una de ellas administra a sus afiliados, sus recursos, sus prestaciones y a sus pensionistas de acuerdo con Ley[3].

El objetivo de los sistemas previsionales consiste en garantizar una fuente de ingresos adecuada durante la vejez mediante la cobertura de tres riesgos previsionales asociados al envejecimiento: pobreza, pérdida de capacidad de trabajo y sobrevivencia. En dicha métrica es posible interpretar que el financiamiento de la vejez se considerará adecuado cuando permita un nivel de ingresos a los adultos mayores por encima de lo necesario para cubrir las necesidades básicas de estos, que reemplace razonablemente los ingresos laborales, y que no se agote hasta el fallecimiento[4].

---

[2] *Ibidem*
[3] https://www.onp.gob.pe/pensiones_peru_onp/que_hace_onp
[4] Álvarez, F., Brassiolo, P., Toledo, M., Allub, L., Alves, G., De la Mata, D., Estrada, R., Daude, C. (2020). RED 2020: Los sistemas de pensiones y salud en América Latina. Los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad. Caracas: CAF. Retrieved from http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1652.

Sistema Nacional de Pensiones

El Sistema Nacional de Pensiones fue creado[5] en 1973, bajo la denominación de Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, siendo administrado por el Estado a través de la Oficina de Normalización Previsional desde el 1 de junio de 1994. Este sistema está asociado con la idea de solidaridad colectiva, basado en un sistema de reparto, que se financia a través de los aportes obligatorios, realizado por los trabajadores en actividad y de los aportes facultativos que se destina a un fondo común, para pagar las pensiones de quienes están jubilados.

Para el Sistema Privado de Pensiones se contemplan diversas modalidades de pensiones bajo retiro programado, seguros de renta vitalicia y la posibilidad realizar retiros a suma alzada (Ley del 95.5%); por su parte, el Sistema Nacional otorga pensiones reguladas por Ley.

En primer término, es necesario precisar que el sistema previsional ha enfrentado en las últimas décadas un profunda crisis producto de un agudo desfinanciamiento[6], situación generada debido a la disparidad de lo percibido por un cesante promedio del Decreto Ley 19990 frente a lo que recibe uno del Decreto Ley 20530, y las condiciones ínfimas de subsistencia de la gran mayoría de los pensionistas del primer régimen así como el excesivo gasto presupuestal que ha generado dicha inequidad al sistema presupuestal nacional. Esta situación generó una profusa reforma del sistema previsional peruano, al comienzo de la década de los años 1990[7].

La primera de ellas fue la promulgación de la Ley 28389, que declaró cerrado el sistema pensionario del Decreto Ley 20530, con lo cual el Congreso de la República puso fin a la Cédula Viva, disponiendo que en adelante no estén permitidas las nuevas incorporaciones o reincorporaciones a este régimen.

---

[5] Decreto Ley Nº 19990, que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social

[6] Informe de la Comisión Especial creada mediante Decreto Supremo Nº 003-2001-TR encargada de estudiar la situación de los regímenes pensionarios de los Decretos Leyes Nº 19990 y Nº 20530 y otros a cargo del Estado. Lima- Perú, 2001. Pág. 7.

[7] LESCANO ECHAJAYA, José Luis. La Problemática Pensionaria: Su Panorama Actual y una Propuesta de Solución para su Viabilidad en el Futuro, artículo presentado en Derecho & Sociedad 34. Lima- Perú. p. 267-276.

La norma precisó que los trabajadores que pertenecían al Decreto Ley 20530, y que no hubieran cumplido los requisitos para obtener la pensión correspondiente, deberán optar entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones, con el objetivo de poner fin a un régimen discriminatorio en materia pensionaría.

En consecuencia, al haberse modificado la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, fue eliminada de nuestro ordenamiento jurídico la Teoría de los Derechos Adquiridos. La teoría del derecho adquirido opta por defender la seguridad jurídica; la teoría del hecho cumplido, en cambio, opta por defender la obligatoriedad de la norma reciente y la atribución que el Estado tiene de alterar los mandatos[8].

La segunda fue la Ley 28449 mediante la cual se establecieron las nuevas reglas del Régimen de Pensiones del Decreto Ley 20530, de conformidad con los artículos 11, 103 y la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú. Asimismo, la citada Ley no afectó los derechos y beneficios del Régimen de Pensiones del Decreto Ley 19990.

Dado el contexto social, económico y político del país, desde los años '90 se han realizado diversas reformas paramétricas (ajustes estructurales en el modelo), de manera que en la actualidad el SNP mantiene las siguientes características:

a. Tasa de aporte: Desde 1973 a diciembre 1974 el trabajador aportaba 2% y el empleador 4%, de enero 1975 hasta noviembre 1984 el trabajador aportaba 2.5% y el empleador 5%, desde diciembre 1984 hasta julio 1995, el trabajador aportaba 3% y el empleador 6%, de agosto 1995 a diciembre 1997 el trabajador aportaba 11% y desde enero 1998 en adelante el aporte del trabajador es 13%.

b. Edad de jubilación: La edad de jubilación de los hombres era de 60 años de edad y de las mujeres de 55. Luego, por efecto de la Ley 26504, se elevó la edad de jubilación y tanto para hombres como para mujeres a 65 años de edad.

[8] RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico (Introducción al Derecho). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Lima- Perú, 1999. Pág. 330.

c. Años de aporte: En 1973 se requería 15 años de aportes para los hombres y 13 años para las mujeres, además de posibilitarse pensiones reducidas cuando el trabajador tenía por lo menos 5 años de aportes, que era equivalente a un porcentaje a la remuneración de referencia. En 1992, se incrementó los años de aporte mínimos para obtener una pensión de jubilación, exigiéndose 20 años de aportaciones, con independencia del sexo de la persona, a la vez de derogarse las reglas que permitían pensiones reducidas.

   Cabe señalar que, en el año 2021, a través de la Ley 31301, se aprobó que los afiliados del SNP tienen derecho a acceder a una pensión de jubilación proporcional especial los que tengan como mínimo 65 años de edad y cumplan
   con acreditar por lo menos 10 años de aportes y no lleguen a 15 años de aportes tienen derecho a una pensión de S/250 y si tienen más de 15 años de aportes tienen derecho a una pensión de jubilación de hasta S/350.

d. Remuneración de referencia: La remuneración de referencia para los asegurados facultativos y obligatorios del SNP, se basa en las últimas 60 remuneraciones.

e. Tasa de reemplazo: En 2002, se modificó la tasa de reemplazo para el cálculo de la pensión, de tal forma que su valor de largo plazo sea de 30% para aportes mínimos de 20 años, y que en la transición descienda transitando entre los valores de 45%, 40% y 35%, porcentajes que se aumentan en 2% por cada año adicional laborado, teniendo como límite el 100% de la remuneración de referencia. Con la aprobación de la Ley 30970 se modificó la tasa de reemplazo, y su valor de largo plazo se sitúa en 35% por 20 años de aportes.

f. Topes a las pensiones: a la fecha, los pensionistas al SNP tienen un tope de pensión de jubilación de S/ 893 de acuerdo a la Ley 30970.

g. Pensión mínima: En 2001, se estableció que la pensión mínima para el SNP asciende a S/ 415 según la Ley 27617. En el año 2019, subió a S/ 500 (Ley 30970). Esta pensión no se encuentra indexada a alguna forma automática de actualización.

Regímenes especiales

En la actualidad se advierte que los trabajadores pertenecen a distintos regímenes pensionarios administrados y financiados por el Estado - regímenes que se diferencian por el sector laboral.

Régimen Especial Pesquero (REP)

Mediante Ley 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores Pesqueros, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de marzo de 2013, se crea el régimen previsional para los trabajadores pesqueros, que desempeñan labores bajo relación dependencia a cargo del Armador, y a quienes faculta optar por afiliarse al Régimen Especial de Pensiones para Trabajadores Pesqueros (REP), administrado por la ONP o SPP.

De conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 30003, los trabajadores pesqueros afiliados al REP aportan el 8% de su remuneración asegurable, y los armadores (empleadores) aportan el 5% de la remuneración asegurable. Estos aportes (del trabajador y del armador) pasan a formar parte del Fondo Extraordinario del Pescador (FEP), fondo extraordinario de carácter intangible, inembargable e independiente, que es administrado por el Fondo Consolidado de Reservas (FCR), constituido para cubrir el financiamiento de la Transferencia Directa al ExPescador (TDEP), las pensiones del REP, y la Pensión de Rescate Complementaria (PRC).

La TDEP es el pago que se realiza al pensionista comprendidos en la declaración de disolución y liquidación de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP), y se encuentra a cargo de la ONP con recursos del FEP. De otro lado, actualmente la ONP realiza el pago de prestaciones a 7 434 pensionistas del régimen previsional pesquero, el 15% corresponde al REP y el 85% al pago del TDEP.

En base a información remitida por ONP (a diciembre 2021) el 14% de los pensionistas por derecho propio (invalidez y jubilación) tiene una pensión por debajo de S/ 200. A su vez, similar porcentaje de pensionistas por derecho derivado (viudez, orfandad y ascendencia) tiene una pensión por debajo S/ 100.

Cabe señalar que los pensionistas que reciben menores montos de pensión son aquellos que fueron otorgados por la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. En el siguiente cuadro se muestra la información estadística de pensiones del REP y del TDEP.

Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley 19990 (Régimen 20530)

Es un régimen cerrado regulado por el Decreto Ley 20530. La ONP está a cargo de la administración y pago de las pensiones de los(as) cesantes, así como de las personas beneficiarias que pertenecen al régimen pensionario del Decreto Ley 20530 y que, además, han sido transferidos(as) por norma legal expresa conforme lo dispone el Decreto Supremo 132-2005-EF y la Ley 28449.

Entre las entidades públicas que han transferido sus pensionistas para la administración y pago de pensiones a cargo de la ONP se encuentran las que han sido privatizadas, liquidadas, desactivadas y/o disueltas o encargadas.

El pago de las pensiones de cesantía se inicia cuando culmina el vínculo laboral. Respecto al pago de las pensiones de invalidez y sobrevivencia, se inicia a partir del día siguiente a la fecha de contingencia.

Características:

- El derecho a la pensión de cesantía no está condicionado a cumplir cierta edad, sino ha determinado número de años de servicio.
- El pago de las pensiones del Decreto Ley N° 20530 se financia con la partida presupuestal del Tesoro Público o del fondo que transfiere la entidad de origen.
- De acuerdo con la Ley N° 28449, el monto máximo mensual de las pensiones pagadas por el régimen del Decreto Ley N° 20530 es de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
- Del total de pensionistas observados a junio 2022, el 83% corresponde a pensionistas por derecho propio (27 439 personas), mientras que el 17% a pensionistas por derecho derivado (5 685 personas).
- Con respecto a la entidad de origen, el 90% del total de pensionistas bajo este régimen se concentra en 5 entidades. El 80% pertenece al Ministerio de Educación (27 091), el 3% a la Empresa Nacional de Puertos (1071), el 3% a la Sociedad de Beneficencias (1016), el 2% a Petroperú (739) y el 2% a la Compañía Callao y Puertos (641 personas).

Sistema Privado de Pensiones

En el Sistema Privado de Pensiones los trabajadores pueden acceder a una pensión de jubilación a partir de los 65 años de edad, sin la exigencia de periodos mínimos de aportes, por lo que el capital acumulado durante la etapa laboral activa dará como resultado una potencial pensión bajo las modalidades básicas de retiro programado, renta vitalicia (en soles o dólares), renta temporal con vitalicia diferida o, si así lo prefiere el afiliado, el retiro de hasta el 95.5% de los fondos acumulados en la CIC, por lo que el monto de la pensión dependerá del ahorro que este (el afiliado) realice y la rentabilidad de los mismos, conforme lo establece la regulación del SPP.

Por ello, se debe considerar que el monto de una pensión fundamentalmente depende de la remuneración, la tasa de aporte; la rentabilidad acumulada; la densidad o Frecuencia en el pago de aportes; el tiempo de aporte; así como la edad de jubilación. De este modo, cualquier medida que altere estos factores, tiene un impacto directo en el nivel de cobertura y las pensiones de jubilación.

Bajo el Sistema Privado de Pensiones actualmente los afiliados aportan una tasa del 10% y los trabajadores independientes no están obligados a aportar. La edad legal de jubilación es de 65 años; sin embargo, las diversas flexibilizaciones al Régimen Especial de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA) inicialmente con edades de acceso diferenciadas entre hombre y mujeres y la posibilidad de retirar hasta el 95.5% de la CIC, generó que la edad promedio de jubilación efectiva disminuya significativamente desde 65 años- registrado en años anteriores al 2016-, hasta ubicarse en 59 años en el 2021. A modo de referencia podemos señalar que desde mayo del 2016 (inicio de la vigencia del retiro de 95.5% de la CIC) hasta diciembre 2021, el 71,6% de quienes cumplieron estos requisitos lo hicieron en el marco del REJA; mientras que el 26,1% lo hizo dado que cumplió la edad legal de jubilación y el 2.3% restante se jubiló aplicando a otros regímenes de jubilación anticipada.

La densidad de cotización promedio de todos los afiliados (cotizantes y no cotizantes) entre 18 y 65 años alcanzó el 44.2% en el periodo junio 2006-diciembre 2021. Si se considera solo a aquellos afiliados con al menos un aporte (densidad de cotización mayor a cero), la densidad de cotización promedio del SPP peruano aumenta a 53.7%. Asimismo, la distribución de la densidad de cotización es bimodal; por un lado, el 24.9% de los afiliados registra densidad menor al 20% y, por otro lado, el 25% alcanza densidades entre 80% y

100%, siendo la participación de quienes no registran aportes entre junio 2006 y diciembre 2021 de 11.9%, mientras que el 38% de afiliados tiene densidades de cotización entre 20% y 80%.

Respecto al tamaño de mercado y concentración en el Perú existen cuatro AFP que brindan servicios a alrededor de 9 millones de afiliados activos y 200 mil pensionistas (pensionistas de jubilación, invalidez y sobrevivencia). El principal factor que explica el tamaño del mercado es la magnitud del sector laboral formal que constituye el mercado previsional potencial e influye en el número de competidores y en el nivel de concentración del mercado.

Inversiones: Hasta el año 2021, las correlaciones promedio de la rentabilidad anual entre todos los fondos tipo 1, tipo 2 y tipo 3, en los últimos tres años, fueron mayores de 97%, lo cual indicaría la existencia de portafolios similares en las carteras administradas de las AFP. Desde una perspectiva de más largo plazo, la correlación de la rentabilidad para periodos de cinco años, desde el 2017, se ubica entre 90% (fondo tipo 1) y 97% (fondo tipo 2), siendo estos niveles de correlación significativamente altos. Entre los factores que contribuían a este comportamiento se puede mencionar la necesidad de mejorar los límites de inversión y escasas alternativas de inversión, y la rentabilidad mínima, establecida en la legislación vigente.

A partir del 2016, por efecto de la Ley 30425 que introdujo la opción de poder retirar, al momento de la jubilación, hasta el 95.5% de los saldos acumulados en su CIC, se observó una significativa reducción del número de nuevos pensionistas de jubilación, que pasó de 12 109 en el 2015 (antes de la vigencia de la ley de retiro de la CIC por jubilación) a 577 en el 2021, lo que significó una reducción del 95.2%, similar resultado se observa en los montos anuales para contratar rentas vitalicias, que disminuyó 97.3% en el mismo periodo.

Respecto a la tasa de reemplazo, el FMI ha señalado, sobre la base de estimaciones no oficiales, que en el SPP dicha tasa alcanza el 37% en promedio[9]. Además, bajo supuestos conservadores, el escenario base que proyecta el FMI para los años 2020-2047 ubicaría a este indicador en un rango de 27% a 33% considerando fijas las variables paramétricas básicas. La menor tasa de reemplazo esperada se explica por la confluencia de una serie

[9] Fondo Monetario Internacional (2019). "Informality and the Challenge of Pension Adequacy: Outlook and Reform Options for Peru". International Monetary Fund WP/19/149.

de factores como la reducida tasa de aporte al fondo de pensiones, pocos años de ahorro que se traduce en bajos niveles de densidad de cotización por efecto de las restricciones de nuestro mercado laboral, el crecimiento de la longevidad (mayor esperanza de vida), la inexistencia de garantía estatal (como por ejemplo la pensión mínima), los bajos niveles de bono de reconocimiento, entre otros. En años recientes, a tales factores se han añadido regulaciones que flexibilizan el acceso a jubilación anticipada y los retiros de fondos extraordinarios por efecto del Covid-19.

Finalmente, diversas leyes han permitido retiros con diferentes objetivos. A través de las Leyes 30425 y 3047822 del año 2016, se aprobó la posibilidad del retiro de hasta 95.5% de la CIC para aquellos afiliados que cumplen los requisitos de la jubilación por edad legal (65 años) y también para aquellos que califican para el REJA (Ley 30939) o Jubilación Anticipada Ordinaria (JA0). Como resultado, hasta diciembre de 2021, de un total de 430 424 afiliados que cumplieron los requisitos para jubilarse (anticipadamente o por edad legal), el 98.3% retiraron el total de su fondo de pensiones y solo el 1.7% restante asignó una parte (1.4%) o la totalidad de su fondo para financiar una pensión (0.3%).

Asimismo, a través de la Ley 30425 se permitió el retiro para el financiamiento del primer inmueble pudiendo retirarse hasta el 25% de la CIC. A junio de 2023, el monto retirado por este concepto ascendió a S/ 3 461 millones; mientras que el número de afiliados que accedió a este beneficio totalizó en 116 143 y el 80% de este grupo tiene edades intermedias (31-50 años).

Por otro lado, en el año 2020, el Poder Ejecutivo dio paso al acceso extraordinario autorizando dos primeros programas de retiro de la CIC a través de Decretos de Urgencia, los que fueron seguidos por cuatro iniciativas de retiro adicionales del Congreso de la República entre 2020 y 2022 con la finalidad de mitigar la reducción de ingresos y el incremento del desempleo generados por la recesión de la economía ocasionada por la pandemia del Covid-19.

Número de afiliados según proceso de retiro y monto retirado

Norma	No. Afiliados que retiraron	En Millones de S/
DU 34-2020	1,935,164	2,966
DU 38-2020	1,305,719	2,094
Ley 31017	3,775,066	19,647
Ley 31068	1,256,676	9,016
Ley 31192	3,218,211	32,219
Ley 31478	3,133,149	21,994
Total	**6,133,003**	**87,937**

Fuente: SBS

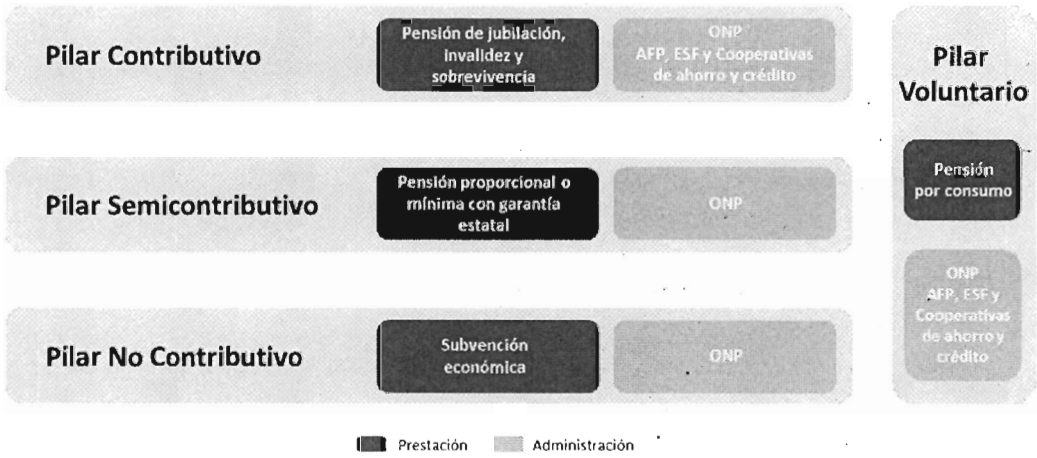
3. Estructura del Sistema Previsional Peruano

El presente dictamen recoge la propuesta del Poder Ejecutivo respecto a la estructura del Sistema Previsional. En ese sentido, se ajusta la conformación del Sistema basado en un modelo multipilar que consta de cuatro pilares, los cuales están articulados a fin de que puedan garantizar el acceso a una prestación adecuada, financiada a través del ahorro de los afiliados, recursos del estado y otros recursos que se determinen para dicha finalidad, asimismo cuenta con administración pública y privada.

El Sistema, vincula los pilares que lo componen, bajo el amparo de los principios de unidad, universalidad, solidaridad y progresividad en la aplicación del derecho a la seguridad social en pensiones, fomentando la eficiencia y competencia, facilitando la libre elección y garantizando la sostenibilidad del sistema.

La Ley tiene por finalidad reformar el sistema de pensiones para que sus beneficiarios accedan progresivamente a una pensión justa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política del Perú, reconociendo la progresividad en la aplicación del derecho a la seguridad social en pensiones, fomentando la eficiencia y competencia, facilitando la libre elección y garantizando la sostenibilidad del sistema. Esta Ley aplica a todas las personas mayores de edad, afiliadas o no al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP), siempre que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en estas.

Estructura del Nuevo Sistema Previsional



Pilar no contributivo

El pilar no contributivo tiene como finalidad asegurar la cobertura asistencial, a través de una subvención financiada con recursos del Tesoro Público y bajo el principio de solidaridad en el Sistema, dirigido a las personas que a la edad de jubilación no cuentan con una pensión a partir de sus aportes al Sistema (pensión contributiva) al estar o no afiliados al SNP o SPP y se encuentran en condición de pobreza o pobreza extrema y/o vulnerabilidad, de acuerdo con los criterios del SISFOH; así como las personas con discapacidad severa y otras personas vulnerables que cumplan con los requisitos de elegibilidad.

Pilar semicontributivo

Este pilar comprende la entrega de una pensión mínima o una pensión proporcional especial con garantía estatal siempre que en el trayecto de su vida laboral haya aportado por lo menos las unidades de aporte que se establezca para ello.

En el pilar semicontributivo, la entidad a cargo de la administración de los beneficios con garantía estatal es la ONP, que está dirigido a los afiliados del SNP que a la edad de jubilación cumplen con el número de aportes requeridos para una pensión mínima o una pensión proporcional especial y los afiliados al SPP que a la edad de jubilación cuentan con el número de aportes efectivos requeridos (240) y que el monto de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) es insuficiente para financiar una pensión proporcional especial o mínima.

De esta manera, se busca extender la posibilidad para que los demás afiliados al SPP tengan la opción de acceder a los beneficios de garantía estatal, aplicando el mismo criterio dispuesto en la Ley 31538, a fin de recibir igual monto de pensión que sus pares del SNP, de tal manera que a igual esfuerzo contributivo se le reconoce igual beneficio, y este esfuerzo se mide a través de los años de aportes. En ese sentido, para el reconocimiento de los beneficios de garantía estatal en los afiliados al SPP se requiere la acreditación de los años de aportes que establece la normativa vigente en el SNP.

Pilar contributivo

El pilar contributivo, en el cual se construye el capital necesario para el financiamiento de la pensión, ello se logra mediante el ahorro de una parte de los ingresos de los trabajadores durante su etapa laboral activa, con el propósito de poder financiar su retiro, en el momento que su producción disminuya o sea nula". De esto se desprende que, las personas deben ahorrar mientras se encuentren trabajando para poder solventar una pensión adecuada, que guarde relación con los ingresos percibidos durante su vida.

El Estado debe impulsar a la población a ahorrar para la vejez, incluyendo medidas obligatorias para los sectores de trabajadores dependientes e independientes a realizar aportaciones para el financiamiento de sus futuras pensiones.

En este sentido, el Estado interviene estableciendo sistemas de pensiones que funcionen sobre la base de un ahorro forzoso llevado a cabo por los trabajadores, con el fin de brindarles acceso a una pensión de jubilación. Cabe precisar que los fondos de pensiones cumplen dos roles fundamentales: a) financian las pensiones de los afiliados y con ello reducen el riesgo de pobreza en la vejez; y; b) son una fuente de ahorro a largo plazo, que favorece el desarrollo del mercado de capitales, el financiamiento de la inversión y el crecimiento económico de largo plazo.

Pilar voluntario

El pilar voluntario será complementario y transversal al sistema, y permitirá a los afiliados completar sus aportes para acceder a las prestaciones que brinda el pilar semicontributivo, y complementar la pensión del pilar contributivo, a través del ahorro voluntario. Se financia a través de asignaciones públicas o privadas, así como aportes voluntarios con fines previsionales realizados de manera directa por los afiliados al SNP o SPP.

4. Incorporación de las cuentas nocionales en el Sistema Nacional de Pensiones

El modelo del sistema de pensiones paralelo es cuando los trabajadores deben elegir entre el sistema público de reparto o el sistema de capitalización individual y, por tanto, ambos sistemas son excluyentes y conviven compitiendo por los afiliados. Ambos sistemas funcionan en forma paralela y las personas eligen en cuál se afilian; en algunos casos, existe la posibilidad de cambiarse de sistema[10].

Este modelo se implementó en el Perú (1993) y luego en Colombia (1994). En el Perú se puso en práctica una reforma estructural que creó el modelo paralelo de pensiones. A principios de los noventa, dados los antecedentes que se manejaban de la experiencia chilena, entre otros, los importantes efectos fiscales que se habían producido en la transición previsional, se desechó la idea de implementar un modelo sustitutivo y se mantuvo el sistema público de reparto. Eso dio origen al modelo paralelo. El sistema de pensiones peruano se ha modificado en los últimos 25 años, y las reformas más importantes han tenido lugar en los últimos diez. En 2012 se aprobó una ley en que se establecía la cotización obligatoria de los trabajadores independientes (por cuenta propia) que percibieran una renta superior a determinado umbral. En el caso de los trabajadores cuya renta fuera inferior a dicho umbral, el Estado entregaría un bono (un subsidio) a la cotización, para ampliar la cobertura de los más vulnerables. Además, en esta reforma se incluyó la licitación de cartera de los nuevos afiliados al Sistema Privado de pensiones cada dos años. El otro cambio fundamental en la legislación previsional peruana ocurrió en 2016,

[10] CEPAL- ALBERTO ARENAS DE MESA, Los sistemas de pensiones en la encrucijada Desafíos para la sostenibilidad en América Latina.

cuando se creó una nueva modalidad de pensión según la cual los mayores de 65 años pueden retirar hasta el 95,5% de sus ahorros previsionales en el momento en que se jubilen.

En Colombia, en 1994 se siguieron los pasos de la reforma peruana y se introdujo la capitalización individual para que conviviera con el sistema público de reparto de modo que ambos sistemas fueran excluyentes entre sí. De ese modo, Colombia se convirtió en el segundo país en establecer un sistema paralelo de pensiones en la región. Los efectos fiscales de implementar el modelo sustitutivo, sumados a la complicada economía política que suponía cerrar el sistema público de pensiones, fueron los motivos que llevaron a que en el país se pusiera en práctica este tipo de modelo.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su libro, sobre Encrucijadas en la Seguridad Social Argentina, reformas, cobertura y desafíos para el sistema de pensiones, describe que en los años noventa[11], surgió una gran controversia en torno a cuál era la forma como se debía organizar la función de seguro y ahorro, para la jubilación dado que los organismos que promovían lineamientos desde el Consenso de Washington, como el Banco Mundial, sugerían la adopción de un sistema de cuentas individuales de ahorro previsional, administrado privadamente, mientras que otros organismos, como la Oficina Internacional del Trabajo y la Asociación Internacional de Seguridad Social, preferían un esquema de beneficio definido, administrado públicamente (Gillion y Bonilla 2002; Mesa-Lago, 1996).

En relación con los aspectos demográficos, es necesario observar que las reformas que implican la sustitución de un esquema de reparto por uno de capitalización generan efectos intergeneracionales sin resolver los problemas que surgen del envejecimiento poblacional. Respecto a esto último, las soluciones pasan por modificar la edad de retiro y otros parámetros del sistema como las prestaciones y contribuciones, dado que la introducción de cuentas individuales no implica necesariamente que los individuos opten voluntariamente por edades de retiro más tardías para compensar los efectos de una mayor expectativa de vida. Por otra parte, también debe considerarse que los incrementos en la edad de retiro pueden afectar a otros programas de la seguridad social (como el seguro de

[11] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_secsoc_29187.pdf

desempleo o las pensiones por invalidez) y de la asistencia social (como los programas de alivio de la pobreza, en general).

También, cabe señalar que la sustitución de un sistema de reparto por uno de capitalización no genera, necesariamente, mayores tasas de crecimiento económico (Barr y Diamond, 2008) y, de acuerdo con la experiencia reciente en América Latina, la introducción de cuentas individuales ha demostrado que una mejor vinculación entre contribución y beneficios previsionales no genera por sí misma mayor cobertura a través de mejoras en la extensión (cantidad de cotizantes) ni de mejores densidades de aportes (regularidad en las cotizaciones de los ya asegurados). De esta manera, tampoco puede esperarse que una estrategia basada en esquemas de cuentas nocionales induzca automáticamente a mejorar los incentivos a cotizar (Bertranou, 2005a). En todos los casos, el diseño del sistema debe ser compatible con la capacidad institucional del país. En este sentido, por ejemplo, las reformas no deberían permitir que las pensiones que surgen de esquemas como los de capitalización queden expuestas a mercados de capitales poco desarrollados y con una inadecuada regulación (Barr y Diamond, 2008)[12]. Es importante recalcar esto último dada la necesidad no sólo de individualizar cuentas sino también de contar con una gran mejora de la administración y rentabilidad de las mismas.

Asimismo, los lineamientos del Consenso de Washington, como también el Banco Mundial, sugerían la adopción de un sistema de cuentas individuales de ahorro previsional administrado privadamente, mientras que otros organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Asociación Internacional de la Seguridad Social preferían un esquema de beneficio definido administrado públicamente (Mesa-Lago, 1996). También la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizó numerosas contribuciones cuestionando la pérdida, como también la ausencia, de espacios e instrumentos para mejorar la solidaridad de los sistemas previsionales (Uthoff, 1995; CEPAL, 2006)[13].

[12] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/--- soc_sec/documents/publication/wcms_secsoc_29187.pdf CEPAL- ENCRUCIJADAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL ARGENTINA: reformas, cobertura y desafíos para el sistema de pensiones

[13] OIT, ¿A mitad de camino entre Bismarck y Beveridge? La persistencia de los dilemas en el sistema previsional Argentino - Fabio Bertranou, Pablo Casalí y Oscar Cetrángolo

Por otro lado, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), en su libro sobre Reversiones menciona que mientras Europa avanza hacia la capitalización individual, en América Latina algunos proponen volver al reparto[14]. Considera que los sistemas contributivos de capitalización individual pueden otorgar mayores montos de pensión y tasas de reemplazo a largo plazo. También, se analiza las razones por las cuales los programas contributivos de capitalización individual pueden proveer mejores pensiones en el largo plazo que esquemas alternativos de reparto y capitalización colectiva de fondos con beneficios definidos, estos programas deben complementarse e integrarse con programas no contributivos dirigidos a apoyar financieramente a los pensionados de menores ingresos. Subraya que, gracias a la creación de los sistemas de capitalización individual, los recursos disponibles para el financiamiento de las pensiones se han multiplicado varias veces

Asimismo, considera que en los sistemas de capitalización individual las administradoras de fondos de pensiones invierten los aportes que reciben, obteniendo rentabilidades que aumentan el patrimonio previsional de los trabajadores en beneficio directo de sus pensiones. En cambio, en los sistemas de reparto no se crea patrimonio, sino que, como lo dice su nombre, solo se reparten o redistribuyen los ahorros de los trabajadores al interior de una generación o entre distintas generaciones. Ello beneficia usualmente a las primeras generaciones que se jubilan con altas pensiones, que posteriormente no se pueden sostener debido al deterioro financiero que sufren estos sistemas como consecuencia de las tendencias demográficas y otros problemas estructurales. Además, al menos en América Latina, existe abundante evidencia de que dicha redistribución perjudica, en general, a los trabajadores más pobres y personas vulnerables (Altamirano et al., BID 2018), que no pueden cumplir las condiciones exigidas para recibir pensión, y beneficia a los trabajadores de ingresos medios y altos que sí las cumplen.

De igual manera, describe que la creación de patrimonio previsional de los sistemas de capitalización individual es una de sus principales ventajas. Permite proveer mejores pensiones a los trabajadores en comparación a los regímenes de reparto. En estos últimos, la única fuente de financiamiento de las pensiones, excluidos los aportes que pueden provenir del presupuesto público, son las cotizaciones realizadas por los trabajadores, empleadores y el Estado. En cambio, en los sistemas de capitalización individual se suman a las cotizaciones las rentabilidades obtenidas en la inversión de los fondos. Por ejemplo,

[14] https://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2016/01/Informe-FIAP-REVERSIONES-2020-1.pdf

si se asume una rentabilidad real promedio de 3,5% real anual durante un periodo de ahorro de 40 años, los resultados acumulados de las inversiones representarían aproximadamente un 50% del saldo final de un trabajador en un sistema de capitalización individual. Hasta la fecha el aporte de la rentabilidad al financiamiento de las pensiones en los sistemas de capitalización individual de América Latina ha sido mayor que lo estimado en esta simulación, dadas las altas rentabilidades reales históricas obtenidas.

Adicionalmente, los sistemas de capitalización individual permiten aumentar los recursos disponibles para financiar las pensiones no contributivas. En efecto, si bien en un comienzo su creación genera un mayor déficit fiscal de transición (ya que las contribuciones se dirigen hacia las cuentas individuales, en lugar de ir hacia el sistema público de reparto), a mediano y largo plazo su operación permite liberar recursos públicos que están comprometidos en el financiamiento de los déficits de los regímenes de reparto, los que pueden ser utilizados en el fortalecimiento de las pensiones dirigidas a los sectores más pobres (pensiones sociales o no contributivas) y en otros programas sociales.

En el Perú, mediante el Decreto Supremo 175-2019-EF, se aprobó las disposiciones que implementaron las funciones del Consejo de Evaluación de la situación actual de los sistemas de pensiones públicos y privados. Así, luego del estudio del contexto demográfico (en el que se advirtió que la población mayor de 65 años en 2070 representará el 24% de la población total); la informalidad laboral (en el que más del 70% de la PEA ocupada se encontraba en dicha situación); la cobertura previsional de la PEA (en el que el 32% no contaba con cobertura, siendo que solo el 7% del SNP alcanzaría a una pensión); y, las características de los sistemas público y privado de pensiones, planteando la implementación de un único sistema multipilar. Por otro lado, el Informe Final de la Comisión Técnica (Ley 28991 – Decreto Supremo 051-2007-EF), sobre el plan de mejoras al sistema nacional de pensiones al sistema privado de administración de fondos de pensiones que permitan asegurar su coexistencia en el mediano y largo plazo, considera en el Plan de Mejoras al Sistema Nacional y Privado de pensiones, el Registro Individual del Afiliado al Sistema Nacional de Pensiones, que está orientado a optimizar el mapa de información del SNP. También recoge las experiencias internacionales de los Sistemas de Pensiones y la tendencia a la implementación de cuentas individuales para ahorro para pensiones[15].

[15] https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Informe_final_comision_tecnica_Ley28991_DS051_2007EF.pdf

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en enero 2020, envió al Ministerio de Economía y Finanzas, el documento "Lineamientos para una reforma del Sistema de Pensiones en el Perú", y propone el rediseño del sistema de pensiones y plantea como un objetivo, **unificar los sistemas de pensiones contributivos en un Sistema Integrado de Pensiones basado en Capitalización Individual y con garantía estatal y para evitar las distorsiones que genera la coexistencia de dos esquemas pensionarios diferentes, que compiten entre sí; plantea tomar lo mejor del sistema de reparto y del sistema de ahorro individual para integrarlo, y con ello proteger adecuadamente a los trabajadores en la etapa de la vejez, o las contingencias de la invalidez y sobrevivencia.** De esta manera, con un sistema contributivo de capitalización individual y con garantía de pensión mínima, se mitigarían los riesgos de pobreza en la vejez; y se incrementaría el bienestar de los afiliados y sus familias.

También en dicho documento, la SBS propone que los afiliados al SNP con edades menores a 35 años, pasarían al nuevo Sistema Integrado de Pensiones, bajo la creación de una AFP estatal. Inicialmente esta AFP, en tanto se constituye, administraría las cuentas individuales de capitalización de estos afiliados. La unificación del sistema de pensiones también permitiría eliminar los problemas operativos generados por el funcionamiento paralelo de dos esquemas de pensiones, en particular los aportes mal direccionados entre los actuales sistemas[16].

El Informe de Gestión, enero 2021, de la Comisión para la Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano, presidido por la Congresista de la República María del Carmen Omonte, puntualiza en el capítulo sobre la clasificación y evaluación de las iniciativas legislativas, que después de haber revisado y analizado en detalle los proyectos de ley, sistematizarlos y clasificarlos según las propuestas que plantean, un grupo de 134 propuestas referidas a modificatorias de las normas del Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. En este bloque de Proyectos de Ley se proponen la devolución de aportes, la libre desafiliación a las AFP, modificación de la edad de jubilación, modificación o reducción del cobro de comisiones a los afiliados, modificación de las pensiones mínimas, pensiones por desempleo, la implementación de nuevos cálculos para las pensiones, el allanamiento de juicios, pagos de pensiones de invalidez, viudez, orfandad, creación de cuentas individuales a los afiliados del Sistema Nacional de

[16] //www.sbs.gob.pe/Portals/0/Archivos/Lineamientos-para-reforma-del-sistema-de%20pensiones.pdf

Pensiones, entre otras. Subrayamos que las propuestas proponen de creación de cuentas individuales a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones[17].

También el informe recoge las conclusiones del informe del Consejo Evaluador de Pensiones[18], el cual considera que actualmente el sistema previsional presenta diversos problemas que afectan directamente su eficiencia, su cobertura y la sostenibilidad del SNP, problemas que se acrecientan por el contexto demográfico que enfrentamos, menor tasa de natalidad y mayor expectativa de vida; dentro de un mercado laboral altamente informal. Para ello propuso un primer lineamiento de reforma, que establece un sistema de pensiones de esquema multipilar, donde el pilar cero, no contributivo, está focalizado en personas mayores de 65 años que se encuentran en situación de extrema pobreza. Asimismo, el Pilar 2 y 3 están basados en un sistema de cuentas individuales que asegura que todos los afiliados puedan acceder a una pensión. Subrayamos, la propuesta de la Comisión sobre la creación de cuentas individuales.

La comisión técnica comisión multisectorial de naturaleza temporal encargada de elaborar los informes técnicos que contengan una evaluación del sistema previsional peruano, así como una propuesta normativa para crear el nuevo sistema de pensiones (Decreto Supremo N° 081-2022-PCM), en su Primer Informe Técnico, sobre la evaluación de la situación actual del sistema previsional peruano, describe que el sistema de pensiones del Perú está compuesto por una serie de subsistemas de diversa naturaleza. La actual configuración consta de dos subsistemas principales, el Sistema Nacional de Pensiones SNP (sistema de reparto) administrado por la Oficina de Normalización Previsional ONP y el Sistema Privado de Pensiones SPP (sistema de capitalización individual) administrado por las AFPs, además de varios regímenes especiales (Régimen de Jubilación Pesquera REP, Pensión Militar Policial, Régimen D. Ley 20530 de empleados públicos cerrado y Régimen de pensiones del Servicio Diplomático) y programas de asistencia social de pensiones No contributiva (Pensión 65 y Programa Contigo – pensión por discapacidad) [19].

[17] https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/CEM-sistema-previsional/files/presentaciones/informe_de_gestion_comision_para_la_reforma_integral_del_sistema_previsional_peruano.pdf
[18] INFORME CONSEJO EVALUADOR DE PENSIONES – Creado mediante Ley N° 30939
[19] Primer Informe Técnico: Evaluación de la situación actual del sistema previsional peruano
Informe de la comisión técnica comisión multisectorial de naturaleza temporal encargada de elaborar los informes técnicos que contengan una evaluación del sistema previsional peruano, así como una propuesta normativa para crear el nuevo sistema de pensiones. (Decreto Supremo N° 081-2022-PCM)

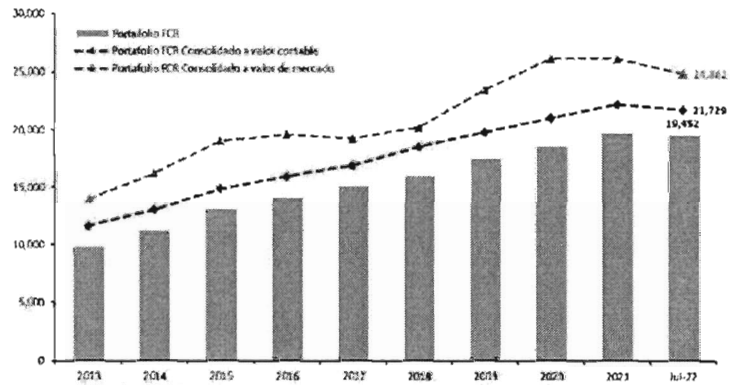
En lo referente a suficiencia considera que, el sistema previsional se caracteriza por tener bajas tasas de reemplazo, la cual es una de las más bajas de la región. La baja tasa de reemplazo está asociada a reducidas tasas de aporte, bajos niveles de densidad de cotización, mayor esperanza de vida, una relativa baja edad de jubilación, retiros extraordinarios anticipados de las cuentas individuales de capitalización, entre otros.

También, que el SNP es un fondo de reparto que tiene como característica la solidaridad intergeneracional mediante el otorgamiento de pensiones a los actuales pensionistas, que son financiadas con la recaudación de los aportes de los afiliados activos. Es decir, un sistema de reparto que se organiza sobre la base de un aporte obligatorio, realizado por los trabajadores en actividad, con el que se forma un fondo para atender las pensiones y jubilaciones de los trabajadores retirados.

Igualmente, que uno de los problemas a los que se enfrenta el SNP es el envejecimiento de la población. La tendencia hacia bajas tasas de natalidad junto con el aumento de la esperanza de vida genera problemas en la sostenibilidad fiscal del sistema que, al ser un sistema de reparto, emplea las contribuciones de los afiliados (trabajadores activos) para pagar las pensiones de los jubilados. Actualmente, esta problemática aun no es tan visible pues el Perú goza de lo que es conocido como un "bono demográfico" dado que la concentración de su población aún se centra en edades jóvenes.

De igual manera, el año 2022, la principal fuente de financiamiento para el pago de planilla de pensiones es la recaudación de aportes, representando el 66%, el resto del financiamiento proviene del Tesoro Público (22%) y del FCR (12%). Se evidencia una reversión en las fuentes de financiamiento de la planilla del SNP en los últimos 88 años, por ejemplo, en el 2004 la principal fuente de financiamiento era el Tesoro Público (70%), mientras que en la actualidad es la recaudación de aportes; sin embrago, el sistema aun no alcanza a ser plenamente fondeable en razón de sus ingresos.

Evolución del portafolio consolidado del FCR1/

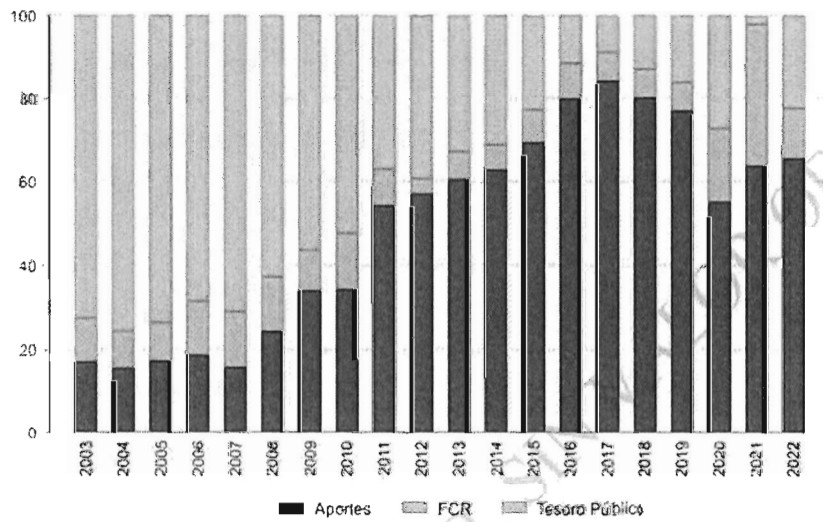


1/ A julio de 2022
Fuente: ONP

El creciente ingreso de aportantes, junto con otros componentes económicos y legales, ha permitido reducir la brecha. En el 2019 el número de aportantes alcanzo su máximo valor (1 600 000 aproximadamente), pero producto de la crisis sanitaria de la COVID-19 dicho valor tuvo una considerable caída, llegando a 1 400 000, si bien en el 2021 hubo una leve recuperación aún no se llega a los niveles previos a la pandemia.

Si observamos el financiamiento de las pensiones con recursos del Tesoro Público, en el 2003 representaba el 74% del pago total de pensiones, a partir de ahí se observa una clara tendencia decreciente hasta al año 2017, donde alcanza su menor valor (9%). En los años siguientes dicho porcentaje iría en aumento, llegando a su máximo valor (27%) en el año 2020. Si bien en el 2021 se observó una reversión a la baja, para los próximos años se espera un aumento, producto de que muchos de los actuales afiliados se jubilen y la cantidad de aportantes no crezca al mismo ritmo. Así, a futuro, habrá una cantidad insuficiente de aportantes – y consiguientemente, de recursos- para financiar estas pensiones.

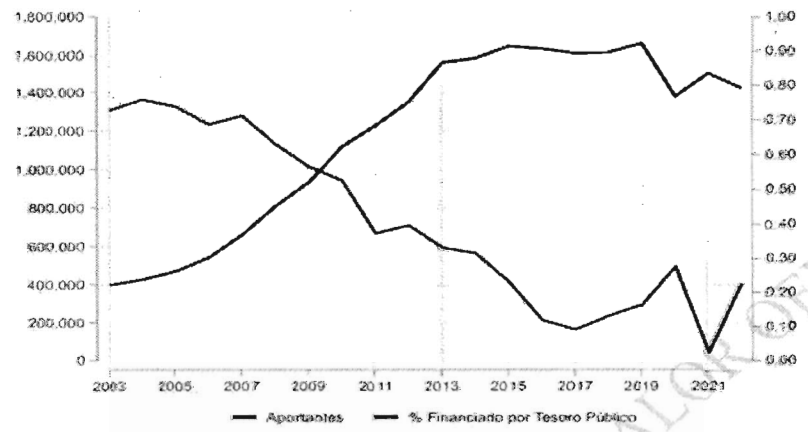
Fuente de financiamiento del SNP
(%)



Fuente: ONP

Otra forma de evaluar la situación financiera del SNP es medir la capacidad en que la recaudación de aportes (por si sola) sirve para hacer frente al pago de las pensiones. Este instrumento es denominado ratio de equilibrio financiero, si observamos el valor que se necesita para que los aportes financien totalmente la planilla, se estima en 9, no obstante, el valor real observado siempre ha sido inferior a dicho umbral. En el año 2003 el valor estuvo alrededor de 2 y aunque hubo mejoras sustantivas en los últimos 16 años, en el 2020 se observa una caída considerable producto de la COVID-19, producto de lo anterior la tendencia creciente de dicha ratio se ha visto estancada alrededor del valor de 5. Dada las condiciones actuales se esperaría que una mejora en la ratio en los próximos años, esto sin tener en cuenta posibles shocks aleatorios, sin embargo, la brecha respecto al equilibrio es aún amplia.

Aportes versus el % de financiamiento de las pensiones cubierto con recursos del Tesoro Público



Fuente: ONP

Más aún, y existe bastante evidencia, como lo han señalado Robert Palacios y Klaus Schmidt-Hebbel, que los sistemas de capitalización individual contribuyen a mejorar la cobertura, al equiparar los beneficios con los aportes, al sentir el trabajador que lo que está aportando es igual al valor presente de lo que espera recibir en el futuro[20].

El Régimen de Reparto del Sistema Nacional de Pensiones, el cual es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el mismo que en el tiempo se ha vuelto insostenible, debido a que el Estado continúa subsidiando al Sistema Nacional de Pensiones dado que cada vez hay más jubilados y menos aportantes. Como se muestra en el siguiente cuadro.

[20] www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2016/04/arthur.pdf

Afiliados con aportes al SPP y SNP
2006-2022



En el cuadro, se puede observar que anualmente van disminuyendo los afiliados que están aportando al SNP reduciéndose a poco más del 30%, lo que hace que el sistema nacional de pensiones sea insostenible. Por lo mencionado, este dictamen busca que el sistema nacional de pensiones aperture cuentas individuales a los afiliados, con la finalidad de capitalizar el total de sus aportes. De esta manera, los sistemas público y privado coexistirán en igualdad de condiciones y la ONP deberá ser responsable de tomar las mejores decisiones de inversión para generar rentabilidad sobre los aportes de los afiliados. Adicionalmente, debemos mencionar la importancia de que los afiliados sigan teniendo libertad de elección sobre a qué sistema de pensiones van a pertenecer y tengan la decisión de elegir sobre la base de otro factor: la rentabilidad de los fondos, con lo cual, el afiliado podrá tener otro factor determinante para elegir a qué sistema pertenecer. Por otro lado, de los datos obtenidos de la presentación del Instituto Peruano de Economía

(IPE), podemos señalar que entre el 2011y 2021, el Estado ha destinado S/ 3,140 millones en promedio por cada año para financiar las pensiones de la ONP. (ver cuadro adjunto)

Presupuesto institucional de la ONP según fuente, 2011 – 2021
(millones de S/)



Fuente: IPE

Por lo que, este dictamen busca que la ONP rentabilice los fondos de tal manera que la probabilidad de financiamiento de parte del Estado sea casi nula, estos recursos podrían utilizarse por el gobierno central en las reformas complementarias de educación y mercado laboral.

La Asociación de AFP, con relación a la Reforma del Sistema de Pensiones, sostiene que actualmente, los sistemas de reparto en el mundo enfrentan serios problemas de sostenibilidad[21].

[21] Asociación de AFP - Joaquín Rey, asesor en políticas públicas de la Asociación de AFP, 30 marzo, 2023

Las tendencias demográficas hacia el envejecimiento no sólo afectan al equilibrio financiero de los sistemas de pensiones por el lado de los gastos sino también por el lado de los ingresos. En efecto, el envejecimiento poblacional es consecuencia del aumento de la esperanza de vida, pero también del descenso de la natalidad que provoca una disminución de la población joven y, con el tiempo, de la población en edad de trabajar, o sea de la parte de la población que debe financiar con sus cotizaciones los gastos de los jubilados en los sistemas de reparto. El efecto combinado de estas dos tendencias demográficas apunta hacia un desequilibrio financiero creciente en los sistemas de pensiones. En este contexto, no resulta extraño que la mayoría de los países se vean obligados a introducir reformas en sus sistemas de Seguridad Social como respuesta a los retos del envejecimiento, que en el caso del Perú sería el Sistema Nacional de Pensiones bajo la ONP.

A mediados de la década de los noventa, en Europa, surgió una nueva propuesta, que en ocasiones apareció combinada con el sistema multipilar, consistente en establecer una analogía entre el sistema de reparto y el de capitalización, mediante la incorporación al sistema de reparto de instrumentos financiero-actuariales utilizados en el sistema de capitalización a través de las denominadas Cuentas Nocionales de aportación definida[22]. Esto es, las Cuentas Nocionales introducen la lógica de la capitalización en el sistema de reparto, ya que las prestaciones se calculan de acuerdo a las cotizaciones pagadas por el contribuyente y a la esperanza de vida restante al jubilarse el mismo, aplicándose una fórmula actuarial.

El término nocional no viene reflejado directamente en el diccionario de la Real Academia Española, pero sí aparece acompañando como adjetivo a un determinado tipo de bono; indicando que el concepto de nocional, en ese caso, es sinónimo de teórico. En el mundo académico, también se suele identificar nocional con virtual. Así, según Vidal et al. (2002): **"una cuenta nocional es una cuenta virtual donde se recogen las aportaciones individuales de cada cotizante y los rendimientos ficticios que dichas aportaciones generan a lo largo de la vida laboral".**
El sistema de Cuentas Nocionales es un sistema de reparto, donde las cotizaciones realizadas cada año por los cotizantes van destinadas al pago de las pensiones de los pensionistas de ese mismo periodo. Los cotizantes, por tanto, no tienen sus aportaciones

[22] Sistemas de reparto, de aportación definida, también denominados "Sistemas de Cuentas Nocionales".

en un fondo propio, por lo que este sistema nunca puede considerarse como un sistema de capitalización. De igual manera, la cuenta de cada cotizante no es real, solo es virtual, ya que las cotizaciones no son depositadas realmente en una cuenta ni se invierten en el mercado financiero ni, por tanto, se benefician de la rentabilidad que pudiera obtenerse de su inversión; de ahí el nombre de cuenta nocional o virtual o teórica.

Para poder conocer la pensión que corresponderá a cada individuo, primero se tendrá que calcular el fondo acumulado, como consecuencia tanto de las cotizaciones efectuadas por el individuo, como de los rendimientos teóricos (virtuales o ficticios, según como se prefiera denominar) hasta el momento de su jubilación; y, posteriormente, habrá que utilizar un factor de conversión -de carácter actuarial- para transformar ese fondo acumulado en la cuantía de la renta vitalicia que le corresponda.

Transición en España

En base a las experiencias de otros países se plantean múltiples posibilidades de diseño de una transición. En parte, esa transición depende de la información disponible de bases de cotización pasadas. En España, el sistema actual de cálculo de la pensión necesita disponer de las bases de cotización desde 1997 inclusive. En este trabajo los datos necesarios para la simulación se obtendrán a partir de la Muestra Continúa de Vidas Laborales. La Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) es una muestra aleatoria no estratificada con información de más de 1,2 millones de individuos, que representan un 4% del total de personas que están relacionados de alguna forma con la Seguridad Social. Esta base de datos se publica anualmente por parte de la propia Seguridad Social y en ella existe información de bases de cotización relativamente completas desde julio de 1980, aunque el propio Ministerio reconoce que falta información de un 8% de las bases en ese registro de datos. Así pues, ante la posible falta de bases de cotización anteriores a 1997, parece que la cohorte nacida en 1981 (16 años en 1997) es la primera de la que se dispone con total seguridad de información completa de cotizaciones. Así, tenemos varias posibilidades de transición:

- **Transición 1:** No coexistencia de ambos sistemas: todo cotizante se incorpora al Sistema de Cuentas Nocionales desde el primer año de entrada en vigor, que puede ser inmediata o tras dejar unos años de carencia. Se calcula el fondo nocional llegado el momento de la jubilación (o antes, para que estuvieran informados de su cuantía) con las cotizaciones a partir de 1997 y con una estimación de las cotizaciones anteriores en función

de los años cotizados y las bases de cotización conocidas hasta 1996. Un inconveniente es que los individuos que prevén una bajada de la pensión pueden anticipar su jubilación al año previo a la entrada en vigor. Una manera de evitar esto sería calcular el fondo nocional equivalente a las cotizaciones previas a 1997 con un tanto nocional "generoso", de manera que un individuo que se considerase de referencia (por ejemplo, con 38,5 años cotizados ininterrumpidos, con 65 años de edad y con bases de cotización medias) y que se jubilara el primer año tras la entrada en vigor, tuviera la misma primera pensión con el nuevo sistema y con el actual. Para las cotizaciones de 1997 en adelante ya se aplicaría el tanto nocional normal. Sin embargo, está el inconveniente de que, para las primeras generaciones de nuevos pensionistas, una parte del esfuerzo de cotización tendrá que ser estimado si falta información.

Coexistencia de ambos sistemas durante un tiempo limitado. Aquí caben varias opciones:

Transición 2: Según el año de la primera cotización: se aplica el sistema actual para individuos que empezaron a cotizar antes de 1997 y el sistema de Cuentas Nocionales para individuos que empezaron a cotizar a partir de 1997. Entre los inconvenientes tenemos, por un lado, que individuos de la misma cohorte pueden tener sistemas diferentes de cálculo de la primera pensión, según cotizaran o no antes de 1997; y, en segundo lugar, que el sistema actual puede estar en vigor mucho tiempo, concretamente hasta que se jubile el último que haya cotizado antes de 1997. Se puede limitar este inconveniente fijando un año de acceso a la jubilación máximo bajo el sistema actual.

Transición 3: Según cohortes en dos grupos: se aplica el sistema actual para individuos nacidos en 1980 o antes (37 o más años si el sistema entrara en vigor en 2018) y el sistema de Cuentas Nocionales para individuos nacidos en 1981 o después. El principal inconveniente es una transición excesivamente larga, ya que la primera pensión bajo el nuevo sistema se pagaría en 2044 (si la edad mínima de jubilación es de 63 años).

Transición 4: Según cohortes en tres grupos: se aplica el sistema actual para individuos nacidos en 1961 o antes (56 o más años si el sistema entrara en vigor en 2018) y el sistema de Cuenta Nocionales para individuos nacidos en 1981 o después. Para los nacidos entre 1962 y 1980, se calcula la pensión como una media ponderada de la que obtendrían bajo ambos sistemas. La ponderación del sistema de Cuentas Nocionales para esta generación sería de un 5% por cada año de edad que falte hasta los 56 en el momento de la entrada

en vigor; y el porcentaje complementario para el sistema actual. Así, una persona nacida en 1975 (42 años antes de la entrada en vigor si es 2018) tendría una pensión calculada con el 70% por el sistema de Cuentas Nocionales y el 30% con el actual. El fondo nocional para calcular la pensión por el sistema de Cuentas Nocionales se haría con las cotizaciones a partir de 1997 y con una estimación de las cotizaciones anteriores en función de los años cotizados y las bases de cotización conocidas hasta 1996. Ahora el inconveniente proviene de que una parte del esfuerzo de cotización para la generación de la transición tendrá que ser estimado si falta información, aunque se limita su efecto con las ponderaciones.

La tabla siguiente resume estas cuatro transiciones con sus ventajas e inconvenientes. Si la información de bases de cotización es completa antes de 1997, los años de corte anteriormente considerados podrían anticiparse. La elección del tanto nocional también puede determinar la mejor transición porque si la primera pensión va a ser manifiestamente menor, sería conveniente que la transición fuera más larga para dar tiempo a que los individuos anticiparan las consecuencias. En cualquiera de las transiciones planteadas, sería aconsejable que la revalorización de las pensiones nuevas y antiguas fuera la misma, adaptándose la revalorización de las antiguas al sistema de Cuentas Nocionales.

Principales tipos de transición hacia un sistema de Cuentas Nocionales

Tipo de transición	Coexistencia de ambos sistemas	Variable clave para asignar sistema	Ventajas	Inconvenientes
Transición 1	NO	No hay. Todos se incorporan al nuevo sistema	- Una única fórmula para todos	- Posibles distorsiones en la decisión de jubilación. - Puede ser necesario estimar cotizaciones
Transición 2	SI	Año de la primera cotización	- Existen bastantes años para adaptarse al nuevo sistema	- Individuos de la misma cohorte pueden tener sistemas distintos - Transición muy larga
Transición 3	SI	Año de nacimiento en dos grupos	- Existen bastantes años para adaptarse al nuevo sistema	- Cambio brusco de sistema el año anterior y posterior al año corte. - Transición muy larga
Transición 4	SI	Año de nacimiento en tres grupos	- Cambio suave de sistema - Transición más corta	- Puede ser necesario estimar cotizaciones

Fuente: La implantación de un Sistema de cuentas nocionales en España. Instituto Santalucía.

Emisión de las cuentas nocionales en el Sistema Nacional de Pensiones

La propuesta de la Comisión de Economía sobre implementar un sistema de cuentas nocionales se sustenta en la evidencia planteada. Efectivamente tomar esta medida requiere de mayor tiempo para su ejecución, es por ello, la ley dispone un plazo máximo de implementación por parte del Poder Ejecutivo, hasta el año 2030.

5. Tasa de aporte obligatorio para los trabajadores dependientes en el Sistema

En nuestro país las tasas de aporte son una de las más bajas de los países de América Latina; sin embargo, la Comisión no considera que el marco de esta reforma se realicen modificaciones sobre las tasas de aporte dada la coyuntura y los altos niveles de informalidad con los que contamos.

Estructuras de tasas de cotización en los sistemas de pensiones de América Latina (% de la renta imponible)

País	Trabajdor	Empleador	Estado	Total
Bolivia	12.71			12.71
Chile	11.16	1.54		12.70
Colombia	4.00	12.00		16.00
Costa Rica	5.00	8.50	1.41	14.91
El Salvador	7.25	7.75		15.00
México	1.75	6.90	1.92	10.57
Perú	13.34			13.34
	11.87			11.87
República Dominicana	2.87	7.10		9.97
Uruguay	15.00	7.50		22.50

Fuente: FIAP, recuperado de Bloomberg Línea

En ese sentido la propuesta mantiene las aportaciones obligatorias de los afiliados dependientes al SNP no inferiores al 13 % de la remuneración mensual asegurable o pensionable a cargo del afiliado, sin perjuicio de los aportes que legalmente corresponde realizar al empleador o al Estado. En el caso del SPP, el aporte obligatorio está constituido por:

a) El 10 % sobre la remuneración asegurable destinada a la CIC.
b) Un porcentaje de la remuneración asegurable, destinada a financiar las prestaciones de invalidez y sobrevivencia y un monto destinado a financiar la prestación de gastos de sepelio, conforme a las reglas dispuestas para ello en la normativa vigente del SPP.
c) Una comisión sobre la base de lo establecido en el inciso c) del artículo 30 del TUO de la Ley del SPP, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF.

Asimismo, la propuesta considera que cualquier incremento progresivo de la tasa de aportación en el sistema y la participación de los empleadores para el financiamiento de las prestaciones debe ser aprobado mediante norma con rango de ley a propuesta del Poder Ejecutivo, previo estudio actuarial, a cargo de la ONP y la SBS en el marco de sus competencias.

Como se observa en la tabla anterior, los aportes de parte de los empleadores para las pensiones no es un tema ajeno en los países analizados; sin embargo, se debe de tener en consideración el impacto que puede tener la medida sobre los costos laborales y la formalidad en el país. En ese sentido, la Comisión propone que el Poder Ejecutivo realizará un estudio y posteriormente una propuesta legislativa para la incorporación de un porcentaje de aporte obligatorio de parte de los empleadores para cada trabajador tanto del SNP como del SPP.

6. Tasa de aporte obligatorio para los trabajadores independientes en el Sistema

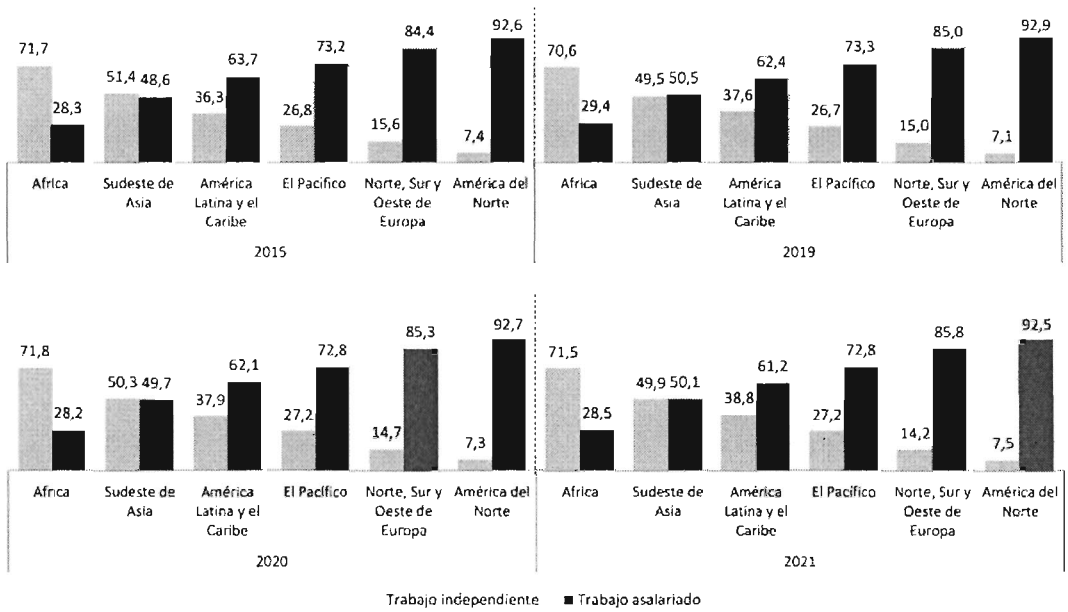
Problemática de los independientes

Las condiciones y la calidad del empleo que se genera en un país son consideraciones importantes para quienes toman decisiones de políticas públicas. Las particularidades de cada tipo de trabajo demandan estrategias distintas para problemas diversos.

El empleo independiente, por ejemplo, es atractivo para algunos por las posibilidades de manejar horarios propios y trabajar en distintos lugares y sectores. Según estimaciones de la OIT, en el mundo, alrededor del 42,5% de los ocupados se desempeña como trabajador independiente. Sin embargo, de acuerdo a diversas características, siendo los países en desarrollo en donde la mayor parte del empleo se concentra en los independientes, en los países emergentes alcanzan a concentrar el 46,2%; mientras que en los países desarrollados apenas llega al 10,0%[23].

Mundo: distribución del empleo según trabajo independiente y trabajo asalariado, 2015 y 2019-2021 (porcentaje)

[23] MTPE. La dinámica del trabajador independiente 2016-2021.
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3623793/BEL%20N%C2%B0%2052%20-%20Trabajador%20%20independiente.pdf?v=1666113603



Fuente: World Employment and Social Outlook: Trends (ILO, 2022).
Elaboración: MTPE-DGPE- Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL)

Para la mayoría de trabajadores esta condición laboral puede resultar una alternativa forzada por la falta de trabajo dependiente y con flujo de ingresos estable. Sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares, el IPE puso bajo la lupa a los trabajadores independientes en el ámbito urbano del país.

Lo primero a resaltar es que tienen una participación importante en la fuerza laboral urbana; pues uno de cada tres trabajadores es independiente. De los 13 millones de personas que forman la población económicamente activa en el área urbana, 3,9 millones serían independientes y 5,9 millones, dependientes. El resto de trabajadores cae en las categorías desempleado, trabajador del hogar o trabajador familiar no remunerado.

El dato más saltante respecto a los trabajadores independientes es que, en promedio, su ingreso representa la mitad de lo que percibe uno de sus pares asalariados. Al cierre del 2018, un independiente ganaba unos S/. 986 al mes; mientras un dependiente recibía S/. 1.826. En los últimos 15 años, esta brecha se ha mantenido invariante, aunque sí resalta que los ingresos nominales promedio de ambos grupos se han duplicado desde el 2004.

Los menores niveles de sueldo responden porque laboran en condiciones de informalidad. Mientras 49% de los dependientes son informales, ocho de cada 10 independientes laboran en la informalidad. Como se recuerda, la literatura económica subraya que el empleo informal tiene una relación muy estrecha con la baja productividad, lo que redunda en menores salarios.

En este punto, es importante considerar que los independientes tendrían hoy pocas probabilidades de insertarse en un empleo asalariado formal. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima esa cifra en 7,5%. En tanto, de cada 100 personas que dejan un trabajo independiente, 20 ingresan a empleos dependientes informales y 33 a otro empleo independiente. Así, sus posibilidades de pasar a empleos de mejor calidad son reducidas, de acuerdo a la entidad internacional.

Según la actividad económica, el grueso de los independientes se desempeña en comercio y transportes (54% del total) y servicios (23%), cuyos salarios promedio son S/. 1.051 y S/. 1.008, respectivamente. Los trabajadores dependientes también se agrupan mayoritariamente en estos sectores (60% en conjunto), aunque perciben mayores salarios: S/. 1.557 en comercio y S/. 1.859 en servicios. Un detalle a notar es que la rama de electricidad, agua y gas es la más atractiva para los independientes, pues ganan S/. 3.302 al mes, en promedio. Sin embargo, apenas 0,01 % trabaja en esos sectores.

En línea con los menores salarios, hay temas de capital humano que están relacionados con los menores ingresos de los trabajadores independientes, que además explicarían por qué la brecha respecto a los dependientes persiste y las dificultades de incorporarse a una planilla. Un primer punto es que los independientes tienden a conseguir menos logros en términos de educación. Por ejemplo, el 42% de los independientes no cuenta con educación básica completa, el 33% sí la completó y solo 25% alcanzó estudios superiores.

Esto contrasta con las cifras de los trabajadores asalariados. El 51% sí tiene estudios superiores, el 31% completó secundaria y el 18% no logró terminar la educación básica.

Un factor adicional que apunta a la vulnerabilidad es que los trabajadores independientes, en su mayoría, carecen de acceso a servicios de salud eficientes. De cada 10 independientes, cuatro están afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y cuatro no tienen ningún tipo de seguro. En contraste, alrededor de cinco de cada 10 trabajadores dependientes tienen acceso a Essalud y otros tres tienen seguros privados o SIS.

Respecto a la afiliación obligatoria de los independientes, según David Tuesta considera que dicha propuesta debe tener en cuenta los problemas de productividad, además que las tasas de aporte no pueden ser igual a los de un trabajador dependiente e invoca que haya una gradualidad de las tasas de aportación.

Asimismo, Noelia Bernal (2022)[24] brinda algunas recomendaciones de política para este grupo entre las que destacan la afiliación obligatoria y gradual de trabajadores independientes, cambios paramétricos a los sistemas de pensiones, cruces de información con encuestas y agenda de políticas de largo plazo, entre otros.

Desde la creación del sistema de pensiones en el Perú, se han registrado avances en cobertura, aunque con marcadas diferencias entre trabajadores dependientes e independientes. Esto se debe, en gran parte, a que el sistema previsional contributivo, casi por definición, está diseñado para trabajadores dependientes. La muy baja inclusión de los independientes, cuyas condiciones laborales son muy heterogéneas, requiere de reformas integrales para evitar que caigan en una situación de pobreza durante su vejez.

La diferencia en la cobertura del sistema de pensiones entre los trabajadores dependientes e independientes se ha ampliado en los últimos 16 años. Mientras que la proporción de dependientes afiliados al sistema previsional aumentó de 39% en el 2005 a 56% en el 2021, el incremento de la cobertura entre los independientes apenas pasó de 9% a 21% en el mismo período. Sin embargo, estar afiliado no asegura una contribución efectiva que permita acceder a una mejor pensión de jubilación.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el porcentaje de trabajadores independientes afiliados al sistema previsional que aportó en los últimos doce meses

[24] N. Bernal Lobato, "Opciones para expandir la cobertura contributiva de pensiones entre los trabajadores independientes en el Perú", Documentos de Proyectos (LC/TS.2022/104), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022.

únicamente pasó de 2% en el 2005 a 4% en el 2021, esto es, el 96% de los independientes estarían en riesgo de no tener una pensión. La falta de contribuciones efectivas de los trabajadores independientes, que representan más del 40% del total de la fuerza laboral nacional ocupada, puede resultar en una falta de ahorro para su jubilación y un mayor riesgo de ser pobres durante su vejez.

En comparación con los trabajadores dependientes o asalariados, los independientes suelen emplearse en sectores económicos menos productivos y que proveen menores ingresos, como agropecuario y comercio, que predominan en los segmentos de ingresos más bajos, según datos de la ENAHO. Por ejemplo, en el quintil más bajo (20 % con menores ingresos), el 63 % de trabajadores están empleados en dichos sectores, de acuerdo con cálculos del IPE. Por el contrario, los dependientes laboran mayormente en los sectores servicios e industria, que están asociados a mayores ingresos. En particular, en el quintil más alto, el 74 % está empleado en dichos sectores.

Otro aspecto que caracteriza a los trabajadores independientes es la considerable disparidad de ingresos que existe dentro de este grupo. En efecto, uno de cada tres trabajadores independientes se ubica en el quintil más bajo de ingresos, con una remuneración promedio mensual de S/. 193. Por otro lado, el quintil de ingresos más altos solo incluye al 10 % de trabajadores independientes y logra un ingreso promedio de S/. 3.335 al mes, más de 17 veces que el quintil de menores ingresos.

El bajo nivel de ingresos de la mayoría de independientes hace virtualmente imposible que aporten al sistema previsional con el diseño actual. Además, su bajo nivel de cotización los obligaría a contribuir por más tiempo para acceder a una mejor jubilación. Por ejemplo, un independiente que percibe salarios cercanos a una remuneración mínima vital (RMV) a lo largo de su vida laboral tendría que registrar 40 años de aportes efectivos para alcanzar una pensión de un valor similar, tiempo que se reduce a diez años si es que se compara con un trabajador que percibe ingresos equivalentes a cinco RMV.

Cualquier reforma para elevar la cobertura de sistema previsional en los trabajadores independientes inevitablemente demandará recursos fiscales adicionales y debería financiar a los más vulnerables. Por ello, la atención a esta problemática requiere una estrategia focalizada y adecuada a las diversas características que muestra este gran segmento del mercado laboral.

En el caso de los trabajadores independientes de ingresos medios, la limitada cobertura y baja frecuencia de aportes requiere, por un lado, de la creación de incentivos financieros desde el Estado. El 2013 se promulgó la Ley 30082 que aplicaba una tasa de aporte a los trabajadores independientes; sin embargo, esta contemplaba una gradualidad de aplicación muy corta y además no diferenciaba independientes por niveles de ingresos. Un año después fue derogada.

En lugar de acciones aisladas y contraproducentes como las que se han implementado en los últimos años, la situación del sistema de pensiones en el Perú exige cambios con un enfoque integral para convertirlo en un esquema más inclusivo. No considerar las particularidades del empleo independiente en el Perú provocará que el debate alrededor de la reforma previsional continúe acotado a un pequeño grupo de trabajadores, los dependientes, a costa de la exclusión de la gran mayoría.

En ese sentido, la Comisión de Economía considera que a los trabajadores independientes afiliados al Sistema de Pensiones que perciban ingresos que constituyan rentas de cuarta categoría o quinta categoría prevista en el literal e) del artículo 34 del Decreto Supremo 179-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, se les deberá aplicar una tasa de aporte obligatorio.

Dicha tasa se aplicará sobre los ingresos brutos de cada recibo por honorario emitido por el trabajador independiente de forma gradual a partir del primero de enero del tercer año posterior a la entrada en vigencia de la presente ley, aplicándose durante dicho año una tasa de 2%, la cual se incrementará en un punto porcentual cada dos años hasta un máximo de 5%.

Las personas, empresas y entidades obligadas a llevar contabilidad de acuerdo con el artículo 65 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta estarán obligadas a retener los aportes señalados cuando paguen o acrediten rentas de cuarta categoría o quinta categoría prevista en el literal e) del artículo 34 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

En el caso de los trabajadores independientes que perciban ingresos no sujetos a retención o cuando el agente de retención no cumpla con la obligación de retener los aportes, estos deben declarar y pagar conforme a las reglas de periodicidad que establezca el reglamento. El agente retenedor es solidariamente responsable por los aportes no pagados y por las obligaciones derivadas de ellos.

Para los afiliados al SNP, estos aportes tienen naturaleza tributaria y su administración está a cargo de la Sunat. En el caso de los afiliados al SPP, los plazos para la declaración, retención y pago, así como las disposiciones relacionadas con estos procesos, se efectúan de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente del SPP.

Los aportes referidos se determinan mensualmente y deben ser declarados y pagados en los plazos establecidos en el artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Supremo 133-2013-EF, Código Tributario.

En el caso de que el responsable de realizar la retención de los aportes no realice el depósito efectivo de estos en la CIC del afiliado, pasado el plazo establecido se realizarán las siguientes acciones:

i. En el caso de las entidades del sector público, los montos adeudados serán directamente depositados en la CIC del afiliado, siendo descontados directamente del presupuesto de la institución deudora para el ejercicio fiscal siguiente.
ii. En todos los casos, la Sunat aplicará los procedimientos tributarios para recaudar los aportes adeudados, tanto de forma voluntaria como coactiva, conforme lo dispone la disposición complementaria final duodécima quinta.

Sin perjuicio de lo anterior, el responsable de realizar la retención de los aportes que no realice el depósito efectivo de estos en la cuenta del afiliado incurrirá en la responsabilidad penal que corresponda. Con ello los empleadores que se apropien de los aportes de los afiliados tendrán las sanciones que les correspondan.

7. Unidad de aporte

La unidad de aporte es una medida que permite equiparar las aportaciones o cotizaciones que se efectúan y que permite migrar de un sistema a otro con la finalidad de lograr la continuidad de aportaciones. En el sistema peruano de pensiones no existía el concepto de "Unidad de Aporte"; en ese sentido, resulta necesario establecer una unidad de medida que sea común y que permita equiparar las aportaciones efectuadas, en los regímenes pensionarios regulados por el Decreto Ley N° 1999055, el Decreto Ley N° 2053056, los Decretos Legislativos N° 89457 y el SPP.

En dicho escenario la Comisión de Economía considera que la unidad de aporte equivale a un mes de aporte en el sistema. Esta será definida mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Asimismo, considera que, para el trabajador dependiente, los periodos de aportaciones en meses, semanas o días que presten o hayan prestado servicios efectivos que generen la obligación de abonar las aportaciones. También, considera las licencias con goce de remuneraciones otorgadas por ley o por el empleador, así como los periodos durante los que el trabajador haya estado en goce de subsidio.

Cuando no se realice la jornada máxima legal o no se trabaje la totalidad de días de la semana o del mes, la aportación se calcula sobre lo percibido, siempre que se mantenga la proporcionalidad, con la remuneración mínima con la que debe retribuirse a un trabajador, conforme a las normas correspondientes. Finalmente, en el caso de los aportes del trabajador independiente y los aportes voluntarios con fin previsional que realice cualquier afiliado, la unidad de aporte se define en función de la remuneración mensual asegurable o pensionable que, en ningún caso, es inferior a una remuneración mínima vital (RMV), pudiéndose efectuar pagos fraccionados.

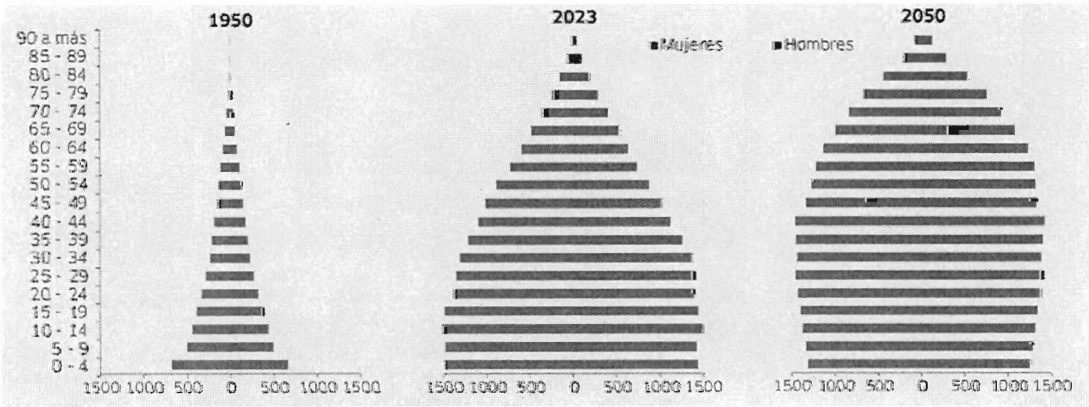
8. Edad de jubilación

De acuerdo con lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una de las transformaciones sociales más importantes del presente siglo es la transición demográfica. Esta se define como un proceso en el que se pasa de un estado inicial caracterizado por altas tasas de mortalidad y fecundidad (con el predominio de la población joven), a un estado final en el que las tasas de mortalidad y fecundidad son significativamente menores (en el que predomina la población mayor).

El cambio en la dinámica de la población en el mediano y largo plazo tiene un efecto en las finanzas públicas a través de presiones al alza en el gasto público, como por ejemplo en el rubro de pensiones. Así, según un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), los cambios demográficos en América Latina han dado lugar a crecientes ratios de dependencia, los cuales afectan la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones y generan aumentos constantes en dicho gasto, por ello es importante evaluar periódicamente la edad de jubilación, el ajuste progresivo en el tiempo de dicha variable.

En nuestro país la pirámide poblacional también ha sufrido cambios significativos y seguirá manifestándolos. Para el año 2050 dejará la forma de pirámide dado que la tasa de natalidad se ha reducido en nuestro país y a nivel mundial.

Perú: Pirámide poblacional, 1950 - 2023 – 2050 (miles de personas)



Fuente: CEPAL - CELADE. Elaboración: IPE

En ese sentido, la propuesta fija la edad de jubilación en el Sistema en 65 años, tanto para hombres como para las mujeres. Constituye derecho de la persona afiliada jubilarse después de los 65 años, el trabajador puede optar por seguir laborando hasta los 70 años.

Por otro lado, tomando la propuesta del Poder Ejecutivo, se ha establecido que, para el ajuste progresivo en el tiempo de dicha variable paramétrica el MEF, mediante concurso público, encargará a una entidad de reconocido prestigio la revisión y evaluación de la edad de jubilación, proponiendo las modificaciones que correspondan a las instancias legislativas, de ser el caso, sobre la base de las condiciones de longevidad que registre la población, de las evidencias que presente el mercado laboral, así como de las tasas de reemplazo proyectadas para los componentes contributivos. Asimismo, se dispone que dicha revisión deberá hacerse en forma periódica, cada 5 años como un plazo máximo.

Por otro lado, se establece que el requisito de edad para acceder a una pensión de jubilación adelantada o anticipada (incluyendo el régimen especial de jubilación anticipada por desempleo aprobada mediante Ley 30939, así como las Leyes 27252 y la Ley 31550, cuando corresponda, en el Sistema es a partir de los 55 años de edad, manteniéndose los requisitos de exigencia de Unidades de Aportes pensionario, de acuerdo a cada sistema de pensiones.

Hasta el 2045 el Perú atravesará un periodo de bono demográfico, en el cual el crecimiento de la población en edad activa (14 a 59 años) es mayor al de la población infantil y juvenil (0 a 14 años) y de la población mayor (60 años a más). Esto se ve reflejado en la reducción de la tasa de dependencia' que, para el año 1965 era de 101.1% y en el 2020 fue 60.2%.

Por ello, de lo anteriormente mencionado reducir a menos de 55 años restringiría la posibilidad que una persona, con capacidades físicas para trabajar y reinsertarse al mercado laboral, continúe ahorrando para su vejez, vía aportes obligatorios o voluntarios; por lo que, el acceso de manera temprana a la jubilación afecta directamente al nivel de la CIC y, consecuentemente, al nivel de pensión, debido a la relación directa que existe entre una mayor acumulación en la CIC (aportes y rentabilidad) y la pensión a la que se puede acceder con los recursos acumulados; es decir, cuanto mayor es la CIC o el total de ahorros previsionales, mayor es la pensión a la que accede el trabajador.

9. Traslado entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones

A través de la Ley 28991, Ley de Libre Desafiliación Informada, Pensiones Mínima y Complementarias, y Régimen Especial de Jubilación Anticipada, se establecieron los requisitos para poder desafiliarse del SPP y retornar al SNP y que tiene los siguientes supuestos establecido en los artículos 1°, 2° y la Primera Disposición Transitoria Final de la mencionada Ley:

a. Los afiliados que se hubiesen inscrito al SNP hasta 31de diciembre de1995 y que al momento de desafiliarse les corresponda una pensión de jubilación en el SNP independiente de la edad.

b. Los afiliados que al momento de su afiliación al SPP cuenten con los requisitos para obtener una pensión de jubilación en el SNP.
c. Los afiliados al SPP que realicen labores que implican riesgo para la vida o salud, que se encuentran bajo el alcance de la Ley 27252, cuando cumplan con los requisitos para obtener una pensión en el SNP.

Asimismo, el Tribunal Constitucional dispuso la incorporación normativa de un supuesto referido a la falta de información indebida, insuficiente, y/o inoportuna al momento de la afiliación al SPP (supone un perjuicio) además de tener los años de aportación al momento de la desafiliación.

Cabe señalar que, la desafiliación se encontraba limitada considerando la independencia de los sistemas de pensiones y que por su naturaleza no se podía garantizar el acceso a las prestaciones previsionales; sin embargo, la propuesta contiene alternativas que no perjudiquen la sostenibilidad de los componentes del Sistema (SNP y SPP), por lo que, con la finalidad de lograr mayores niveles de cobertura es necesaria una regulación que flexibilice la situación actual.
En ese sentido, las personas afiliadas al SNP pueden trasladarse al SPP en cualquier momento, de conformidad con la normativa vigente, teniendo el derecho al Bono de Reconocimiento de los aportes realizados al SNP más un ajuste por inflación acumulado, que será transferido a la CIC del afiliado respectivo. Asimismo, las personas afiliadas al SNP que decidan trasladarse al SPP, que hayan acreditado como mínimo doscientos cuarenta unidades de aporte y cuyos aportes permitan financiar una pensión mínima o proporcional en el SNP tienen garantizada una pensión en el SNP con esos aportes, la que no es incompatible con la pensión a recibir en el SPP.

Las personas afiliadas del SPP pueden trasladarse al SNP en cualquier momento, siempre que transfieran el 100 % de su CIC de aportes con fin previsional, en función de las unidades de aporte que representen, no formando parte del cálculo los aportes voluntarios sin fin previsional. En el caso de que una persona afiliada al SPP regrese al SNP, su pensión se calcula tomando todos los aportes realizados tanto al SNP como al SPP al momento de la jubilación.

10. Administración de fondos en el sistema

En el Sistema la administración de fondos del SNP (régimen de reparto) se encuentra bajo la administración de la ONP, manteniendo la estructura actual.

Por otro lado, el SPP presenta otros problemas como la concentración de mercado lo que ha conllevado a una percepción de falta de competencia. Al respecto, después de amplios consensos se presenta como propuesta la incorporación de las Empresas del Sistema Financiero (Empresas de Operaciones Múltiples, Empresas de Seguros y Bancos de Inversión) establecidas en los literales A, C y D del artículo 16 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros para la ampliación de oferta de administradoras de fondos en el mercado.

Asimismo, se propone la inclusión excepcional de las cooperativas de ahorro y crédito que solo operan con sus socios y que no están autorizadas a captar recursos del público u operar con terceros de los niveles 2 o 3 inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (COOPACNACFP) para administrar fondos de pensiones del SPP únicamente para trabajadores independientes siempre que estos formen parte de sus asociados.

De esta manera, la provisión de servicios previsionales equivalentes por parte de ESF ampliará el abanico de posibilidades de decisión del afiliado. Para ello, deberán competir para obtener una participación dentro del mercado previsional privado.

Para ello las ESF, deberán regirse bajo los mismos mecanismos y disposiciones que establece la Superintendencia Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) para la administración de fondos previsionales, por lo que deberán mantener una separación patrimonial respecto a los recursos de los fondos previsionales de sus otras ramas de negocio, ya que los recursos previsionales son inembargables, intangibles. Por lo tanto, las ESF deberán ofrecer los mismos servicios que establece la Ley del SPP, en igualdad de condiciones.

Con la finalidad de incluir como afiliados a trabajadores independientes, las entidades del SPP pueden elaborar productos cuyas características principales sean la flexibilidad y la adaptabilidad a la frecuencia de los pagos.

11. Aportes de los afiliados

Los trabajadores independientes representan el 38.2% de la población ocupada total, donde la PEA ocupada que cuenta con una actividad secundaria labora predominantemente como trabajador independiente (54,0%), siendo que en el 2021, la tasa de empleo informal entre los independientes alcanzó el 88.3%. En este sentido, la informalidad es uno de los principales problemas del país, lo que genera que las personas no accedan a prestaciones previsionales ya que no se encuentran inscritas en los sistemas de pensiones actuales, que abarca en mayoría a los trabajadores dependientes.

El nuevo sistema de pensiones plantea integrar los sistemas de pensiones, incorporando dentro de él a todos los ciudadanos a partir de los 18 años de edad a fin de que inicien su ahorro previsional tempranamente. Asimismo, el nuevo sistema pretende flexibilizar las vías por donde se pueda realizar las aportaciones tanto para el aporte obligatorio como para el aporte voluntario con fin previsional manejado por el sector privado, usando herramientas virtuales de fácil acceso.

Por lo tanto, los pagos de los aportes al Sistema, sean obligatorios o voluntarios, son realizados mediante aplicativo móvil, billetera móvil, agentes bancarios u otros mecanismos conforme se establezca en las normas reglamentarias. Las entidades del SPP incentivan el ahorro previsional a través del uso de billeteras electrónicas u otros mecanismos innovadores.

12. Pilar no contributivo

El pilar no contributivo tiene como finalidad asegurar la cobertura asistencial, a través de una subvención financiada con recursos del Tesoro Público y bajo el principio de solidaridad en el Sistema, se encuentra dirigido a las personas que a la edad de jubilación que cumplan con los siguientes supuestos:

a. No cuentan con una pensión a partir de sus aportes al Sistema (pensión contributiva) al estar o no afiliados al SNP o SPP y
b. Se encuentran en condición de pobreza o pobreza extrema y/o vulnerabilidad, de acuerdo con los criterios del SISFOH, ya sea que se encuentren afiliados al Sistema o no;

así como las personas con discapacidad severa y otras personas vulnerables que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en las normas de creación de la intervención pública respectiva.

Este pilar también se asegura la cobertura asistencial de las personas en discapacidad severa que cumplen con los requisitos a) y b) señalados y de otros grupos poblacionales con vulnerabilidades que sean priorizadas mediante la presente propuesta.

No es impedimento de acceso a una de estas subvenciones asistenciales (pensiones no contributivas) el haber estado afiliado al Sistema, siempre que a la edad de jubilación no cumpla con los requisitos de acceso para al menos una pensión proporcional especial o capital suficiente que pueda financiar una de ellas Por otro lado, las pensiones no contributivas no generan prestaciones de sobrevivencia, ya que están destinadas a cubrir necesidades individualizadas.

Las pensiones no contributivas benefician a hombres, mujeres y niños de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la ley. La ONP es responsable de administrar el pago y articular el pilar no contributivo de forma progresiva, el que se financia con recursos del Tesoro Público.

Considerando la capacidad financiera del Estado, la ampliación de los programas se realiza gradualmente a fin de cumplir con el objetivo de otorgar cobertura asistencial a más personas de los sectores señalados y mejorar su calidad de vida, debido a que el ingreso por trabajo de los adultos mayores se reduce significativamente después de los 70 años.

Se debe señalar que la seguridad social tiene carácter universal en nuestro país, de conformidad con el mandato expreso del artículo 10 de la Constitución. El principio de universalidad, en su vertiente objetiva, incluye tanto las prestaciones contributivas y las no contributivas. En su vertiente subjetiva, el principio de universalidad también incluye las prestaciones de sobrevivientes como son las de orfandad. De acuerdo con los principios de progresividad y universalidad, objetiva y subjetiva, de los derechos humanos, el Estado puede crear otro tipo de prestaciones y llegar a cualquier beneficiario.

La propuesta legislativa incluye la ampliación del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, de esta manera, los afiliados al SNP y SPP mayores de 65 años, en situación de pobreza extrema y los afiliados mayores de 75 años de edad, en condición de

pobreza no extrema, que no hayan accedido a una pensión, constituyen el primer grupo de personas en ser incorporadas al programa pensión 65, según la capacidad financiera del Estado. Según la propuesta del Poder Ejecutivo, en el primer año se estima que 61 mil afiliados del SNP y SPP se incorporen al Programa Pensión 65. El costo fiscal por extender la cobertura de la pensión no contributiva a los afiliados al SNP o SPP, asciende a S/109 millones en el primer año y de S/ 392 millones para el décimo año.

13. Pilar semicontributivo

El pilar semicontributivo comprende la entrega de una garantía estatal y brinda el financiamiento necesario a fin de que los afiliados al Sistema tengan garantizados el pago de una pensión mínima o una pensión proporcional especial siempre que en el trayecto de su vida laboral haya aportado por lo menos las 240 unidades de aporte requeridas.

En el pilar semicontributivo, la entidad a cargo de la administración y calificación de los beneficios con garantía estatal es la ONP, que está dirigido a los afiliados del SNP que a la edad de jubilación cumplen con el número de aportes requeridos para una pensión mínima o una pensión proporcional especial y los afiliados al SPP que a la edad de jubilación no han realizado retiros de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) aprobados después de la vigencia de la presente ley, cuentan con el número de aportes requeridos y el monto de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) es insuficiente para financiar una pensión proporcional especial o mínima.

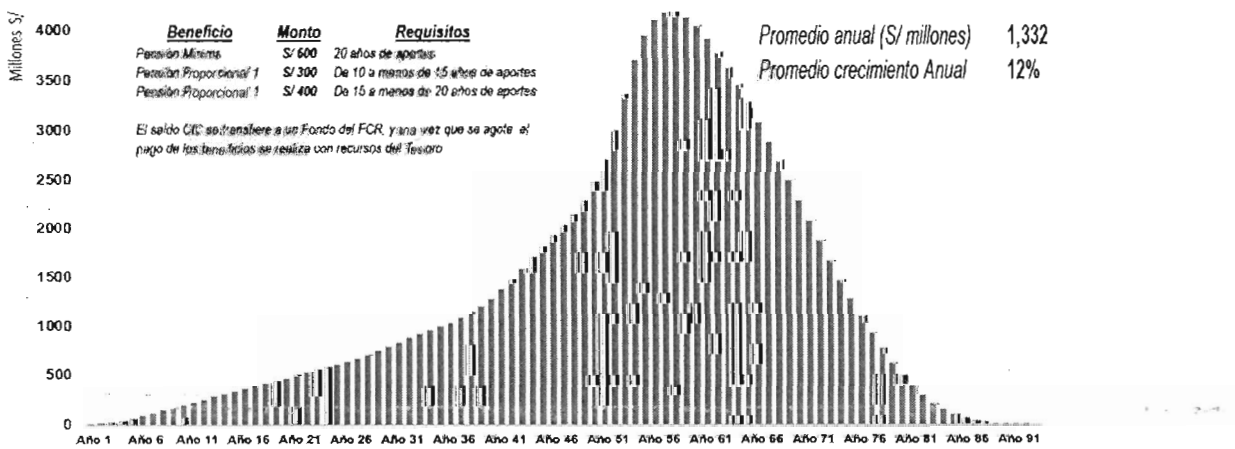
Los recursos de la Cuenta Individual de Capitalización son transferidos a un nuevo fondo administrado por el Fondo Consolidado de Reservas (FCR). Cabe señalar que los afiliados del SPP que soliciten los beneficios de garantía estatal, declinan de la propiedad de sus recursos, ya que actualmente las garantías estatales se complementan con recursos del Tesoro, cuando se agotan los fondos en la CIC.

El beneficio de garantía estatal interviene de manera parecida al otorgamiento de una renta vitalicia; con la salvedad de que el FCR no es una compañía de seguros, ya que se va a garantizar el pago de una pensión indefinida para el afiliado y sus derechohabientes, de corresponder. En ese sentido, según la perspectiva de Tesoro Público, el beneficio de garantía estatal que el Estado reconoce al afiliado es de una mayor cuantía a lo que sería

posible financiar con su propia CIC, ya que el Estado debe asumir la insuficiencia de recursos de la CIC, y los demás riesgos asociados al pago de pensiones, por lo que es necesario que los recursos de la CIC sean transferidos al FCR, renunciando a la propiedad de sus recursos.

Según la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo, la transferencia de la CIC al FCR permitirá mitigar el impacto MEF fiscal del otorgamiento de beneficios de garantía estatal a los afiliados del SPP, toda vez que se acreditan en un nuevo fondo administrado por el FCR, creado con la finalidad de consolidar la reforma previsional y respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios que serán asumidos por el Estado, y que tiene por objetivo precisamente la gestión de activos de un sistema de pensiones de beneficio definido.

Beneficios con garantía estatal a los afiliados del SPP



Fuente: MEF, Documento de Trabajo sobre valuación actuarial de las medidas con impacto fiscal del proyecto de reforma de pensiones.

Beneficiarios de la pensión mínima

Si bien la Comisión considera que esta medida es una gran propuesta para la reforma del sistema de pensiones, también se debe tener en consideración que una reforma debe beneficiar a todos los peruanos y no debe dejar de llamar la atención la propuesta del Poder Ejecutivo respecto a aquellos afiliados que realizaron algún tipo de retiros de su CIC y que no podrían tener acceso a una pensión mínima vital y decorosa.

Según información de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) al 31 de diciembre del 2022 fueron 6'133,003 los afiliados que se acogieron a por lo menos uno de los seis retiros autorizados durante la pandemia, vía decretos de urgencia y bajo leyes. De ese total, 244,014 afiliados son mayores de 61 años, que es el 3% del total de afiliados al 2022, que se quedarían desprotegidos por el sistema previsional propuesto. Asimismo, el mayor porcentaje de afiliados con retiros de su CIC fueron del rango de 31 a 45 años (29%); mientras que en el grupo de 46 a 60 años se encuentra el 17% respecto de total de afiliados al SPP.

En esa línea la SBS señala que, para setiembre del 2023, el 26% de los afiliados que está cerca de su edad de jubilación no contaba con saldo en sus CIC y el 56% tiene menos de 1 UIT en sus cuentas. Así, estos 6.1 millones de personas no recibirían pensión mínima en los próximos 40 años.

Podemos advertir por lo referido en líneas anteriores que el escenario para los afiliados mayores de 61 años a más no es el más promisorio, al respecto una de las recomendaciones de la OCDE[25] es abordar la vejez, propone ampliar la cobertura del programa Pensión 65[26], puesto que aún hay un grueso de la población de esa edad que no está siendo beneficiada. La población en su mayoría subsiste en la vejez gracias a una combinación de ayudas, en las que se puede incluir la prolongación del tiempo en el que se mantiene trabajando, los ahorros propios en forma de dinero, algún inmueble, tierra agrícola o el apoyo de la familia extendida.

[25] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/e80b4071-en/index.html?itemId=/content/publication/e80b4071-en
[26] El Estado le ofrece, además, a un millón y medio de personas en situación de pobreza un pequeño subsidio mensual de S/125, llamado Pensión 65.

En su conjunto, el tema pensionario es absolutamente deficiente. En el caso público es claro que está totalmente desfinanciado y representa una contingencia fiscal enorme para el Estado.

Según el informe del Banco Mundial[27] la calidad de los sistemas previsionales alrededor del mundo usualmente puede ser evaluada considerando tres dimensiones en particular: cobertura, adecuación de los beneficios y sostenibilidad. La primera dimensión hace referencia a la proporción de adultos pertenecientes a la tercera edad protegidos por los sistemas o, en el caso de ser contributivos, la proporción de jóvenes y adultos contribuyendo a los mismos. Más adelante dicho informe señala que, "los sistemas previsionales son programas de transferencias instituidos por el Estado, con el objetivo de proporcionar ingresos a los ancianos en un contexto donde los arreglos informales son considerados insuficientes. Además, propone el debate sobre el origen de los recursos para financiar el sistema, donde algunos apoyan la idea de obtener contribuciones de los futuros beneficiarios (por lo que el sistema se considera como contributivo).

Según la OCDE, en el informe Panorama de las pensiones 2021[28] , afirma que el mayor reto a largo plazo en torno a las pensiones sigue siendo ofrecer pensiones sostenibles en los aspectos financiero y social en el futuro. Muchos países han incorporado mecanismos de ajuste automático (MAA) en sus sistemas de pensiones que cambian sus parámetros, como la edad de jubilación, las prestaciones o los tipos de contribución, al modificarse los indicadores demográficos, económicos o financieros. Estos mecanismos de ajuste automático son esenciales para ayudar a afrontar los efectos del envejecimiento. Siguiendo el análisis de la OCDE, a lo largo de los años, los mecanismos de ajuste automático en ocasiones se suspendieron o incluso se eliminaron para evitar realizar recortes en las prestaciones de jubilación y aumentar la edad de jubilación. Como podemos apreciar siempre ha existido la voluntad de no desproteger a la población en edad de jubilación y esta no debería ser la excepción.

La CEPAL destaca que "En los informes nacionales, los países de la región informan del desarrollo, la consolidación y el fortalecimiento de diversos programas y acciones públicas

---

27 https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C6B81C2A8A07B13005257DDA0077C9B0/$FILE/CoberturaPrevisionalLAC.pdf

28 https://www.oecd.org/espanol/noticias/panoramadelaspensiones2021.htm

que tienen por objeto proporcionar protección social a las personas mayores. En su mayoría se centran en las transferencias monetarias periódicas y, en algunos casos, además de transferencias, se incluyen prestaciones sanitarias y sociales. Sin embargo, en la región, los sistemas de protección social han mostrado debilidades derivadas de las altas tasas de informalidad laboral que afectan directamente los alcances de la protección social contributiva y vuelven más necesario establecer medidas de protección social no contributiva (OIT, 2020)[1]. (Subrayado nuestro).

En un estudio realizado al año 2022, el Banco Mundial[29] advierte que los países de América Latina y el Caribe no estimaron una previsión para tener fondos para la población en edad de jubilarse. Dichos países han comenzado un proceso de cambio demográfico caracterizado por el rápido envejecimiento de su población: el número de personas mayores de 65 años se triplicará en los próximos 35 años, sin un cambio significativo en la población activa, en el caso de Perú según el INEI se estima que para el año 2050 la población bordeará los cuarenta millones de personas. "Históricamente, todos los países de la región implementaron sistemas públicos de beneficios definidos (BD), organizados bajo la forma de reparto. El resultado financiero de estos regímenes, al basarse en transferencias intergeneracionales, depende fuertemente de la relación entre población activa y pasiva que se deteriora ante un proceso de envejecimiento poblacional. En estas circunstancias, los sistemas generan elevados riesgos de desequilibrio que, dada la obligación de pagar los BD que impone la legislación, quedarán a cargo de las cuentas públicas. De hecho, y aun cuando sus poblaciones son todavía relativamente jóvenes, varias economías de América Latina y el Caribe (ALC) ya han enfrentado dificultades fiscales originadas en sus regímenes de pensiones".

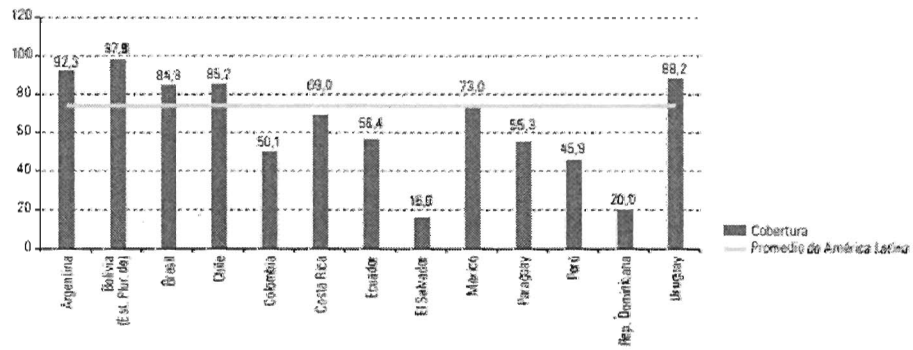
A inicios del año 2023 se promulgó la Ley 31670, que crea la pensión mínima del SPP cuyo monto es determinado por el aportante pero que no es menor que la Canasta Básica de Consumo (CBC, que determinada la línea de pobreza), fijada por el INEI, que en enero de 2021 ascendió a 378 soles mensuales por persona. Esta opción es facultativa y busca fortalecer el sistema previsional fomentando el ahorro para la jubilación. Así, los afiliados que decidan optar voluntariamente por esta nueva modalidad de pensión podrán fijar una meta de ahorro previsional y acumular un fondo para tener una pensión mínima cuando cumplan la edad legal para jubilarse. Sin embargo, en países como el nuestro en el que el

[29] file:///C:/Users/user/Downloads/Las-garantias-de-pensiones-minimas-en-sistemas-de-contribucion-definida-en-America-Latina-un-nuevo-pasivo-contingente.pdf

promedio de ingresos es bajo, la población prefiere destinar sus ingresos al consumo presente y no al ahorro. En ese sentido, una pensión mínima facultativa tiene poca efectividad.

En lo que se refiere a la cobertura de sistema de pensiones contributivas y no contributivas de las personas de 65 años a más, según CEPAL, América Latina y el Caribe continúan presentando problemas de cobertura y adecuación en lo que se refiere a la protección social de las personas mayores (OIT, 2021; CEPAL, 2018). La CEPAL (2022a), con base en las encuestas de hogares de 13 países, señala que el 73,9% de la población latinoamericana de 65 años y más recibía algún tipo de pensión en 2020 (54,2% contributivas y 24,9% no contributivas).[30]

Percepción de pensiones contributivas y no contributivas entre las personas de 65 años y más según país, 2020 (en porcentaje)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Panorama Social de América Latina, 2021* (LC/PUB.2021/17-P), Santiago, 2022, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
[a] En el caso de la Argentina, El Salvador, la República Dominicana y el Uruguay, la cobertura se refiere solamente a las pensiones contributivas.

En nuestro país tenemos problemas de baja cobertura dado que sólo el 30% de la PEA aporta efectivamente y el 57% de los mayores de 65 años no recibe una pensión. Asimismo, las pensiones son insuficientes debido a que no existe una garantía de pensión

[30] https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e345daf3-2e35-4569-a2f8-4e22db139a02/content

mínima para afiliados del SPP que cumplen con requisitos similares a aportantes de la ONP y el SNP no otorga ningún beneficio a aquellos afiliados que no alcancen los 10 años de cotización. Además, con los últimos retiros el 26% de los afiliados tiene saldo cero en su CIC a junio del 2023.

Finalmente, el sistema es insostenible dado que cada año, el Estado subvenciona las pensiones de la ONP, este pago pasaría de S/ 5,700 millones a S/ 8,440 en 2040, y a S/ 18,863 para 2070.

La Defensoría del Pueblo, en el Documento de Trabajo[31] resalta que en un "Estado Constitucional y Democrático de Derecho la validez de las normas que rigen la vida de la sociedad y el Estado dependerá de su conformidad con la Norma Suprema o Constitución. En este sentido, el contenido esencial del derecho a la seguridad social y del derecho a la pensión, así como los principios constitucionales que los sustentan deberán ser plenamente observados al momento de debatirse toda reforma previsional". (Subrayado nuestro).

Del mismo modo, la Constitución de 1993 reconoce una especial protección a las personas adultas mayores, por lo que las políticas de Estado deben ser adaptadas para garantizar la prestación de programas y servicios que garanticen el goce y ejercicio de sus derechos bajo un enfoque que concibe a la persona mayor como sujeto de derecho. La pensión mínima es una responsabilidad del Estado, le corresponde asegurar a aquel afiliado que se esfuerza por aportar, al margen de las externalidades que hubieran surgido durante el tiempo de aportación. La primera disposición final y transitoria de la Constitución establece varias reglas respecto de los regímenes pensionarios a cargo del Estado. Dentro de ellas, se prevé que las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regímenes pensionarios que se establezcan en el futuro, deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación. (Subrayado nuestro)

Hoy, que se discute un mejor modelo de pensiones para nuestra población, no podemos perder la perspectiva de que los sistemas de pensiones tienen por finalidad generar

[31] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/02/DOCUMENTO-DE-TRABAJO-001-2014-DP-AAE-SEGURIDAD-SOCIAL.pdf

prestaciones orientadas a mitigar la reducción ingresos vinculada a factores que se derivan de la edad avanzada, la invalidez y muerte para toda la población.

De tomarse en consideración la propuesta del Poder Ejecutivo sobre la restricción al acceso de la pensión mínima se estaría dejando sin pensión al 66% de los afiliados (6.1 millones) cuando podrían fijarse distintas alternativas para la población, así puedan acceder a algún beneficio en el mediano o largo plazo.

Es importante analizar cuáles son las características de los afiliados que accedieron a los retiros según los montos y edad, en esta medida poder discriminar quienes requerirían acceder a un beneficio con garantía estatal y quienes podrían seguir ahorrando. El 56% de los afiliados que accedieron al retiro tienen menos de 40 años, tomando en consideración la edad de jubilación (65 años), los años de aporte requerido y la densidad de cotización en el país (73%[32]), es decir, se necesitaría aproximadamente 27 años para poder acumular los 240 aportes efectivos planteados en la norma.

En ese sentido, es importante conocer que 3.4 millones de afiliados que retiraron (37% de los actuales afiliados) pueden aún acceder al beneficio si llegan a cumplir como mínimo con los 240 aportes efectivos solicitados al momento de la jubilación. Por otro lado, 76 432 afiliados mayores a 65 años (0,8% del total de afiliados) también realizaron retiros y tomando en cuenta la propuesta del Poder Ejecutivo, no recibirían ningún tipo de pensión.

[32] Recuperado de: https://asociacionafp.pe/wp-content/uploads/2019/08/Documento-de-Trabajo-N1-2018-Las-pensiones-del-SPP-a-los-25-a%C3%B1os-de-su-creaci%C3%B3n-10.07.19.pdf

Afiliados que realizaron retiros

Rango de Edad	Afiliados con retiros	Número de afiliados	% de afiliados con algún retiro	Monto promedio retirado
< 21	50,562	226,053	0.5%	726
21 - 25	523,983	963,400	5.6%	1,990
26 - 30	957,185	1,379,056	10.3%	5,088
31 - 35	976,458	1,300,901	10.5%	10,593
36 - 40	913,044	1,178,087	9.8%	15,475
41 - 45	854,747	1,118,208	9.2%	19,636
46 - 50	752,972	1,013,634	8.1%	22,646
51 - 55	541,060	797,507	5.8%	23,341
56 - 60	318,978	577,311	3.4%	21,688
61 - 65	167,582	388,576	1.8%	20,326
> 65	76,432	387,676	0.8%	9,483
Total	6,133,003	9,330,409	65.7%	14,338

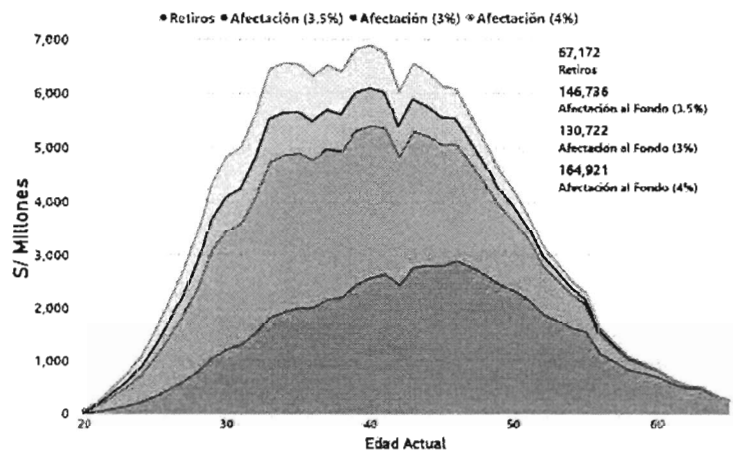
Fuente: SBS

El Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado a la Comisión diversos cálculos relacionados al costo fiscal de las medidas propuestas. Consideran que para poder brindar el beneficio con garantía estatal se deberían restituir los fondos, para ello realizan la estimación de la afectación a los fondos de pensiones por los retiros realizados. Al considerarse la rentabilidad que pudo haber generado estos recursos de haber permanecido en la CIC del afiliado hasta la edad de jubilación la afectación a los fondos se duplica e incluso puede llegar a triplicarse si se considera el efecto de la rentabilidad en términos reales. En el caso de los montos retirados por los afiliados que hoy tienen entre 20 y menos de 65 años es de S/ 67,1 mil millones, estos montos llegarían a ser S/ 146,7 mil millones, asumiendo una rentabilidad real de 3.5% anual, por el tiempo que transcurre desde la edad actual del afiliado hasta que cumpla la edad de jubilación (65 años)[33]. Es decir, el Poder Ejecutivo plantea en su medida que los afiliados tendrían que devolver S/ 146,7 mil millones a sus CIC para poder acceder al beneficio con garantía estatal, cuando

[33] Oficio N° 2612-2023-EF/10.01, Documento de Trabajo sobre valuación actuarial de las medidas con impacto fiscal del proyecto de reforma de pensiones.

los afiliados no tenían idea de los beneficios a los que podrían acceder en el futuro sino accedían al retiro. En segundo lugar, los retiros fueron brindados en un marco legal a través de decretos de urgencia y leyes en las cuales no se hacía advertencia sobre futuros beneficios ante el no retiro y finalmente, como se ha podido demostrar con la información, el Poder Ejecutivo está dejando de lado a 6.1 millones de personas en su propuesta de reforma de pensiones.

Afectación a los Fondos de Pensiones por la autorización de retiros (S/ millones)



Fuente: SBS
Elaboración: DGP-DGGFRH-MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas también presentó a la Comisión un cálculo preliminar del costo fiscal por el beneficio con garantía estatal con restricciones y sin restricciones. La estimación preliminar arroja que con restricciones el costo promedio anual sería de S/ 1 087 millones anuales, es decir, sin incluir a los afiliados que retiraron, Por otro lado, sin restricciones, es decir, sin discriminar a los afiliados que realizaron algún retiro que fueron autorizados por DU o por ley, según el MEF el costo promedio anual sería de S/ 7 134 millones anuales Estimado que la Comisión considera sobreestimado y desproporcional, sube en más de 7 veces, cuando apenas los afiliados posibles beneficiarios subirán en 3 veces, además este cálculo erróneamente, considera que los más de 6 millones de

afiliados que realizaron retiros, todos ellos se verían beneficiados con la pensión mínima, supuesto irreal, porque buena parte de los afiliados que retiraron no requerirán de pensión mínima.

La propuesta de la Comisión de Economía se basa en los 240 aportes efectivos o los escalonados requeridos según la normativa actual que permitan acceder a una pensión mínima. Sin embargo, como se mostró en una tabla anterior, el 37% de los afiliados que realizaron un retiro tienen aún la posibilidad de reunir los aportes requeridos para tener la posibilidad de acceder a la pensión mínima lo cual implicaría una reducción del costo fiscal estimado. Además, conforme lo mencionado anteriormente, el artículo 10 de la Constitución señala que:

> *"Artículo 10. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida".*

Al ser un derecho universal el Estado no puede hacer distinciones tan severas entre los individuos, sobre todo cuando es el mismo Estado quién por mandato constitucional debe garantizar *el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones*[34].

En este sentido, la Comisión de Economía propone lo siguiente tomando en consideración la propuesta del Poder Ejecutivo:

La administración del pilar semicontributivo y de las prestaciones que se otorgan (jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio según el régimen que corresponda) se encuentra a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

El pago de la pensión mínima, o de la pensión de jubilación proporcional especial, con garantía estatal están a cargo de la ONP. Los afiliados al SPP, de solicitarlo, acceden a una de estas pensiones con garantía estatal siempre que cumplan con las unidades de

---

[34] *Constitución Política del Perú*
Artículo 11. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.
La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado.

aporte requeridos (240) y que su CIC sea insuficiente para financiarla. Se considera las aportaciones realizadas al SNP, de ser el caso, salvo que hayan servido para obtener una pensión en el SNP. En todos los casos en que una persona afiliada del SPP se acoja a algún beneficio con garantía estatal a la edad de jubilación, el pago de sus pensiones estará a cargo de la ONP, para ello los recursos de su CIC deberán ser transferidos a un fondo administrado por el Fondo Consolidado de Reservas (FCR).

Las pensiones del pilar semicontributivo se financian, en el caso del SNP, a través de las fuentes establecidas según la normativa vigente y en el caso del SPP el financiamiento proviene de los recursos de la CIC de cada afiliado y con el producto de la redención del bono de reconocimiento, de ser el caso, los cuales se complementan con recursos públicos.

Tienen derecho a percibir la pensión mínima todos los aportantes en edad de jubilación que acrediten como mínimo 240 unidades de aporte obligatorio o voluntario con fin provisional al momento de la jubilación y no realicen retiros de fondos a partir de la entrada en vigor de la presente ley, a excepción de lo previsto en el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF.

Los afiliados que no alcancen a acreditar las 240 unidades de aporte tienen derecho a recibir una pensión escalonada equivalente a una fracción de la pensión mínima proporcional a los años de aporte. Para acceder a la citada pensión escalonada será necesario contar con un fondo equivalente a ciento veinte unidades de aporte.

Reconocimiento de unidades de aporte para madres vio padres

De acuerdo a lo señalado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en los sistemas de pensiones en América Latina se reproducen y profundizan las desigualdades estructurales presentes en otros ámbitos, asociados al mercado laboral, el cual se caracteriza, a su vez, por altas tasas de informalidad, precariedad y por reproducir las desigualdades de género. Además, la persistente división sexual del trabajo explica que la tasa de actividad económica de las mujeres en la región se haya estancado en torno al 50%. Por otro lado, la proporción de mujeres en edad legal de jubilación que reciben algún tipo de pensión o jubilación es menor que la de hombres.

Considerando que en el Perú existen aún muchas brechas a reducir, el Sistema pretende otorgar el reconocimiento de aportes a las mujeres y hombres que por cuidar a sus hijos se han visto imposibilitados a trabajar, a fin de que puedan lograr el acceso a una pensión mínima o una pensión proporcional especial.

En ese sentido, de manera excepcional, para aquellos aportantes con hijos que llegada la edad de jubilación no accedan a una pensión mínima o una pensión de jubilación proporcional especial con garantía estatal; el Sistema reconoce hasta seis unidades de aporte por hijo, con un máximo de tres hijos, por aquellos periodos en que no se haya aportado, siempre que correspondan a los seis primeros meses de vida de sus hijos, presumiéndose que la inexistencia de aporte se debió a que en dicho periodo se dedicaron al cuidado de sus hijos en esta etapa. En caso de que el periodo sin aportaciones coincida para ambos padres, se le otorga el beneficio solo a la madre.

14. Pilar contributivo

El pilar contributivo, es el pilar principal del Sistema, debido a que en este se debe construir el capital necesario para el financiamiento de una pensión, el cual se logra mediante el ahorro de una parte de los ingresos de los trabajadores durante su etapa laboral activa, con el propósito de poder financiar su retiro, en el momento que su producción disminuya o sea nula[35].

La presente propuesta mantiene los regímenes públicos y privados con las tasas actuales de aportes y otorga pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, según el régimen que corresponda. Con la finalidad de incrementar la capacidad de ahorro para la jubilación, los ciudadanos al cumplir los 18 dieciocho años deberán afiliarse al Sistema, eligiendo entre el SNP o SPP.

Como parte de la transición a este nuevo inicio de edad de afiliación, las personas que se encuentren afiliadas al SNP o SPP, a la entrada en vigor de la presente ley, se consideran afiliadas al nuevo Sistema. Asimismo, las personas mayores de dieciocho años, que no

[35] Samuelson, Paul. An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money. Journal of Political Economy 1958

estén afiliadas al Sistema, a la entrada en vigor de la presente ley se afilian obligatoriamente al SNP o SPP. De no manifestar su voluntad, son afiliados al SPP.

Con la finalidad de que el Sistema Previsional sea más ágil en la identificación de, dadas las innovaciones planteadas, el código de identificación será el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

El financiamiento, para los afiliados al SNP, se realiza a través de las fuentes establecidas según la normativa correspondiente. Para el caso de los afiliados al SPP, el financiamiento proviene de los recursos de la CIC de cada afiliado y el producto de la redención del Bono de Reconocimiento, de ser el caso.

Dado que el objetivo del sistema previsional es el ahorro de largo plazo y las variables estructurales en nuestro país brindan pensiones bajas, es relevante que el ahorro se de los antes posible. En ese sentido, la Comisión considera que los ciudadanos pueden

al cumplir los dieciocho años afiliarse al Sistema, eligiendo entre el SNP o SPP. Las personas mayores de dieciocho años que no estén afiliadas al Sistema a la entrada en vigor de la presente ley se afilian obligatoriamente al SNP o SPP. De no manifestar su voluntad, son afiliados al SPP.

En adelante, se considera al documento nacional de identidad (DNI) como código de identificación en el Sistema de Pensiones. Para ello se faculta al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a la ONP y a la SBS a emitir las disposiciones necesarias para la implementación de la afiliación de los beneficiarios.

La edad de afiliación es muy importante para construir un fondo de pensión bajo el esquema de capitalización, cada unidad monetaria de aporte realizado a edades tempranas tiene un mayor periodo de capitalización y una mayor posibilidad de tolerar la volatilidad.

15. Pilar voluntario

El pilar voluntario es complementario y transversal al sistema, y permitirá a los afiliados complementar sus aportes para acceder a las prestaciones que brinda el pilar semi-contributivo y complementar la pensión del pilar contributivo, a través del ahorro voluntario.

Se financia a través de asignaciones públicas o privadas, así como aportes voluntarios con fines previsionales realizados de manera directa por los afiliados al SNP o SPP.

Los aportes voluntarios pueden ser sin fin previsional y con fin previsional. El primero es una alternativa de ahorro de los afiliados al SPP no necesariamente previsional dado que puede retirarse en cualquier momento; mientras que el segundo puede retirarse parcial o totalmente solo al momento de la jubilación o puede destinarse a incrementar la cuenta del afiliado para financiar su pensión. Debe señalarse que los aportes voluntarios se encuentran normados desde sus inicios en el TUO de la Ley del SPP.

Según la SBS, entre los años 2016 y 2021, se observó un crecimiento del saldo total de aportes voluntarios, alcanzado S/ 2 721 millones en diciembre de 2021. El crecimiento observado en este periodo fue de 189,8% y se explica, principalmente, por los aportes voluntarios sin fin previsional realizados por los afiliados que retiraron parte de su CIC por haber cumplido los requisitos para su jubilación (anticipada o por edad legal). El 92,2% del total de aportes voluntarios corresponde a los aportes voluntarios sin fin previsional y sólo el 8,8% a los aportes voluntarios con fin previsional. En términos relativos, el saldo total de estos aportes solo representa el 1,9% del fondo de pensiones. Debe señalarse que la SBS mediante Resoluciones N° 3667-2017 y N° 3668-2017, permitieron que los aportes voluntarios sin fin previsional, tengan libre disponibilidad, tanto en montos como en número de operaciones, además estableció una mayor facilidad en la apertura de las cuentas individuales del aporte voluntario a través medios
electrónicos que provea la AFP o el Portal de AFPnet para los afiliados al SPP.

Los aportes voluntarios son importantes para ampliar la cobertura en la medida que los trabajadores de la economía informal se encuentran fuera del sistema de pensiones y tienen ingresos variables y con diversa frecuencia. Los afiliados al Sistema podrán efectuar aportes con fin previsional, en cualquier momento a través de transferencias efectuadas mediante aplicativo móvil, mediante pagos efectuados a través de agentes bancarios y otros mecanismos que se establezcan en las normas reglamentarias.

Asimismo, los contribuyentes que perciban rentas de cuarta o de quinta categoría, según lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta, pueden comunicar a la SUNAT que el monto de su devolución por pagos en exceso del impuesto a la renta que solicite, se abone a su CIC como aporte voluntario con fin previsional, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Los afiliados deben comunicar a la SUNAT el ejercicio de la forma de

devolución, en la forma, plazo y condiciones establecidas mediante Resolución de Superintendencia.

16. Pensión por consumo

La pensión por consumo es un aporte voluntario con fin previsional proveniente de los gastos por consumo realizados por los afiliados debidamente sustentados en boletas de pago que contengan el DNI correspondiente. Ha sido diseñada con la finalidad de ampliar la cobertura de las pensiones a todos los afiliados que actualmente no aportan al SNP o SPP, es decir, principalmente los informales.

El sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios que el estado puede ofrecer. Esta definición, introducida por De Soto (1989) en su clásico estudio sobre la informalidad, permite concentrar el análisis en las causas de la informalidad antes que en sus síntomas.

La informalidad, una característica fundamental del subdesarrollo, se configura tanto a partir del modelo de organización socioeconómica heredado por economías en transición hacia la modernidad como a partir de la relación que establece el estado con los agentes privados a través de la regulación, el monitoreo y la provisión de servicios públicos. Por ello, la informalidad debe ser entendida como un fenómeno complejo y multifacético.

La informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva. La formalidad involucra costos tanto en términos de ingresar a este sector –largos, complejos y costosos procesos de inscripción y registro– como en términos de permanecer dentro del mismo –pago de impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios laborales y remuneraciones, manejo ambiental, salud, entre otros[36].

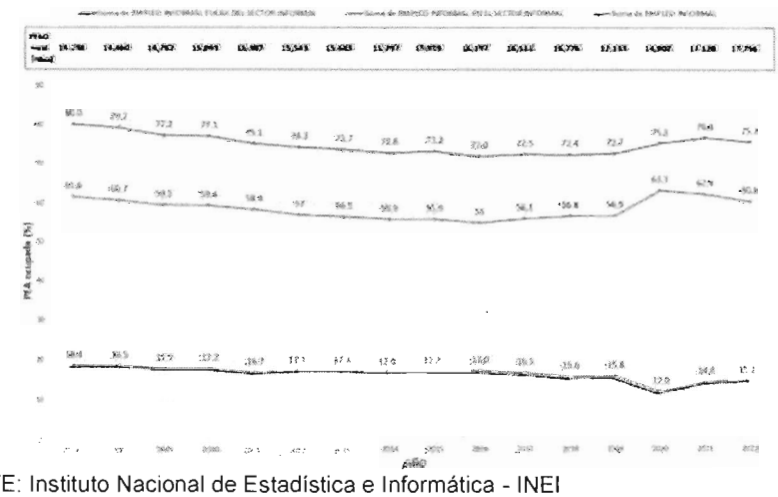
[36]https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/15/Estudios-Economicos-15-3.pdf.

Evolución del empleo informal[37]

El empleo informal concierne aproximadamente a tres de cada cuatro peruanos de la Población Económicamente Activa Ocupada (población ocupada). El gráfico muestra que desde el año 2007 el porcentaje de empleos informales ha venido decreciendo, pasando de 80,0% en dicho año a 75,7% en el 2022.

El empleo informal se descompone en empleo informal dentro del sector informal y fuera de él. En efecto, también pueden existir empleos informales en sectores institucionales que por definición son "formales": Sociedades Financieras y No Financieras, Instituciones sin fines de lucro y Gobierno.

Evolución del empleo informal 2007 – 2022 en el Perú



FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

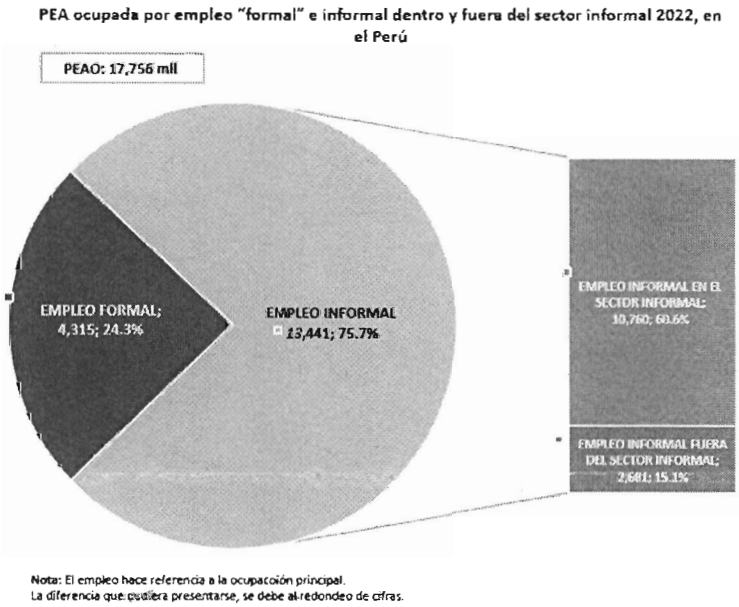
La mayor parte del empleo informal se ubica dentro del sector informal, representando el 61,6% de la PEA ocupada en el 2007 y 60.6% en 2022; el empleo informal fuera del sector

[37] https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1764/cap04.pdf.

informal representó el 18,4% de la PEA ocupada en el 2007 y 15.1% en 2022. Cabe mencionar que el comportamiento del empleo informal se debe básicamente a la evolución del empleo en el sector informal.

El siguiente gráfico presenta la naturaleza "formal" o informal de la ocupación principal de la población ocupada en el año 2022. Este gráfico permite apreciar más claramente las proporciones del empleo desde el punto de vista de la informalidad. Por un lado, solo el 24,3% de la población ocupada cuenta con empleo "formal". La mayor parte tiene empleo informal (75,7%), el cual se encuentra mayoritariamente en el sector informal (60,6%) y en menor medida fuera del sector informal (15,1%).

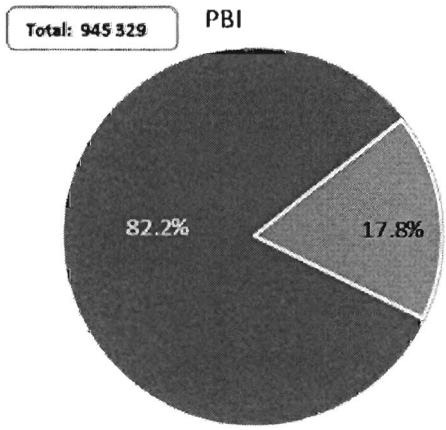
PEA ocupada por empleo "formal" e informal dentro y fuera del sector informal 2022 en el Perú



FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Además, la informalidad tiene un gran impacto sobre el valor de la producción en el país, es así que, el PBI nominal ascendió a 945 mil 329 millones de soles, de los cuales el 17,8% fue generado por el sector informal[38].

Participación del sector informal en el PBI (Millones de soles)

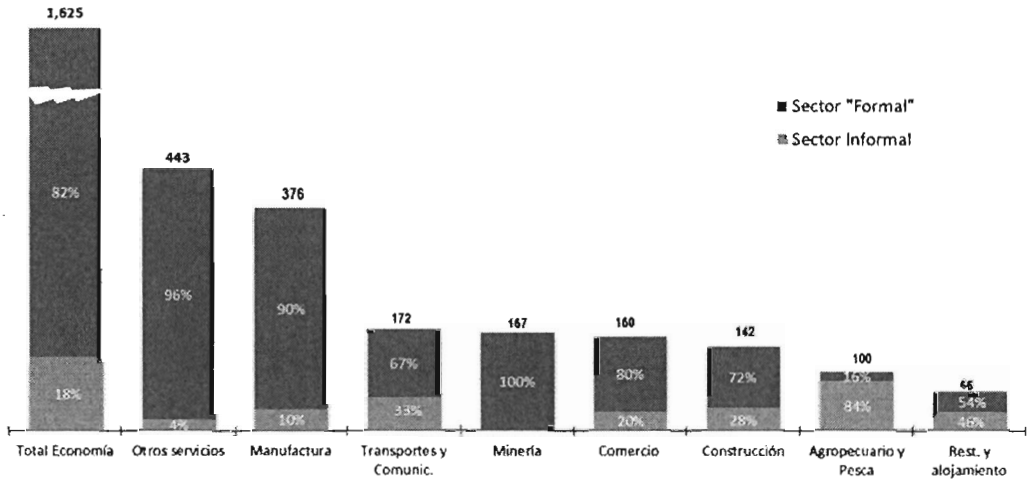


Fuente: INEI. Producción y empleo informal en el Perú Cuenta Satélite de la Economía Informal 2022

Este arraigo del sector informal no es igualitario en todas las actividades económicas dadas las características propias de cada actividad. En la economía total en el año 2022, el sector informal aporta el 18% al VBP. Las actividades con alta participación del sector informal son la Agropecuaria y Pesca (84%); Restaurantes y Alojamiento (46%); Transportes y Comunicaciones (33%); Construcción (28%) y Comercio (20%). Tiene una menor participación en Manufactura (10%) y Otros Servicios (4%). Por otro lado,

[38] INEI. Producción y empleo informal en el Perú Cuenta Satélite de la Economía Informal 2022

Participación del sector informal en la producción por actividad económica, 2022
(Miles de millones de soles corrientes)



Fuente: INEI. Producción y empleo informal en el Perú Cuenta Satélite de la Economía Informal 2022

Asimismo, la Cuenta Satélite de la Economía Informal muestra que en el año 2022 existían 17 millones 337 mil empleos, de los cuales el 74,0% era informal. Las categorías de ocupación que concentran más empleo son las de asalariados y cuenta propia, con 48,3% y 38,2% del total, respectivamente; el 58,3% de los asalariados tienen un empleo informal, el 46,8% de patronos tienen un empleo informal, mientras que el 89,2% de los trabajadores por cuenta propia tienen un empleo informal. Es necesario precisar que por definición todos los Trabajadores familiares no remunerados (TFNR) tienen empleo informal 1 Millón 759 mil trabajadores. Asimismo, en el total de la economía podemos visualizar que existe empleo informal en el sector formal y en el sector informal.

Existen aproximadamente 6 millones 798 mil empleos en las unidades productivas del sector "formal"; siendo, el 33,8% empleo informal. Por otro lado, la totalidad del empleo en el sector informal es empleo informal. Finalmente, es importante señalar que los hogares con producción exclusiva para uso final propio contratan trabajadores domésticos remunerados como empleo asalariado, siendo el 96,6% informal.

Perú: matriz de empleo informal, 2022 (Miles de personas ocupadas)

Empleo Formal | Empleo Informal | Mixto | No existe

Categoría de ocupación / Sector de las unidades productivas	Cuenta propia	Patrono	TFNR	Asalariado		Empleo		
				Con empleo informal	Con empleo formal	Total Economía	Empleo Informal	
TOTAL	6,630	580	1,759	4,881	3,487	17,337	12,827	74.0%
Sector "Formal"	714	309	14	2,285	3,476	6,798	2,299	33.8%
Sector Informal no agropecuario (a)	3,927	162	648	1,437		6,174	6,174	100.0%
Sector Informal agropecuario	1,988	109	1,097	826		4,020	4,020	100.0%
Hogares uso final propio (b)				333	12	345	333	96.6%

(a) No incluye a los hogares productores agropecuarios ni a los hogares que emplean a trabajadores domésticos
(b) Hogares que producen bienes exclusivamente para uso final propio y hogares que emplean a trabajadores domésticos remunerados
Nota: El empleo considera los datos de la Población Económicamente Activa Ocupada.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Permanente de Empleo Nacional.

A nivel geográfico podemos notar que las diferencias también se dan a nivel de los departamentos del país. Es así que la mayor proporción de empleo informal se encuentra en los departamentos de Cajamarca (89,5%), Huancavelica (89,3%), Puno (89,3%) y Apurímac (87,2%). Mientras que, los departamentos Arequipa (67,3%), Moquegua (65,5%), Lima (63,0%) y Ica (61,1%) presentan menores tasas de informalidad. En relación al empleo informal dentro del sector informal los departamentos de Cajamarca (81,6%), Huancavelica (81,4%) y Puno (81,3%) son los que registran los mayores porcentajes, en cambio Ica (46,9%) y Lima (42,8%) registran menos empleo informal. En cuanto, al empleo informal fuera del sector informal los departamentos de Lima (20,2%) y Arequipa (17,2%) registran mayor informalidad, en cambio, Cajamarca y Huancavelica (7,9% en cada caso) presentan poco empleo informal. En el departamento de Lima, que en el presente estudio comprende: Región Lima y Lima Metropolitana, la incidencia del empleo informal es del (74,8%, y 60,6%) respectivamente.

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1079/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2278/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 3341/2022-CR, 3436/2022-CR, 3717/2022-CR, 4055/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4379/2022-CR, 4452/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4907/2022-CR, 4921/2022-CR, 5139/2022-CR, 5149/2022-CR, 5150/2022-CR, 5242/2022-CR, 5246/2022-CR, 5377/2022-CR, 5386/2022-CR, 5499/2022-CR, 5531/2022-CR, 5623/2023-CR, 5795/2023-CR, 5929/2023-CR, 5965/2023-CR, 6120/2023-PE, 6227/2023-CR, 6338/2023-CR, 6359/2023-CR, 6369/2023-CR, 6380/2023-CR, 6535/2023-CR, 6634/2023-CR, 7006/2023-CR, 7068/2023-CR, 7092/2023-CR, 7229/2023-CR, 7674/2023-CR y 7821/2023-CR que propone la "Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano"

Perú: PEA ocupada informal dentro y fuera del sector informal, según departamento, 2022 (Porcentaje)



Departamento	Empleo informal		
	Total	Dentro del sector informal	Fuera del sector informal
Total	**74,0%**	**58,8%**	**15,2%**
Cajamarca	89,5%	81,6%	7,9%
Huancavelica	89,3%	81,4%	7,9%
Puno	89,3%	81,3%	8,0%
Apurímac	87,2%	73,7%	13,5%
Amazonas	86,7%	77,7%	8,9%
San Martín	86,1%	73,2%	12,8%
Ayacucho	85,9%	74,5%	11,4%
Huánuco	85,7%	73,6%	12,1%
Loreto	83,9%	70,5%	13,4%
Pasco	82,6%	71,2%	11,4%
Ucayali	82,1%	68,0%	14,1%
Cusco	81,0%	69,0%	12,0%
Áncash	80,9%	68,0%	12,9%
Junín	80,2%	65,8%	14,5%
Piura	79,2%	67,3%	12,0%
Tumbes	77,4%	62,2%	15,2%
Madre de Dios	77,0%	62,3%	14,7%
Tacna	75,4%	61,3%	14,1%
Lambayeque	74,9%	61,0%	13,9%
La Libertad	73,8%	60,6%	13,2%
Arequipa	67,0%	49,8%	17,2%
Moquegua	65,5%	50,2%	15,3%
Lima	63,0%	42,8%	20,2%
Ica	61,1%	46,9%	14,1%

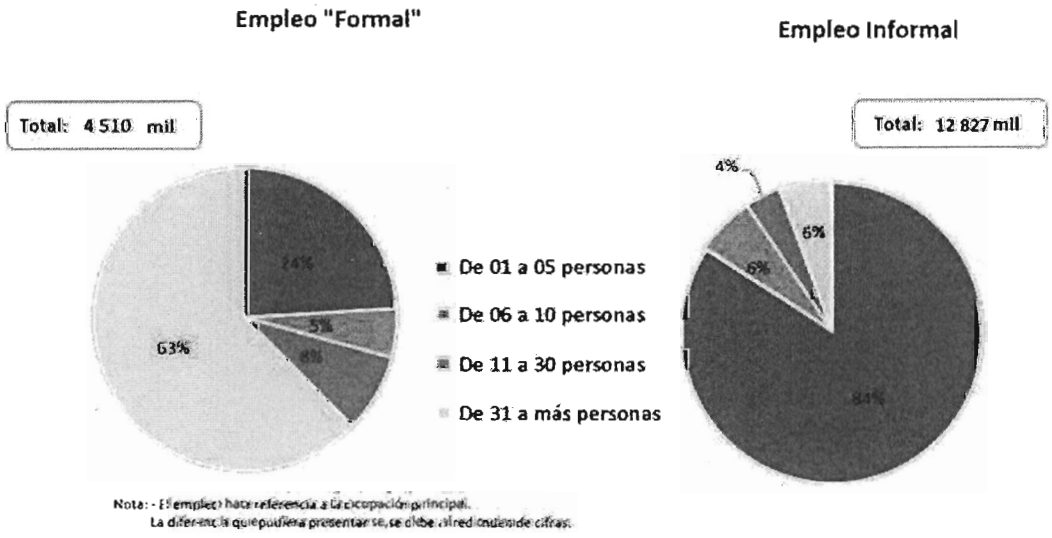
Departamento de Lima	Empleo informal		
	Total	Dentro del sector informal	Fuera del sector informal
Región Lima 1/	74,8%	60,3%	14,5%
Lima Metropolitana 2/	60,6%	39,2%	21,4%

Fuente: INEI. Producción y empleo informal en el Perú Cuenta Satélite de la Economía Informal 2022

Empleos por características laborales

En nuestro país, tres de cada cuatro trabajadores de la población ocupada tienen empleo informal. El gráfico muestra el empleo informal por tamaño de empresa, se observa que en las empresas de 1 a 5 personas menor se encuentra la mayor proporción de empleo informal (84%); a diferencia del empleo "formal" se concentra en las empresas de mayor tamaño. El 63% de la población ocupada con empleo "formal" labora en empresas de 31 a más personas, mientras que el 84% de la población ocupada con empleo informal lo hace en empresas de 5 o menos personas ocupadas.

Perú: PEA ocupada por empleo "formal" e informal según tamaño de empresa, 2022



Nota: - El empleo hace referencia a la ocupación principal.
La diferencia que pudiera presentarse, se debe al redondeo de cifras.

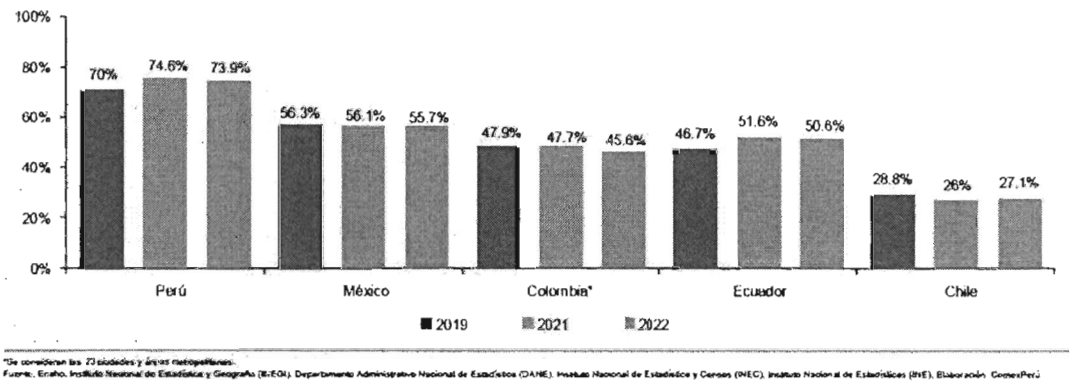
Fuente: INEI.

De acuerdo con recientes investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras el severo efecto de la pandemia, la cantidad de personas que busca activamente

empleo y aquella que se encuentra ocupada en la región de Latinoamérica y el Caribe continúa ligeramente rezagada respecto de los resultados de 2019. No obstante, en los países que muestran una recuperación en el dinamismo del mercado laboral, los niveles de informalidad ya no superan los resultados pre pandemia.

Debido a esto, al cierre del año pasado, la informalidad laboral ascendió al 50% en promedio para la región de Latinoamérica y el Caribe, lo que representó un valor similar a lo registrado en 2019. Estos resultados posicionan, nuevamente, al Perú como uno de los países más informales de la región, con una tasa del 73.9% durante el segundo trimestre de 2022, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Si bien esto puede significar un "progreso" en la proporción de informales con relación al promedio del año pasado (76.8%), la cantidad de trabajadores informales creció en 569,534 respecto de abril-junio de 2021[39].

Evolución de la informalidad laboral en el segundo trimestre, según países



Fuente: COMEX

En el 2021, la tasa de informalidad laboral en el Perú ascendió a 76,8%, el nivel más alto en los últimos 11 años. Ello habría significado el ingreso de casi 700 mil trabajadores al

[39] https://www.comexperu.org.pe/articulo/informalidad-laboral-peruana-continua-al-alza-como-nos-posicionamos-en-la-region.

sector informal respecto al nivel pre pandemia. La mayoría de los empleos informales se han generado en el área urbana, a través de la mayor contratación de mano de obra no calificada en empresas de uno a 10 trabajadores, concentradas principalmente en unidades productivas del sector agropecuario.

La mayor informalidad ha traído consigo un deterioro significativo de los ingresos laborales. En el primer trimestre del 2022, los salarios de los trabajadores del sector informal se habrían situado aún 15% por debajo de los niveles registrados en el mismo período del 2019. Esto representa alrededor de S/. 230 mensuales menos de capacidad adquisitiva, cifra que incluye también el alza en el costo de la canasta básica.

En tanto, las remuneraciones reales en el sector formal, si bien son 2,6 veces superiores al promedio informal, se han mantenido estancadas respecto de lo alcanzado antes de la pandemia de la COVID-19.

Según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, el Perú registra el octavo nivel más bajo en cuanto a productividad laboral por hora trabajada entre 24 economías de América Latina y El Caribe, solo por encima de países como Guatemala, Bolivia y Honduras. En efecto, un trabajador peruano promedio requiere casi el triple del tiempo para producir lo mismo que su par chileno[40].

Una de las razones detrás de estas brechas se encuentra asociada a la mayor informalidad en la fuerza laboral en el Perú. Según estimaciones del IPE, apuntar a medidas que reduzcan la informalidad en el país al promedio de América Latina aumentaría la productividad laboral peruana hasta niveles cercanos a los que tienen Brasil o México.

Finalmente, cabe señalar que el Perú tiene un sistema de pensiones fragmentado: un 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra en la informalidad; un 12% aporta al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y un 18% de la PEA aporta a las AFP mediante aportes de ahorro individual. El sistema nacional de pensiones se ha mantenido en la agenda pública a lo largo de toda la pandemia del COVID-19, pues sus problemas se han hecho evidentes.

[40] Informe de El Comercio – Instituto Peruano de Economía. Trabajadores informales ganan 15% menos que antes de pandemia. Lima, 2 de mayo de 2022.

Esta distribución es ineficiente y genera segmentaciones y coberturas muy limitadas. La pensión contributiva -que incluye a los afiliados a la ONP y las AFP- solamente alcanza al 30% de la PEA; alrededor del 10% de los mayores de 65 años reciben Pensión 65 y, finalmente, tenemos a un 60% de la población mayor de 65 años que no tiene nada para jubilarse.

El principal problema está en el propio mercado laboral peruano, altamente informal, que imposibilita la creación de un sistema de pensiones robusto. El segundo gran obstáculo es el mal diseño del sistema previsional peruano. Finalmente, las condiciones del Perú como país emergente -como la falta de capacidad de ahorro de la población- limitan la posibilidad de crear un mejor sistema de pensiones[41].

La exposición de este análisis se hace relevante para comprender que las propuestas para abordar al empleo informal desde una reforma de pensiones deben ser potentes, pero sobre todo de amplia cobertura. Además, no podemos olvidar que en muchos casos mantenerse en el sector informal es una decisión que no necesariamente la política pública podrá erradicar sólo a través del enfoque pensionario. Se requieren reformas estructurales de corte educativo y laboral que permitan modificar en el largo plazo el futuro de las pensiones en el país.

Teniendo ello en cuenta, después del análisis de diversos proyectos de ley, la propuesta de la Comisión de Economía para el sector informal se concentra principalmente en la pensión por consumo, siempre recalcando que este mecanismo es un aporte complementario debido a que no necesariamente los aportes ahorrados únicamente por este concepto permitirán que el individuo acceda a una pensión mínima.

Según estimaciones del MEF, el primer año el gasto fiscal por este concepto ascendería a S/ 1 302 millones y beneficiaría a 20.9 millones de personas entre 18 a 65 años. Los cálculos realizados por decil de ingreso permiten visualizar que el subsidio promedio va desde S/ 49 a S/ 163 del primer al décimo decil, respectivamente, siendo el promedio de gasto por persona S/ 96 al año. Esta medida podría beneficiar a 5 millones de pobres y pobres extremos.

---

41 https://www.ipae.pe/nota-de-prensa-cadeejecutivos-la-informalidad-es-el-principal-obstaculo-para-construir-un-mejor-sistema-de-pensiones/.

Esta medida permite que el Estado ahorre en todo momento al igual que las personas. Este dinero ahorrado será capitalizado en las cuentas individuales de cada peruano que se creen en el SPP y permitirá que a la edad de jubilación que deba realizar el Estado para el pago de la pensión mínima sea menor implicando un menor costo fiscal.

Asimismo, dado que esta medida implica que los afiliados soliciten comprobantes de pago en todas sus compras, ello conlleva a que se eleve la formalidad de las empresas y se reduzca la evasión tributaria.

La evasión tributaria[42] es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, debido a que apenas 12 700 empresas aportan el 75% de la recaudación total y 1.8 millones de empresas y pequeños negocios aportan el 25% restante, esto es, un pequeño porcentaje de contribuyentes aporta la gran mayoría del dinero recaudado.

Tenemos en el país dos tributos importantes: el impuesto general a las ventas, en el cual la evasión alcanza el 36.3% de la recaudación potencial, y el impuesto a la renta, donde la situación es más compleja y cuya evasión representa el 57.3% de la recaudación potencial.

La evasión de impuestos se esconde dentro de la formalidad. Al menos 3 de cada 10 empresas registradas como formales no cumplen con sus obligaciones tributarias y el otro 70% de los contribuyentes registrados cumple parcialmente ya que pueden tener declaraciones disímiles, pueden estar declarando un porcentaje de sus ingresos facturados y otros no.

Los contribuyentes utilizan diversas formas de evasión, siendo una de ellas la omisión de ventas, que es cuando no se declara la totalidad del monto correspondiente a una operación de venta efectuada en un periodo determinado, lo que origina a su vez un mayor incumplimiento si se considera que se deja de pagar el Impuesto a la Renta también. Según cifras de la SUNAT, se estima que la evasión del IGV en el sector comercio minorista asciende a los S/. 1000 millones y la evasión correspondiente a IR por rentas de tercera categoría vinculada al sector comercio minorista asciende a S/. 873 mil soles.

[42] La evasión tributaria constituye un esfuerzo u omisión consciente y dolosa que pretende evitar o reducir, de manera sistemática y en provecho propio o de terceros, el pago de obligaciones tributarias, implicando acciones que violan normas legales establecidas.

Otro método utilizado es el del uso de facturas falsas, clonándolas o constituyendo otras empresas para emitir estas facturas (ficticias) y así reducir el pago del IGV. Según información de la SUNAT mediante esta modalidad se ha calculado una evasión por un monto de S/. 4 400 millones.

Comparando nuestra realidad con la de otros países, se observa que el promedio de evasión fiscal del IGV en Europa es de 15.2% mientras que en Chile llega al 21%, siendo esta última una meta razonable de alcanzar, considerando que sería una disminución de 15 puntos, lo que implica entre S/ 10 000 a S/ 12 000 millones al año.

Un elemento importante de análisis de la evasión fiscal está relacionado con el hecho de que los consumidores peruanos no exigen comprobantes de pago, es así que una estrategia para reducir el alto grado de evasión de nuestro país es la promoción del uso masivo del comprobante de pago electrónico. A través de ello, se genera un círculo virtuoso de formalización en toda la cadena de pagos. En este orden de ideas, la presente propuesta se configura como un mecanismo de incentivo para que las personas soliciten comprobante de pago por sus adquisiciones de bienes o servicios.

Es importante que la población se eduque en finanzas y entienda que es necesario ahorrar para la vejez. Asimismo, los niveles de informalidad y los bajos ingresos no permiten que los ahorros obligatorios puedan brindar una pensión digna para los adultos mayores. En ese sentido, la propuesta planteada sobre este acápite en el presente dictamen busca generar ahorros complementarios a lo largo de la vida de los afiliados, generando así conciencia en la población sobre los niveles de ahorro que debe cumplir para contar con una pensión digna. Además, se hace hincapié que el ahorro a través del IGV es una alternativa a muchas que el Poder Ejecutivo o Poder Legislativo puedan plantear con fin del cumplimiento del objetivo.

En conclusión, el sistema previsional de nuestro país requiere la adopción de una reforma estructural que permita hacer frente a los puntos críticos actuales, así como a los riesgos y amenazas futuras al sistema pues, de no hacerlo, el Perú enfrentará graves problemas de estabilidad financiera de los sistemas actuales, además de enfrentar grandes retos en lo referido a la provisión de protección social para sus ciudadanos.

Al respecto la propuesta de la Comisión de Economía establece que los afiliados al Sistema que deseen acceder a dicho beneficio a partir de los 18 años deberán generar una cuenta individual de pensión por consumo en el SPP en la que se acumulan dichos aportes, siempre que las boletas de pago estén registradas con el DNI del afiliado y cumplan con otros requisitos. Dado que estos recursos son estatales, son intangibles e inembargables, no puede ser destinada para otro fin que no sea de carácter previsional y será la cuenta que el afiliado mantenga en el SPP hasta su jubilación.

La propuesta plantea que la transferencia a la cuenta individual del afiliado corresponda al 1% de la suma del precio de venta de los comprobantes de pago emitidos dentro de cada ejercicio fiscal, con un tope de ocho UIT anuales del consumo total. Ese aporte es calculado con periodicidad anual.

Los gastos por consumo realizados por los afiliados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Los gastos se sustenten en comprobantes de pago por la adquisición de bienes o servicios que sean emitidos electrónicamente.
b) El comprobante de pago consigna, al menos, el número de DNI del afiliado.
c) Los gastos sean realizados exclusivamente por personas naturales, excluyéndose expresamente a las personas jurídicas con independencia de su naturaleza.
d) En ningún caso el comprobante de pago usado para el mecanismo del presente artículo será utilizado como deducción tributaria aplicable a personas naturales sin negocio o cualquier otro beneficio fiscal
e) No se considera el gasto sustentado en comprobante de pago emitido por un contribuyente que a la fecha de emisión del comprobante: (i) tenga la condición de no habido, según la publicación realizada por la Sunat, salvo que, al 31 de diciembre del ejercicio, el contribuyente haya cumplido con levantar tal condición; (ii) la Sunat le haya notificado la baja de su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes; y (iii) tenga la condición de sujeto sin capacidad operativa, según la publicación realizada por la Sunat.

Para evitar que los recursos estatales sean destinados a fines inadecuados, se excluyen del cálculo de la pensión por consumo, los comprobantes de pago originados por la adquisición de equipos, vehículos y maquinarias, entre otros que el reglamento disponga.

Asimismo, con la finalidad de eliminar la posible regresividad de la medida se ha propuesto en consenso con la SUNAT que el comprobante de pago emitido que será considerado para la pensión por consumo podrá tener un valor máximo de hasta S/ 700.

Con la finalidad de mantener un estricto control de los recursos estatales, el SPP debe contar con información anual histórica de los aportes de pensión por consumo realizado, diferenciando los aportes de la rentabilidad generada acumulada. Asimismo, si el afiliado al momento de la jubilación cuenta con una pensión superior a la pensión mínima, el Estado destinará los recursos excedentes por pensión por consumo al FCR para el pago de la pensión mínima de otros afiliados rigiendo el principio solidario del sistema.

Los aportes por consumo existentes en las cuentas individuales son intangibles. Dichos aportes no pueden ser objeto de descuento, embargo, retención, compensación contractual o legal o cualquier afectación por orden administrativa o judicial. Asimismo, estos aportes no pueden ser objeto de disposición de parte del afiliado bajo ninguna circunstancia, en la medida que tienen un fin previsional.

El afiliado que alcance la condición de jubilado y obtenga una pensión puede incorporar aportes voluntarios sin fin previsional a su CIC. Los aportes adicionales incorporados son rentabilizados en el SPP.

17. Condiciones especiales para los trabajadores pesqueros

La propuesta del Poder Ejecutivo establece la creación del Fondo Complementario de Jubilación para Trabajadores Pesqueros (FCJTP), constituido por el aporte de determinación mensual, a cargo del armador, equivalente al 5% de la remuneración asegurable mensual de los trabajadores pesqueros.

Para tal efecto el Proyecto de Ley 6120/2023-PE considera que dicho aporte tiene carácter tributario donde el sujeto pasivo es el armador, quien es el empleador de los trabajadores pesqueros a que se refiere el artículo 3 de la Ley 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros; mientras que se considera como trabajadores pesqueros a aquellos a que se refiere el artículo 3 de la Ley 30003. Asimismo, en cuanto a la base imponible se dispone que se tome en consideración la remuneración asegurable mensual que viene a ser la suma de todos los

ingresos percibidos por el trabajador pesquero, incluyendo su participación en la pesca capturada y las bonificaciones por especialidad, siendo que en ningún caso la remuneración asegurable mensual puede ser menor a la Remuneración Mínima Vital vigente en cada oportunidad.

Respecto del Aporte al FCJTP efectuado por los armadores, debe indicarse que éste tiene naturaleza tributaria. Si bien el ordenamiento jurídico no prevé una definición de tributo, al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado "(...) los elementos esenciales de un tributo, (...) son: a) su creación por ley; b) la obligación pecuniaria basada en el *ius imperium* del Estado; y c) su carácter coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito."

Asimismo, la doctrina señala que tributo es una obligación jurídica pecuniaria ex lege, que no constituye sanción por un acto ilícito, cuyo sujeto activo es en principio una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa situación por voluntad de la ley.

Teniendo en cuenta lo anterior, el indicado aporte comparte los caracteres del tributo, el aporte constituye un pago obligatorio en dinero que no constituye sanción por acto ilícito, el que se cuantifica sobre la base de la remuneración asegurable mensual de los trabajadores pesqueros. Por otro lado, se advierte que la obligación de dar (pagar el Aporte) se supedita al acaecimiento del hecho imponible, esto es, cuando el trabajador perciba el pago de la remuneración asegurable mensual, independientemente de la voluntad de las partes.

Asimismo, el indicado aporte se establece con el fin de constituir el Fondo Complementario de Jubilación para Trabajadores Pesqueros (FCJTP), esto es un fondo de seguridad social que financie el pago del Beneficio Complementario. Cabe resaltar que el pago del aporte no proviene de un acuerdo entre armadores y trabajadores pesqueros, siendo la presente ley la única fuente del Aporte.

De otro lado, el sujeto pasivo es el armador pesquero, sujeto que está delimitado en la norma planteada. En cuanto al sujeto activo del aporte se advierte que es el Estado, quien con los recursos que recaude constituye el FCJTP, el cual financiará el pago del Beneficio Complementario a favor de los trabajadores pesqueros que obtengan la calidad de pensionistas.

Ello se explica por cuanto el Estado ha considerado de interés público la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores pesqueros jubilados, quienes, no obstante que durante su vida laboral desempeñan actividades riesgosas, al adquirir la condición de pensionistas, reciben una pensión insuficiente que no les permite mantener un nivel de vida digno.

En tal sentido, el mencionado aporte se encuentra comprendido dentro de los alcances del Código Tributario para todos sus efectos, por ello la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), es el órgano administrador del Aporte y, por tanto, tiene plenas facultades de cobranza coactiva, de fiscalización, sancionatoria, entre otras.

Los armadores que aporten al FCJTP ya no aportan al régimen de la Ley 30003. En cuanto al ámbito de aplicación del Beneficio Complementario, se dispone que comprende a los trabajadores pesqueros afiliados al REP o al SPP que se jubilen de conformidad a lo dispuesto en la Ley 30003, tienen derecho a recibir un beneficio del FCJTP.

En cuanto al cálculo del beneficio complementario se efectúa de la siguiente manera:

a. La diferencia que resulte entre el monto de pensión que obtiene aplicando las normas pertinentes del Sistema y el promedio de las remuneraciones percibidas por el trabajador en los doce meses anteriores a la fecha de cese es cubierto por el Fondo.
b. El monto del beneficio complementario a otorgarse más la pensión de jubilación que perciba el beneficiario no podrá ser mayor al 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
c. El pago del Beneficio Complementario se realizará mensualmente, conforme al cronograma que emitirá la ONP una vez efectuado el cálculo.
d. En el caso de que los recursos del fondo sean insuficientes, el pago se realizará de manera proporcional al beneficio complementario de cada beneficiario según los recursos acumulados en el fondo, sin generarse deuda por el diferencial que resulte del importe íntegro del beneficio complementario.

En cuanto a la administración del beneficio complementario se dispone que está a cargo de la ONP y en el caso de los pensionistas del SPP, las AFP deberán remitir a la ONP, la información necesaria para el cálculo del beneficio complementario.

Se dispone que los recursos del FCJTP son administrados por el FCR, contabilizándose en forma independiente de los demás recursos a su cargo. La administración de los recursos se regirá por los lineamientos que para tal efecto establezca el Directorio del FCR.

La SUNAT transfiere el monto recaudado por dicho aporte al FCR, luego de deducir la comisión respectiva en favor de la SUNAT y la comisión correspondiente a la ONP para la atención del gasto de administración del beneficio complementario, calculada esta última en el equivalente al tope del porcentaje previsto en el inciso a. del numeral 3 del artículo 12 del Reglamento de la Ley 28532, aprobado por Decreto Supremo N° 118-2006-EF, aplicado sobre la suma de la recaudación.

Adicional a ello, se establece que el FCJTP es intangible y sus recursos se destinan única y exclusivamente para el pago del beneficio complementario a la pensión.

18. Revisión de la pensión mínima y reajuste de pensiones en el Sistema

Tomando la propuesta del Proyecto de Ley 6120/2023-pe, El monto de la pensión mínima del Sistema se evalúa cada tres años, tomando en consideración la capacidad financiera del Estado y las posibilidades de la economía nacional, salvo las disposiciones vigentes sobre la materia. Asimismo, la pensión mínima se aprueba mediante ley del Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo.

19. Atención progresiva de los aportes realizados de manera incorrecta al SNP

De acuerdo con los datos brindados por la ONP, hasta el 30 de setiembre de 2019, aproximadamente existen 50 mil afiliados al SPP con declaraciones de aportes realizados de manera incorrecta al SNP, por más de 10 años.

La presente ley permitirá regularizar los aportes obligatorios previsionales de dichos afiliados al SPP realizados por error al SNP, a fin de salvaguardar el derecho previsional del trabajador afiliado al SPP, por lo que se brinda la posibilidad a los afiliados al SPP, que a la edad de jubilación, tengan aportes declarados y pagados de manera incorrecta al SNP

por parte de sus empleadores pueden solicitar el pago de una pensión ante la ONP, siempre que con sólo dichos aportes se cumpla el requisito establecido para el acceso a una pensión.

Estos aportes no deben haber sido devueltos por la SUNAT, ni haber sido transferidos por la ONP conforme lo dispuesto en la Sétima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1275 o haber sido pagados a través del Régimen de Reprogramación de pago de Aportes Previsionales al Fondo de Pensiones aprobado a través del artículo 25 del Decreto Legislativo N° 1275 o el Régimen de Reprogramación de pago de Aportes Previsionales al Fondo de Pensiones aprobado a través del Decreto de Urgencia N° 030-2019 o cualquier otra reprogramación aprobada previa a la vigencia de la presente ley.

En caso el aporte haya sido acogido dentro de las reprogramaciones aprobadas conforme las normas citadas en el párrafo precedente pero no han sido consignados en la CIC del afiliado, los aportes pueden ser considerados para acceder a una pensión en el SNP.

Cabe señalar que, el acceso a una pensión en el SNP no limita a los afiliados alSPP a acceder a las prestaciones que este otorga, las cuales se financian con los recursos de la CIC.

Los afiliados al SPP que podrían recibir una pensión por tener aportes incorrectamente pagados en número suficiente a los que se requiere para recibir una pensión del SNP es de 1 716 beneficiarios para el primer año, y el costo que asciende a S/ 7,4 millones. En los próximos años este costo irá en aumento a medida que más afiliados lleguen a la edad de jubilación, se espera que en los próximos 25 años se produzca un incremento en la planilla de pensiones, en promedio S/ 5.3 millones por año.

Por otro lado, el MEF realizará las evaluaciones pertinentes para establecer los mecanismos de atención progresiva a los casos de afiliados al SPP con aportes incorrectamente pagados al SNP, que no cumplen con los aportes necesarios para acceder a una pensión en el SNP o los afiliados al SPP que no decidieran por esta opción; ya que esta propuesta resuelve parcialmente la problemática existente. De acuerdo con la información oficial de la SBS, al 2019, existen 1,149,048 afiliados del SPP que cuentan con aportes incorrectamente pagados al SNP, por el monto de S/ 1,677 millones.

20. Incentivos al ahorro

El Poder Ejecutivo ha propuesto como medida de las medidas para el pilar voluntario la implementación de manera progresiva de un incentivo monetario al ahorro, dirigido a los afiliados cuyo ingreso no supere las 0.25 UIT mensuales (S/ 1 237,5). Este incentivo, busca impulsar a este sector de la población, que asciende actualmente a cerca de 2.9 millones de personas (ENAHO 2022), a iniciarse en el ahorro voluntario previsional, utilizando las herramientas digitales que se promueven en el marco de la presente Ley, así como la flexibilidad en el monto y frecuencia de los aportes a realizar. La implementación progresiva permite distribuir el presupuesto asignado entre aquellas personas que hayan realizado aportes voluntarios en el primer año, equiparando los aportes realizados y considerando un máximo de incentivo de una unidad de aporte de la Remuneración Mínima Vital (RMV) por persona (a la fecha, S/ 133), sujeto a la disponibilidad de los recursos asignados al incentivo. El mecanismo de repartición y pago de este incentivo se define a través del reglamento de la presente Ley.

Asimismo, con el propósito de generar evidencia respecto a la efectividad de este incentivo, y la evaluación de su permanencia o introducción de ajustes al diseño de la intervención, se plantea la evaluación bianual de esta disposición. En función de los resultados de las evaluaciones que se realicen, se evaluará la implementación progresiva de este incentivo en los siguientes años, de modo que el tamaño total del fondo tienda en el mediano plazo al valor equivalente al financiamiento de 01 unidad de aporte a todos aquellos que hayan realizado este nivel de aporte en el año y formen parte de la población objetivo.

21. Comisión sobre la remuneración en el SPP

En el SPP actualmente coexisten dos esquemas de comisión: la comisión por remuneración (comisión por flujo) y la comisión por el saldo administrado. La Ley 29903 aprobada en julio de 2012 y aplicada en el año 2013 estableció dos aspectos importantes:

a) Que los afiliados incorporados al SPP hasta enero de 2013, elijan entre permanecer bajo comisión por flujo o migrar hacia la comisión mixta con tránsito a comisión por saldo (comisión mixta).
b) Que los afiliados que se incorporan al SPP (nuevos afiliados) ingresan directamente al esquema de comisión mixta, desde febrero del año 2013.

Desde el 2013, se han aplicado seis subastas de la gestión de fondos de pensiones de los nuevos afiliados, resultando un mecanismo exitoso para reducir las comisiones y fomentar la competencia en precios. En efecto, entre la primera y segunda licitación el componente de remuneración de la comisión mixta cobrada por la AFP ganadora de la subasta se redujo 19%, la caída fue de 53% en la tercera licitación y en la cuarta licitación, que inició en junio de 2019, este componente se redujo 100%; siendo cero desde entonces. Mientras el componente de saldo de la comisión mixta se redujo en 34% en la cuarta licitación luego de permanecer inalterable en los tres procesos anteriores, disminuyó en 3,7% en la quinta licitación y se redujo en 1,3% en la sexta licitación, cuya vigencia inicia en junio de 2023.

Otro impacto de las licitaciones fue la reducción en la rentabilidad de las AFP, cuyo ROE pasó de 25% en los tres años previos a las subastas (2010-2012), a registrar un promedio de 17% en los primeros diez años de su aplicación (2013 - 2022). Asimismo, se logró que los ingresos por comisiones de las AFP y la utilidad neta real por afiliado disminuyeran 54% y 46%, respectivamente, desde el 2012 (año previo al inicio de las licitaciones) hasta el 2022 (alcanzando estas variables, en estos últimos 10 años, una reducción anual promedio de 7,6% y 5,9%, respectivamente). Por su parte, en el mismo periodo, el gasto operativo por afiliado en términos reales se redujo en 57% (lo que significó una disminución promedio de 8,0% anual).

Al respecto, la Comisión de Economía, tomando en consideración lo planteado por el Poder Ejecutivo, propone que las personas afiliadas al SPP que, a la vigencia de la presente Ley, eligieron permanecer en la comisión sobre la remuneración al amparo de lo dispuesto en la Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, puedan decidir por única vez si desean mantenerse bajo el esquema de comisión estipulado en el literal a) del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF o migrar al esquema del literal d) del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF.

Si el afiliado elige migrar al último esquema mencionado, este será aplicado sobre los nuevos aportes que se generen a partir de la entrada de la Ley. La comisión por remuneración se sujetará a una licitación o subasta periódica con un plazo máximo de cada dos años.

22. Mayor competencia en el sistema privado de pensiones

En la actualidad, en el Perú coexisten dos sistemas pensionarios, uno estatal y uno privado, a su vez, dentro del sistema privado, existen cuatro empresas de carácter privado que se encargan de captar fondos con y sin fines previsionales. Dicho esto, las pensiones actualmente son muy bajas ya que oscilan entre los 125 soles mensuales (programa Pensión 65 para ancianos en extrema pobreza que entrega 250 soles bimestralmente) hasta los 1,500 soles mensuales para personas con un alto aporte durante toda su vida. No obstante, estos montos no alcanzan para cubrir el costo de vida de una persona, quien muchas veces vive en la pobreza, ya que la pensión que recibe no alcanza a cubrir el costo de una canasta básica de alimentos.

Así pues, en el año 1992 como consecuencia de la entrada en vigencia del Decreto Ley 25897, por el que se crea el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones, se crea el mercado y -mediante el cual se crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP)- nace el mercado de pensiones y según Céspedes (2005):

"El producto que se transa en este mercado son los servicios de administración y custodia de los fondos individuales de pensiones, y no las pensiones de jubilación como se podría suponer en una primera impresión, el nivel que tomen las pensiones depende de la magnitud de los aportes realizados por los afiliados y también de los resultados de política de inversiones de las AFP[43]".

Desde el momento en el que se crea el Sistema, empezaron a operar en el mercado privado de pensiones ocho AFPs (Horizonte, Integra, Profuturo, Unión Vida, Unión, El Roble, Providencia y Megafondo) y en 1995 "la AFP Horizonte absorbió a la AFP Megafondo, la AFP Nueva Vida absorbió a la AFP Providencia, la AFP Profuturo absorbió a la AFP El Roble, y AFP Nueva Vida se fusionó con AFP Unión y crea AFP Unión Vida"[44], posteriormente, AFP Horizonte fue absorbida por Profuturo e Integra y Prima AFP se fusionaron con AFP Unión Vida, por lo que en la actualidad sólo existen cuatro AFPs.

---

[43] Céspedes, Nikita (2005) Un Enfoque de Teoría de Juegos del Sistema Privado de Pensiones Peruano. ECON WPA 0505002. p. 6. https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econ-wp/io/papers/0505/0505002.pdf. Consultado el 17 de mayo de 2013.

[44] Thorne Leon. .laime (2010). Op. Cit. p.64-65

En ese sentido, resulta importante para esta comisión promover la competencia, ya que en la actualidad sólo existen cuatro empresas que se dedican a administrar fondos previsionales: Hábitat, Profuturo, Integra y Prima, lo que genera gran malestar en la población, ya que en la actualidad, la alta concentración de este mercado genera una situación de oligopolio, que tiene un efecto pernicioso, ya que genera incentivos para que estas empresas a menudo se confabulen con la finalidad de equiparar precios, productos y, con ello, aumentar los precios y las utilidades económicas.

Debido a la regulación actual, se han generado barreras para que otras entidades financieras entren a competir con las AFP que existen actualmente. Como es sabido, según el artículo 61 de la Constitución Política del Perú, el Estado peruano está obligado a fomentar y promover la competencia, así como también combate toda práctica que limite la competencia y el abuso de las posiciones dominantes.

Es por ello, que esta Comisión considera que en base al mandato constitucional recogido en el artículo 61 y con el afán de seguir combatiendo el abuso de posiciones dominantes en todo sector, la apertura del mercado pensionario resulta una medida necesaria toda vez que beneficiará al mercado pensionario y sobre todo, a los afiliados y aportantes. La inclusión de nuevos actores financieros resulta pues, una forma de mejorar el Sistema Previsional Peruano en su conjunto.

Sobre el tema, Goodwin (2007) señala sobre la competencia entre empresas, lo siguiente:

"(...) Es buena porque aumenta la eficiencia. Comúnmente, la eficiencia se considera buena en sí misma, (...) incrementa las oportunidades de consumo haciendo posible la obtención de un mayor producto dado un cierto nivel de insumos."[45]
Entonces, podemos afirmar que el abrir el mercado a nuevos actores financieros, que se acojan a la regulación peruana y estén dispuestos a captar aportes con y sin fines previsionales, tendrá una consecuencia positiva, toda vez que la eficiencia en todo el mercado pensionario mejorará e incrementará las oportunidades de consumo, en este caso en concreto, más peruanos serán parte del sistema de pensiones peruano, ya que, debido a la competencia, el afiliado obtendrá mejores resultados y un mejor servicio.

[45]Neva Goodwin (2007). La competencia entre empresas: ¿Quién se beneficia? https://www.bu.edu/eci/files/2019/06/OpinionSur_NevaGoodwin_Nov07.pdf

El presente dictamen apunta a dos objetivos destacables. El primer objetivo, es que los ahorros previsionales de los afiliados al Sistema Previsional Peruano sean mejor remunerados, es decir, que tengan mejor rentabilidad en el tiempo y un segundo objetivo, es que haya mayor competencia en el mercado de administradoras de fondos de pensiones y un amplio abanico para que los afiliados puedan elegir libremente el destino de tus aportes con y sin fines previsionales.

Adicionalmente, el Proyecto de Ley 1513/2021-CR, presentado por el Congresista Juan Carlos Mori Celis, menciona, muy acertadamente, lo siguiente:

"En ese contexto, es fundamental promover la competencia en el mercado para la administración de los fondos previsionales con la finalidad de que los trabajadores aportantes tengan mejores condiciones de prestación en el futuro que garantice su calidad de vida, y para ello urge la necesidad de que la SBS autorice a las entidades del sistema financiero ya sean bancos y cajas, la apertura de cuentas de ahorros previsionales intangibles (...)"[46]

Esta Comisión coincide con la propuesta de incluir más actores a competir por brindar un mejor servicio a los afiliados, por lo que, como se ha dicho en líneas anteriores, al mejorar la competencia se generan mejores incentivos a las empresas para mejorar su servicio.

No obstante, ya desde el año 1999, Ítalo Muñoz junto con el Instituto Peruano de Economía (IPE) publican un documento de investigación sobre la Reforma del Sistema de Pensiones y señala como alternativa el ampliar la competencia:

"Para incrementar la competencia en el sistema y reducir los costos operativos del mismo debiera permitirse que bancos y empresas de seguros puedan también administrar fondos de pensiones. Los bancos podrían utilizar sus redes de oficinas, infraestructura y fuerza de ventas para distribuir estos productos a un menor costo. Las empresas de seguros podrían utilizar su experiencia en el mercado de rentas vitalicias, administración del riesgo de invalidez y sobrevivencia y otros productos vinculados al manejo de pensiones para competir eficientemente con las AFPs. El ingreso de estas instituciones al mercado –en particular los bancos- contribuiría a una mayor penetración de las AFPs en el mercado de menores ingresos, debido a la mayor familiaridad de estos sectores con las instituciones

[46] Proyecto de Ley 1513/2021-CR

bancarias. Asimismo, para promover un mayor nivel de competencia y diferenciación entre las AFPs debiera otorgárseles una mayor flexibilidad para estructurar sus comisiones[47]*."*

Muñoz considera que al incrementar la competencia se logrará reducir costos operativos debido a que estas empresas podrán utilizar su infraestructura para distribuir los productos pensionarios a menor costo, así como las empresas aseguradoras podrán utilizar su experiencia en el mercado de rentas para competir eficientemente con las AFPs. Bajo este contexto, la comisión coincide con lo antes mencionado, pues considera que el que haya más actores en el Sistema Previsional Peruano hará que los servicios mejoren y se aminoren los gastos operativos y por ende, las comisiones.

Adicionalmente, el actual ministro de economía, Alex Contreras, ha mencionado que su sector está a favor con ampliar la competencia para generar mejores comisiones[48], por tal motivo, esta comisión afirma que, para tener un justo y correcto funcionamiento del sistema, se requiere la presencia de más empresas que estén dispuestas a captar aportes con fines previsionales.

Entonces, podemos señalar que existen muchos beneficios, los mismos que, por mencionar algunos, se señalan a continuación:

Beneficios de la apertura de mercado del Sistema de Pensiones

Beneficios	Detalle
Libertad de elección	• Permitirá a los afiliados trasladar sus fondos de pensiones de una AFP a una nueva institución, según corresponda. • La libertad de elección será inherente al afiliado.

[47] Ítalo Muñoz (1999). Documento de investigación sobre la Reforma del Sistema de Pensiones.

[48] Nota en Diario La República, medio digital: https://larepublica.pe/economia/2023/05/16/mef-sobre-reforma-previsional-se-debe-ampliar-la-competencia-para-generar-menos-comisiones-691088

Menores costos	• Las entidades que se incorporarán al sistema competirán por ofrecer mejores comisiones. • Tanto las AFP como los nuevos actores están sujetas a seguir disminuyendo sus gastos para ofrecer mejores servicios al afiliado.
Menor riesgo	• Los fondos mantendrán su intangibilidad y serán inembargables. • Se busca evitar que, ante la quiebra del administrador de fondos, el esfuerzo del afiliado se vea afectado.

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, luego de los argumentos expuestos, esta Comisión considera importante promover la competencia para evitar posiciones dominantes en el mercado mediante la participación de empresas de operaciones múltiples y empresas de seguros, no obstante, esta comisión considera que para que las empresas de operaciones múltiples y aseguradoras puedan ofrecer cuentas inidivduales deben cumplir con las disposiciones contenidas en el Título III del TUO de la Ley del SPP y las disposiciones normativas que la SBS emita sobre la materia, además, estos fondos deberán ser constituidos en un patrimonio independiente y distinto al patrimonio de dichas empresas, todo esto con la finalidad de proteger los fondos previsionales de los afiliados, ya que en caso que alguna de estas empresas quiebre se mantenga el íntegro de los aportes y la rentabilidad de los afiliados.

23. Comisión por desempeño

Sobre este tema, resulta importante comenzar el análisis mencionando que las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP son empresas con capital privado y tienen como única finalidad el de administrar los fondos de pensiones, que se constituyen los aportes obligatorios y voluntarios de las personas, a los cuales se les llaman afiliados a sus respectivas cuentas individuales de capitalización, estas empresas, a su vez, cobran una comisión por administras dichos fondos.

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, las AFP tienen como núcleo de negocio captar los aportes obligatorios y/o voluntarios de los aportantes. Respecto a ello, los aportes obligatorios están constituidos por el diez por ciento (10%) de la remuneración de cada afiliado. Estos aportes son destinados a una Cuenta de Individual de Capitalización, que es intangible, heredable y pertenece al aportante.

Respecto a ello, la legislación peruana actual establece cuatro tipos de fondos en base a la volatilidad del mismo y dentro de los límites de inversión establecidos en la Ley. Los fondos son los siguientes:

1. Fondo de Pensiones Tipo 0 o Fondo de Protección de Capital.
2. Fondo de Pensiones Tipo 1 o Fondo de Preservación de Capital.
3. Fondo de Pensiones Tipo 2 o Fondo Mixto.
4. Fondo de Pensiones Tipo 3 o Fondo de Apreciación de Capital (Fondo de Crecimiento.

Los fondos son elegidos libremente por cada afiliado según el riesgo y rentabilidad que están dispuestos a afrontar.

En ese orden de ideas, es necesario señalar que en el siguiente cuadro[49] se logra graficar que, en el 2022, los fondos 1, 2 y 3 han perdido rentabilidad, perjudicando la vejez de sus afiliados.

Como se puede observar en el cuadro precedente, los fondos 1, 2 y 3 (del más conservador al más agresivo, respectivamente) han tenido una constante pérdida de rentabilidad, que según expertos en la materia, obedecen al contexto de inflación mundial y al alza de tasas de interés que los bancos centrales en el mundo han tenido que aplicar para contener la inflación[50].

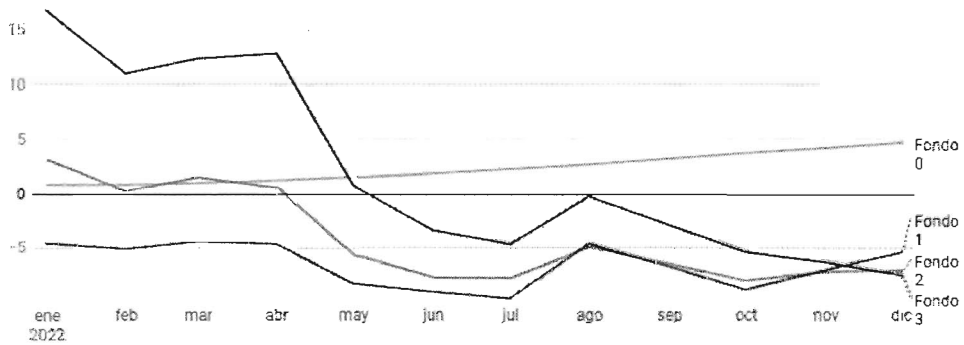
[49] Web Ojo Público - Las AFP ganaron S/.471 millones en un año marcado por la pérdida de fondos de afiliados. https://ojo-publico.com/4283/las-afp-ganaron-s471-millones-un-ano-perdida-para-los-afiliados#:~:text=Evoluci%C3%B3n%20de%20la%20rentabilidad%20de,lleva%20ocho%20meses%20en%20ca%C3%ADda. Consultado el 30 de marzo de 2023

[50] Proyecto de Ley 4743/2022-CR

Evolución de la rentabilidad de fondos AFP en el 2022

No

El Fondo 1 marcó 12 meses consecutivos en negativo (hasta -9,69%), mientras que el Fondo 3 que inició el año con +16,87%, lo cerró en -7,55%. El Fondo 2, que concentra a la mayoría de afiliados, lleva ocho meses en caída.



obstante, las AFP no han dejado de tener rentabilidad como empresa, a pesar de que sus decisiones de inversión y el contexto mundial perjudicó a sus propios afiliados. Por ejemplo, el portal Ojo Público[51] señala que:

*"Según **los reportes de la SBS** y los **Hechos de Importancia** publicados en la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), las AFP obtuvieron utilidades por más de S/471,3 millones durante el 2022. Este monto fue menor al año previo, pero superior al año de la pandemia, el 2020."*

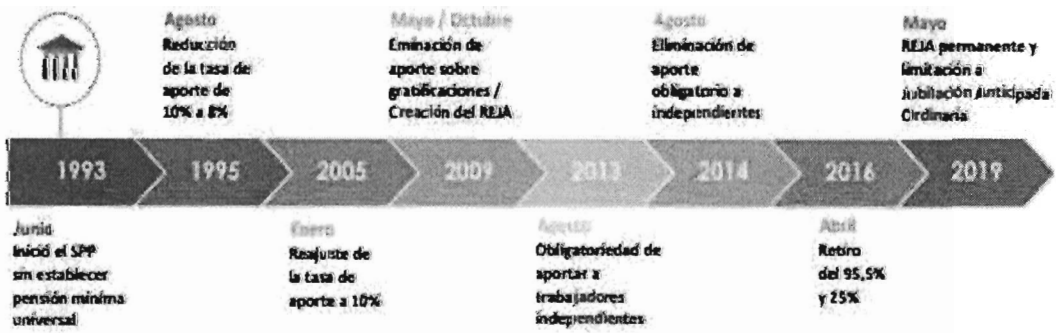
Dicho esto, el marco normativo del Sistema Privado de Pensiones se ha visto expuesto a modificaciones y reformas que han buscado la eficiencia del sistema y, por ende, del

[51] Web Ojo Público - Las AFP ganaron S/.471 millones en un año marcado por la pérdida de fondos de afiliados. https://ojo-publico.com/4283/las-afp-ganaron-s471-millones-un-ano-perdida-para-los-afiliados#:~:text=Evoluci%C3%B3n%20de%20la%20rentabilidad%20de,lleva%20ocho%20meses%20en%20ca%C3%ADda. Consultado el 30 de marzo de 2023

sistema de comisiones, en las que, diversos sectores políticos y técnicos coinciden que debe modificarse.

En relación a ello y con la finalidad graficar las grandes modificatorias, se muestra el siguiente gráfico elaborado por la Asociación de AFP[52], la misma que cuenta con la información de la Superintendencia de Banca y Seguros y el Congreso de la República.

Principales modificaciones al Sistema Privado de Pensiones



Fuente: Asociación de AFP

No obstante, a pesar de que se han buscado formas en las que el sistema previsional peruano sea más eficiente, resulta importante mencionar que las comisiones cobradas por las AFPs son las que generan problemas y malestar entre los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, sobre todo cuando las AFP las perciben las comisiones aun cuando generan un perjuicio directo al afiliado, ya que, en algunos periodos de tiempo, no generan

[52] Asociación de AFP. Fecha de Consulta: 05 de mayo de 2023. Recuperado de: https://www.asociacionafp.pe/wp-content/uploads/2021/06/Documento-de-investigacio%CC%81n-N2-2020_El-SPP-en-el-entorno-del-retiro-del-95.5.pdf

rentabilidad o tienen pérdidas; lo mismo que se ve reflejado en sus respectivas Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).

Aunado a ello, es importante mencionar que, hasta febrero de 2023, el sistema de comisiones de las AFP estaba formada de la siguiente manera:

a) Comisión sobre el flujo, la que es cobrada sobre el sueldo del aportante y que, en la actualidad, según la normatividad peruana, no es posible acogerse a este tipo de comisión, ya que sólo se acogieron a este tipo de comisión los afiliados que ingresaron al sistema hasta 2013.

b) Comisión mixta: Bajo esta modalidad las AFP obtienen un porcentaje del sueldo y una comisión anual sobre el saldo de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC). La comisión mixta forma parte de la implementación de la Ley N°29903, Ley de la Reforma del SPP y está compuesta por una comisión sobre el flujo, es decir, el sueldo de cada aportante y una comisión anual sobre el saldo.

En ese sentido, la comisión mixta se conformaba y se graficaba de la siguiente manera

COMISIÓN MIXTA	
Comisión sobre el flujo	Comisión anual sobre saldo
Comisión mensual sobre el sueldo del afiliado.	Comisión sobre el saldo de la Cuenta Individual de Capitalización, aplicado anualmente.

Sin embargo, debido a que el TUO del Sistema Privado de Pensiones previa que este esquema de comisiones sólo existiera hasta febrero de 2023, el actual esquema se configura de la siguiente forma[53]:

[53]Cuadro elaborado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Comisiones de Primas y Seguros del SPP.

Comisiones y primas de seguro del SPP

Mes de devengue : 2023-05 Buscar Datos

Al mes de devengue 2023-05 1/

AFP	COMISIÓN SOBRE FLUJO (% Remuneración Bruta Mensual)	COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO	PRIMA DE SEGUROS (%) 3/ (% Remuneración Bruta Mensual)	APORTE OBLIGATORIO AL FONDO DE PENSIONES (% Remuneración Bruta Mensual)	REMUNERACIÓN MÁXIMA ASEGURABLE
HABITAT	1.47%	1.25%	1.84%	10.00%	11,629.68
INTEGRA	1.55%	0.79%	1.84%	10.00%	11,629.68
PRIMA	1.60%	1.25%	1.84%	10.00%	11,629.68
PROFUTURO	1.69%	1.20%	1.84%	10.00%	11,629.68

1/ Las comisiones sobre la remuneración y las primas reembolsadas correspondientes a un determinado mes deben pagarse dentro de los 5 primeros días útiles del mes siguiente.
2/ A partir de Enero de 1997 se eliminó el cobro de Comisión Fija
3/ Porcentaje a descontar sobre la Remuneración Bruta hasta el límite determinado por el Reglamento de la Ley del SPP (Remuneración Máxima Asegurable Art. 57° del Título VII del Compendio de Normas reglamentarias del SPP).
*** A partir de Febrero de 2022, el componente de flujo de la Comisión Mixta es 0%, resultando únicamente en Comisión anualizada sobre saldo.

Fuente: SBS

En cuadro precedente se observa que en la actualidad la comisión mixta ya no se aplica; sin embargo, las comisiones siguen generando un perjuicio a cada afiliado en tanto las AFPs continúan cargando un porcentaje que debería ser destinado a las cuentas de los afiliados en caso estas empresas no generen rentabilidad.

En ese orden de ideas, lo que busca el presente Dictamen es recoger las solicitudes de los afiliados y establecer una nueva alternativa que permite que las AFP y los aportantes compartan el riesgo de inversión, teniendo en cuenta que los aportantes son socios de las AFP, pues las AFP trabajan administrando e invirtiendo el dinero de los aportantes.

Esta Comisión ha contemplado el condicionar la productividad de las AFP y por ende, las inversiones que estas realizan, al cobro de una retribución según la productividad de la AFP en un periodo determinado de tiempo, es decir, si la AFP ha perjudicado o no ha hecho generar ganancias al fondo al aportante ya no serán aplicables los dos componentes de la

https://www.sbs.gob.pe/app/spp/empleadores/comisiones_spp/paginas/comision_prima.aspx
Consultado el 16 de mayo de 2023.

"retribución por productividad", sino, únicamente el componente que permite que las AFP cubran sus gastos operativos.

Sobre el tema, Iglesias (2008)[54] en el capítulo VII llamado "Estructura de comisiones de comisiones en un sistema de AFP", publicado por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, señala lo siguiente: "Si se desea incentivar algunos atributos específicos del sistema de pensiones, cómo, por ejemplo, la rentabilidad de los fondos; entonces la comisión sobre saldo acumulado (o sobre rentabilidad) parece una alternativa posible." (p.286).

En ese sentido, lo que esta comisión considera es el sistema de comisiones propuesto genera que los inversionistas de las AFPs tomen las mejores decisiones de inversión para generar mayor rentabilidad en los fondos de inversión de los afiliados.

Dicho esto, podemos concluir que los aportantes y afiliados a las AFP se ven constantemente perjudicados económicamente por las decisiones de inversión que toman las AFPs, en las que no han podido decidir sobre la inversión y que, además, a pesar de la pérdida de sus afiliados, las AFPs siguen teniendo ganancias. En ese sentido, y con la finalidad de que las AFPs compartan el riesgo solidariamente con los afiliados, es que se plantea modificar el esquema de comisiones que contempla la normativa peruana para evitar que los aportantes afiliados a las AFP se sigan viendo perjudicados económicamente por las decisiones de inversión en la que no han intervenido. En ese sentido, y para que las AFP pueda buscar obtener mayor rentabilidad, se ha establecido en el Texto Sustitutorio, un condicionante que permitirá que las AFP inviertan los aportes de los afiliados de una forma más eficiente y eficaz estableciendo un componente fijo para que las AFP puedan cubrir gastos operativos y un componente variable que la AFP podrá percibir siempre que genere rentabilidad.

24. Fondo Educativo en Seguridad Social (FESIP)

Mediante la Ley 29903, Ley de Reforma del SPP se creó el Fondo Educativo en Seguridad Social (FESIP)", en donde se estableció que la obtención de recursos de éste provendrá de donaciones de las AFP y de las Empresas de Seguros, así como de las multas que

[54] Iglesias, Pablo. Fecha de consulta: 23 de octubre de 2022. Estructura de comisiones en el sistema de AFP. Fiapinternacional.org. https://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2016/01/augusto_iglesias_1.pdf

cobre la entidad centralizadora, por las infracciones que eventualmente determine, siempre que esta centralizadora no sea una entidad pública.

Sin perjuicio de ello, y con la finalidad de incrementar los recursos del FESIP a efectos de facilitar su desarrollo e implementación, se ha estimado pertinente considerar la posibilidad de contar con financiamiento por parte del Estado, a fin de que éste pueda ser complementado con recursos fiscales en caso no recaude los suficientes recursos económicos para atender las propuestas de ejecución del proyecto, por el cual se requeriría contar con las instrucciones y regulación que se impartan mediante Decreto Supremo emitido por el MEF.

25. Consejo de Participación Ciudadana (COPAC)

Mediante la Ley 29903, Ley de Reforma del SPP, se creó el Consejo de Participación Ciudadana en Seguridad Social (COPAC)n, el cual tiene como objetivo canalizar la participación de los usuarios del SPP. Así pues, la finalidad de la implementación del COPAC conforme a la citada Ley 29903 constituye la creación de un actor colectivo de participación ciudadana de carácter oficial dentro del SPP, quienes adoptarían los proyectos educativos previsionales.

No obstante, y tomando en cuenta además que la referida Ley no contempló el tema del financiamiento del COPAC, necesario para su instalación y funcionamiento, se ha visto por conveniente reformular el objetivo del COPAC, así como también modificar la conformación de sus actores o participantes, y sus funciones. asimismo, se contempla la participación de representantes de entidades sin fines de lucro (en temas de pobreza en la vejez, aspectos demográficos o del mercado laboral, gestión de riesgos, así como de los beneficios que provee el SPP), de colegios profesionales cuyas materias tengan relación con la seguridad social, y de universidades cuyas carreras universitarias a nivel de grado y postgrado tengan relación con la materia; y, finalmente, el Consejo tendrá como funciones, según la materia que se trate, centralizar, canalizar y/o discutir propuestas ciudadanas que se sometan a su consideración, acerca de oportunidades de mejoras al Sistema Privado de Pensiones en el Perú en materias relacionadas, fundamentalmente, a labores de educación y profundización de conocimientos en dicha materia.

Cabe agregar que, la implementación y funcionamiento del COPAC no demandarán uso y recursos adicionales del Tesoro Público.

Finalmente, en la última presentación del Ministro de Economía en la Comisión, de fecha 9 de mayo de 2024, se mostró de acuerdo con la incorporación de las cuentas nocionales en el Sistema Nacional de Pensiones, dado que la OCDE ha señalado la necesidad de transparentar las cuentas de los afiliados y el costo fiscal que implica sus pensiones.

Como parte de la ampliación de cobertura, el presente dictamen propone la aplicación de una tasa de aporte obligatorio para las personas independientes que es menor a la de los trabajadores dependientes dada las condiciones de estacionalidad laboral que presentan este tipo de trabajadores. Sin embargo, el MEF señala que esta propuesta no permite la construcción de una pensión suficiente para la vejez y subsidiar a estos trabajadores con una tasa de aporte inferior implica un mayor costo fiscal que ascendería a S/ 35 millones anual. Es importante recalcar que esta medida ha sido planteada anteriormente al marco normativo del país; sin embargo, no funcionó porque la tasa aplicada fue igual a la tasa de los trabajadores dependientes lo cual generó un rechazo y la Ley tuvo que ser derogada. En ese sentido, la Comisión considera que la propuesta de aplicación de una tasa gradual y menor respecto a los trabajadores dependientes debe mantenerse.

Respecto al Bono de Reconocimiento por el traslado de los trabajadores de la ONP a las AFPs, el MEF considera que no deber considerarse el pago de este Bono, pues un sistema de reparto, como el del Sistema Nacional de Pensiones, implica que los recursos no son individuales. Asimismo, otorgar este bono, frente al cual el MEF ya ha manifestado una posición frente al Tribunal Constitucional, pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Pensiones, debido a su elevado costo fiscal. Esta medida podría costar S/ 581 millones el primer año.

A continuación, se muestran los últimos costos presentados por el MEF respecto de las medidas mencionadas:

Medida	2025 Costo primer año (millones de S/)	2030 Costo año 5 (millones de S/)	2035 Costo año 10 (millones de S/)	2040 Costo año 15 (millones de S/)
Medidas con conformidad del Poder Ejecutivo	**932**	**1,504**	**2,339**	**5,150**
Pensión por consumo	1,302	1,727	2,328	3,053
Pensión mínima para afiliados que realizaron retiros	23	172	579	4,227
Bono de Reconocimiento	581	228	343	529
Cuentas nocionales	0	0	0	558
TOTAL	2,838	3,631	5,589	13,517
% del PBI	2.7%	2.7%	3.4%	6.5%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

VII. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

El proyecto de Ley irroga gastos adicionales en el presupuesto del sector público, que tendrán impacto en el gasto del Estado, dado que la medida como tal contempla cuatro pilares. Sin embargo, las medidas propuestas en el presente dictamen buscan generar mejorar la cobertura de pensiones en el presente y futuro, así como mejorar el ahorro previsional de las personas y el Estado. A continuación, se desarrolla el costo fiscal estimado por el Poder Ejecutivo y los ajustes planteados por esta Comisión.

Beneficios de garantía estatal a los afiliados del SPP

Esta medida permitirá que todas las personas cotizantes del Sistema accedan a una pensión mínima habiendo cumplido con ciertos requisitos. La propuesta planteada por el Poder Ejecutivo presenta una pensión mínima de S/ 600 y dos pensiones escalonadas de S/ 400 y S/ 300. El Estado estima inicialmente un costo fiscal de S/ 1 332 millones anuales; sin embargo, en el tiempo, el costo irá en aumento por el ingreso de nuevos afiliados al SPP que también requerirán asistencia de recursos del Estado para alcanzar la pensión mínima o proporcional.

Además del incremento demográfico natural habría que añadir a los afiliados que, cumpliendo con los requisitos de ahorro previsional, hayan podido acceder a algún retiro bajo el marco legal de normas previas a la presente. Bajo esas condiciones dicha estimación podría incrementarse hasta S/ 3100 millones.

En los primeros años el gasto es reducido debido a que los recursos de la CIC que se transfieran al FCR y la rentabilidad que se genere permitirá financiar la pensiones mínimas y proporcionales, y una vez que se empiecen a agotar estos recursos, recién se requerirá de las transferencias de recursos del Tesoro Público para cubrir el financiamiento de la planilla de pensiones. Para mayor detalle de las estimaciones y supuestos se anexa el Documento de trabajo sobre la valuación actuarial de las medidas con impacto fiscal del proyecto de reforma de pensiones.

Beneficios a los afiliados al SPP que tengan aportes incorrectamente pagados al SNP

Aproximadamente 51 mil afiliados del SPP, cuyo empleador realizó incorrectamente el pago de sus aportes al SNP, tienen periodos de aportes acumulados en número suficiente al requisito que se exige en el SNP para el otorgamiento de pensión. Se estima que el costo del primer año ascienda a S/ 7,4 millones, y alcance S/ 61,7 millones al décimo año, el costo promedio anual en los primeros 10 años es de S/ 36,7 millones.

Pensión no contributiva a los afiliados del SNP y SPP

A través del programa de Pensión 65 se busca cerrar la brecha de la cobertura de las personas de 65 años a más que viven en condiciones de pobreza extrema, priorizándose a los afiliados a los sistemas contributivos (SNP y SPP). Asimismo, se extiende la pensión no contributiva a los afiliados en pobreza no extrema, a partir de los 75 años. Se estima que el costo asciende a S/109 millones para el primer año y de S/ 392 millones para el décimo año.

Incentivos al ahorro

Este es uno de los mecanismos de busca promover el ahorro voluntario con fines previsionales de las personas de bajos ingresos (hasta 0.25 UIT mensual), su implementación es progresiva y estará sujeto a la disponibilidad de recursos que se asignen para esta medida. Para el primer año se estima que el costo ascienda S/ 19

millones y alcance S/ 522 millones al décimo año, el promedio anual en los diez primeros años es de S/ 244 millones.

Reajuste de la pensión mínima del Decreto Ley N° 19990

Para el reajuste del monto de la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley N° 19990, por derecho propio, se propone un aumento de S/ 100, quedando fijada en S/ 600. En el caso de la pensión mínima por derecho derivado el Poder Ejecutivo propone un incremento de S/ 15,00, quedando fijada en S/ 400. Asimismo, se propone un incremento en la pensión máxima de S/ 107, quedando fijada en S/ 1 000. En lo que respecta, a las pensiones proporcionales se propone incrementar S/ 50, con lo cual la pensión proporcional por haber cotizado 10 años de aportes, pero menos de 15 años de aportes, será de S/ 300 y la pensión proporcional por haber aportado más de 15 años, pero menos de 20 años, será de S/ 400.

La propuesta beneficiará a 658,698 pensionistas y representaría un incremento de la planilla de S/ 782 millones en el primer año y la reserva actuarial se incrementaría S/ 44,836 millones. La aplicación de lo previsto se financiará con cargo al presupuesto institucional de ONP en los primeros 3 años, posterior al plazo señalado, Tesoro Público solventaría el costo complementario para financiar la propuesta.

Pensión por consumo

La creación de un sistema de pensión por consumo complementario, considera los principios que sostiene Santiago Levy, destacado economista mexicano, quien propone un sistema de seguridad social en el cual se cambia el lugar de cobro de las contribuciones a la seguridad social de la "puerta de la fábrica" a la "puerta de la tienda" ya que no todos los trabajadores son asalariados y contratados formalmente, pero todos los trabajadores sean asalariados o no, efectúan consumos en los establecimientos comerciales o tiendas[55].

El costo beneficio de la propuesta debe evaluarse bajo los siguientes alcances:

[55] Levy, 2012. Recuperado de: https//www.slideshare. net/elnidodelseguro/propuesta-de-reforma-enseguridadsocial-de-santiago-levy

1. Logrará que toda la población económicamente activa (PEA), ciudadanos en edad de trabajar, cerca de 20 millones de personas tenga o no vinculo formal, tendrán su cuenta individual de pensiones, porque todos los mayores de 18 años, pedirán su comprobante de pago por cada consumo que realicen, porque bajo esa forma ingresará aportes a su pensión futura, pensar lo contrario sería muy extraño.

2. Crea un sistema universal de pensiones desde los 18 años y que permitirá acumular un fondo previsional adecuado, por lo menos para una pensión mínima complementaria.

3. Reducirá sustancialmente la evasión tributaria, tanto del IGV como del Impuesto a la Renta, la tasa de evasión del IGV es del 30.3%[56], es decir, de cada S/.100 a recaudar por IGV, Sunat solo se cobra S/.70 y S/. 30 se evade o no se paga. Por lo tanto, se espera un aumento sustancial de la recaudación al quinto año de implementado, tanto del pago del IGV como del Impuesto a la Renta respectivamente, ello revertirá el costo fiscal inicial de la medida. Es como si SUNAT contase con 20 millones de fedatarios que está solicitando comprobante por todas las compras que realizan.

El MEF ha realizado un estimado preliminar de la propuesta, respecto del número de beneficiarios y gasto fiscal anual por cada decil de la población, siendo el decil 1, es el 10% de la población de menos ingresos (más pobre) del país, y así sucesivamente, hasta el decil 10, que es el 10% de la población mayores ingresos (más rica) del país, todo sobre la base de un gasto anual de hasta 12 UITs (S/.61,800).

Son 20 millones de beneficiarios, quienes tendrán una cuenta previsional de pensión por consumo, y tendrían asegurada una pensión básica complementaria para su jubilación. El costo fiscal anual actualizado por el MEF sería de S/.2,103 millones, estimado sobre la base de los 20 millones de ciudadanos que estarían solicitando comprobantes de pago por sus consumos, sin embargo, la comisión considera que esos resultados se tendrían al quinto año de implementación.

[56] Estudio de SUNAT obtenido de la Plataforma del MEF https://www.mef.gob.pe/contenidos/tributos/doc/Incumplimiento_IGV_2022_y_aspectos_complementarios.pdf

La Comisión considera que al quinto año de implementación se tendría una reducción del IGV de 5 puntos porcentuales de evasión, que equivale a S/.4,400 millones (S/.880 millones por 5) adicionales por IGV producto de la formalización de las operaciones de venta de bienes y servicios, porque para ese año, si habrá 20 millones de personas pidiendo sus comprobantes por todas sus operaciones. Dicha cifra compensa en exceso el costo fiscal inicial.

Resumen del impacto fiscal estimado

A continuación, se presenta un resumen de los estimados del costo fiscal que implican las medidas propuestas. Cabe resaltar que el costo promedio anual indicado no implica dicho gasto desde el primer año dado que esto será progresivo, dicho promedio está estimado para los primeros 10 años según estimaciones del MEF.

Medida	Costo fiscal estimado 1er año (S/ millones)	Costo fiscal estimado Promedio anual (Promedio anual, S/ millones)	Costo fiscal próximos años (Promedio anual, S/ millones)	Beneficiarios
Beneficios de garantía estatal a los afiliados del SPP (pensión mínima y proporcional)	23	1,250.0		Población en general
Otorgar pensión a los afiliados del SPP con aportes incorrectamente pagados al SNP	7.4	36.7	126 (vigésimo año)	Antiguos afiliados al SPP
Pensión no contributiva a las personas en pobreza extrema	42	72.0	225 (vigésimo año)	Población en general
Pensión no contributiva a las personas en pobreza no extrema	68	151.0	1,123 (vigésimo año)	Población en general
Incentivos al ahorro	19	244.0	737 (vigésimo año)	Población en general
Reajuste de pensiones del SNP	782	904.0	1,907 (trigésimo año)	Afiliados al SNP
Pensión por consumo*	400	2,000.0		Población en general

IX. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera recomienda, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 70° del Reglamento del Congreso de la República, la **APROBACIÓN** de los Proyectos de Ley 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1079/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2278/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 3341/2022-CR, 3436/2022-CR, 3717/2022-CR, 4055/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4379/2022-CR, 4452/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4907/2022-CR, 4921/2022-CR, 5139/2022-CR, 5149/2022-CR, 5150/2022-CR, 5242/2022-CR, 5246/2022-CR, 5377/2022-CR, 5386/2022-CR, 5499/2022-CR, 5531/2022-CR, 5623/2023-CR, 5795/2023-CR, 5929/2023-CR, 5965/2023-CR, 6120/2023-PE, 6227/2023-CR, 6338/2023-CR, 6359/2023-CR, 6369/2023-CR, 6380/2023-CR, 6535/2023-CR, 6634/2023-CR, 7006/2023-CR, 7068/2023-CR, 7092/2023-CR, 7229/2023-CR, 7674/2023-CR y 7821/2023-CR con el siguiente texto sustitutorio:

LEY DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL PERUANO

TITULO I

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I. Principios

El Sistema Previsional Peruano se sustenta en los siguientes principios:

i. Unidad: se concibe como un único sistema que articula sus pilares.

ii. Universalidad: Comprende a todas las personas naturales, tengan o no tengan vínculo laboral, y garantiza su protección a fin de que accedan a pensiones de jubilación.
iii. Solidaridad: el sistema reconoce la participación del Estado y de todas las personas afiliadas para compensar las diferencias entre los aportes y los beneficios establecidos en la presente ley.
iv. Progresividad: el sistema busca ampliar de manera gradual y progresiva la cobertura y calidad de las prestaciones que se otorgan.
v. Intangibilidad: los fondos y los recursos previsionales son intangibles e inembargables, no pueden ser destinados para otro fin que no sea de carácter previsional.
vi. Sostenibilidad: el sistema establece reglas de largo plazo para garantizar el financiamiento de los beneficios establecidos en la presente ley.
vii. Suficiencia: el sistema aspira a que los beneficios establecidos en la presente ley sean suficientes para que los afiliados alcancen una vida digna.
viii. Transparencia: el sistema garantiza el acceso a la información oportuna y transparente.
ix. Adecuación: el sistema procura una razonable relación entre las pensiones con los ingresos que percibieron las personas pensionistas durante su vida laboral.
x. Igualdad y no discriminación: Principio y derecho fundamental que reconoce a los afiliados al "Sistema Nacional Previsional Peruano" el respeto de sus derechos en condiciones de igualdad, así como en el cumplimiento de las condiciones que establece el sistema.
xi. Eficiencia: la administración y gestión de los fondos previsionales se efectúan procurando obtener los mejores resultados económicos, cautelando el mayor rendimiento financiero y el menor costo posible.
xii. Confidencialidad: Se garantiza la reserva de la información correspondiente a los procedimientos previsionales de la ley. Dicha información sólo puede ser utilizada para los fines establecidos en el presente marco normativo. Las entidades públicas que tienen acceso no deben divulgar la información, ni compartirla, ni utilizarla para otros fines.

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1079/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2278/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 3341/2022-CR, 3436/2022-CR, 3717/2022-CR, 4055/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4379/2022-CR, 4452/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4907/2022-CR, 4921/2022-CR, 5139/2022-CR, 5149/2022-CR, 5150/2022-CR, 5242/2022-CR, 5246/2022-CR, 5377/2022-CR, 5386/2022-CR, 5499/2022-CR, 5531/2022-CR, 5623/2023-CR, 5795/2023-CR, 5929/2023-CR, 5965/2023-CR, 6120/2023-PE, 6227/2023-CR, 6338/2023-CR, 6359/2023-CR, 6369/2023-CR, 6380/2023-CR, 6535/2023-CR, 6634/2023-CR, 7006/2023-CR, 7068/2023-CR, 7092/2023-CR, 7229/2023-CR, 7674/2023-CR y 7821/2023-CR que propone la "Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano"

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley crea el Sistema Integral Previsional Peruano, incorporando al Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, a fin de garantizar la protección previsional de todos los ciudadanos tengan o no vínculo laboral. El SIP dispone un sistema previsional único, universal, igualitario, inclusivo e integrado en una estructura multipilar, bajo administración pública y privada, y establece mecanismos para garantizar el pago de, al menos, una pensión mínima a sus afiliados.

Artículo 2. Finalidad de la Ley

La presente ley tiene por finalidad reformar el sistema de pensiones para que sus beneficiarios accedan progresivamente a una pensión justa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política del Perú, reconociendo la progresividad en la aplicación del derecho a la seguridad social en pensiones, fomentando la eficiencia y competencia, facilitando la libre elección y garantizando la sostenibilidad del sistema. Asimismo, asegura una mayor competencia en la oferta de gestores de pensiones, brinda una pensión mínima, ofrece comisiones por resultados y la pensión por consumo como mecanismo de aportes complementario.

Artículo 3. Beneficiarios de la Ley

Las disposiciones contenidas en la presente ley se aplican a todas las personas mayores de edad, afiliadas o no al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP), siempre que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en estas.

Artículo 4. Acrónimos

En la presente Ley se utilizan los siguientes acrónimos:

a) AFP: Administradora Privada de Fondos de Pensiones regulada por la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF.
b) ONP: Oficina de Normalización Previsional.
c) SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
d) Sunat: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
e) UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
f) Sisfoh: Sistema de Focalización de Hogares
g) SNP: Sistema Nacional de Pensiones
h) SPP: Sistema Privado de Pensiones
i) MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
j) CIC: cuenta individual de capitalización
k) RMV: remuneración mínima vital
l) ESF; empresas del sistema financiero
m) TUO: Texto Único Ordenado
n) COOPACNACFP: Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público
o) DNI: documento nacional de identidad
p) Reniec: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
q) FCR: Fondo Consolidado de Reservas
r) FCJTP: Fondo Complementario de Jubilación para los Trabajadores Pesqueros
s) REP: Régimen Especial Pesquero
t) FESIP: Fondo Educativo del Sistema Privado de Pensiones

<u>Artículo 5.</u> Estructura del Sistema Previsional Peruano

El Sistema Integral Previsional Peruano, (en adelante el Sistema), se basa en los siguientes pilares:

a) Pilar no contributivo:

1. La administración y financiamiento de este pilar es público.
2. Este pilar tiene como finalidad asegurar la cobertura asistencial (pensión) de las personas que a la edad de jubilación acrediten los siguientes requisitos: no cuentan con una pensión de jubilación proporcional especial a partir de sus aportes al sistema (pensión contributiva) y se encuentran en condición de pobreza o

vulnerabilidad, de acuerdo a los criterios del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

3. También asegura la cobertura asistencial de las personas con discapacidad severa y de otros grupos poblacionales con vulnerabilidades que sean priorizados mediante ley y que cumplan los requisitos señalados en el numeral anterior.
4. Las pensiones que se otorgan en el pilar no contributivo no generan prestaciones de sobrevivencia.

b) Pilar semicontributivo:

1. Este pilar está compuesto por:
   i. El SNP y los regímenes especiales a su cargo. Es de administración pública.
   ii. El SPP y los regímenes que lo componen. Es de administración privada.
2. El financiamiento complementario de este pilar es público.
3. Acceden a este pilar las personas afiliadas al SNP que a la edad de jubilación cumplen con las unidades de aporte requeridos para una pensión y los afiliados al SPP que a la edad de jubilación cumplen con los siguientes requisitos: i) no hayan realizado retiros de su cuenta individual de capitalización (CIC) a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, ii) cuentan con el número de aportes requeridos, y iii) el monto de su CIC es insuficiente para financiar una pensión mínima o una pensión de jubilación proporcional especial.
4. El Estado complementa los recursos necesarios para el pago de una pensión mínima o una pensión de jubilación proporcional especial.
5. Además de las prestaciones de jubilación, el Estado garantiza prestaciones de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, según el régimen que corresponda.

c) Pilar contributivo:

1. Este pilar está compuesto por:
   i. El SNP y los regímenes especiales a su cargo. Es de administración pública.
   ii. El SPP y los regímenes que lo componen. Es de administración privada.
2. Las prestaciones del pilar contributivo se financian con los aportes realizados por las personas afiliadas al sistema.
3. Este pilar otorga prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, según el régimen que corresponda, supeditadas al cumplimiento de requisitos establecidos en las normas correspondientes.

d) Pilar voluntario:

1. Este pilar es complementario al sistema, y permite a las personas afiliadas a este mejorar sus pensiones o completar sus aportes para acceder a las prestaciones que brinda dicho pilar.
2. Se financia a través de asignaciones o aportes voluntarios con fines previsionales.
3. Para el caso del SPP, las personas afiliadas pueden realizar aportes voluntarios sin fin previsional de libre disponibilidad.
4. Comprende los aportes que se realice mediante el mecanismo de aportes por consumo.

CAPÍTULO II

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

Artículo 6. Incorporación de las cuentas nocionales en el Sistema Nacional de Pensiones

Se encarga al Poder Ejecutivo la incorporación de las cuentas nocionales en el régimen de reparto del SNP, a fin de que cada jubilado acceda a una pensión acorde con lo aportado. Esta disposición se implementa de forma progresiva de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7.

Artículo 7. Emisión de las cuentas nocionales en el Sistema Nacional de Pensiones

7.1. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) crea las cuentas nocionales a sus afiliados en las cuales se registran sus aportes.
7.2. Los afiliados a los regímenes previsionales administrados por la ONP existentes antes de la entrada en vigor de la presente ley y que hayan adquirido la condición de pensionistas con anterioridad a dicha entrada en vigor continúan percibiendo sus pensiones conforme a lo establecido en dichos regímenes en la oportunidad en la que adquirieron tal condición.

7.3. El MEF y la ONP definen el mejor esquema de transición hacia un sistema de cuentas nocionales tomando en consideración los aportes, cotizaciones, entre otras variables. Se dispone que el año 2030 es el plazo máximo para su implementación.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES APLICABLES AL SISTEMA PREVISIONAL PERUANO

SUBCAPÍTULO I

TASA DE APORTACIÓN

Artículo 8. Tasa de aporte obligatorio para los trabajadores dependientes en el Sistema

8.1. Las aportaciones obligatorias de los afiliados al SNP no pueden ser inferiores al 13 % de la remuneración mensual asegurable o pensionable a cargo del afiliado, sin perjuicio de los aportes que legalmente corresponde realizar al empleador o al Estado.

8.2. En el caso del SPP, el aporte obligatorio está constituido por:

d) El 10 % sobre la remuneración asegurable destinada a la CIC.
e) Un porcentaje de la remuneración asegurable, destinada a financiar las prestaciones de invalidez y sobrevivencia y un monto destinado a financiar la prestación de gastos de sepelio, conforme a las reglas dispuestas para ello en la normativa vigente del SPP.
f) Una comisión sobre la base de lo establecido en el inciso c) del artículo 30 del TUO de la Ley del SPP, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF.

8.3. El reglamento de la presente ley establece las disposiciones complementarias para la implementación del presente artículo.

8.4. Cualquier incremento progresivo de la tasa de aportación en el sistema y la participación de los empleadores para el financiamiento de las prestaciones debe ser aprobado mediante norma con rango de ley a propuesta del Poder Ejecutivo, previo estudio actuarial, a cargo de la ONP y la SBS en el marco de sus competencias.

8.5. El Poder Ejecutivo realizará un estudio y posteriormente una propuesta legislativa para la incorporación de un porcentaje de aporte obligatorio de parte de los empleadores para cada trabajador tanto del SNP como del SPP.

Artículo 9. Tasa de aporte obligatorio para los trabajadores independientes en el Sistema

9.1. A los trabajadores independientes afiliados al Sistema que perciban ingresos que constituyan rentas de cuarta categoría o quinta categoría prevista en el literal e) del artículo 34 del Decreto Supremo 179-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, se les aplica una tasa de aporte obligatorio.
9.2. Dicha tasa se aplicará de forma gradual a partir del primero de enero del tercer año posterior a la entrada en vigor de la presente ley, aplicándose durante dicho año una tasa de 2%, la cual se incrementará en un punto porcentual cada dos años hasta un máximo de 5%.
9.3. La citada tasa se aplica sobre los ingresos percibidos de cada recibo por honorario emitido por el trabajador independiente.
9.4. Las personas, empresas y entidades obligadas a llevar contabilidad de acuerdo con el artículo 65 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta están obligadas a retener los aportes señalados en el numeral 9.1 cuando paguen o acrediten rentas de cuarta categoría o quinta categoría prevista en el literal e) del artículo 34 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
9.5. En el caso de los trabajadores independientes que perciban ingresos no sujetos a retención o cuando el agente de retención no cumpla con la obligación de retener los aportes. El agente retenedor es solidariamente responsable por los aportes no pagados y por las obligaciones derivadas de ellos.
9.6. Para los afiliados al SNP, estos aportes tienen naturaleza tributaria y su administración está a cargo de la Sunat.
9.7. Para los afiliados al SPP, los plazos para la declaración, retención y pago, así como las disposiciones relacionadas con estos procesos, se efectúan de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente del SPP.
9.8. Los aportes a que se refiere el presente artículo se determinan mensualmente y deben ser declarados y pagados en los plazos establecidos en el artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Supremo 133-2013-EF, Código Tributario.

Artículo 10. Responsabilidad de aquel que realiza la retención de los aportes

10.1. En el caso de que el responsable de realizar la retención de los aportes no realice el depósito efectivo de estos en la CIC del afiliado, pasado el plazo establecido para ello en el reglamento de la presente ley, se desarrollará los siguientes procedimientos:

iii. En el caso de las entidades del sector público, los montos adeudados serán directamente depositados en la CIC del afiliado, siendo descontados directamente del presupuesto de la institución deudora para el ejercicio fiscal siguiente.

iv. En todos los casos, la Sunat aplicará los procedimientos tributarios para recaudar los aportes adeudados, tanto de forma voluntaria como coactiva, conforme lo dispone la disposición complementaria final duodécima quinta.

10.2. Sin perjuicio de lo anterior, el responsable de realizar la retención de los aportes que no realice el depósito efectivo de estos en la cuenta del afiliado incurrirá en la responsabilidad penal que corresponda.

Artículo 11. Unidad de aporte

11.1. La unidad de aporte equivale a un mes de aporte en el sistema. Esta será definida mediante decreto supremo refrendado por el MEF.

11.2. La unidad de aporte considera, para el trabajador dependiente, los periodos de aportaciones en meses, semanas o días que presten o hayan prestado servicios efectivos que generen la obligación de abonar las aportaciones. Asimismo, considera las licencias con goce de remuneraciones otorgadas por ley o por el empleador, así como los periodos durante los que el trabajador haya estado en goce de subsidio.

11.3. Cuando no se realice la jornada máxima legal o no se trabaje la totalidad de días de la semana o del mes, la aportación se calcula sobre lo percibido, siempre que se mantenga la proporcionalidad, con la remuneración mínima con la que debe retribuirse a un trabajador, conforme a las normas correspondientes.

11.4. En el caso de los aportes del trabajador independiente y los aportes voluntarios con fin previsional que realice cualquier afiliado, la unidad de aporte se define en función de la remuneración mensual asegurable o pensionable que, en ningún caso, es

inferior a una remuneración mínima vital (RMV), pudiéndose efectuar pagos fraccionados.

SUBCAPÍTULO II

EDAD DE JUBILACIÓN

Artículo 12. Edad de jubilación

12.1. La edad de jubilación en el sistema se fija en sesenta y cinco años, para hombres y mujeres.

12.2. Para efectos de un ajuste progresivo en el tiempo de dicha variable el MEF debe encargar a una entidad de reconocido prestigio, la revisión y evaluación de la edad de jubilación, proponiendo las modificaciones que correspondan a las instancias legislativas, de ser el caso, sobre la base de las condiciones de longevidad que registre la población, de las evidencias que presente el mercado laboral, así como de las tasas de reemplazo proyectadas para los componentes contributivos. Dicha revisión debe hacerse en forma periódica cada cinco años como plazo máximo, siendo la primera revisión dos años después de la entrada en vigor de la presente ley.

12.3. En el Sistema, el requisito de edad para acceder a una pensión adelantada, anticipada ordinaria o anticipada por desempleo, cuando corresponda, es a partir de los 55 años, manteniéndose los demás requisitos establecidos para cada régimen especial.

SUBCAPÍTULO III

TRASLADO

Artículo 13. Traslado entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones

13.1. Las personas afiliadas al SNP pueden trasladarse al SPP en cualquier momento, de conformidad con la normativa vigente, teniendo el derecho al Bono de Reconocimiento de los aportes realizados al SNP más un ajuste por inflación acumulado, que será transferido a la CIC del afiliado respectivo.
13.2. Las personas afiliadas al SNP que decidan trasladarse al SPP, que hayan acreditado como mínimo doscientos cuarenta unidades de aporte al momento de la jubilación y cuyos aportes permitan financiar una pensión mínima o proporcional en el SNP tienen garantizada una pensión en el SNP con esos aportes, la que no es incompatible con la pensión a recibir en el SPP.
13.3. Las personas afiliadas del SPP pueden trasladarse al SNP en cualquier momento, siempre que transfieran el 100 % de su CIC de aportes obligatorios con fin previsional, en función de las unidades de aporte que representen, no formando parte del cálculo los aportes voluntarios sin fin previsional.
13.4. En el caso de que una persona afiliada al SPP regrese al SNP, su pensión se calcula tomando todos los aportes realizados tanto al SNP como al SPP al momento de la jubilación.
13.5. Se establece en el reglamento de la presente ley los mecanismos de entrega de información para una adecuada toma de decisiones.

SUBCAPITULO IV

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

Artículo 14. Administración de fondos en el sistema

14.1. El SNP es un régimen de repartos. La ONP se encuentra a cargo de su administración.
14.2. El SPP es un régimen de capitalización individual que es administrado por:
a) Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y las empresas del sistema financiero (ESF) establecidas en los literales a), c) y d) del artículo 16 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, en igualdad de condiciones de competencia y bajo las disposiciones y salvaguardas

establecidas en el TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones y normas complementarias, y que se acogen a todas las obligaciones, responsabilidades y derechos que establece dicho TUO.

b) De manera excepcional, las cooperativas de ahorro y crédito que solo operan con sus socios y que no están autorizadas a captar recursos del público u operar con terceros de los niveles 2 o 3 inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (COOPACNACFP) están facultadas a administrar fondos de pensiones del SPP únicamente para trabajadores independientes siempre que estos formen parte de sus asociados.

14.3. La SBS establece los procedimientos operativos necesarios para la implementación del numeral anterior, teniendo como premisa la separación patrimonial y la contabilidad separada entre el fondo de pensiones de los afiliados y la entidad que los administra, a que hace referencia el artículo 18-C del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF,además de las salvaguardas que en esta norma se establecen, sobre la base de la protección de los ahorros jubilatorios de los afiliados ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento.

14.4. La SBS, con el fin de permitir la entrada al sistema de las entidades mencionadas en el párrafo 14.2, establece los procedimientos operativos necesarios para que estas administren uno o más fondos de acuerdo con sus características particulares.

14.5. Con la finalidad de incluir como afiliados a trabajadores independientes, las entidades mencionadas en los párrafos 14.1 y 14.2 pueden elaborar productos cuyas características principales sean la flexibilidad y la adaptabilidad a la frecuencia de los pagos.

SUBCAPITULO V
DISPOSICIÓN DE FONDOS

Artículo 15. Retiro de fondos

15.1. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, queda prohibido el retiro o extraordinario de los fondos acumulados en las cuentas individuales de aportes obligatorios del sistema por parte de los afiliados durante su etapa activa.

SUBCAPITULO VI

MEDIOS ALTERNATIVOS DE APORTACIÓN

Artículo 16. Aportes de los afiliados

16.1. Dentro del pilar contributivo, tanto el SNP como el SPP llevan a cabo sus procesos para recabar los aportes previsionales, bajo las plataformas que cada uno de ellos les provea, incluidas las entidades centralizadoras, según la regulación aplicable.
16.2. Los pagos de los aportes al Sistema, sean obligatorios o voluntarios, son realizados mediante aplicativo móvil, billetera móvil, agentes bancarios u otros mecanismos conforme se establezca en las normas reglamentarias.
16.3. Las entidades mencionadas en los párrafos 14.1 y 14.2 del artículo 14 incentivan el ahorro previsional a través del uso de billeteras electrónicas u otros mecanismos innovadores.

CAPÍTULO IV

PILARES

SUBCAPÍTULO I

PILAR NO CONTRIBUTIVO

Artículo 17. Administración

La ONP es responsable de administrar el pago y articular el pilar no contributivo de forma progresiva, el que se financia con recursos del tesoro público tales como un porcentaje de los saldos anuales de balance y otros recursos que el Estado considere.

Artículo 18. Prestación

18.1. La pensión no contributiva es una subvención económica que se asigna de manera individual a la persona que cumple con los requisitos que corresponden a la población objetivo por proteger.
18.2. Las pensiones no contributivas se crean por ley observando reglas de sostenibilidad financiera.
18.3. La pensión no contributiva no genera prestaciones de sobrevivencia.
18.4. La pensión no contributiva otorga gastos de sepelio.
18.5. El monto de la pensión no contributiva será determinado por el Poder Ejecutivo y será actualizado periódicamente. El monto de la pensión no contributiva no puede superar el 25% de la pensión mínima que otorga el SNP.

Artículo 19. Acceso a una pensión no contributiva

19.1 Acceden a una pensión no contributiva las personas que a la edad de jubilación no cuentan con al menos una pensión de jubilación proporcional especial y se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad de acuerdo con los criterios del Sisfoh, ya sea que se encuentren afiliados al Sistema o no; así como las personas con discapacidad severa y otras personas vulnerables que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en las normas de creación de la intervención pública respectiva.

19.2 La pensión no contributiva será otorgada sólo mientras las personas cumplan las condiciones de pobreza o vulnerabilidad. El Sisfho actualizará de manera periódica el padrón de personas beneficiarios.

Artículo 20. Registro informático

Todo perceptor de una pensión no contributiva es registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

SUBCAPÍTULO II

PILAR SEMICONTRIBUTIVO

Artículo 21. Administración

La administración del pilar semicontributivo y de las prestaciones que en este se otorga, se encuentra a cargo de la ONP.

Artículo 22. Prestaciones

22.1. Este pilar otorga garantía estatal a las personas afiliadas al Sistema, para el pago de las prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio con el régimen que corresponda.
22.2. Las prestaciones de jubilación e invalidez permiten acceder a una pensión mínima y, cuando corresponda, a una pensión de jubilación proporcional especial, con garantía estatal.
22.3. Las pensiones de sobrevivencia y gastos de sepelio se rigen bajo la normativa vigente de cada régimen.
22.4. El pago de la pensión mínima, o de la pensión de jubilación proporcional especial, con garantía estatal están a cargo de la ONP.

Artículo 23. Acceso a las prestaciones del pilar semicontributivo

23.1. Las prestaciones del pilar semicontributivo se otorgan a las personas afiliadas del Sistema en atención a lo siguiente:
   a). Los afiliados al SNP acceden a una pensión, siempre que cumplan con los requisitos dispuestos en la normativa vigente.
   b). Los afiliados al SPP, de solicitarlo, acceden a una pensión mínima o una pensión de jubilación proporcional especial con garantía estatal siempre que cumplan con las unidades de aporte efectivas requeridas, no realicen retiros de fondos a partir de la entrada en vigor de la presente ley y que su CIC sea insuficiente para financiarla. Se considera las aportaciones realizadas al SNP, de ser el caso, salvo que hayan servido para obtener una pensión en el SNP.

23.2. En todos los casos en que una persona afiliada del SPP se acoja a algún beneficio con garantía estatal, a la edad de jubilación, el pago de sus pensiones está a cargo de la ONP, y la totalidad de los recursos de su CIC son transferidos al Fondo Consolidado de Reservas (FCR).

Artículo 24. Financiamiento

Las pensiones del pilar semicontributivo se financian de acuerdo con lo siguiente:

a). En el SNP, el financiamiento se realiza a través de las fuentes establecidas según la normativa vigente.
b). En el SPP, el financiamiento proviene de los recursos de la CIC de cada afiliado y con el producto de la redención del bono de reconocimiento, de ser el caso, los cuales se complementan con recursos públicos.

Artículo 25. Beneficiarios de la pensión mínima

25.1. Tienen derecho a percibir la pensión mínima todos los aportantes en edad de jubilación que acrediten como mínimo doscientas cuarenta unidades de aporte efectivas, sean aportes obligatorios o voluntarios con fin provisional al momento de la jubilación y no realicen retiros de fondos a partir de la entrada en vigor de la presente ley, a excepción de lo previsto en el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF.
25.2. Cada unidad de aporte obligatorio o voluntario con fin provisional, a efectos de los doscientos cuarenta aportes a los que se refiere el párrafo anterior, se establece teniendo como base de cálculo lo dispuesto en el artículo 11 de la presente norma. Los demás requisitos para acogerse a la pensión mínima se determinan mediante el reglamento.
25.3. Los afiliados que no alcancen a acreditar las doscientos cuarenta unidades de aporte efectivas tienen derecho a recibir una proporcional especial.
25.4. Para acceder a la citada proporcional especial será necesario contar con un fondo mínimo equivalente a ciento veinte unidades de aporte. El importe de las pensiones de jubilación proporcional especial y los requisitos para acceder a estas, se establecerán mediante reglamento.

25.5. En caso el afiliado pertenezca al SPP, deberá trasladar sus fondos al SNP como indispensable para acceder a la pensión mínima o escalonada abordada en el presente artículo.

Artículo 26. Aportes y determinación del cálculo de la pensión mínima

26.1. La pensión mínima está compuesta por los aportes obligatorios, voluntarios con fin previsional y complementarios acumulados del afiliado, así como el monto correspondiente a los aportes de carácter complementario y la rentabilidad generada por estos.
26.2. El Poder Ejecutivo determina el monto de la pensión mínima, así como los ajustes periódicos respectivos.
26.3. Las entidades mencionadas en el párrafo 14.2 del artículo 14 están obligadas a proporcionar a sus afiliados información sobre los valores que estos deben aportar para lograr una pensión mínima objetivo.
26.4. De manera excepcional, para aquellos aportantes con hijos que llegada la edad de jubilación no accedan a una pensión mínima o una pensión de jubilación proporcional especial con garantía estatal; el Sistema reconoce hasta seis unidades de aporte por hijo, con un máximo de tres hijos, por aquellos periodos en que no se haya aportado, siempre que correspondan a los seis primeros meses de vida de sus hijos, presumiéndose que la inexistencia de aporte se debió a que en dicho periodo se dedicaron al cuidado de sus hijos en esta etapa.
26.5. En caso que el periodo sin aportaciones coincida para ambos padres, se le otorga el beneficio solo a la madre.
26.6. El reglamento de la presente ley establece el procedimiento correspondiente al presente artículo.

SUBCAPÍTULO III

PILAR CONTRIBUTIVO

Artículo 27. Administración

El pilar contributivo se soporta en un modelo dual, cuya administración está cargo de:

a). La ONP, para el caso del SNP y los regímenes que tiene a cargo.
b). Las entidades mencionadas en el párrafo 14.2 del artículo 14, para el caso del SPP y los regímenes que lo componen.

Artículo 28. Prestaciones

Este pilar otorga pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, según el régimen que corresponda.

Artículo 29. Acceso

29.1. Los ciudadanos al cumplir los dieciocho años, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, deben afiliarse al Sistema, eligiendo entre el SNP o SPP, en los plazos y procedimientos previstos en el reglamento de la presente ley. De no manifestar su voluntad, son afiliados al SNP.
29.2. Las personas que se encuentren afiliadas al SNP o SPP, a la entrada en vigor de la presente ley, se consideran afiliadas al nuevo Sistema.
29.3. Las personas mayores de dieciocho años que no estén afiliadas al Sistema a la entrada en vigor de la presente ley se afilian obligatoriamente al SNP o SPP. De no manifestar su voluntad, son afiliados al SPP.
29.4. Las personas comprendidas en los párrafos 29.1 y 29.3 se sujetan a la licitación del servicio de administración de cuentas individuales de capitalización estipulado en el artículo 7-A del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF.
29.5. El código de identificación en el Sistema es el número de documento nacional de identidad (DNI).

29.6. Se faculta al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a la ONP y a la SBS a emitir las disposiciones necesarias para la implementación de la afiliación de los beneficiarios de la presente ley, conforme al plazo que se establece en su reglamento.

Artículo 30. Pago de las prestaciones

El pago de las prestaciones que otorga este pilar está a cargo de:

a). La ONP, para el caso del SNP y los regímenes que tiene a cargo.
b). Las entidades mencionadas en el párrafo 14.2 del artículo 14, para el caso del SPP y los regímenes que lo componen; así como por las Empresas de Seguros, cuando intervenga directamente en el pago de una pensión de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.
c). No hay incompatibilidad para la percepción de prestaciones contributivas, que cubran o no el mismo riesgo, en el Sistema.

Artículo 31. Financiamiento

Las pensiones del pilar contributivo se financian de acuerdo con lo siguiente:

a). En el SNP, el financiamiento se realiza a través de las fuentes establecidas según la normativa correspondiente.
b). En el SPP, el financiamiento proviene de los recursos de la CIC de cada afiliado y el producto de la redención del bono de reconocimiento, de ser el caso.

SUBCAPÍTULO IV

PILAR VOLUNTARIO

Artículo 32. Administración

La administración del pilar voluntario está a cargo del SPP.

Artículo 33. Aportes voluntarios

33.1. Los aportes voluntarios de las personas afiliadas al Sistema permiten:
- a) Complementar los aportes requeridos para alcanzar una pensión mínima o de jubilación proporcional especial en el Pilar Semicontributivo, conforme las disposiciones que se establezcan en el reglamento de la presente ley.
- b) Incrementar las pensiones de jubilación e invalidez que se otorgan en el pilar contributivo.

33.2. Las personas afiliadas al Sistema pueden efectuar aportes voluntarios con fines previsionales en cualquier momento, estos pueden ser:
- a) A través de transferencias efectuadas mediante aplicativo móvil, pagos efectuados a través de agentes bancarios y otros mecanismos que se establezcan en las normas reglamentarias.
- b) Las personas afiliadas al Sistema que perciban rentas de cuarta y/o de quinta categoría, según lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta, pueden comunicar a la Sunat que el monto de su devolución por pagos en exceso del impuesto a la renta que solicite se abone a su cuenta individual de capitalización (CIC) como aportes voluntarios con fines previsionales de acuerdo a lo establecido en la norma reglamentaria de la presente ley. Las personas afiliadas al Sistema deben comunicar a la Sunat, en la forma, plazo y condiciones establecidas mediante Resolución de Superintendencia, la forma de devolución antes indicada.
- c) Aportes voluntarios con fin previsional sustentados en los gastos por consumo realizados por los afiliados.
- d) Otros aportes que se establezcan en el reglamento.

Artículo 34. Acceso a aportes voluntarios sin fin previsional

34.1. Pueden realizar aportes voluntarios con fin previsional todas las personas afiliadas al Sistema. Estos aportes tienen carácter intangible e inembargable.
34.2. Las personas afiliadas al SPP pueden realizar aportes voluntarios sin fin previsional.

Artículo 35. Pensión por consumo

35.1. La pensión por consumo es un aporte voluntario con fin previsional proveniente de los gastos por consumo realizados por los afiliados debidamente sustentados en comprobantes de pago que contengan el Documento Nacional de Identidad (DNI) correspondiente. El comprobante de pago emitido que será considerado para la pensión por consumo podrá tener un valor máximo de hasta S/ 700.

35.2 Para acceder a dicho beneficio los afiliados deberán realizar el trámite según corresponda:

i. Las personas a partir de los 18 años de edad y no tengan vínculo laboral, crean una cuenta individual de pensión por consumo en el SPP en la que se acumulan dichos aportes.
ii. Las personas que se encuentran afiliadas al SPP acumulan los aportes de pensión por consumo en la CIC que actualmente detentan.
iii. Las personas que se encuentran afiliadas al SNP, crean una cuenta individual de pensión por consumo en el SPP en la que se acumulan dichos aportes.
iv. En todos los casos, la cuenta individual de pensión por consumo constituye un recurso del Estado, es intangible e inembargable, no puede ser destinada para otro fin que no sea de carácter previsional y será la cuenta que el afiliado mantenga en el SPP hasta su jubilación.

35.3. La pensión por consumo corresponde al 1% de la suma del valor de los comprobantes de pago emitidos dentro de cada ejercicio fiscal, con un tope de ocho UIT anuales del consumo total.
35.4. El aporte es calculado con periodicidad anual.
35.5. La pensión por consumo cesa cuando el afiliado se jubila efectivamente.
35.6. Cuando el afiliado al momento de la edad de jubilación no alcance a una pensión mínima o pensión de jubilación proporcional especial considerando todos los aportes de su CIC o no cumpla con los requisitos del pilar no contributivo, podrá solicitar la devolución de los aportes que se encuentren en su CIC al momento de la jubilación de acuerdo con el procedimiento y requisitos que para tal efecto establezca la SBS.

Artículo 36. Cálculo, registro y transferencia de la pensión por consumo

36.1 Los gastos por consumo realizados por los afiliados, denominado pensión por consumo, serán registrados de cumplir con las siguientes condiciones:

a) Los gastos se sustenten en comprobantes de pago por la adquisición de bienes o servicios que sean emitidos electrónicamente.
b) El comprobante de pago consigna, al menos, el número de DNI del afiliado.
c) Los gastos sean realizados exclusivamente por personas naturales, excluyéndose expresamente a las personas jurídicas con independencia de su naturaleza.
d) En ningún caso el comprobante de pago usado para el mecanismo del presente artículo será utilizado como deducción tributaria aplicable a personas naturales sin negocio o cualquier otro beneficio fiscal.
e) No se considera el gasto sustentado en comprobante de pago emitido por un contribuyente que a la fecha de emisión del comprobante: (i) tenga la condición de no habido, según la publicación realizada por la Sunat, salvo que, al 31 de diciembre del ejercicio, el contribuyente haya cumplido con levantar tal condición; (ii) la Sunat le haya notificado la baja de su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes; y (iii) tenga la condición de sujeto sin capacidad operativa, según la publicación realizada por la Sunat.

36.2. Se excluyen del cálculo de la pensión por consumo los comprobantes de pago originados por la adquisición de equipos, vehículos y maquinarias, entre otros que el reglamento disponga.
36.3. La Sunat establece y ejecuta los procedimientos y mecanismos electrónicos que faciliten el registro y la consignación de los importes que ingresan a las cuentas.
36.4. La Sunat proporciona al MEF, hasta el 31 de marzo del año siguiente, los aportes de pensión por consumo de cada afiliado entre otra información necesaria para la realización de la pensión por consumo a la cuenta de cada afiliado sin vulnerar la reserva tributaria, considerando únicamente aquella información que figure en sus sistemas y de acuerdo con lo que se establezca mediante decreto supremo.
36.5. El SNP y SPP deben contar con información anual histórica de los aportes de pensión por consumo realizado, diferenciando los aportes de la rentabilidad generada acumulada.

36.6. Los montos a los que se refiere el párrafo 35.3 del artículo 35 deben ser registrados y consignados en la cuenta individual como un aporte complementario y adicional al fondo previsional que posea el afiliado del SNP o SPP.
36.7. El MEF transfiere los montos correspondientes a los aportes por gastos a las administradoras del Sistema, como máximo, en los tres meses siguientes después de recibir la información mencionada en el párrafo anterior.

Artículo 37. Intangibilidad de los aportes por consumo

Los aportes por consumo existentes en las cuentas individuales son intangibles. Dichos aportes no pueden ser objeto de descuento, embargo, retención, compensación contractual o legal o cualquier afectación por orden administrativa o judicial. Asimismo, estos aportes no pueden ser objeto de disposición de parte del afiliado bajo ninguna circunstancia, en la medida que tienen un fin previsional.

Artículo 38. Financiamiento de los aportes por consumo

Los aportes por consumo se financian con recursos del tesoro público consignados y autorizados en el presupuesto público de cada año.

Artículo 39. Administración de aportes complementarios en cuentas individuales de capitalización vigentes a la entrada en vigencia de la ley

La administración de los aportes complementarios con fin previsional de las personas que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentran afiliadas a algún sistema previsional le corresponde a la SNP o SPP al que se encuentren afiliados.

CAPÍTULO V

CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS TRABAJADORES PESQUEROS

Artículo 40. Fondo Complementario de Jubilación para los Trabajadores Pesqueros (FCJTP)

40.1. Se crea el Fondo Complementario de Jubilación para los Trabajadores Pesqueros (FCJTP), constituido por el aporte de determinación mensual, a cargo del armador, equivalente al 5% de la remuneración asegurable mensual de los trabajadores pesqueros, comprendidos lavajo el amparo de la Ley 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros.

40.2. Para efecto de lo señalado en el numeral anterior, se consideran las siguientes definiciones:

a) Armador: Es el empleador de los trabajadores pesqueros a que se refiere el artículo 3 de la Ley 30003.
b) Trabajadores y trabajadores pesqueros: Son aquellos a que se refiere el artículo 3 de la Ley 30003.
c) Remuneración asegurable mensual de los trabajadores pesqueros: Es la suma de todos los ingresos percibidos por el trabajador pesquero, incluyendo su participación en la pesca capturada y las bonificaciones por especialidad. En ningún caso la remuneración asegurable mensual puede ser menor a la Remuneración Mínima Vital vigente en cada oportunidad.
d) Declaración y Pago: La declaración y el pago del aporte se realiza mensualmente.

40.3. El aporte a que se refiere el numeral 40.1 del presente artículo tiene naturaleza tributaria, por lo que se encuentra comprendido dentro de los alcances del Código Tributario para todos sus efectos.

40.4. Los armadores que aporten al FCJTP ya no lo hacen al Régimen Especial Pesquero (REP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP) conforme lo establecido en la Ley

30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros.

40.5. El FCJTP es intangible y sus recursos se destinan única y exclusivamente para el pago del beneficio complementario a la pensión.

Artículo 41. Ámbito de aplicación

Los trabajadores pesqueros afiliados al Régimen Especial Pesquero (REP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que se jubilen de conformidad a lo dispuesto en la Ley 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, tienen derecho a recibir un beneficio complementario del FCJTP creado en el artículo 40 de la presente ley.

Artículo 42. Cálculo del Beneficio

El beneficio complementario a que se refiere el artículo 40 de la presente ley se calcula de la siguiente manera:

a) La diferencia que resulte entre el monto de pensión que obtiene aplicando las normas pertinentes del Sistema y el promedio de las remuneraciones percibidas por el trabajador en los doce meses anteriores a la fecha de cese es cubierto por el FCJTP.
b) El monto del beneficio complementario a otorgarse más la pensión de jubilación que perciba el beneficiario no puede ser mayor al 50% de una UIT.
c) El pago del beneficio complementario se realiza mensualmente, conforme al cronograma que emite la ONP una vez efectuado el cálculo.
d) En el caso de que los recursos del FCJTP sean insuficientes, el pago se realiza de manera proporcional al beneficio complementario de cada beneficiario según los recursos acumulados en el fondo, sin generarse deuda por el diferencial que resulte del importe íntegro del beneficio complementario.

Artículo 43. Beneficio complementario para las prestaciones de sobrevivencia

Los titulares de las prestaciones de invalidez, viudez y orfandad tienen derecho a percibir el beneficio complementario regulado por la presente Ley en el porcentaje previsto en las normas previsionales pertinentes.

Artículo 44. Administración del Fondo Complementario de Jubilación para Trabajadores Pesqueros

44.1 Los recursos del FCJTP son administrados por el FCR, contabilizándose en forma independiente de los demás recursos a su cargo.
44.2 La administración de los recursos se rige por los lineamientos que para tal efecto establezca el Directorio del FCR.
44.3 La Sunat transfiere el monto recaudado por dicho aporte al FCR, luego de deducir la comisión respectiva en favor de la Sunat y la comisión para atender el gasto de administración del beneficio complementario en que incurra la ONP, calculada esta última en el equivalente al tope del porcentaje previsto en el inciso a. del numeral 3 del artículo 12 del Reglamento de la Ley 28532, aprobado por Decreto Supremo 118-2006-EF, aplicado sobre la suma de la recaudación.

Artículo 45. Administración del Beneficio Complementario

La administración del beneficio complementario del FCJTP se encuentra a cargo de la ONP. En el caso de los pensionistas del SPP, las AFP deben remitir a la ONP, la información necesaria para el cálculo del beneficio complementario.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Reglamentación

En un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano" se deberá emitir el reglamento de la presente ley.

SEGUNDA. Vigencia

La presente ley entra en vigencia al día siguiente de la publicación de su Reglamento en el Diario Oficial "El Peruano", conforme con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final, salvo los artículos y disposiciones que se indican a continuación:

a) El artículo 8 entra en vigor después de dos años de aprobada la presente ley, conforme a lo dispuesto en el 8.2 del mismo.
b) La Quinta Disposición Complementaria Transitoria entra en vigencia a partir del mes de enero del siguiente año que se apruebe la ley.
c) La Primera Disposición Complementaria Final, entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano."
d) Las responsabilidades asumidas por la ONP según el artículo 13 de la presente ley entra en vigencia al día siguiente de la publicación del decreto supremo que apruebe su transferencia.

TERCERA. Sobre el funcionamiento del Sistema

El Poder Ejecutivo, evalúa cada cinco años, contados a partir de la vigencia de la presente ley, el desempeño del sistema. El informe se publica en la plataforma digital única del Estado Peruano.

De conformidad con la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, toda propuesta normativa sobre los regímenes pensionarios que involucre materia fiscal o financiera, debe contar con un estudio financiero y un estudio actuarial.

CUARTA. Revisión de la pensión mínima y reajuste de pensiones en el Sistema

a) El monto de la pensión mínima del Sistema se evalúa cada tres años, tomando en consideración la capacidad financiera del Estado y las posibilidades de la economía nacional, salvo las disposiciones vigentes sobre la materia.
b) La pensión mínima se aprueba mediante ley del Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo previo informe del Consejo Fiscal y la SBS.

QUINTA. Comisiones en el SPP

Las personas afiliadas al SPP que, a la vigencia de la presente Ley, eligieron permanecer en la comisión sobre la remuneración al amparo de lo dispuesto en la Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, podrán decidir si desean mantenerse bajo el esquema de comisión mencionado estipulado en el literal a) del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones,

aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF o migrar a algún esquema del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF.

Si el afiliado elige migrar a la comisión por saldo o por productividad, dicha comisión será aplicada sobre los nuevos aportes que se generen a partir de la entrada de la Ley.

Las comisiones se sujetarán a una licitación o subasta periódica con un plazo máximo de cada dos años. La SBS emitirá disposiciones complementarias necesarias y establecerá un periodo de transición gradual, así como requisitos necesarios para materializar la presente disposición.

Los afiliados podrán modificar su elección de tipo de comisión, para ello la SBS, sobre la base de las evaluaciones técnicas que realice, establecerá los mecanismos y disposiciones correspondientes, así como los requisitos necesarios para materializar la presente disposición.

SEXTA. Rentabilidad Mínima en el SPP

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas establece los procedimientos para el cálculo de los indicadores de referencia de rentabilidad mínima sobre la base de portafolios benchmark.

SÉTIMA. Intercambio de información

a) La SBS y el MEF realizan intercambio de información, de manera permanente, para fines de evaluación y seguimiento a la política de pensiones en general.
b) La información a remitir no contiene información nominal, conforme a las normas dispuestas en la Ley 29733, Ley de protección de datos personales.

OCTAVA. Atención progresiva de los aportes realizados de manera incorrecta al SNP

a) A la edad de jubilación, las personas afiliadas al SPP que tengan aportes declarados y pagados de manera incorrecta al SNP por parte de sus empleadores pueden solicitar el pago de una pensión ante la ONP, siempre que con sólo dichos aportes se cumpla el requisito establecido para el acceso a una pensión.

b) Los aportes a considerar en el literal anterior, no deben haber sido devueltos por la SUNAT, ni haber sido transferidos por la ONP conforme a lo dispuesto en la Sétima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1275, o haber sido pagados a través del Régimen de Reprogramación de pago de Aportes Previsionales al Fondo de Pensiones aprobado a través del artículo 25 del Decreto Legislativo 2750, o el Régimen de Reprogramación de pago de Aportes Previsionales a los Fondos de Pensiones aprobado a través del Decreto de Urgencia 030-2019 o cualquier otra reprogramación aprobada previa a la vigencia de la presente ley. En caso el aporte haya sido acogido dentro de las reprogramaciones aprobadas conforme a las normas citadas en el presente numeral pero no han sido consignados en la CIC de la persona afiliada, los aportes pueden ser considerados para el beneficio establecido en el literal a).
c) El acceso a una pensión en el SNP no limita a las personas afiliadas al SPP a acceder a las prestaciones que este otorga.
d) La ONP informa a la SUNAT y a la SBS sobre los aportes que han sido utilizados para acceder a una pensión en el SNP a fin de que, posterior a ello, no sean devueltos o sean reclamados para el pago, según corresponda.
e) La ONP, la SBS y la SUNAT dictan las normas operativas para la implementación de la presente disposición de acuerdo a sus competencias.
f) El MEF evalúa los mecanismos de atención progresiva a los casos que no se hayan acogido o no se encuentren dentro de lo establecido en el literal a).

NOVENA. Incentivos al ahorro

a) A fin de incentivar el ahorro, el MEF de manera anual y de conformidad con las previsiones presupuestarias, puede asignar recursos del tesoro público para el financiamiento de un aporte complementario equivalente al aporte voluntario con fin previsional realizado directamente por las personas afiliadas al Sistema.
b) El aporte del Estado no puede exceder del monto equivalente a una (1) unidad de aporte sobre una remuneración mínima vital anualmente.
c) En caso los aportes voluntarios con fin previsional, sujetos al incentivo, realizados por las personas afiliadas al Sistema, exceden los recursos destinados por el Estado para el financiamiento anual del aporte complementario, la distribución de estos recursos se realiza de manera proporcional al aporte realizado por cada beneficiario y al tope establecido en el numeral 2 de la presente disposición.

d) El aporte del Estado se efectúa a favor de los afiliados que realizan aportes voluntarios con fin previsional y que perciban ingresos mensuales que no excedan el 0.25 de la UIT.
e) A través del Reglamento, se definen los mecanismos para la implementación de la presente disposición.

El MEF realiza cada tres (3) años una evaluación del incentivo al ahorro, cuyos resultados permiten revisar la continuidad de la presente disposición, así como la introducción de ajustes en los mecanismos para su implementación.

DÉCIMA. Reglamentación del Decreto Legislativo N° 1086

El Sistema de Pensiones Sociales de la micro y pequeña empresa de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, aprobado por Decreto Legislativo N° 1086, se rige por las leyes y reglamento específicos establecidos para esta finalidad en las normas de la materia.

DÉCIMO PRIMERA. Afiliación de extranjeros al Sistema

a) En el caso de los ciudadanos extranjeros, que se encuentran en una relación laboral de dependencia, se afilian al SNP o SPP, a través de los documentos de identificación como el carné de extranjería o cualquier otro documento permitido bajo las normas vigentes.
b) Quedan exceptuados de la obligación de afiliación, los ciudadanos extranjeros que cumplen con las condiciones establecidas en las disposiciones pertinentes de los convenios internacionales en materia de seguridad social vigentes en el Perú.

DÉCIMO SEGUNDA. Cultura en seguridad social en Pensiones

Se dispone que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo articule con el Ministerio de Educación la implementación de la cultura de seguridad social en pensiones en las instituciones educativas a través de herramientas curriculares, así como recursos y materiales educativos en las distintas etapas, modalidades niveles, ciclos y programas del sistema educativo, en el marco de la normativa respectiva y de la autonomía de las instituciones educativas.

DÉCIMO TERCERA. Registro de aportes en el régimen del Decreto Ley 20530

Se encarga a la Oficina de Normalización Previsional a llevar un registro del personal en actividad sus aportes y pensionistas de todas las Entidades del Sector Público que se encuentren sujetos al régimen del Decreto Ley N° 20530, para ello se autoriza a la Oficina de Normalización Previsional a que pueda requerir la documentación necesaria a las Entidades, el registro debe contener a todos los pensionistas independientemente de la fuente de financiamiento con la que pagan las pensiones.

DÉCIMO CUARTA. Obligación de afiliarse de los aportantes del régimen del Decreto Legislativo N° 894, Ley del Servicio Diplomático de la República, que no acceden a una pensión

El personal diplomático del régimen del Decreto Legislativo 894, Ley del Servicio Diplomático de la República, que haya culminado su relación laboral sin haber alcanzado el tiempo mínimo para tener derecho a pensión, debe acogerse de forma obligatoria al Sistema, sea en el SNP o SPP.

En aquellos casos en que dicho personal se afilie al SPP, le corresponde un bono previsional en función a sus aportes. El bono previsional se rige según las condiciones que establezca el reglamento de la presente Ley.

Los que opten por asegurarse en el SNP, el Estado les reconoce los años de aportes efectivos, los cuales deben ser acreditados con una constancia de aportes emitida por la entidad que administre el régimen de pensiones del Decreto Legislativo N° 894.

DÉCIMO QUINTA. Limitación de la disponibilidad de recursos de la CIC de aportes obligatorios en el SPP

Las nuevas personas afiliadas al Sistema y las personas afiliadas al SPP menores de 40 años a la entrada de vigencia de la presente Ley, no acceden a lo dispuesto en la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Transitoria del TUO de la Ley del SPP.

Las personas afiliadas al SPP que tengan 40 años o más con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, podrán elegir entre percibir la pensión que le corresponda en cualquier modalidad de retiro, y/o solicitar a la AFP la entrega hasta el 95.5% del total del fondo disponible en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de aportes obligatorios,

en las armadas que considere necesarias. El afiliado que ejerza esta opción no tendrá derecho a ningún beneficio de garantía estatal.

El monto equivalente al 4.5% restante del fondo utilizado para el acceso a los regímenes de jubilación, deberá ser retenido y transferido por la AFP directamente a Essalud en un período máximo de treinta (30) días a la entrega señalada en el párrafo anterior, para garantizar el acceso a las mismas prestaciones y beneficios del asegurado regular del régimen contributivo de la seguridad social en salud señalado en la Ley 26790, sin perjuicio de que el afiliado elija retiros por armadas y/o productos previsionales. En este último caso, el aporte a Essalud por las pensiones que se perciban quedará comprendido y pagado dentro del monto equivalente al porcentaje señalado en el presente párrafo para no generar doble pago por parte de los afiliados.

El tratamiento previsto en la presente disposición se aplica a los recursos que se acrediten a la CIC de aportes obligatorios con posterioridad a la decisión del afiliado. Lo dispuesto se extiende a los afiliados que hubieran accedido al Régimen Especial de Jubilación Anticipada respecto a su saldo o que se acojan a este régimen independientemente del monto de la pensión calculada, así como también a los jubilados que hayan optado por la modalidad de retiro programado total o parcial, respecto al saldo que mantengan en su CIC.

Quedan exceptuados de la retención y transferencia del 4.5% a Essalud los fondos de aquellos afiliados asegurados que cuenten con pensión de sobrevivencia (viudez y orfandad) dentro del régimen de la Ley 26790.

DÉCIMO SEXTA. Sobre los regímenes de pensiones militar y policial

Los regímenes de pensiones militar y policial se rigen por sus normas de creación aprobada por el Decreto Ley 19846, Se unifica el Régimen de pensiones del personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al Estado, y el Decreto Legislativo 1133, Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo del Régimen de Pensiones del Personal Militar y Policial. El aporte para las pensiones del Decreto Ley 19846, se sujeta a lo dispuesto en el Decreto Ley 22595, Actualizan porcentajes de aportes destinados al Fondo de Pensiones.

DÉCIMO SÉTIMA. Prohibición de cobro de comisiones

La Sunat se encuentra impedida de cobrar comisiones, tasas o cualquier otro concepto por los aportes recaudados de los trabajadores independientes.

DÉCIMO OCTAVA. Aportes y Rendimiento de Inversiones

No constituyen renta de los afiliados los aportes y rendimientos de la pensión por consumo, ni de la entidad encargada de administrar el fondo.

DÉCIMO NOVENA. Inafectación del Impuesto a la Renta

Se encuentran inafectas al Impuesto a la Renta los dividendos, intereses, comisiones y cualquier otro rendimiento percibido por los aportes dispuesto en la presente ley.

DUODÉCIMA. Autorización a Sunat para aplicar el Código Tributario

Se faculta a la Sunat el uso de las disposiciones sobre la administración, recaudación, fiscalización y cobranza dispuestas en el Código Tributario con el fin de lograr el cumplimiento del pago de aportes y otras obligaciones en las que interviene la Sunat, dispuestas en la presente ley.

DUODÉCIMA PRIMERA. Confidencialidad de la información

La información de pensión por consumo que Sunat obtenga sólo podrá ser utilizada para fines previsionales, garantizando la reserva de la información correspondiente a los procedimientos previsionales de la ley. Dicha información sólo puede ser utilizada para los fines establecidos en el presente marco normativo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Registro de perceptores de pensiones no contributivas

Se dispone que el registro de los actuales perceptores de pensiones no contributivas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) se realiza en el plazo máximo de seis (06) meses de la entrada en vigencia de la presente ley.

SEGUNDA. Ampliación del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65

a) La ampliación de la cobertura del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 a las personas adultas mayores de 65 años en situación de pobreza es progresiva, según la capacidad financiera del Estado y las posibilidades de la economía nacional.
b) Las personas afiliadas al Sistema mayores de 65 años en situación de extrema pobreza, y mayores de 75 años en situación de pobreza no extrema, que no hayan accedido a una pensión, constituyen el primer grupo de personas a ser atendidas. Las personas afiliadas al SPP transfieren su CIC al FCR para financiar la pensión no contributiva.

TERCERA. Adecuación de los afiliados al SPP

La SBS dicta las disposiciones operativas para la adecuación del DNI y el Código de identificación CUSPP de las personas que a la vigencia de la presente ley ya se encuentran afiliados en el SPP.

CUARTA. Gestión de información de los afiliados

Se faculta a la ONP y a la SBS para emitir las disposiciones necesarias que implementen los sistemas informáticos para la interoperabilidad de información de los afiliados al Sistema.

QUINTA. Incremento de la pensión mínima y las pensiones proporcionales especiales

a) El monto de la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones al que se refiere el Decreto Ley 19990, queda establecido según el siguiente detalle:
   i. La pensión mínima de jubilación y de invalidez queda fijada en S/ 600,00 (Seiscientos y 00/100 Soles).
   ii. La pensión mínima por derecho derivado queda fijada en S/ 400,00 (Cuatrocientos y 00/100 Soles).
b) La pensión de jubilación proporcional especial por haber cotizado desde 10 años de aportes, pero menos de 15 años de aportes, queda fijada en S/ 300,00 (Trescientos y 00/100 Soles) y la pensión de jubilación proporcional especial por haber cotizado desde 15 años de aportes, pero menos de 20 años de aportes, queda fijada en S/ 400,00 (Cuatrocientos y 00/100 Soles).
c) El Ministerio de Economía y Finanzas reajusta mediante decreto supremo las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 19990, que actualmente resulten inferiores al monto de S/ 1000,00 (Mil y 00/100 Soles), de conformidad con las previsiones presupuestarias y a las posibilidades de la economía nacional. Asimismo, puede disponer la consolidación de las actuales pensiones en un monto único, con fines de simplificación administrativa.
d) El incremento del monto de las pensiones, señaladas en la presente disposición, rige a partir del mes de enero de 2025, y los reintegros son abonados en el mes de febrero de 2025, de corresponder.
e) La aplicación de lo establecido en esta norma se financia con cargo al presupuesto institucional del pliego ONP.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modificación del primer párrafo del artículo 1, artículo 18-A, artículo 24, artículo 40,artículo 42 y artículo 45del Decreto Supremo 054-97-EF, Texto Único de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones

Se modifica el primer párrafo del artículo 1, el artículo 18-A, el artículo 20, el artículo 33, el artículo 40,el artículo 42 y el artículo 45 del Decreto Supremo 054-97-EF, Texto Único de

la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, en los siguientes términos:

"**Artículo 1.** El Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) tiene por objeto contribuir al desarrollo y fortalecimiento del sistema de seguridad social en el área de pensiones, a efectos de otorgar protección ante los riesgos de vejez, invalidez y fallecimiento, y está conformado **por Empresas Administradoras de Fondos (EAF), que pueden ser:**

a) **Las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) y las Empresas del Sistema Financiero (ESF) establecidas en los literales A, C y D del artículo 16 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.**
b) **De manera excepcional, las Cooperativas de Ahorro y Crédito que solo operan con sus socios y que no están autorizada a captar recursos del público u operar con terceros de los niveles 2 o 3 inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (COOPACNACFP) están facultadas a administrar Fondos de Pensiones del SPP únicamente para trabajadores independientes, siempre que estos formen parte de sus asociados.**

Dichas EAF cumplen con los requisitos de la presente Ley y administran los fondos de pensiones a que se refiere el Capítulo II del Título III de la presente Ley. Complementariamente, participan del SPP las empresas de seguros que proveen las prestaciones que correspondan, así como las entidades o instancias que participan de los procesos operativos asociados a la administración de los Fondos de Pensiones.

El SPP provee obligatoriamente a sus afiliados las prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio a que se refiere el Capítulo V del Título III de la presente Ley.
[...]".

"**Artículo 18-A.** Las AFP administrarán cuatro tipos de Fondos tratándose de aportes obligatorios:

[...]

La Superintendencia podrá evaluar la implementación del uso dinámico de fondos en función del riesgo implícito en el ciclo de vida.".

"**Artículo 24. Retribución de las EAF**

Las **EAF** perciben por la prestación de todos sus servicios una retribución establecida libremente, de acuerdo con el siguiente detalle:

a) Por el aporte obligatorio a que se hace referencia en el inciso a) del artículo 30 de la presente Ley, una comisión porcentual calculada sobre la remuneración asegurable del afiliado. La retribución debe ser aplicada por la AFP por igual o todos sus afiliados. Sin embargo, cada AFP podrá ofrecer planes de descuento en las retribuciones de los afiliados en función al tiempo de permanencia o regularidad de cotización en la AFP. La Superintendencia dictará las normas reglamentarias sobre la materia.

b) Por los aportes voluntarios, una comisión porcentual calculada sobre los referidos aportes voluntarios, en el caso de retiro de los mismos;

(...)

e) Por el aporte obligatorio de los trabajadores dependientes (al que se hace referencia en el inciso a) del artículo 30), el aporte obligatorio de los trabajadores independientes (que se hace referencia en el artículo 33) o el aporte voluntario con fin previsional de los afiliados, se aplica una comisión por productividad que considera la rentabilidad del fondo administrado, expresado en términos porcentuales sobre la rentabilidad generada en el año y asociado a la rentabilidad superior sobre la referencia de un portafolio benchmark exógeno que será determinado por la SBS.

La SBS evaluará el cobro y licitación periódica de una comisión fija en función a los costos operativos.

La retribución debe ser aplicada por la EAF por igual a todos sus afiliados. Sin embargo, cada EAF podrá ofrecer planes de descuento en las retribuciones de los afiliados en función al tiempo de permanencia o regularidad de cotización en la EAF. Las EAF deben difundir los datos de retorno neto de comisiones. La Superintendencia dictará las normas reglamentarias sobre la materia.

[...]"

"Alcances

Artículo 40. Las prestaciones en favor de los trabajadores incorporados al SPP son exclusivamente las de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, y no incluyen prestaciones de salud ni riesgos de accidentes de trabajo.

Los pensionistas de jubilación, invalidez y sobrevivencia del SPP señalados en la presente Ley, se encuentran comprendidos como asegurados obligatorios del Régimen de Prestaciones de Salud, establecido por el Decreto Ley N° 22482, en las mismas condiciones respecto a la tasa de las aportaciones y a las prestaciones de salud que corresponden a los pensionistas del SNP.

La **EAF** o Empresa de Seguros que pague la pensión actuará como agente retenedor, procediendo a efectuar la retención y el pago de dicha aportación al Régimen de Prestaciones de Salud, salvo que medie solicitud por escrito del asegurado a la cual deberá acompañar la documentación que acredite fehacientemente que este se encuentra cubierto por algún programa o régimen de salud privado.

Los afiliados al SPP podrán disponer de hasta el 25% del fondo acumulado en su Cuenta Individual de Capitalización de aportes obligatorios para:

a) Pagar la cuota inicial para la compra de un **único** inmueble **urbano, cuya finalidad sea la de casa-habitación,** siempre que se trate de un crédito hipotecario otorgado por una entidad del sistema financiero o una cooperativa de ahorro y crédito que solo opera con sus socios y que no está autorizada a captar recursos del público u operar con terceros de los niveles 2 o 3 inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

b) Amortizar un crédito hipotecario, que haya sido utilizado para la compra de un **único** inmueble **urbano, cuya finalidad sea la de casa-habitación,** otorgado por una entidad del sistema financiero o una cooperativa de ahorro y crédito que solo opera con sus socios y que no está autorizada a captar recursos del público u operar con terceros de los niveles 2 o 3 inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

Dicha afectación podrá darse en cualquier momento de su afiliación."

" **Jubilación Anticipada**

Artículo 42. Procede la jubilación cuando el afiliado mayor de **cincuenta y cinco (55)** años así lo disponga, siempre que obtenga una pensión igual o superior al 40% del promedio de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los últimos 120 meses, debidamente actualizadas deduciendo las gratificaciones.

[...]".

"Retiro programado

Artículo 45.- El retiro programado es la modalidad de pensión administrada por una AFP mediante la cual el afiliado, manteniendo la propiedad sobre los fondos acumulados en su Cuenta Individual de Capitalización, efectúa retiros mensuales

contra el saldo de dicha cuenta individual, en función a su expectativa de vida y a la de su grupo familiar.

Los retiros mensuales se establecen de acuerdo al programa de retiros predeterminado por las partes, teniendo en consideración las condiciones establecidas y las tablas correspondientes publicadas por la Superintendencia.

El saldo que quedara en la Cuenta Individual de Capitalización en el momento del fallecimiento del afiliado pasa a sus herederos. A falta de herederos, **el saldo pasa a ser de propiedad de la Oficina Nacional de Pensiones, manteniéndose en los fondos bajo su administración**".

SEGUNDA Modificación de la Décimo Sexta Disposición Final y Transitoria, del epígrafe y contenido de la Décimo Sétima Disposición Final y Transitoria del Decreto Supremo 054-97-EF, Texto Único de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones

Se modifica la Décimo Sexta Disposición Final y Transitoria, del epígrafe y contenido de la Décimo Sétima Disposición Final y Transitoria **del Decreto Supremo 054-97-EF, Texto Único de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones**, en los términos siguientes:

"Fondo Educativo del Sistema Privado de Pensiones (FESIP)

DÉCIMO SEXTA. Se crea el Fondo Educativo del Sistema Privado de Pensiones (FESIP), **como un instrumento orientado al financiamiento de proyectos educativos previsionales, a fin de promover mayores niveles de cultura previsional.**

La obtención de recursos del FESIP **proviene** de donaciones de las AFP, Empresas de Seguros **y demás entidades participantes del sistema previsional, así como**

de las multas que cobre la entidad centralizadora por las infracciones que determine, siempre que esta no sea una entidad pública.

Las características de organización, composición, funcionamiento, mecanismos de aportación y gestión del fondo educativo, son establecidas **por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).**
Las acciones de financiamiento educativo del FESIP, pueden complementar a las que les corresponda a las AFP **y EFS** en su condición de administradoras de fondos de pensiones **dentro del SPP, pudiendo el Estado complementar ello con recursos fiscales, sobre la base de las instrucciones y regulación que se impartan mediante decreto supremo emitido por el MEF".**

"Consejo de Participación Ciudadana en Seguridad Social (COPAC)

DÉCIMO SÉTIMA. Se crea el Consejo de Participación Ciudadana en Seguridad Social (COPAC), el cual canaliza la participación de los usuarios del Sistema Privado de Pensiones.

El COPAC comprende a representantes de las entidades sin fines de lucro cuya finalidad esté orientado al tratamiento de los temas de la pobreza en la vejez, mejoras del mercado demográfico o laboral, generación de mejoras en el tratamiento de las inversiones y gestión de sus riesgos, así como de los beneficios que provee el SPP; colegios profesionales cuyas materias tengan relación con la seguridad social, universidades cuyas carreras universitarias a nivel de grado y postgrado tengan relación con la materia, entre otros.

Dicho Consejo, **tiene** como función, **según la materia que se trate, centralizar, canalizar o discutir propuestas ciudadanas que se sometan a su consideración, acerca de oportunidades de** mejoras al Sistema Privado de Pensiones en el Perú en materias relacionadas, fundamentalmente, a labores de educación y profundización de conocimientos en dicha materia.

Las características de organización, composición, funcionamiento, financiamiento y gestión del COPAC, son establecidos por disposiciones reglamentarias de la Superintendencia.

La implementación y funcionamiento del COPAC no demandan uso y recursos adicionales del Tesoro Público".

TERCERA. Modificación del artículo 14 de la Ley 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros

Se modifica el párrafo primero del artículo 14 de la Ley 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros en los siguientes términos:

"Artículo 14- Aporte al SPP

Los trabajadores pesqueros efectúan un aporte al SPP **del 8% que se incrementa progresivamente al 10%** del monto de su remuneración asegurable, más la prima del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio y la comisión respectiva que establezca la Administradora Privada de Fondo de Pensiones (AFP) elegida libremente por el trabajador, **según las condiciones que se establecen mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de la Producción.**

Para estos efectos, se considera remuneración asegurable a la suma de todos los ingresos percibidos por el trabajador pesquero, incluyendo su participación en la pesca capturada y las bonificaciones por especialidad.

En ningún caso la remuneración asegurable mensual puede ser menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente en cada oportunidad."

CUARTA. Modificación del artículo 1 de la Ley 30939, Ley que establece el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones

Se modifica el literal a) del artículo 1 de la Ley 30939, Ley que establece el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones, en los términos siguientes:

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1079/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2278/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 3341/2022-CR, 3436/2022-CR, 3717/2022-CR, 4055/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4379/2022-CR, 4452/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4907/2022-CR, 4921/2022-CR, 5139/2022-CR, 5149/2022-CR, 5150/2022-CR, 5242/2022-CR, 5246/2022-CR, 5377/2022-CR, 5386/2022-CR, 5499/2022-CR, 5531/2022-CR, 5623/2023-CR, 5795/2023-CR, 5929/2023-CR, 5965/2023-CR, 6120/2023-PE, 6227/2023-CR, 6338/2023-CR, 6359/2023-CR, 6369/2023-CR, 6380/2023-CR, 6535/2023-CR, 6634/2023-CR, 7006/2023-CR, 7068/2023-CR, 7092/2023-CR, 7229/2023-CR, 7674/2023-CR y 7821/2023-CR que propone la "Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano"

"Artículo 1. Establecimiento del Régimen Especial de Jubilación Anticipada

Se establece el Régimen Especial de Jubilación Anticipada en el Sistema Privado de Pensiones destinado a aquellos afiliados que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Que, al momento de solicitar el beneficio, tengan como edad mínima **cincuenta y cinco (55) años** cumplidos.

[...]"

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

PRIMERA. Derogación del artículo 33 del Decreto Ley 25897

Se deroga el artículo 33 del Decreto Ley 25897, que crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones AFP.

SEGUNDA. Derogación de los artículos 1 y 2 y la Primera Disposición Transitoria y Final

Se deroga los artículos 1 y 2 y la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley 28991, Ley de libre desafiliación informada, pensiones mínimas y complementarias, y régimen especial de jubilación anticipada.

Salvo mejor parecer.
Dése cuenta.
Sala de la Comisión

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1079/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2278/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 3341/2022-CR, 3436/2022-CR, 3717/2022-CR, 4055/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4379/2022-CR, 4452/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4907/2022-CR, 4921/2022-CR, 5139/2022-CR, 5149/2022-CR, 5150/2022-CR, 5242/2022-CR, 5246/2022-CR, 5377/2022-CR, 5386/2022-CR, 5499/2022-CR, 5531/2022-CR, 5623/2023-CR, 5795/2023-CR, 5929/2023-CR, 5965/2023-CR, 6120/2023-PE, 6227/2023-CR, 6338/2023-CR, 6359/2023-CR, 6369/2023-CR, 6380/2023-CR, 6535/2023-CR, 6634/2023-CR, 7006/2023-CR, 7068/2023-CR, 7092/2023-CR, 7229/2023-CR, 7674/2023-CR y 7821/2023-CR que propone la "Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano"

Lima, 13 de mayo de 2024

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: REVILLA VILLANUEVA Cesar Manuel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/05/2024 12:19:10-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: FLORES RUIZ Victor Seferino FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/05/2024 14:40:25-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CAVERO ALVA Alejandro Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/05/2024 14:56:52-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: FLORES ANCACHI Jorge Luis FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/05/2024 17:07:22-0500

Firmado digitalmente por: CAVERO ALVA Alejandro Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16/05/2024 14:57:02-0500

CONGRESO de la REPÚBLICA
Firmado digitalmente por: ACUÑA PERALTA Maria Grimaneza FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/05/2024 15:36:08-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BARBARAN REYES Rosangella Andrea FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/05/2024 15:55:35-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTEZA FACHO Silvia Maria FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/05/2024 10:42:48-0500

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1079/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2278/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 3341/2022-CR, 3436/2022-CR, 3717/2022-CR, 4055/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4379/2022-CR, 4452/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4907/2022-CR, 4921/2022-CR, 5139/2022-CR, 5149/2022-CR, 5150/2022-CR, 5242/2022-CR, 5246/2022-CR, 5377/2022-CR, 5386/2022-CR, 5499/2022-CR, 5531/2022-CR, 5623/2023-CR, 5795/2023-CR, 5929/2023-CR, 5965/2023-CR, 6120/2023-PE, 6227/2023-CR, 6338/2023-CR, 6359/2023-CR, 6369/2023-CR, 6380/2023-CR, 6535/2023-CR, 6634/2023-CR, 7006/2023-CR, 7068/2023-CR, 7092/2023-CR, 7229/2023-CR, 7674/2023-CR y 7821/2023-CR que propone la "Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano"

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: HERRERA MEDINA Noelia Rossvith FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/05/2024 18:24:37-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LIMACHI QUISPE Nieves Esmeralda FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/05/2024 16:31:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LIZARZABURU LIZARZABURU Juan Carlos Martin FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/05/2024 16:52:20-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/05/2024 18:05:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JULON IRIGOIN Elva Edhit FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/05/2024 16:27:36-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LOPEZ UREÑA ILICH FREDY FIR 42834886 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/05/2024 16:10:33-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RAMIREZ GARCIA Tania Estefany FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20/05/2024 10:28:36-0500

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1079/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2278/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 3341/2022-CR, 3436/2022-CR, 3717/2022-CR, 4055/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4379/2022-CR, 4452/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4907/2022-CR, 4921/2022-CR, 5139/2022-CR, 5149/2022-CR, 5150/2022-CR, 5242/2022-CR, 5246/2022-CR, 5377/2022-CR, 5386/2022-CR, 5499/2022-CR, 5531/2022-CR, 5623/2023-CR, 5795/2023-CR, 5929/2023-CR, 5965/2023-CR, 6120/2023-PE, 6227/2023-CR, 6338/2023-CR, 6359/2023-CR, 6369/2023-CR, 6380/2023-CR, 6535/2023-CR, 6634/2023-CR, 7006/2023-CR, 7068/2023-CR, 7092/2023-CR, 7229/2023-CR, 7674/2023-CR y 7821/2023-CR que propone la "Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano"

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1079/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2278/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 3341/2022-CR, 3436/2022-CR, 3717/2022-CR, 4055/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4379/2022-CR, 4452/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4907/2022-CR, 4921/2022-CR, 5139/2022-CR, 5149/2022-CR, 5150/2022-CR, 5242/2022-CR, 5246/2022-CR, 5377/2022-CR, 5386/2022-CR, 5499/2022-CR, 5531/2022-CR, 5623/2023-CR, 5795/2023-CR, 5929/2023-CR, 5965/2023-CR, 6120/2023-PE, 6227/2023-CR, 6338/2023-CR, 6359/2023-CR, 6369/2023-CR, 6380/2023-CR, 6535/2023-CR, 6634/2023-CR, 7006/2023-CR, 7068/2023-CR, 7092/2023-CR, 7229/2023-CR, 7674/2023-CR y 7821/2023-CR que propone la "Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano"

MP Dictamenes

De: Notificacion Sistemas
Enviado el: jueves, 23 de mayo de 2024 12:29
Para: Lorena Carla Zambrano Azaña; MP interno
Asunto: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
Datos adjuntos: 51ae7011750e4a1f53d5a5ea7b0c4e1d.pdf

[Solicitante]: LZAMBRANOA@congreso.gob.pe
[Asunto]: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
[Mensaje]: Se adjunta el Dictamen recaído en los PLs 344/2021-CR,551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1079/2021-CR, 1306/2021-CR,1356/2021-CR,1513/2021-CR,1595/2021-CR,1922/2021-CR,2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2278/2021 CR,2659/2021-CR,2718/2021-CR,2728/2021-CR,2880/2021-CR,3133/2021-CR,3227/2022 CR,3341/2022-CR,3436/2022-CR,3717/2022-CR,4055/2022-CR,4087/2022-CR,4200/2022-CR,4366/2022-CR,4379/2022-CR,4452/2022-CR,4528/2022-CR,4743/2022-CR,4864/2022-CR,4907/2022-CR,4921/2022-CR,5139/2022-CR,5149/2022-CR,5150/2022-CR,5242/2022-CR,5246/2022-CR,5377/2022-CR,5386/2022-CR,5499/2022-CR, 5531/2022-CR,5623/2023-CR,5795/2023-CR,5929/2023-CR,5965/2023-CR,6120/2023-PE y otros, que propone la "Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano". Se indica que la votación aparece en la décima página del dictamen y que se pidió la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados.
[Fecha]: 2024-05-23 12:29:01
[IP]: 192.168.10.219

Su mensaje ha sido recibido.
Por favor, **NO responda a este mensaje**, es un envío automático de una cuenta no supervisada.